

OBSERVATORIO SOCIAL DE AMERICA LATINA

2009

PANAMA

El Observatorio Social de América Latina (OSAL) es un esfuerzo regional coordinado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). En Panamá es preparado por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena”. Este informe incluye, en primer lugar, la cronología del conflicto social que le da seguimiento diario a los acontecimientos ocurridos en el país en 2009. En segundo lugar, se incluyen tres análisis de coyuntura correspondientes a 2009, presentados por cuatrimestre. Finalmente, se presenta una bibliografía, que incluye una selección de las publicaciones revisadas así como de artículos en línea de ALAI y de COHA, que aparecieron en 2009.

INDICE

Cronología	p 1
Análisis de coyuntura	p 138
Bibliografía	p164

Cronología del Conflicto Social 2009

Enero

Jueves 1

Los vecinos de Villas de San Antonio denuncian que el Grupo Roble, responsable del proyecto Metro Mall, no ha realizado las correcciones para evitar más inundaciones en sus casas. Mario Montenegro, uno de los afectados, explicó que la empresa debía sacar una tubería para colocar otra de mayor capacidad, pero hasta el momento no se ha hecho ninguna rectificación. Ni el viceministro de Vivienda, José Batista, ni el ingeniero municipal de San Miguelito, Eric Zapata, contestaron las llamadas para conocer sobre las investigaciones a Metro Mall.

Residentes de Arraiján cabecera y Vista Alegre denuncian que aunque mantienen sus cuentas al día, no están recibiendo el servicio de recolección de basura como requieren, por parte de la empresa encargada, Aseo Capital. De la empresa dedicada a la recolección de

los desperdicios del distrito de Arraiján, fue imposible conocer una declaración oficial sobre las causas por las cuales en las últimas semanas comenzó a desmejorar el servicio de recolección de los desechos. Sin embargo, el alcalde del distrito, David Cáceres, indicó que el problema comenzó a raíz de que uno de los carros recolectores de la empresa dedicada al servicio de aseo se dañó.

Viernes 2

Ante las constantes protestas de los habitantes de Algarrobos, Las Lomas y otras comunidades davideñas, el Consejo Municipal decidió regular la instalación de antenas celulares. El asesor legal del concejo, Henry Isaza, dijo que la medida es para apoyar a las comunidades. El acuerdo municipal No. 29 de 7 de diciembre de 2008 le da la oportunidad a las empresas telefónicas de instalar sus antenas siempre y cuando cumplan con la ley y demuestren que han realizado la labor de informar y concienciar a la comunidad respecto al proyecto. Indicó que en los casos donde el Departamento de Ingeniería Municipal ha otorgado los permisos respectivos y la comunidad se vea afectada, corresponderá a las mismas organizarse y presentar su queja formal ante la alcaldía de David y esperar que se emita una resolución por parte del alcalde.

Sábado 3

Unos 2 mil docentes jubilados se quedan esperando el ajuste a sus pensiones que debían recibir en la primera quincena de enero. Así lo denuncia Pastora Rodríguez, vocera de los afectados, quien señaló que el Ministerio de Educación (Meduca) incumplió con el compromiso de aumentar sus jubilaciones. El acuerdo con los educadores lo firmó Belgis Castro el 29 de abril de 2008, último día de su gestión como ministro de la cartera. Los docentes planean acudir el 8 de enero próximo a la sede del Ministerio, en Cárdenas, para exigirle una explicación al ministro Salvador Rodríguez. La viceministra de Educación, Mirna de Crespo, dijo que existe el compromiso, pero que la entidad estudia legalmente la situación para hacerle frente.

Jairo Bonilla, gerente de operaciones de la empresa Aseo Capital, reconoce que en diciembre perdieron la periodicidad en la prestación del servicio de recolección de basura. Bonilla atribuyó este problema a una sobreproducción de basura, debido a las celebraciones propias de este mes. Residentes del distrito de Arraiján se quejan de que los carros recolectores no pasan con la periodicidad acostumbrada y por eso la basura se acumula en sus casas. Bonilla anunció que en los próximos días se regulará el servicio.

Domingo 4

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) ratifica la multa a la empresa Petaquilla Gold de 1.8 millón de dólares por daños al ambiente, y anuncia que procederá en los próximos días a realizar el cobro de la misma. La sanción definitiva tuvo que ser notificada por edicto a la empresa minera, sin embargo, la Anam advirtió que si llega a encontrar resistencia para el pago lo hará por la jurisdicción coactiva. Aunque la empresa alega que la construcción de la mina está en un 90% avanzada, la Anam reiteró que los trabajos de extracción del oro no se pueden empezar y que toda obra debe ser detenida hasta que se cumplan los nuevos

requisitos. Esto incluye presentar tres estudios complementarios y dos nuevas fianzas por \$14.3 millones para compensar daños al ambiente.

Grupos organizados de varias comunidades chiricanas y de la comarca Ngöbe Buglé reclaman un mejor servicio de transporte público y que se concedan certificados de operación a miembros de esta etnia. El vocero del Comité de Usuarios de Quebrada de Loro, distrito de Mirono, Evelio Rodríguez, indicó que otras comunidades reciben un servicio de transporte de mala calidad. El subdirector de la Autoridad de Tránsito, Mario Jiménez, reconoció el problema y dijo que van a tomar medidas.

Lunes 5

Tras 18 meses de discusión y más de 100 fallecidos por el envenenamiento con dietilene glycol, participantes del diálogo por la reforma al sistema público de salud están indignados. Dos años después de que Martín Torrijos reiterara su compromiso de realizar cambios profundos en Salud, su segundo vicepresidente, Rubén Arosemena, dijo que no tenía sentido impulsar el debate del proyecto en la Asamblea Nacional, porque los médicos no están de acuerdo con la propuesta. Las reformas al sistema público de salud, que implican la creación de un sistema unificado, fueron acordadas en la Concertación Nacional para el Desarrollo en octubre de 2007. Los médicos, agrupados en la Comisión Médica Negociadora Nacional, abandonaron el diálogo porque consideran que se busca privatizar los servicios de salud.

El paro convocado por la Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (Anfacss) provoca enfrentamientos en la provincia de Colón entre los huelguistas y agentes antidisturbios de la Policía Nacional. Los funcionarios bloquearon la carretera de acceso hacia la ciudad atlántica y poco después llegaron los antimotines y lanzaron bombas lacrimógenas. Los trabajadores respondieron con pedazos de concreto y madera. Finalmente, la calle fue reabierta. En la ciudad de Panamá, la protesta de los trabajadores también produjo cierre de calles. Al menos en tres puntos –frente al edificio Bolívar, en la Transistmica; frente al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y en la Policlínica Carlos Brin, de San Francisco. Guillermo Goti, secretario general de Anfacss, dijo que el 60% de los 11 mil 594 trabajadores del Seguro apoyó la medida. En la provincia de Coclé, los trabajadores marcharon por las calles de Penonomé, y también se unió personal de la CSS de Aguadulce y Natá. En Herrera, el secretario de organización de la Anfacss, Alfredo Harwood, aseguró que el 70% de los empleados apoyó la huelga. Los funcionarios reclaman un aumento salarial de 75 dólares y un bono de 200 dólares, pero la administración de la Caja de Seguro Social solo les ha ofrecido un bono de 100 dólares. Hasta el momento no hay fecha ni lugar para nuevas negociaciones.

Con pancartas y sonando pailas, residentes del corregimiento de Chilibre protestan frente al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para exigir un plan de mejoramiento de las calles de este sector del distrito capital. El MOP, en un comunicado, informó que este año se repararán unas 23 calles y se les dará mantenimiento a otras avenidas de Chilibre, para lo cual la entidad destinará 2 millones 400 mil dólares. Esos fondos son el sobrante de un préstamo otorgado por la Corporación Andina de Fomento.

Martes 6

Los funcionarios administrativos de la Caja de Seguro Social cierran los cuatro paños de la vía Transístmica, para reclamar un aumento salarial de 75 dólares y un bono de 200 dólares. Desde ayer, los trabajadores están en huelga indefinida, luego de que fracasaran las negociaciones entre ellos y las autoridades del Seguro. El director de la institución, René Luciani, ha dicho que no hay capacidad financiera para afrontar estas peticiones. También miembros de la Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social de las provincias de Herrera y Los Santos cierran la vía sobre el puente sobre el río La Villa; en tanto, en Colón hubo varios cierres simultáneos.

La Defensoría del Pueblo informa, mediante nota de prensa, que admitió cuatro quejas por la instalación de antenas de telefonía ubicadas en Villa Lucre (1), Las Cumbres (2) y Altos de Santa María (1). Los quejosos temen que las antenas les puedan provocar posibles afectaciones a la salud.

Un grupo de 150 residentes, entre niños y adultos, de la barriada precarista La Esperanza de Santiago realizan una marcha de protesta y un piquete en las oficinas de la Dirección Regional del Ministerio de Vivienda (Mivi) en Veraguas, a fin de exigir la instalación de plumas comunales. Los manifestantes fueron atendidos por el director regional del Mivi, Rafael Camarena, y el vicegobernador, Ricardo Torres, quienes se comprometieron a gestionar la instalación de los grifos.

Por más de cuatro horas, transportistas, ganaderos, educadores y usuarios de la ruta San Juan de Dios de Macaracas, cierran la vía que comunica al pueblo de Macaracas, para exigir el mantenimiento de la vía en construcción de 36 kilómetros. En tanto, el gerente del consorcio M&S, Meco y Santa Fe, encargado de la obra, Pablo Tsuchiya, aclaró que el proyecto de rehabilitación y mantenimiento de los 34 kilómetros que comprende la carretera del cruce de Sabana Grande hacia Macaracas no ha sufrido retraso alguno, pues la fecha de culminación de la obra está pautada con el Ministerio de Obras Públicas para el 25 octubre de 2009.

Miércoles 7

Miembros del Partido Panameñista protestan frente al Tribunal Electoral (TE) como medida de rechazo a los recientes fallos emitidos por esta entidad en contra de Haydée Milanés de Lay. Dionisio De Gracia, integrante del partido, informó que presentaron ante el TE un memorial de aclaración de sentencia en contra de las resoluciones del 5 de enero de 2009 por la cual se le quitó la nacionalidad panameña a la ex diputada. Como consecuencia de esto, Milanés quedó inhabilitada para correr como candidata por la provincia de Darién. De Gracia reiteró que tras este fallo está la mano oscura y negra del oficialismo. Reiteró que existe una persecución política contra Milanés, así como también con Carlos Santana, a quien le fue anulada su candidatura para diputado por la provincia de Veraguas.

El dirigente docente, Luis López, revela que el ministro de Educación, Salvador Rodríguez, los plantó luego de haberlos invitado a una reunión. López dijo que en la reunión se trataría sobre el estatus de más de mil maestros que laboran en áreas de difícil acceso, quienes necesitan su nombramiento permanente. Agregó que analizarían el calendario escolar dividido en trimestres, pero en las últimas horas también se enteraron de que el Ministro

decidió no implementarlo. López reiteró que Rodríguez los invitó a una reunión a las 10:00 a.m. en el Ministerio de Educación, sin embargo, nunca se presentó. “Nos informaron que estaba en un desayuno en la Presidencia de la República”.

La Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (Anfacss) por tercer día consecutivo cierra la vía Transístmica, frente al área del Edificio Bolívar. Un grupo de dirigentes de la Anfacss se mantiene reunido con directivos de la Caja de Seguro Social (CSS) para llegar a un acuerdo salarial. Los trabajadores exigen un aumento de 75 dólares mensuales y un bono de 200 dólares. La administración, por su parte, ha ofrecido un bono de 100 dólares y ha repetido que no hay capacidad financiera para aceptar las peticiones.

Una demanda contra el Tribunal Electoral (TE) presentará el aspirante a candidato presidencial por la libre, Juan Jované, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Jované señala que la decisión se da luego de que dos de los tres magistrados – Erasmo Pinilla y Eduardo Valdés– rechazaran la solicitud de su postulación, presentada en noviembre de 2008. Los magistrados se basan en que el Código Electoral establece que solo los partidos políticos pueden postular a candidatos.

Daños en las dos bombas de agua y la disminución en el caudal del río San Bartolo, donde se encuentra la planta potabilizadora de Puerto Armuelles, han provocado que durante cuatro días más de 2 mil 800 personas se encuentren sin agua en el distrito de Barú. Arexio Santos, residente de Barú, señaló que las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) les comunican que el año pasado no había agua por el invierno, ahora llegó el verano y se comunicó que las bombas están dañadas y que ha bajado el caudal del río. Los habitantes de las comunidades afectadas piden al Gobierno una respuesta rápida a este problema, que vienen confrontando desde hace más de 10 años. El alcalde del distrito de Barú, Franklin Valdés, manifestó que desde que se construyó la planta no ha dejado de tener problemas y que han pasado varios mandatarios, pero aún no se toman los correctivos. El director regional del Idaan, Guillermo Ardila, manifestó que el problema del suministro de agua se debe a que las dos bombas se dañaron y se mandaron a pedir, ya fueron compradas a 2 mil 500 dólares cada una.

Jueves 8

En su cuarto día de protestas, los integrantes de la Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (Anfacss) bloquean los cuatro paños de la Transístmica enfrente de las instalaciones del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social. Integrantes del Frente Gremial de Trabajadores de la Caja de Seguro Social se suman a la protesta. Además, por primera cierran la vía España, enfrente a las instalaciones del Hospital de Especialidades Pediátricas. Mientras que en la provincia de Colón, miembros de la Policía Nacional e integrantes de la Anfacss, se enfrentan, por segunda ocasión esta semana, durante el piquete que mantenían enfrente a las instalaciones de la Policlínica de Sabanita. Una persona herida y otras cuatro arrestadas fue el saldo de los enfrentamientos. Anfacss también realizó protestas en el distrito de San Miguelito y en las provincias de Coclé, Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, entre otros.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Panamá realizan una manifestación en los predios de la Presidencia de la República para solicitar mayores recursos económicos para la compra de equipos de trabajo. Los bomberos piden una reunión con el ministro de Gobierno y Justicia, Dilio Arcia.

La junta de selección de personal de provincias centrales del Ministerio de Educación (Meduca) fue tomada por docentes de Veraguas, Bocas del Toro, Coclé, Herrera, Los Santos y Panamá Oeste. Juan Ramón Herrera, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), denunció que los nuevos comisionados no han tomado posesión, pese a haber sido elegidos el año pasado. Comentó que en contraposición a esto ya están saliendo las ternas a concurso, lo que no se justifica, pues los nuevos comisionados no han tomado posesión y los salientes no pueden hacer el trámite. Además catalogó lo que está sucediendo de politización del proceso de nombramiento y traslado, situación que no van a permitir. Una situación similar se da en la ciudad de Colón, donde los docentes aseguran que el proceso ha sido politizado. Mediante un comunicado, la Asociación de Profesores de la República de Panamá, capítulo del IPT de Colón, cuestiona que solo cerca de 200 vacantes sean para Colón, además de señalar que no se han publicado las vacantes para que los docentes puedan aplicar, dejando entrever en este documento, que la intención es la de favorecer al partido de gobierno (PRD). Consultado sobre estos cuestionamientos, Carlos Baltazar, director regional del Meduca en Colón, aclaró que la entidad, como tal, es una institución completamente aparte del tema político.

Viernes 9

Por quinto día consecutivo, la Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (Anfacss) cierra los cuatro paños de la vía Transistmica enfrente del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social. La Anfacss solicita un aumento salarial y un bono anual por la productividad. Además en el distrito de la Chorrera, a la altura de La Espiga, funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) mantienen cerrada la vía Panamericana. En esta protesta participan funcionarios de las policlínicas de Arraiján, La Chorrera, San Carlos. Antes del cierre de la Vía Panamericana, los funcionarios habían realizado una concentración en Plaza Italia, en La Chorrera. En la provincia de Colón, realizaron una caminata por las principales calles de la ciudad y la dirigencia reiteró que las protestas se mantendrán hasta que se cumplan sus demandas salariales. En Chitré y en La Villa de Los Santos, los trabajadores volvieron a cerrar el puente sobre el río La Villa durante 15 minutos. También en la provincia de Coclé se dio un cierre de vía. Funcionarios de las dependencias de la entidad en esa provincia cerraron la vía Panamericana a la altura de la planta de Nestlé, en Natá.

Sábado 10

Luego de seis días de huelga nacional, la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (Anfacss) evalúa ceder en las negociaciones de ajuste salarial con la entidad. Guillermo Goti, secretario general de Anfacss, dijo que podrían reducir su petición del ajuste salarial, pero aunque no adelantó cifras aseguró que sería superior a la última propuesta de los directivos de la Caja de Seguro Social (CSS). La petición inicial de Anfacss fue de 75 dólares de aumento en los salarios y un bono anual de

200 dólares. Y la última propuesta de la Caja fue de 50 dólares mensuales y un bono de 150.

Más de 500 obreros afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) impiden el paso de ingenieros y trabajadores a las instalaciones donde la empresa Plotosa desarrolla proyectos en Río Hato. Esta acción se realiza como medida de protesta para exigir a la empresa sus liquidaciones y el pago de sus prestaciones laborales, al igual que la ficha de seguro social, en vista de que la misma se había declarado en quiebra. Los trabajadores sostuvieron una reunión con representantes de la empresa en problemas y manifestaron que de no llegar a un acuerdo el próximo martes, saldrán a las calles para que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ejecute la ley y obligue a la empresa a cumplir con los obreros.

Domingo 11

Miembros de la Coordinadora de Unidad Magisterial (CUM) realizarán piquetes, a partir del 19 de enero, para exigir al ministro de Educación, Salvador Rodríguez, la aplicación del Plan de Retiro Anticipado y los aumentos de salario que les corresponden por cambio de categoría y ascenso. Así lo anunció, Luis López, miembro del CUM, quien agregó que las protestas las realizarán a las 12:00 de mediodía en los lugares donde se estén haciendo seminarios de capacitación.

Lunes 12

Tal como fue anunciado, representantes de la Asociación de Jubilados Independientes asistieron a la cita pactada para el 8 de enero con el ministro de Vivienda, Gabriel Diez, y el de la Presidencia, Rafael Mezquita, con la idea de obtener una respuesta a la petición de aumento de 25 dólares mensuales en sus pensiones. “Nos dijeron que Mezquita estaba ocupado con la huelga de los administrativos del Seguro... Como no estaba el negociador principal, no hubo respuesta”, explicó el dirigente Eladio Fernández. El Gobierno, dijo Fernández, les ha propuesto aumentar las pensiones a quienes ganen menos de 600 dólares mensuales. Los jubilados piden que el aumento sea para todos los que ganen hasta mil dólares. La próxima reunión será el 15 de enero. Si para finales de mes no hay respuesta, “regresaremos a las calles”, dijo Fernández.

Martes 13

Integrantes del Frente Gremial de la Caja de Seguro Social bloquean la Vía Transistmica, enfrente de las instalaciones del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social. Mientras se realizaba el cierre, un grupo de la Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (Anfacss) caminaba hasta el Edificio Bolívar a entregar un pliego de peticiones a los administrativos de la entidad de Seguridad Social. Hoy comienza la segunda semana de protestas de la Anfacss.

Moradores de San Martín cierran la carretera principal del corregimiento para reclamar por la presencia y operación de la empresa minera Gethsa Internacional S.A., que se dedica a extraer arena continental en el área. El dirigente Milson Cornejo explicó que la comunidad

desea que la empresa cancele sus actividades, “porque ha destruido la carretera e infringe las leyes”. Al lugar de la protesta acudió el subdirector de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), Aníbal Vallarino, quien se comprometió a supervisar los trabajos de adecuación de la mina.

Miércoles 14

La Caja de Seguro Social (CSS) eleva su propuesta de aumento salarial hasta 60 dólares mensuales, durante la reunión sostenida con dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS (Anfacss). Guillermo Goti, secretario general del gremio, dijo que las bases de Anfacss están analizando la propuesta, que incluye también un bono de 175 dólares anuales (a partir de junio de 2009) o un bono de 200 dólares (a partir de diciembre próximo). Juan Moreno, del Frente Gremial de Trabajadores –otro grupo de empleados de la CSS, también en huelga–, dijo que su grupo no aceptará un aumento menor de 75 dólares. Mientras las negociaciones se daban en el edificio Bolívar de la Transístmica –sede del despacho superior–, una docena de trabajadores volvió a cerrar la misma vía, pero a la altura del Complejo Hospitalario Metropolitano.

Residentes de las viviendas No. 13199 y 14204 de la Avenida Central de la ciudad de Colón cierran el acceso al centro de la urbe colonense, por el mal estado de las residencias. Antonio Ocasio, vocero de estas 32 familias, informó que debido a las malas condiciones que presentan las estructuras, en dos ocasiones en 2008, dos personas resultaron heridas. Cándido Pacheco, director regional del Ministerio de Vivienda, reconoció las condiciones de los viejos edificios, por lo que gestionó el envío de un ingeniero estructural, para que haga las evaluaciones y se resuelva el problema.

Jueves 15

La Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (Anfacss) termina su paro luego de aceptar un aumento salarial de 60 dólares a partir de junio y un bono de productividad de 200 dólares que será entregado en diciembre. El paro de la Anfacss se extendió por dos semanas, en las que diariamente bloquearon la vía Transístmica y otras calles en diferentes puntos de la República.

La Asociación de Maestros Independientes Auténticos denuncia amañamiento en el nombramiento de los docentes para el período 2009. Por ello, convoca a una protesta en los predios de la Dirección Regional de Panamá centro. Rolando Morena, dirigente de la asociación, dijo que las comisiones de selección de docente –escogidas por los maestros– no han podido ejercer sus cargos de fiscalización del proceso. “Según el Decreto 351 del 9 de julio de 2003, los comisionados regionales tienen 30 días para tomar posesión de sus cargos, una vez elegidos. Armando Espinosa (Chiriquí) y Aura Díaz (Panamá) fueron escogidos el 17 de octubre de 2008”, indicó. La viceministra de Educación, Mirna de Crespo, explicó que aún no ha salido el decreto ejecutivo que nombra a Díaz y a Espinosa como funcionarios administrativos, y no se sabe cuándo se hará efectivo.

Desde hace más de tres meses los usuarios del hospital Rafael Hernández del distrito de David se quejan de que acuden al hospital para realizarse tratamientos de diversa índole que

requieren de una hospitalización, pero al llegar les indican que acudan en otra fecha porque no hay camas disponibles. El director médico encargado, Kayán Arias, expresó que sí se tiene un problema de camas, pero que cuando llega un paciente para cirugía general, se le acomoda en ortopedia, “estamos tratando de que la hospitalización sea más expedita, para evitar que el hospital se quede sin camas y ofrecer una respuesta a los usuarios”. Aseguró que el problema es que los fines de semana el hospital se llena y esto aumenta cuando es día puente, porque los centros de salud están cerrados.

Los conductores de taxi del distrito de Chitré, en la provincia de Herrera, solicitan a la Policía Nacional que aumente los operativos de vigilancia nocturna en el distrito, pues en la madrugada encontraron el cuerpo sin vida de Luis Oda, palanca de la unidad 6T96 de la piquera de taxi Parque Herrera, en el sector de El Faro, en las proximidades de la playa El Agallito. El presidente de la Organización de Transporte Selectivo de Herrera, Wigberto García, informó que los taxistas herreranos están temerosos por la ola de asaltos y crímenes que se han registrado.

Grupos estudiantiles, sindicales y miembros de la comunidad árabe protestan frente a la embajada de Israel, para pedir el cese al fuego en la franja de Gaza, incluso quemaron una bandera israelí. Gassan Salama, vocero de la comunidad palestina en Panamá, pidió que Israel acoja las resoluciones de la ONU que establecen la autonomía de los territorios palestinos. La embajada de Israel no se pronunció al respecto. Los enfrentamientos en Gaza han dejado un millar de muertos.

Unos 10 vecinos de Campo Limbergh, en Juan Díaz, cierran la vía principal de la comunidad para impedir que los conductores de buses y camiones utilicen este paso para entrar al Corredor Sur. Los quejosos denuncian que los conductores usan ilegalmente la entrada. Inspectores del tránsito vigilaban el área para corregir esta irregularidad.

Viernes 16

Un grupo de trabajadores del Hospital Santo Tomás protesta en la vía Justo Arosemena en demanda de ajustes salariales. Los trabajadores pidieron al patronato que se respete un acuerdo de aumentos salariales pactados en 2005.

El Congreso General Kuna se manifiesta en contra de la “sistemática discusión y aprobación” de leyes que viene realizando la Asamblea Nacional, y que a su juicio, permitirán el despojo de sus tierras ancestrales. En un comunicado, el congreso kuna señala que es vergonzoso que los diputados, incluyendo los indígenas, hagan alianza con las transnacionales para privatizar las playas e islas, y así ofrecerlas al mejor postor, a través del proyecto de ley N°459, que será discutido en segundo debate, en marzo. El congreso dice apoyar las demandas de sectores campesinos que tienen derechos posesorios legítimos sobre tierras no indígenas, pero no tolerará que esa propuesta se utilice para despojarlos de sus tierras.

Sábado 17

A oscuras continúan las comunidades de Los Pérez y El Barrigón en el distrito de Ocú, provincia de Herrera, a pesar de que las obras del proyecto de electrificación rural ya se concluyeron, denuncian habitantes de estas comunidades. Emérita Pérez de Pinto, lugareña, dijo que los moradores de estas poblaciones quieren saber cual es la suerte de este proyecto, pues hace cuatro años se instaló el tendido eléctrico y las luminarias de las carreteras, pero todavía no tienen energía. Reynaldo Blanco, jefe del Proyecto de Electrificación Rural, dijo que ya existe la interconexión, pero que la empresa Edemet no le ha puesto corriente porque ninguna vivienda ha realizado la solicitud del medidor.

Domingo 18

La falta de personal que labore en las diferentes instituciones que integran el programa de Red de Oportunidades, obstaculiza y retrasa el pago de la transferencia monetaria condicionada a cientos de madres de familia en la comarca Kuna Yala, señaló Juan Gómez, director regional del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Kuna Yala. La aclaración se da luego de que decenas de madres de familia denunciaron el retraso del pago, el cual fue prometido por el Mides para antes de la Navidad pasada. La Red de Oportunidades es un proyecto de Estado impulsado por el Gobierno Nacional para combatir la extrema pobreza. En Kuna Yala, la Red de Oportunidades beneficia actualmente a 4 mil 273 familias, que reciben más de 600 mil dólares. Cada familia recibe cada dos meses 100 dólares, pero en diciembre debían recibir un bono adicional de 50 dólares.

Más de mil 500 habitantes del corregimiento de Llano Catival, cabecera del distrito de Mariato, llevan ocho días sin recibir el servicio de agua potable a causa del daño de una turbina del acueducto rural de este sector. Catalino Velásquez, alcalde de Mariato, cuestionó que el Gobierno ejecutó un proyecto en donde se invirtieron más de 200 mil dólares, y aunque no se ha terminado, no ha resuelto el problema de escasez de agua potable, ya que algunos equipos no funcionan. Por parte del Ministerio de Salud, una fuente confirmó que se ha pedido a la Contraloría agilizar los trámites de compra del nuevo equipo, que le fue adjudicada a la empresa Bombasa.

Lunes 19

A pesar de que existen las consultas ciudadanas –en las que el Mivi, promotores y ciudadanos se sientan a la misma mesa a discutir la conveniencia o no de un cambio de zonificación–, para los vecinos de la ciudad el mecanismo es solo un “trámite más”. Maruquel de Ramírez, residente de Obarrio, ha participado en “infinidad” de consultas públicas en las que los residentes se han opuesto al cambio de uso de suelo, y los resultados no han sido a su favor. El Mivi, cuenta Ramírez, termina otorgando el cambio de uso de suelo, pese a cualquier oposición. En el peor de los casos, dijo, se aumenta la densidad de un lote sin hacer consulta pública. Rafael Spalding, residente de Albroom, anota otras irregularidades. Frecuentemente, dice, la información que el Mivi o Ingeniería Municipal ofrece para las consultas públicas no corresponde con el lote al que buscan cambiarle el uso de suelo. De Ramírez considera que todas estas situaciones han hecho que los residentes se organicen en asociaciones. Ella forma parte de la asociación de residentes de Obarrio, mientras que Spalding es miembro de la asociación de residentes de Albroom. Ambas, dicen, nacen con la idea de luchar contra los “desórdenes urbanos”.

Un grupo de residentes de las barriadas Canto del Llano y Ponuguita cierra la carretera Santiago-San Francisco para hacer sentir su rechazo a la instalación de una antena de telefonía celular propiedad de la empresa Claro Panamá. Por parte de la empresa Grupo Mepsa, los trabajadores que estaban en el lugar no hicieron comentarios, ya que informaron de que los encargados del proyecto estaban en la ciudad de Panamá.

Grupos conservacionistas y defensores del Parque Nacional Coiba exigen al presidente, Martín Torrijos, que cumpla su palabra y restituya la zona de exclusión en el Pacífico que prohibía la utilización de redes de cerco para la pesca de atún. En una carta enviada a Torrijos, 40 organizaciones –entre ambientales, comunitarias y científicas– piden al Presidente que emita un decreto ejecutivo “porque la zona ha quedado vulnerable”. El 30 de junio pasado, mediante una ley sobre comercio marítimo, la Asamblea Nacional derogó el artículo 11 de la Ley 44 de julio de 2004, mejor conocida como Ley de Coiba, que creaba la zona de exclusión. La misiva también fue enviada al Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, organización que ya pidió al Gobierno panameño restituir el artículo 11.

Unos 200 educadores veragüenses que laboran en la provincia de Chiriquí, denuncian que el Meduca les negó la oportunidad de recibir las capacitaciones de verano en el Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera (Ipoth), ubicado en la ciudad de Santiago. Otra de las quejas de los educadores, tanto en planteles de Santiago como en el distrito de Montijo, fue el hecho de que el Meduca se había comprometido a proporcionar la merienda y el almuerzo para los participantes y esta alimentación no se dio en los sitios antes mencionados. Juan Ramón Herrera, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), dijo que en el caso de los docentes que no fueron aceptados en las capacitaciones que se dan en la ciudad de Santiago, se está faltando a la promesa del ministerio que había aclarado que los seminarios se podrían tomar en cualquier región del país. El dirigente calificó de “injusto” el hecho de que educadores que laboran en escuelas de la provincia de Chiriquí, pero que viven en Santiago, tengan durante la temporada de verano que estar obligados a inscribirse en un seminario que se dictará en otra provincia en la que no residen habitualmente. No se lograron declaraciones del Meduca al respecto.

Martes 20

Usuarios de la sala de ortopedia del hospital Luis Chicho Fábrega de Veraguas muestran su molestia por la falta de equipos necesarios para su recuperación. María Marco, paciente de 86 años, llegó al centro médico por una cirugía, por una fractura en el fémur, pero cuando ya estaba anestesiada en el salón de operaciones, se informó que la intervención no se podría realizar porque los equipos estaban dañados.

Las más de mil 200 personas que resultaron seriamente afectadas por las emisiones de humo, provocadas por un incendio en el vertedero a cielo abierto en el distrito de Dolega desde hace nueve días, amenazan con protestar de no solucionarse el problema lo antes posible. Los pobladores indican que no es posible que, desde el pasado domingo 11 de enero, el vertedero continúe incendiado.

Residentes de la comunidad de San Francisco, en Pacora, cierran la carretera Panamericana a la altura del puente sobre el río Pacora, para exigir la pavimentación de las calles de la comunidad y la construcción de un centro de salud. Isais Hidalgo, vocero de los residentes,

dijo que desde el año 2002 mantienen esta lucha. Del Ministerio de Obras Públicas se reunirán hoy con los quejosos.

Miércoles 21

Alrededor de 12 trabajadores administrativos del Hospital Integrado San Miguel Arcángel (San Miguelito) cierran un paño de la vía Ricardo J. Alfaro, frente al centro médico. Los trabajadores decidieron bloquear parcialmente la vía debido a que la administración del hospital no termina de cumplir los acuerdos laborales pactados en la convención colectiva. Los empleados exigen una reunión con la ministra de Salud, Rosario Turner.

Trabajadores de la cafetería Metropolitana del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid cierran dos paños de la vía Transístmica. La protesta se da a la altura del hospital. Los funcionarios, quienes llevan 35 días de huelga, demandan el cumplimiento de un pliego de peticiones. Según explicaron varios quejosos, entre los puntos de este documento están mayor seguridad, mejoras en la higiene de la cafetería y la contratación de más personal.

Los jubilados volverán a la calle a partir del próximo lunes. Eladio Fernández, presidente de la Asociación de Jubilados Independientes, dijo que el Gobierno les ha suspendido en dos ocasiones una reunión para definir el aumento de sus pensiones, tal como se había acordado. Esto, según Fernández, es un irrespeto a los jubilados, por lo que bloquearán la vía Transístmica, a la altura del Complejo Hospitalario Metropolitano, y además mantendrán las protestas hasta las elecciones.

Desde el año 2008 todo el transporte público debía estar acondicionado para las personas con discapacidad, según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 88 de 2002, documento por el cual se reglamenta la Ley 42 de 1999 sobre equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. El actual sistema de transporte público no cumple con esta disposición, pero además, según el pliego de cargos para el suministro de los primeros 420 buses del proyecto Transmóvil, estos tampoco lo harán. Este plan de modernización establece que solo el 10% de los nuevos buses estén equipados para las personas con dificultades de locomoción. Jeannette Ríos, miembro de la Federación Nacional de Personas con Discapacidad, dijo sentirse indignada pues, en su opinión, no vale luchar por leyes que al final quedarán como un “burla”. Por su parte, el vocero de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, José Hernández, aclaró que el costo de los buses se dispararía si solicitaran que todos tuvieran disposiciones para personas con discapacidad.

A pesar que está vigente desde diciembre pasado una orden para que la minera de oro de Petaquilla Gold en el distrito de Donoso, Colón, detenga todos los trabajos en la mina, hasta que presente los nuevos estudios de impacto ambiental complementarios, la compañía ha hecho caso omiso y mantiene equipo pesado trabajando las estructuras que serán utilizadas por el proyecto que busca extraer oro. La administradora de la Anam, Ligia Castro, señaló que la prohibición sigue vigente para Petaquilla, y que si la orden no está siendo respetada se podrá abrir un nuevo proceso administrativo contra la empresa.

Las explicaciones de las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en Chiriquí no han resultado suficientes para los cientos de moradores

del corregimiento de Las Lomas de David que el pasado viernes cerraron por más de media hora la carretera Panamericana en demanda del líquido vital. El vocero de los ciudadanos, Guillermo Montenegro, indicó que las protestas públicas continuarán cada viernes hasta recibir un buen servicio. El director del Idaan en Chiriquí, Guillermo Ardilas, reconoció las deficiencias que existen en el corregimiento de Las Lomas, pero advirtió que en gran medida ello se debe al crecimiento desordenado de la población y a la obsoleta red de distribución.

Miembros del Sindicato Único de la Construcción y Similiares (Suntracs) protestan en Calle 50 por los cinco casos de accidentes laborales que se han registrado este mes. El obrero Fernando Garrido, de 36 años, resultó con heridas en la cabeza, clavícula y brazo derecho, luego de que le cayera encima una carga de concreto que se deslizó desde el piso 37 del proyecto Altamar, en Costa del Este, señaló Gregorio Guerrel, secretario de salud ocupacional de Suntracs. El obrero se recupera en la Caja del Seguro Social. En 2008 fallecieron 12 obreros.

Jueves 22

Integrantes del Sindicato del Hospital Integrado San Miguel Arcángel realizan un piquete en los predios de este centro hospitalario en San Miguelito. Estos trabajadores han iniciado una huelga de brazos caídos en demanda de aumentos salariales. Los trabajadores en huelga manifestaron su interés de conversar con la ministra de Salud, Rosario Turner, para llegar finalmente a un acuerdo. La ministra declaró que enviará a un observador de la entidad para que verifique cómo se están llevando a cabo las conversaciones entre el patronato del HISMA y el Ministerio de Trabajo.

Residentes de Paso Blanco cierran la calle sobre el puente del río Pacora para denunciar el mal estado en el que se encuentran las calles. Denunciaron además la falta de respuesta del Ministerio de Obras Públicas ya que la comunidad cuenta con los materiales para realizar los trabajos de reparación. Los quejosos justificaron el cierre al manifestar “que es la única forma en que las autoridades nos prestan atención”.

Padres de familia de Las Margaritas de Las Minas, provincia de Herrera vuelven a solicitarle al Ministerio de Educación que reabra la escuela primaria, que hace siete años se cerró por falta de matrícula. Judith Crespo, vocera de los padres de familia, detalló que desde ese tiempo tienen que mandar a sus hijos a la escuela Gloriela Barría de Las Minas, ubicada a unos cuatro kilómetros de la comunidad. “Muchos niños han tenido que desertar de la escuela, porque sus padres no les pueden costear estos gastos”, anotó.

Las quejas por la mala atención en el cuarto de urgencia del hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, provincia de Coclé, llegan al Consejo Municipal de Antón, según los ediles, son muchas las personas que han manifestado su descontento por la demora en la atención y las groserías que reciben en dicho lugar. Ante la situación, los ediles decidieron solicitar la presencia del director médico del hospital, Ángel Stanziola, para exponerle las quejas a fin de que se trate de corregir el problema, pues según dicen, los afectados son, en su mayoría, campesinos humildes que no tienen recursos para acudir a otros centros hospitalarios.

Viernes 23

“No queremos antenas”, era el coro que tenían moradores de la barriada El Tecal, en el distrito de Arraiján. Los residentes de esta área realizan una protesta en contra de la instalación de una antena de telefonía celular. Los moradores pidieron la inspección del Ministerio de Salud para cerciorarse de que las antenas no sean un peligro para la comunidad.

Un grupo de residentes de Bethania y Los Ángeles protesta en la vía Transistmica para solicitar que el Carnaval capitalino no se celebre en esa área. Los vecinos se oponen a que se celebren los festejos por ese sector, porque los toldos no los dejan dormir en la madrugada y por la presencia de personas que no respetan la propiedad privada.

Un grupo de profesionales y técnicos de salud que integran la Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud realiza una protesta para exigir un aumento salarial. Los integrantes de la Coordinadora, que laboran en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, dijeron que negocian el aumento salarial desde 2005. El piquete se extendió por 40 minutos y terminó con una caminata en los predios del hospital.

Sábado 24

La Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud (Conagreprotsa), que aglutina a 34 organizaciones de trabajadores del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), amenaza con irse a huelga de brazos caídos, y el miércoles convocó a una marcha desde el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid hasta la Presidencia de la República. Carlos Peralta, representante de la organización –que no incluye a médicos ni enfermeras–, aseguró que las autoridades de la CSS y el Minsa no han cumplido con los acuerdos de huelga de 2005. Ayer, el director de la CSS, René Luciani; la ministra de Salud, Rosario Turner, y representantes de Conagreprotsa se reunieron por cuatro horas, sin alcanzar acuerdos. En la provincia de Herrera, cerca de 100 asistentes de clínicas de los 35 gremios que operan en los distintos centros hospitalarios de Salud salieron a protestar y a hacer piqueteos.

Un grupo de moradores de la comunidad del Giral, ubicada en el corregimiento de Buena Vista, distrito de Colón, protesta pacíficamente frente a las oficinas regionales de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), solicitando la intervención de esta institución ante los posibles planes de construir otra planta termoeléctrica en este sector. El director regional de Anam en Colón, Alvis Pino, explicó que desconocen del proyecto, pero dijo que investigarán la denuncia.

Residentes del área de Baymón, en la provincia de Darién, exigen la reparación urgente del camino que comunica a Garachiné y Sambú, porque este no resiste un invierno más. Nilfo Guaceruca, residente del área, dijo que este camino fue abierto por madereros en la década de 1960 y nunca se le ha dado mantenimiento. El residente dijo que la población hace un llamado al Presidente de la República para que les deje esta obra terminada antes de finalizar su mandato.

En un concierto gratuito coordinado por la organización Jóvenes en pro de la Seguridad Ciudadana, se dan cita unas 5 mil personas en las escalinatas del edificio de la Administración del Canal. El concierto por la paz fue ideado para protestar contra la creciente violencia que hoy día se vive en Panamá, que durante 2008 cobró la vida de 593 personas. Durante el evento, los organizadores aprovecharon para ofrecer consejos sobre medidas de seguridad personal.

Domingo 25

Las zonas boscosas del distrito capital siguen perdiendo terreno ante la industria inmobiliaria. La empresa Promotores de la Metrópoli, S.A., vinculada a la familia del ministro de Vivienda, Gabriel Diez, desarrolla el proyecto residencial y comercial Colinas de Versalles en un área de 27.9 hectáreas formadas por bosque maduro. Parte de los terrenos está dentro del Parque Nacional Camino de Cruces, según lo determinó la Alianza para la Conservación y Desarrollo (ACD). Ariel Rodríguez, presidente de ACD, presentó ante el Ministerio Público una denuncia para que se investigue un delito ecológico, ya que la empresa empezó a mediados de diciembre con la tala de árboles.

Moradores de Villa Agustina en el corregimiento de Llano Bonito de Chitré, provincia de Herrera, solicitan que se desmantele la torre de telefonía celular que se instaló en esta área, porque además de alterar su salud, desvalorizara sus fincas. Apostados frente a esta antena, un grupo de afectados denunció que esta estructura se construyó por encima del clamor de la comunidad, que desde un principio la rechazó tanto en la alcaldía municipal de Chitré, como en la Defensoría del Pueblo.

La instalación de una línea de distribución de 12 pulgadas desde el cerro San Cristóbal hasta la comunidad de Llano del Medio Arriba, solucionará los problemas de abastecimiento de agua potable en el corregimiento de Las Lomas, a partir de marzo o abril próximo, aseguró el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados en Chiriquí, Guillermo Ardilas. El funcionario informó de que el proyecto permitirá enviar mil 250 galones de agua hacia Las Lomas, un volumen de agua suficiente para resolver las necesidades de este sector durante al menos los próximos 10 años.

Un movimiento para proteger las playas de la extracción indiscriminada de arena, inician los moradores de las comunidades de Bahía Honda y Salmonete, en la costa sur del distrito de Soná, provincia de Veraguas. Adrián Montilla, presidente de la Fundación Campesina para el Desarrollo de Bahía Honda, explicó que por más de 10 años se extrajo arena de las playas Blanca, Naranjo y Limón, sin ningún tipo de control, pero que lamentablemente ahora se están viendo las consecuencias. Aristides Ortiz, alcalde de Soná, informó que actualmente no se están otorgando permisos para la extracción de arena en estas playas de Bahía Honda, y que si esto está ocurriendo, es de manera ilegal.

Moradores de cuatro comunidades de la provincia de Los Santos solicitan al Gobierno la agilización de proyectos de electrificación. Se trata de las comunidades Sector Los Alonsos, El Barrancón, Los Bijaguales y El Guayabo, en los distritos de Macaracas y Tonosí. Laudino Pérez, residente del área, recordó que desde el 19 de abril de 2007 el Programa de

Desarrollo Comunitario aprobó una partida de 50 mil dólares para el tendido eléctrico, sin embargo, este no ha sido colocado.

Lunes 26

El personal médico, paramédico y de enfermería del Sistema Penitenciario de Panamá empezará una huelga el próximo lunes 2 de febrero, debido a las precarias condiciones de trabajo en los penales y al incumplimiento de las categorías salariales. Justino Camacho, vocero de los médicos, explicó que desde hace más de una década han pedido a las autoridades de Gobierno y Justicia que cumplan con la Ley 16 de 1969, que establece el escalafón de los profesionales de la salud. Camacho añadió que, pese a que en todas las cárceles hay clínicas, ninguna tiene los equipos necesarios ni los medicamentos ni personal suficiente para atender a la población penitenciaria, que hasta diciembre sumaba 9 mil 962 personas. La huelga se extiende a los centros de cumplimiento.

Los residentes del sector Cien de Bethania salen de la reunión con la Junta de Carnaval de Panamá con un “saco” de promesas por parte de la Junta de Carnaval, de la Policía Nacional y de la Alcaldía de Panamá. Mientras tanto, la diputada Mireya Lasso presenta una demanda de inconstitucionalidad. La diputada sustenta su demanda en el hecho que la Constitución garantiza las manifestaciones o reuniones al aire libre, siempre y cuando no causen “perturbación del tránsito, alteración del orden público o violación de los derechos a terceros”. Con los carnavales en la Transístmica, dijo, se está cerrando una vía y se afecta el derecho de terceros. Lasso convocó para mañana miércoles a una manifestación en contra del uso de esa ruta.

Martes 27

Residentes de Vacamonte, en Arraiján, salen a protestar para denunciar la falta de agua en la comunidad y el mal estado de las calles. Los moradores bloquearon la vía que conduce al puerto ubicado en este sector, lo que causó un congestionamiento vehicular. Los quejosos manifestaron que hasta la fecha las autoridades han hecho caso omiso a estas irregularidades.

Los jubilados vuelven a cerrar los paños de la vía Transístmica enfrente del Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social en demanda de un aumento de 30 dólares en sus pensiones. A la manifestación de hoy se le unió un grupo de policías jubilados. En días pasados los jubilados independientes manifestaron su rechazo a la cancelación de las dos últimas reuniones pactadas para negociar con el Gobierno.

Integrantes del Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Salud y a la Vida cierran tres paños de la vía frente al Instituto de Medicina Legal en el corregimiento de Calidonia. Gabriel Pascual, dirigente del Comité, solicitó que separen de su cargo de director del Instituto de Medicina Legal al doctor José Vicente Pachar. Pascual pidió la destitución de Pachar con base a “su incapacidad y la falta de transparencia” durante el proceso de análisis de las víctimas del dietilene glycol.

Debido a la proliferación de aguas negras y la falta de sanitarios, los residentes del inmueble No.4034, ubicado en la calle 3 Avenida Bolívar, provincia de Colón, proceden a cerrar la vía, en señal de protesta y hacer un llamado de atención a las autoridades del Ministerio de Vivienda (Mivi). Cándido Pacheco, director regional del Mivi, manifestó que no había tenido ningún tipo de información sobre las necesidades de estas familias.

Los ex trabajadores portuarios René Prosper, Carlos Rivera, Oriel Ariza y Guillermo Moreira reactivan su lucha por el reclamo del pago de unos 17 millones de dólares que, según ellos, les adeuda el Estado como consecuencia de la privatización de los puertos de Balboa y Cristóbal, en 1997. La reacción de los ex trabajadores surge un día después de que se diera a conocer el pago que hizo la Autoridad Marítima de Panamá AMP a la empresa High Class Construction Company Inc, por la suma de 573 mil 202 dólares, propiedad de la candidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático, Balbina Herrera. Al igual que con la candidata perredista, los ex trabajadores tienen un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena a la AMP cancelarles la deuda. Sin embargo, dijo Prosper, las autoridades no han tenido la misma diligencia para finiquitar la “indemnización” a los 2 mil 276 ex trabajadores.

Sobrevivientes de dos de los más trágicos accidentes de tránsito registrados en los últimos tres años en la capital, demandan ante la Corte Suprema, la nulidad de la licitación para el suministro de los primeros 420 buses del proyecto Transmóvil, programada para el próximo 29 de enero. La acción legal fue interpuesta ante la Sala Contencioso Administrativa por nueve personas que sobrevivieron al incendio del bus 8B-06, ocurrido en La Cresta, en octubre de 2006, y de la colisión entre dos buses que hacían carrera en la vía Transístmica, en marzo de 2008. Los demandantes sustentan el recurso indicando que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) rebasó el ámbito de su competencia al declarar un estado de emergencia cuando la ley que regula esta materia solo le confiere facultades para declarar “estado de urgencia” para este fin; violó las normas que regulan las contrataciones públicas, al eximirse del requisito de publicar los términos de esta licitación por un período no mayor de 40 días; además de los incumplimientos con el peso bruto que deben tener los vehículos y porque supuestamente solo el 10% de ellos estará equipado para brindarle facilidades a los discapacitados. Actualmente hay un proyecto de borrador en la Sala Tercera –por otra demanda de nulidad– donde se pide la suspensión del pago de 25 mil dólares de indemnización a los transportistas.

Miércoles 28

Técnicos de la salud, policías jubilados y los jubilados independientes protestan en la vía Transístmica, enfrente del Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social, en demanda de aumentos salariales y de mejores jubilaciones. Eladio Fernández, dirigente de la Asociación de Jubilados Independientes, explicó que el Gobierno no ha escuchado sus demandas y peticiones. “Ya no queremos 25 dólares, ahora queremos 30 dólares para los jubilados que ganan menos de mil dólares... estamos sufriendo las consecuencias del alto costo de la vida”, agregó. El grupo liderado por Eladio Fernández es apoyado también por jubilados de la Policía Nacional, quienes también piden un incremento de jubilaciones. Por otro lado, por tercer día consecutivo integrantes de la

Coordinadora Nacional de Gremios de Profesionales y Técnicos de la Salud solicitan un bono de productividad y aumento salarial.

Residentes de Bethania, Los Ángeles y El Carmen no desisten de sus protestas contra la ruta del Carnaval capitalino. Unos 45 vecinos –entre los que encontraba la diputada Mireya Lasso– se apostaron a orillas de la vía Transístmica, a la altura de Bethania, para gritar consignas que revelan su renuencia a la fiesta del rey Momo. Esta semana, vecinos del barrio presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, una demanda de inconstitucionalidad contra la ruta de la fiesta.

La Asociación de Derecho Ambiental y la Asociación Ecologista Panameña presentan una denuncia penal en contra de la empresa minera Petaquilla Gold, por supuestos delitos ambientales. El recurso interpuesto ante la Unidad de Delitos Contra el Ambiente de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) sostiene que Petaquilla Gold empezó los trabajos de la mina sin contar con la aprobación de los estudios de impacto ambiental, en violación a las leyes panameñas. Los denunciantes también señalan que la empresa incumplió este año con una resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) que le prohibía continuar con los trabajos. La administradora de la Anam, Ligia Castro, señaló que se abrió un proceso administrativo para verificar si Petaquilla Gold había continuado con sus trabajos.

Un paro de labores iniciado el pasado 16 de enero mantiene suspendida la construcción de la nueva sede para la zona occidental del país del Banco Nacional de Panamá (Banconal). La huelga fue promovida por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y Jaime Caballero, dirigente regional, señala que la Constructora Arcada ha actuado ilegalmente, violando el Código de Trabajo y el derecho a la sindicalización. Añadió que en este proyecto un obrero se accidentó por falta de medidas de seguridad y las obras fueron paralizadas en varias ocasiones por incumplir con la seguridad. Por su parte, Polo Cheva dijo que el paro que promueve el Suntracs es ilegal y que el dirigente Caballero miente.

Ex trabajadores portuarios marchan por Calle 50, desde Plaza New York hasta la Defensoría del Pueblo, para reclamar el pago de las indemnizaciones a las que tienen derecho tras la privatización de los puertos. A la manifestación se unieron los ex trabajadores del antiguo Instituto Nacional de Telecomunicaciones y del Instituto de Recursos Hidráulicos y de Electrificación, quienes también reclaman indemnización. Los ex funcionarios portuarios están exigiendo cortesía de sala en la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Según ellos, la deuda asciende a 17 millones de dólares.

La junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprueba el acuerdo de huelga firmado entre el director de la institución, René Luciani, y los trabajadores agremiados a la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (Anfacss). El representante de los empleadores en la directiva, Manuel Pinzón, dijo que esta decisión le costará a la institución \$8.5 millones de dólares en 2009 y \$12.5 millones a partir de 2010, perjudicando las reservas de la entidad.

Un grupo de la comunidad de El Chumical de Dolega cierra por dos horas la vía que conduce hacia el distrito de Dolega, en protesta por la situación del vertedero a cielo abierto que se mantiene desde hace 22 días incendiado. Los moradores exigen que quiten el basurero que tienen cerca de sus hogares, pero que no les mientan, porque en varias ocasiones les han manifestado que van a limpiar el vertedero y nunca se hace. La población procedió a abrir la calle cuando llegó el gobernador de la provincia de Chiriquí, Virgilio Vergara, quien se comprometió a trasladar equipo al vertedero y enterrar los desechos sólidos para mañana jueves.

Jueves 29

Los jubilados independientes anuncian que a partir del próximo lunes intensificarán sus acciones de protesta en el ámbito nacional. Así lo dio a conocer Eladio Fernández, dirigente de los jubilados, quien manifestó que no han logrado resultados positivos de las conversaciones con el Gobierno en demanda de mejoras salariales. “Estaremos en la calle hasta el día que haya una solución”, indicó el vocero de la Asociación de Jubilados Independientes. Agregó que las autoridades han hecho caso omiso a las peticiones de un aumento salarial a los miembros de la Policía Nacional y la restauración de la Oficina de Control de Precios.

En una reunión relámpago, el director de la Caja de Seguro Social, René Luciani, y la ministra de Salud, Rosario Turner, ofrecen a los técnicos del sector salud un incentivo económico de 200 dólares basado en su desempeño, el cual se pagará en los primeros 20 días de 2009. Desde hace una semana, la Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud solicita un aumento de sueldo y un bono de productividad. Los técnicos se han manifestado en la vía Transístmica, enfrente del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social.

Viernes 30

Veintiséis de las 35 organizaciones que forman la Coordinadora Nacional de Gremios de Profesionales y Técnicos de la Salud (Conagreprotsa) acuerdan realizar un paro de labores en todas las dependencias de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud. El grupo –de aproximadamente 15 mil trabajadores– reclama a la ministra de la cartera, Rosario Turner, y al director de la CSS, René Luciani, el cumplimiento de los acuerdos suscritos en los años 2005 y 2006, que incluían mejoras al sistema de salud e incrementos de salario. Los trabajadores se reunieron ayer con las autoridades, pero no lograron acuerdos. Las negociaciones continúan hoy.

La Alianza de Mujeres de Panamá interpone una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 48 de 1941, en la cual se establecen los parámetros en los que una mujer puede acceder a la esterilización. Haydeé Méndez, abogada especialista en género, explicó que esta norma hay que derogarla porque viola los derechos de la mujer que no tiene recursos para pagar un salping en un hospital privado. “En los servicios públicos solo esterilizan si tienes 35 años. Esto solo aumenta la pobreza”, argumentó.

Cerca de un centenar de habitantes de las barriadas Canto del Llano, San Francisco y Altos de San Francisco de Santiago, provincia de Veraguas, marchan por las calles de la localidad y cierran la vía Interamericana como protesta ante la instalación de varias antenas de telefonía celular en áreas residenciales. Los manifestantes iniciaron las acciones con un piquete frente a la sede la Gobernación de Veraguas, en donde gritaron consignas y demandaron la atención del gobernador Arturo Fábrega, quien pese a estar en su despacho se negó a atenderlos. Tras el cierre, Alexander Hernández, vocero del movimiento, advirtió que darán un nuevo plazo hasta el próximo lunes al gobernador Fábrega para que convoque una reunión con funcionarios de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), en donde solicitarán la suspensión de la construcción de tres antenas de telefonía.

La dirigencia de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve) denuncia que cerca de 6 mil docentes de Veraguas se quedarán este verano sin recibir capacitaciones debido a que el Ministerio de Educación (Meduca) no tendrá la capacidad para atender la cantidad de maestros y profesores que deben tomar seminarios antes del inicio del año escolar. Por parte de la Dirección Regional del Meduca se informó que se espera aumentar el número de educadores asistentes a estos cursos.

Siglas

Aeve	Asociación de Educadores Veragüenses
Amp	Autoridad Marítima de Panamá
Anam	Autoridad Nacional del Ambiente
Anfacss	Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social
Asep	Autoridad de los Servicios Públicos
ATTT	Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
Banconal	Banco Nacional de Panamá
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
Conagreprotsa	Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud
CSS	Caja de Seguro Social
CUM	Coordinadora de Unidad Magisterial
DIJ	Dirección de Investigación Judicial
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Meduca	Ministerio de Educación
Mici	Ministerio de Comercio e Industrias
Mivi	Ministerio de Vivienda
Mop	Ministerio de Obras Públicas
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PRD	Partido Revolucionario Democrático
Suntracs	Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares
TE	Tribunal Electoral

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.
Dirigido por Marco A. Gandásegui, con la asistencia de Jennifer Delgado.

Fuente: La Prensa, Panamá América, Radio Mía, La Estrella de Panamá, El Siglo, Kaosenlared.net, suntracs.com., FRENADESO, ASOPROF, vama.com, MJP Informa, Radio Temblor, Acción100%noticia.com., Diario la Crítica., Hora Cero.

Febrero 2009

Domingo 1

Dos nuevos proyectos mineros para la extracción de oro, adicionales al de Petaquilla Minerals en Colón, se preparan para empezar o retomar operaciones en otras dos provincias del país: Los Santos y Veraguas.

El más adelantado es el de mina Cerro Quema de la empresa canadiense Bellhaven, que anunció el inicio de actividades de extracción en este mismo año afectando directamente 50 hectáreas que incluyen el recorte del cerro La Pava, en Tonosí.

La empresa Bellhaven dice que solo espera la aprobación de su Programa de Adaptación y Manejo Ambiental para poner en marcha la mina, aunque ya avanza con algunos trabajos previos. El otro proyecto es la reactivación de la ya explotada y contaminada mina Santa Rosa, en Cañazas de Veraguas. Los ex trabajadores que mantienen secuestrada la mina han logrado establecer conversaciones con grupos extranjeros interesados reactivar la extracción de oro en el lugar.

Lunes 2

El Gobierno Nacional se mantiene firme en su posición de entregarles a los jubilados y pensionados independientes otro bono anual de 60 dólares y no el aumento mensual que ellos solicitan de 25 dólares.

Rafael Mezquita, ministro de la Presidencia y negociador por parte del Estado, asegura que los jubilados han sido intransigentes y no aceptan las propuestas presentadas por el Gobierno e insisten en cerrar calles.

En tanto, Eladio Fernández, dirigente de los jubilados, promete que el cierre de la vía Transistmica a la altura del Complejo Metropolitano de la Caja de Seguro Social en la ciudad capital va, y pide a los ministros ser más serios en sus propuestas.

Agrega que los bloqueos de vías se extenderán a otros puntos del país.

Martes 3

Las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) amanecen hoy con los servicios –a excepción de los médicos y administrativos– paralizados.

Ayer, los miembros de la Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud (CONAGREPROTSA) decretaron un paro de 24 horas prorrogables para exigir a la ministra Rosario Turner y al director de la CSS, René Luciani, cumplir con los acuerdos pactados en 2005 y 2006.

Tomás Escudero, vocero del grupo que aglutina a unos 15 mil funcionarios de ambas dependencias en todo el país, informa que los acuerdos contemplan mejoras salariales y de los servicios de salud.

Miércoles 4

Dos días de protesta cumplen los miembros de la Asociación de Jubilados Independientes. El grupo –que cierra la vía Simón Bolívar– exige un aumento mensual de \$30 en sus pensiones. El ministro de Vivienda y negociador por el Gobierno, Gabriel Diez, dice que en el presupuesto del Estado no hay dinero para responder a estas demandas. Ricardo Vargas, defensor del Pueblo, respalda las aspiraciones de los jubilados, pero pide que los reclamos no perjudiquen a terceros.

Jueves 5

Los problemas en el sector Salud continúan. Al paro indefinido que mantiene la Coordinadora Nacional de Profesionales y Técnicos de la Salud (CONAGREPROTSA), se suma otra paralización parcial: la de los laboratoristas.

El Colegio Nacional de Laboratoristas de Panamá (CONALAC) anuncia que el próximo martes 10 de febrero solo atenderá exámenes de laboratorio y transfusiones de urgencia. Ese día sus miembros realizarán una marcha hacia la Presidencia de la República.

La medida obedece a que hace un año entregaron a las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA) un pliego de peticiones que no ha sido respondido.

Sarina Franco, presidenta de CONALAC, dice que desde hace 25 años reciben 45 dólares por turno extra que realizan. Añadió que por mes solo les reconocen cinco turnos extra, y los que hacen más allá de esa cantidad no son remunerados.

Los bomberos del cuartel Florencio Arosemena (San Miguelito) y Federico Boyd (Juan Díaz) están a la expectativa; pues cuatro estaciones -Bethania, Albrook, Howard y Carrasquilla- se quedaron sin “carro bomba”.

Los bomberos de Juan Díaz y de San Miguelito eran conscientes de que si pasaba “algo grande” no tendrían capacidad de repuesta. No solo porque se habían dañado algunos carros para atender emergencias, sino porque los disponibles no “estaban muy benditos”, según los propios bomberos consultados.

Afortunadamente, no hubo ninguna emergencia que atender. Pero si no hubiese sido así la historia sería otra, por lo que los bomberos están preocupados.

Viernes 6

En su cuarto día de protestas, la Asociación de Jubilados Independientes recibe otra invitación al diálogo por parte del ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita, quien llegó a la vía Transístmica, en la ciudad capital, a citarlos para hoy a las 3:00 p.m. en la Presidencia, donde les harán una nueva propuesta de aumento a las pensiones. Cuestionado sobre los perjuicios que las protestas causan a terceros, el líder del grupo, Eladio Fernández, dijo que con las bajas pensiones también se irrespetan sus derechos.

Sábado 7

La Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de Salud (CONAGRETPROSA) bajó de 175 a 135 dólares su aspiración de incremento salarial. Pero mantienen la huelga general. El gremio lo integran unos 15 mil funcionarios de 34 especialidades distintas de salud.

La nueva propuesta también contempla una rebaja en el porcentaje del bono y de los turnos extra. Un bono del 90% del salario que inicialmente exigía el gremio, ahora pide que sea del 60%, y en vez del 100% del pago de los turnos extras, solicitan que se les remunere el 60%.

Carlos Peralta, coordinador nacional de CONAGRETPROSA, dice que las autoridades no han mostrado “interés en resolver sus reclamos”.

Dice que durante la reunión del pasado jueves, el gobierno les presentó una propuesta que no les satisfizo y están en espera de modificaciones al documento.

Lunes 9

El Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) anuncia la elección de Saturnino Rodríguez como nuevo coordinador del Frente, en reemplazo de la dirigente veragüense Teófila Zambrano. Rodríguez es secretario general de la Unión Campesina Panameña, y lideró la lucha del Frente Campesino contra los Embalses del Canal. Este jueves 12, el Frente conmemorará el primer año del homicidio del líder obrero Al Iromi Smith e inaugurará su centro de campaña contra las elecciones de 2009.

Martes 10

Los 14 técnicos de registro médico y 27 técnicos de enfermería nombrados por el Ministerio de Salud (MINSA) para paliar la falta de atención en centros de salud y hospitales, mientras dura la huelga de la Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de Salud (CONAGREPROTSA), no amedrentó la organización.

Lejos de incomodarse, la dirigencia de CONAGREPROTSA alaba la medida asumida por la ministra Rosario Turner.

Carlos Peralta, coordinador del gremio, dice que las contrataciones se necesitaban para cubrir el déficit de personal.

“Son contrataciones que estaban en proceso y lo que han hecho es agilizarlas”, explica.

La oficina de Relaciones Públicas del MINSA, sin embargo, asegura que los trabajadores fueron contratados solo por la huelga.

Miércoles 11

El Comité Pro Carretera del distrito de Mariato pide al Ministerio de Obras Públicas (MOP) que exija a la empresa Ininco que cumpla con la garantía vigente del proyecto carretero Atalaya - Ponuga - Mariato, el cual con menos de un año y medio de haber sido terminado se encuentra en completo estado de deterioro.

El citado proyecto ejecutado a un monto de 4 millones 300 mil dólares, fue inaugurado el 25 de junio de 2007 por el ministro Benjamín Colamarco, sin embargo, los conductores particulares, productores agropecuarios y transportistas de la región denuncian que a los cuatro meses de su entrega, el mismo comenzó a dañarse.

El padre Noel Pinzón, miembro del Comité Pro Carretera, asegura que ellos no entienden cómo fue posible que el MOP y principalmente la Contraloría hubiesen aceptado un proyecto de mala calidad que ya está completamente dañado, pese a la inversión millonaria que se hizo con dinero del Estado.

Jueves 12

En la ciudad capital y la provincia de Colón, integrantes del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) salieron a protestar a las calles. Los trabajadores cierran parcialmente la vía Transistmica, a la altura del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid. La misma situación se repite en la Avenida 12 de Octubre.

Asimismo, los trabajadores de la construcción salen, con sus banderas rojas, cerca de los proyectos en los que se encuentran -como en Multiplaza y Calle 50- para exigir justicia por el asesinato del obrero Al Iromi Esmoir Smith Rentería, ocurrido hace un año en la costa atlántica.

Viernes 13

Luego de tres horas de reunión, CONAGREPROTSA –que incluye 35 gremios–, decide que cada presidente de agrupación analice con sus bases la propuesta de las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA) y de la Caja de Seguro Social (CSS).

Ambas entidades acordaron el pasado miércoles aprobar un incremento salarial de 60 dólares –que se haría efectivo durante este año– y mantener los bonos anuales propuestos desde el principio (200 y 225 dólares de acuerdo con la categoría del funcionario).

José Sánchez, uno de los dirigentes de CONAGREPROTSA, aseguró que entre ayer y hoy cada gremio realizaría su asamblea general.

Mañana, a las 10:00 a.m., se reunirán nuevamente los dirigentes para analizar las consideraciones aportadas por cada agrupación. En esa reunión también decidirán cuándo volverán a la mesa de negociación con las autoridades de Salud, a las que dejaron esperando ayer, por lo que ellas pensaron que sería un acuerdo de huelga.

Sábado 14

María Idalia Álvarez, presidenta de la Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud, revela en la tarde que el paro de labores de su gremio continúa.

Un grupo de representantes de la Coordinadora se reunirá en las oficinas del Ministerio de Salud con la ministra de Salud, Rosario Turner, y delegados de la Caja de Seguro Social.

Álvarez asegura que el presidente de la República, Martín Torrijos, no les ha confirmado si será el mediador en este conflicto laboral, tal como ellos se lo solicitaron.

La dirigente criticó que el Gobierno no les pagara su quincena ayer viernes. “Consideramos que fue una falta a los derechos humanos que no pagaran la quincena a los trabajadores de la salud, quienes están en su derecho de protestar”, agrega.

Domingo 15

La izquierda política, liderada por el economista Juan Jované De Puy, aspirante a la Presidencia por la libre postulación, da a conocer su plan de trabajo “Hacia una estrategia alternativa de desarrollo”.

Plantean la defensa y el respeto de los derechos humanos; de una democracia participativa, en que todos los panameños puedan gozar de sus derechos políticos; y el combate a la pobreza.

Jované identifica 15 problemas básicos que deben atenderse de inmediato. El más urgente, decretar un aumento general de salarios y reducir el costo de la canasta básica, que aumentó 35%.

Pide a la población que rechace “las ofertas ‘neoliberalistas’ de los candidatos”. El Órgano Judicial evalúa una demanda de Jované para que anule el impedimento de postularse a la Presidencia por la vía independiente.

Lunes 16

Los padres de familia cuyos hijos asisten a escuelas oficiales están preocupados por el retraso en el calendario escolar 2009 y, por ello, han solicitado una reunión con el jefe de la cartera de Educación, Salvador Rodríguez

Aixa Gómez, presidenta de la Confederación Nacional de Padres y Madres de Familia, dice que quieren reunirse con Rodríguez para buscar una solución al problema surgido con la fecha de inicio de las clases.

Rodríguez anunció la semana pasada que la fecha probable de inicio de clases en el sector estatal es el 13 de abril y que la jornada se extendería hasta finales de diciembre o la segunda semana de enero de 2010.

La dirigente indicó que se sigue jugando con la educación pública y esto al final va a traer más jóvenes a las calles y estudiantes menos preparados al momento de ingresar a las universidades.

Por su lado Luis López, secretario general de la Coordinadora de Unidad Magisterial, dice que pasar para el mes de abril la entrada a los colegios es “una irresponsabilidad”.

Martes 17

Son cerca de mil 50 los bomberos que voluntariamente trabajan en la ciudad de Panamá, que afirman que para el Gobierno “no son prioridad”, y que decidieron anoche suspender su participación en las emergencias que se registran a partir de la fecha, incluyendo los carnavales.

La medida pone en riesgo a la ciudadanía ante emergencias, ya que solo hay 431 bomberos permanentes en la capital. El capitán Rubén Madrid, oficial voluntario de la Comandancia

del Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP), señala que no se trata de dejar desamparada a la población, pero lo que se busca es exigir que el Ministerio de Gobierno y Justicia les brinde los equipos y recursos necesarios para hacer su trabajo.

“Si sucede alguna emergencia de magnitud y no puede ser atendida, la responsabilidad no es de los bomberos; lo estamos advirtiendo desde hace mucho tiempo y no nos escuchan”, recalcó Madrid.

Los bomberos voluntarios del interior del país evalúan sumarse a esta medida de presión.

Miércoles 18

El Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida protesta frente a la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con su vocero, Gabriel Pascual, el caso de las víctimas por envenenamiento con dietilene glycol está “durmiendo el sueño eterno” en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que encabeza la magistrada Esmeralda de Troitiño.

“Pedimos que el documento sea remitido a la Fiscalía Especial del Ministerio Público, donde estamos seguros de que obtendrá respuesta más rápida”, aseveró Pascual.

La urgencia de la organización, según Pascual, es porque el retraso en las investigaciones hace que solo una parte de las víctimas pueda ser atendida en la Caja de Seguro Social (CSS) y en las dependencias del Ministerio de Salud, ya que el Gobierno reconoce por ahora 208 casos.

Jueves 19

Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) paralizan momentáneamente, la obra del Dalí Tower, alegando incumplimiento en las medidas de seguridad laboral y que la empresa no paga Seguro Social.

Héctor Hurtado, de salud ocupacional del sindicato, dice que la intención era orientar a los trabajadores acerca de sus derechos y las medidas de seguridad.

En la obra Dalí Tower no trabajan afiliados al SUNTRACS, ya que la constructora Quantum Estructura y Edificaciones, emplea a trabajadores del Sindicato Democrático de la Industria de la Construcción y Similares de Panamá, el cual, según la directora de Inspección del Ministerio de Trabajo, Gabriela Rojas, está debidamente registrado.

Más de un centenar de residentes de varias barriadas del sector sur de la ciudad de Santiago de Veraguas cerraron por espacio de hora y media la carretera (Panamericana), en protesta por la falta diaria de agua potable. Al lugar de la protesta se presentó el director regional del IDAAN en Veraguas, Marcelo Tristán, quien en medio de las duras críticas de los manifestantes se comprometió a que el servicio de agua potable se normalizará en pocos días.

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en Los Santos, inició dos investigaciones, una por el desmonte de árboles con tractor y la otra por el incendio de unas 20 hectáreas de tierra, hechos registrados en los distritos de Los Santos y Tonosí, respectivamente. Las investigaciones están relacionadas, una con el derribo de varios árboles con tractor para el ensanche del camino Los Escobares-El Guásimo y la otra con el incendio ocasionado

aparentemente por cazadores furtivos en Loma La Pava, área dentro de los terrenos de la empresa Minera Cerro Quema S.A.

Viernes 20

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) culmina el proceso administrativo contra la Corporación Las Olas aplicando una sanción de 10 mil dólares por afectación al refugio de vida silvestre La Barqueta. El representante legal de la Corporación Las Olas es el empresario Juan Araúz. El proceso administrativo iniciado por la ANAM contra Las Olas, concluye que la actividad se desarrolló dentro de un área protegida y de conformidad con el artículo 95 de la Ley No. 1 de 1994.

Un grupo de personas residentes en la barriada Nome, en el distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé estuvieron a punto de linchar a los obreros que trabajan, en horas de la noche, en la instalación de una antena de telefonía. Fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, ya que los pobladores estaban enojados porque este proyecto no les fue consultado y además se lleva a cabo a pocos metros de sus residencias. Lesbia de Villarreal, dueña del lote donde se instala la antena, indica que cuentan con los permisos que exige la ley y por ello los obreros estaban instalando los primeros hierros.

Domingo 22

Manuel Muy, secretario general de la Policía Nacional dice que las cifras sobre las bajas de agentes del orden en 2008 hay que “analizarlas objetivamente”. Por ejemplo, dijo, el año pasado siete policías fallecieron por accidentes de tránsito, tres en la tragedia del helicóptero SAN-100 y cinco fueron atropellados cuando cumplían sus funciones. En 2008 fallecieron en cumplimiento del deber un total de tres agentes. Otros 28 agentes fueron heridos en ejercicio de sus funciones.

Martes 24

Petaquilla Minerals presenta un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de la resolución de la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM) que impone la multa de un millón de dólares contra la empresa. Harley Mitchell, asesor legal de ANAM, señaló que la Corte admitió el amparo de garantías de Petaquilla Minerals, pero recalcó que “nosotros vamos a continuar con el cobro, porque nada lo impide hasta ahora”. La ANAM informa que, además, se está procediendo a cobrar una fianza de 900 mil dólares para la recuperación del área afectada por la mina de oro. La ANAM ha girado una orden de cobro contra la fianza que se encuentra registrada en el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Pero hasta la fecha, el MICI no ha contestado a la solicitud presentada por la ANAM.

Miércoles 25

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y Petaquilla Minerals enfrentan nuevas diferencias por el desarrollo de la mina de oro en Colón. La minera ahora se opone a pagar la multa de un millón de dólares que le aplicó ANAM por daños causados al ambiente a consecuencia del desarrollo de su proyecto. La empresa afirma que no tuvo derecho a defenderse en este proceso administrativo, y procedió a interponer un nuevo amparo de garantías ante la Corte para frenar la multa. Pero Harley Mitchell, asesor legal de la ANAM, indicó que la orden de cobro no se detendrá ya que la Corte admitió el recurso pero no se ha pronunciado en contra del cobro. Petaquilla advierte que la institución puede cometer desacato si insiste en cobrar la multa.

Viernes 27

La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá es el cuarto gremio de profesionales del sector Salud en sentarse a negociar aumento de salario con las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social. Annette Craig, presidenta del gremio, dice que sólo esperan que las autoridades decidan el lugar donde se realizarán las conversaciones. En el MINSA confirmaron que habrá una reunión, pero no se ha definido la fecha.

Glosario De Siglas

ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente
CBP	Cuerpo de Bomberos de Panamá
CONAGREPROTSA	Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud
CONALAC	Colegio Nacional de Laboratoristas de Panamá
CSS	Caja de Seguro Social
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
FRENADESO	Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales
MINSA	Ministerio de Salud
MICI	Ministerio de Comercio e Industrias
MOP	Ministerio de Obras Públicas
SUNTRACS	Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción Similares

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.

Dirigido por Marco A. Gandásegui, coordinado por Jennifer Delgado, con la asistencia de Marina Ábrego.

Fuente: Diario La Prensa, Diario Panamá América, Radio Mía, Diario la Estrella de Panamá, Diario El Siglo, Kaosenlared.net, suntracs.com., FRENADESO, ASOPROF, vagama.com.

Marzo 2009

Domingo 1

El presidente Martín Torrijos presenta el informe a la Nación con un balance de su gestión quinquenal y en el que al final admitió haber cometido errores, pero, a la vez, advirtió que su gobierno afrontó problemas que administraciones anteriores no quisieron acometer. Hizo especial alusión a “retos impostergables” como la reforma fiscal, para sanear las finanzas públicas; pagar la planilla y poder atender la deuda social, así como las reformas para salvar de la quiebra al Seguro Social. La ampliación del Canal, que dijo, hoy es una realidad y que, según señaló, gracias a ella, el presente y futuro del país están asegurados. Dijo que gracias a programas sociales como la Red de Oportunidades, los índices de pobreza (28.6%) y pobreza extrema (11.6%) son los más bajos de la región. Así mismo alabó la reducción del desempleo a 5.6% y la promoción de inversiones que ha generado 210 mil empleos “decentes”. Para José Blandón, diputado de la oposición perteneciente al Partido Panameñista, Torrijos pintó una realidad distorsionada del país, ya que sus logros debieron ser el doble de los de su antecesora, Mireya Moscoso, porque dispuso de mayor cantidad de recursos. Criticó que se atribuyera la reforma fiscal y las del Seguro Social como logros de su gobierno, cuando recuerda que estas surgieron por consensos de la sociedad. Por otro lado, cuestionó que el gobernante no se refiriera a la violencia e inseguridad, y menos que dijera cómo atenderá los acuerdos de la Concertación.

Lunes 2

A 98 ex trabajadores de la finca Santa Rosalía ubicada en el corregimiento de Divalá, en la provincia de Chiriquí, y cuyas operaciones fueron cerradas desde el año 2001 ante la crisis económica que se vivió durante esa época, se le pagó el 50% de sus prestaciones luego de ocho años y ante un gran descontento.

Catalino Sánchez, luego de laborar cuatro años con la finca bananera, no le parece justo que le hayan pagado el 50% de la deuda, y el mismo parecer tiene el resto de los trabajadores.

Residentes de las comunidades de Punta Barco, Chame, Bejuco, San Carlos, Gorgona y Coronado en la provincia de Panamá, denuncian que llevan más de 12 días sin el suministro de agua potable. Rosa Cano, residente de San Carlos y vocera de los afectados, señala que el problema no solo afecta a las personas que viven en esta zona, sino que al área acuden un gran número de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Además sostiene que aunque envíen carros cisterna a distribuir agua, no es suficiente para las necesidades cotidianas. Manifiesta que también se han afectado los centros médicos, la Policía, los hoteles y los sitios que regularmente atienden a los turistas

Martes 3

Los más de 2 mil obreros de la zona bananera de Barú quieren participar de la decisión que se tome sobre el futuro de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR). En enero, el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Olmedo Espino, aseguró que para este mes de marzo, tiene una respuesta sobre el futuro de COOSEMUPAR, debido a que existen más de tres empresas interesadas en continuar con la

producción bananera en esta zona. Luego de estas declaraciones, los obreros expresaron que el Gobierno no los ha tomado en cuenta para nada, pese a que la cooperativa les pertenece. Antía Beitía, trabajador de Finca Blanco, dice que el Gobierno tiene una decisión muy importante en sus manos y aún no les ha dicho nada al respecto. “Queremos que el Gobierno nos escriba en papel, las propuestas”, enfatizó.

Los residentes de los albergues ubicados en Coco Solo Norte, provincia de Colón, cierran la entrada de los tres puertos ubicados en esa área de la provincia, como medida de protesta por la falta de agua potable, la acumulación de basura y el retraso de dos años en la construcción de trescientas viviendas permanentes para ellos.

Iván Gutiérrez, uno de los dirigentes de la protesta que duró tres horas, manifestó que se sienten engañados porque tras dos años de que la ex ministra y candidata a la presidencia Balbina Herrera se comprometiera a construirles sus viviendas, todavía no se ha hecho nada y el periodo de gobierno está por terminar.

Juan Benavides, director nacional de Ingeniería y arquitectura del Ministerio de Vivienda, pidió un poco más de paciencia e indicó que los atrasos en la construcción de viviendas se deben a diversos factores, pero que en este mes de marzo las cosas se pondrán en orden.

Miércoles 4

En Santiago, provincia de Veraguas, los desechos hospitalarios se encuentran a orillas de la carretera nacional que conduce al distrito de San Francisco, vía que lleva al vertedero.

Catalina Vásquez, moradora de la comunidad de El Anón, señala que frecuentemente se ven vehículos tipo pick up y camiones que pasan para el vertedero, pero que no llevan mallas de protección y dejan caer los cartuchos con basura.

El Consejo Municipal de Santiago le rescindió el contrato a la empresa Waste Management, luego de que ésta, suspendiera el servicio, porque la población no estaba pagando los honorarios por la recolección de basura.

Ahora el municipio tiene camiones asignados para la recolección y también hay ciudadanos que en sus vehículos hacen esta labor.

Gilberto Tapia, morador de la comunidad de El Espino, señala que esta crisis de la basura les acarrea severas consecuencias por el exceso de moscas y malos olores.

Gonzalo Adames, representante de Santiago, aceptó que se está viviendo una crisis en cuanto a la recolección de basura, pero están buscando alternativas.

Jueves 5

Un grupo de residentes en la barriada La Luz de Santiago, en la provincia de Veraguas, se manifiesta en las calles para exigir que las autoridades construyan las calles de esta área residencial. Aleyda Rodríguez, una de las afectadas, explica que las autoridades del Gobierno se comprometieron a construir las calles, pero que la obra nunca se ha concretado. Indica que en 2008 se logró una partida de 160 mil dólares, pero que por los

altos costos de los trabajos no alcanzaba, por lo que se les informó que en 2009 se conseguiría otra partida para realizarlos. Dice que pese a estos compromisos, las respuestas no han llegado y ahora no se sabe si la partida que habían logrado se perdió. Gratiniano Troncoso, otro afectado, asegura que todo se quedó en promesas y las respuestas no llegan.

Viernes 6

Unas cinco personas afectadas por la inhalación de gases lacrimógenos, once personas detenidas y un agente policial herido es el saldo de un enfrentamiento entre los agentes del control de multitudes de la Policía Nacional y un grupo de manifestantes que cerró por espacio de una hora la vía Interamericana, a la altura del puente sobre el río San Pablo, en la provincia de Veraguas. Los manifestantes que son moradores de unas 10 comunidades están solicitando que se le rescinda la concesión a la empresa Cantera Terreros S.A., que funciona en el área y que de acuerdo a la queja destruye la carretera y está provocándole un severo daño al río por la extracción de piedra.

Isabel Pardo, manifestante afectada, explica que se utilizó fuerza excesiva y se les persiguió para detenerlos, incluso cuando ya habían salido de la vía.

Funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y del Ministerio de Comercio e Industrias llegaron al lugar para dialogar con los manifestantes, pero solo se logró que abrieran un paño de la vía internacional por 10 minutos, luego de esto volvieron a cerrar, en vista de ello las unidades antimotines actuaron.

Vanesa Vernaza, directora encargada de la Anam en Veraguas, revela que las solicitudes que realizó la empresa han sido cumplidas, como son las inspecciones y toma de muestras de agua.

Sábado 7

Una cadena humana, siembra de flores y discursos alusivos a la “no violencia contra la mujer”, fueron parte de las actividades de la Red contra la violencia de la mujer, capítulo de Colón.

Neila Nieto, presidenta de esta red, informa que el domingo habrá una misa en la iglesia San José, para que todas se unan y así lograr una cultura de paz.

Indica que la red lucha por lograr equidad e igualdad de género, y sobre todo cuando se toma a la mujer para vender productos que denigran la esencia de la mujer.

Lunes 9

Los residentes de la comunidad Loma Redonda, corregimiento de Bahía Honda, en la provincia de Los Santos, llevan días sin agua, pues se agotó el ojo de agua que abastece por gravedad a esa comunidad.

Venul Cortez, un residente de esa comunidad, afirma que desde hace 10 años, desde que llega el mes de enero solo reciben agua una hora al día. Afirma que dependen del poquito de agua que llega, mientras que el resto del día la comunidad permanece sin el líquido.

Martes 10

Un verdadero caos se da en Colón, cuando varios grupos organizados deciden cerrar en tres puntos diferentes del distrito desde horas de la madrugada.

La más significativa de estas protestas se dio a eso de las 4:00 a.m., cuando residentes de los albergues de Coco Solo Norte, en el corregimiento de Cristóbal, cierran la vía de acceso a los puertos de contenedores, en protesta por el atraso de la orden de proceder para la construcción de sus casas. Iván Gutiérrez, dirigente de los manifestantes, indica que se sienten engañados, toda vez que directivos del Ministerio de Vivienda les informaron que se daría la orden de proceder para la construcción de unas 300 casas en el corregimiento de Buena Vista, sin embargo, la promesa no se cumplió.

En tanto, el ministro Gabriel Diez se comunica vía telefónica con los manifestantes y les informa que ya se habían finalizado las licitaciones y que solo esperaban el refrendo por parte de la Contraloría para entregar la orden de proceder.

Por otro lado, la entrada a Colón fue cerrada por ex trabajadores de la antigua Autoridad Portuaria, grupos de desempleados y empleados del Seguro Social. También miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción caminaron hasta el Municipio de Colón.

Jueves 12

Por más de 36 horas permanece cerrada la vía de acceso hacia los puertos de contenedores ubicados en el área de Coco Solo Norte, corregimiento de Cristóbal, cuando moradores de los albergues ubicados en este sector deciden permanecer en vigilia, como protesta ante el atraso en la construcción de sus nuevas casas. Los manifestantes exigían la presencia de una autoridad que garantizara la construcción de sus viviendas.

Viernes 13

El presidente del Frente Campesino Contra los Embalses y la Minería, y de la Unión Campesina Nacional, Saturnino Rodríguez, responsabiliza a las autoridades del Gobierno por su presunta complicidad en la contaminación del ambiente en el área de la mina Petaquilla. Según Rodríguez, las denuncias de la comunidad de Coclecito sobre mortandad de peces confirman lo que hace mucho se ha denunciado. Los medios intentaron contactar con el director regional de la Anam, pero no fue posible.

Las dos hidroeléctricas que se encuentran en construcción en la parte de arriba del río Chiriquí Viejo, en la provincia de Chiriquí, están provocando serios daños a la planta potabilizadora de Puerto Armuelles, lo que ha afectado la producción de agua de más de 45 mil personas desde hace 15 días. Así lo da a conocer el director del Instituto de Acueductos

y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) de Chiriquí, Guillermo Ardila, quien añade que las hidroeléctricas son la de Bajo La Mina y Proyecto Caizán, y se reunirá con sus administradores para conversar, porque ya no pueden con los gastos de las reparaciones. Ardila señala que la construcción de estas hidroeléctricas deja toda clase de materiales en el río, y ese sedimento, roca y demás llega con fuerza a la toma y golpea los motores.

Domingo 15

Moradores de la barriada San Martín, en la provincia de Veraguas, protestan frente a un terreno donde se construye una antena de telefonía celular.

Los residentes del área dicen que no permitirán que esta antena se construya, porque a su juicio les traerá perjuicios.

Edenia Ureña, una residente del lugar, asegura que en ningún momento se les ha consultado nada sobre esa instalación. Agrega que sobre todo buscan la protección de sus hijos, que tendrán que convivir por muchos años con el funcionamiento de esta antena y las ondas dañinas que emite.

Eduard Ibarra, representante del lugar, indica que desconoce si se cuenta con los permisos para esta obra.

Por tercer día consecutivo los 34 custodios que laboran en la Cárcel Pública de David participan en una “huelga de brazos caídos” reclamando aumentos salariales pactados.

El director de la cárcel, Orlando Guerra, asegura que gracias a un mayor apoyo de la Policía Nacional, este penal funciona con normalidad. Guerra indica que en la cárcel de David, regularmente son las unidades de la Policía las encargadas de trasladar a los reos a sus diligencias judiciales y a los hospitales.

Lunes 16

Las playas de la costa pacífica de Veraguas se han convertido en zonas en donde inversionistas extranjeros y lugareños están extrayendo -sin control- arena con fines comerciales, y muchas veces con el aval de las autoridades municipales de los distritos de Soná y Mariato, en Veraguas.

Actualmente, aunque cada uno por su lado, residentes de las playas de Hicaco y Bahía Honda, al sur del distrito de Soná, y Torio, al sur de Mariato, han llamado la atención de las autoridades municipales, del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) sobre este hecho.

Omaira Gutiérrez, residente de playa Torio, denuncia que en este sector la empresa Torio Resort, de inversionistas europeos, está extrayendo arena con el objetivo de fabricar bloques y alcantarillas con fines comerciales y para utilizarlos en la construcción de un complejo turístico en esta zona.

Martes 17

El efectivo cumplimiento de la Resolución 045 de la Autoridad de Aeronáutica Civil, que regula la altura de las antenas de telefonía celular, solicitan varias familias del Sector 9 de Vista Hermosa de Penonomé, en la Provincia de Coclé. Según los residentes, aunque desde un principio no estuvieron de acuerdo con la colocación de la antena, la misma se construyó y saben que ya nada pueden hacer, no obstante necesitan que esta se acoja a lo señalado por Aeronáutica Civil que dispone una altura de 30 metros.

Miércoles 18

Los residentes de la barriada Santa Teresa, del corregimiento de El Roble de Aguadulce, en la provincia de Coclé, piden a la empresa Azucarera Nacional, Ingenio Santa Rosa (ANSA), que le dé mantenimiento y riego de agua a la vía que conduce hacia la comunidad. El camino también conduce a sus áreas de cultivo de caña y durante esta época del año se realiza la actividad de zafra. Jovany Sánchez, administrador de ANSA, explicó que la empresa ha tomado la responsabilidad de dar el mantenimiento a pesar de ser público, porque no recibe atención del Ministerio de Obras Públicas.

Jueves 19

Los productores de tomate industrial de la provincia de Los Santos denuncian que el pésimo estado de los caminos de producción incrementa sus costos de producción. Así lo dio a conocer Pedro Castillo, presidente de la Asociación de Productores de Tomate Industrial de Los Santos, quien destaca que aunque la cosecha se inició con buen tiempo, el deplorable estado de los caminos limita el traslado. “El invierno fue tan crudo, que los caminos quedaron con zanjas profundas”, dijo. Explicó además, que por esta razón los camioneros les cobran 25 centavos adicionales por cada quintal de tomate que les cargan. Castillo argumenta que los representantes de corregimiento se hacen de oídos sordos a estas reclamaciones.

Sábado 21

Alrededor de 200 personas, entre transportistas y residentes de las comunidades de San Martín, La Soledad y Canto del Llano en la provincia de Veraguas, cierran por espacio de una hora la vía Interamericana como protesta porque la empresa española BM3 abandonó el proyecto de construcción de sus calles y las vías quedaron en pésimo estado. El ingeniero Gustavo Rodríguez, encargado de operaciones de BM3, informa que la empresa no haría comentarios sobre el tema.

Se registra un enfrentamiento en la playa Sea Cliff, en Antón, provincia de Coclé; cuando residentes, pescadores de Las Guías de Occidente y varias familias dueñas de casas de playa proceden a tumbar una cerca de púas construida por Richard Crucet en un terreno de su propiedad, a menos de 10 metros del mar. La situación se tornó tensa cuando en medio de insultos, empujones, amenazas de muerte y disparos al aire, la comunidad se enfrentó a cuatro sujetos armados contratados por el señor Richard Crucet, para cuidar el área e

impedir el paso a la playa. José Sossa, abogado y dueño de una casa de playa, indica que la Constitución Nacional establece que las playas y riberas del mar son propiedad de la nación, en consecuencia, son de uso y dominio público, por lo que ningún particular se puede adueñar de ellas tal y como hizo Richard Crucet construyendo la cerca.

Domingo 22

En el Día Mundial de Agua, cientos de indígenas salen a las calles y cierran el tránsito vehicular en varios puntos de la Provincia de Bocas del Toro, manifestándose en contra de los proyectos hidroeléctricos, mineros y turísticos que afectan sus territorios y su forma de vida.

Martes 24

Mientras que la Defensoría del Pueblo cita a los involucrados en el caso Sea Cliff a una reunión urgente mañana miércoles, los ediles del Municipio de Antón analizan las medidas a tomar para resolver el conflicto por una servidumbre hacia la playa Sea Cliff, tomando en cuenta el grado de violencia que se ha generado. Los mismos solicitan al alcalde Roger Ríos analizar la posibilidad de enviar de vacaciones al ingeniero Heriberto Mendoza, quien otorgó el permiso de construcción de la cerca y que ahora, a pesar de una resolución del Concejo, se niega a declarar la nulidad del mismo.

Paul Bouche, de la oficina regional de la Defensoría del Pueblo, manifiesta su preocupación por los niveles de violencia alcanzados por el conflicto que lleva más de cinco años y que puede generar problemas más graves

Miércoles 25

Los miembros del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida amenazan con volver a implementar una serie de medidas de fuerza, si las autoridades no aclaran la situación en que se encuentra el caso de los afectados por el Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda (SIRA).

Gabriel Pascual, dirigente de esta agrupación, lamenta que no exista una cifra oficial de las personas que ya han fallecido y de las otras que padecen algún tipo de enfermedad por la ingesta de medicamentos contaminados.

Jueves 26

Los trabajadores de la empresa de productos lácteos Estrella Azul continúan en huelga, pues reclaman un aumento salarial del 25%.

Miguel Eduard, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresas Estrella Azul (SITEEA), reitera que ante la negativa de la empresa de presentar una propuesta seria se mantendrá paralizada la producción y distribución en Industria Lácteas S.A.

Por su parte, José Luis García De Paredes, gerente de la empresa, calificó de desmesuradas las aspiraciones del SITEEA, lo que dificulta llegar a un entendimiento de las partes.

Viernes 27

La huelga que llevan a cabo los trabajadores de la empresa Industrias Lácteas (Estrella Azul), por un mejor salario y mejoras en las condiciones de trabajo, está afectando, según los propios productores, la producción de leche de la región de Azuero.

Maximino Cedeño, asesor de los productores de leche en la provincia de Los Santos, explica que los pequeños productores son los que más sufren, sobre todo, aquellos que no tienen dónde guardar la leche en sistemas fríos.

Menciona que algunos productores han colocado la leche en otras compañías, pero aquellos que no tienen cupo van a ser duramente afectados.

Considera que sería un desastre, si se elimina la producción de leche nacional, porque no hay ningún país que pueda producir la leche como en Panamá.

Las autoridades locales de la Provincia de Bocas del Toro han iniciado una persecución de dirigentes indígenas Naso y Ngobe luego de las masivas protestas que se dieron el pasado domingo 22. A pesar de que un grupo de dirigentes se reunió de manera pacífica con la Gobernadora, Esther Mena de Chiu, el jueves en la tarde, la respuesta del gobierno no ha sido nada conciliadora, despachando decenas de policías a las comunidades indígenas y girando órdenes de conducción, con el objeto de indagar a los voceros de las comunidades.

Sábado 28

Un grupo de residentes del corregimiento de Las Lomas, en la provincia de Chiriquí, cierra la vía Panamericana por espacio de una hora, para denunciar que desde hace cuatro meses no tienen agua potable.

Luis Candanedo, uno de los manifestantes, indica que en el sector de Llano del Medio no llega el agua, ni siquiera en horas de la noche.

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales en Chiriquí, Guillermo Ardila, pide paciencia a los moradores y dice que están trabajando para garantizar el servicio.

Domingo 29

Unas 300 personas residentes en los sectores de La Caleta, Los Indios y El Rompío de la playa El Salado de Aguadulce, en la provincia de Coclé, denuncian que aún el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) no les resuelve el problema de escasez de agua que confrontan desde finales de enero.

Aníbal Rodríguez, presidente del Comité de la Playa El Salado, dijo que cuando les llega en el día, es muy poca y sucia, por lo que es peligroso consumirla.

Dijo que además de los habitantes del sector, los dueños de restaurantes localizados a orillas de la vía también se han visto afectados por esta situación.

Félix Berrocal, director del IDAAN de Coclé, no descartó que la obstrucción de la tubería por la construcción de la nueva carretera sea una de las causas del problema, pero hizo énfasis en que algunos toman el agua de forma ilegal.

Los 447 pequeños productores de leche regaron 120 litros de este producto en la vía Interamericana. A las 11:20 de la mañana, comenzaron a llegar los pequeños productores a las instalaciones de la Estrella Azul, en Chiriquí, ubicadas en el distrito de Boquerón, con sus garrafones, que por quinto día consecutivo los empleados no les recibieron.

La planta de Estrella Azul recibe mil garrafones diarios de leche y alrededor de 6 cisternas, lo que significa que ya hay una pérdida de 350 mil litros de leche.

Lunes 30

El Transmóvil que había sido prometido por el presidente Martín Torrijos, se debate entre la vida y la muerte, luego del fallo de la Corte Suprema emitido la semana pasada que suspende “provisionalmente” el proyecto. A casi un año desde que el presidente Martín Torrijos anunció el plan, lo que debió ser parte de la solución al sistema de transporte se ha convertido en un dolor de cabeza, pues se supone que buses nuevos estarían funcionando en la capital a inicios del presente año y gradualmente se reemplazaría la flota de buses diablos rojos, pero hasta el momento ni una ni la otra se han efectuado. La preocupación del dirigente transportista Dionel Broce y del resto de los transportistas, es que luego del decreto anunciado por el presidente Martín Torrijos que prohibió la importación de buses de segunda, la situación está a punto del caos. Broce solicita a las autoridades que revoquen la medida urgentemente, porque solo faltan 15 días para el inicio de clases y los buses no alcanzarán.

Un contingente de más de cien policías es enviado a la comunidad Naso de San San Durui en la Provincia de Bocas del Toro, para destruir casas en un área que está en litigio con la empresa Ganadera Bocas; y han llegado informes de que otro grupo de policías se ha dirigido a la comunidad de Bonyic para forzar la construcción del proyecto hidroeléctrico de las Empresas Publicas de Medellín (EEPPM). Estos sucesos se asemejan a episodios similares que se dieron en abril de 2005, junio de 2006, noviembre de 2007 y enero de 2008; y que han sido denunciados ante las autoridades competentes y ante organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

Martes 31

Unos 18 obreros del Sindicato Único de la Construcción y Similares (SUNTRACS) paralizan las reparaciones de 14 aulas del Instituto Profesional y Técnico de la provincia de Colón, debido a que aseguran que las condiciones de trabajo representan un peligro para su integridad física.

Arístides Mesa, vocero del SUNTRACS, manifiesta que sus agremiados no ganan lo establecido por la ley laboral, no existen equipos de seguridad (cascos, guantes, botas), incluso los apoyadores para colocar el primer alto de las aulas son frágiles.

Glosario De Siglas

ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente
ANSA	Azucarera Nacional S.A.
COOSEMUPAR	Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
EEPPM	Empresas Públicas de Medellín
MIDA	Ministerio de Desarrollo Agropecuario
MICI	Ministerio de Comercio e Industrias
SIRA	Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda
SITEEA	Sindicato de Trabajadores de la Empresas Estrella Azul
SUNTRACS	Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares.

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.

Dirigido por Marco A. Gandásegui, coordinado por Jennifer Delgado Urueta, con la asistencia de Marina Ábrego.

Fuente: Diario La Prensa, Diario Panamá América, Radio Mía, Diario la Estrella de Panamá, Diario El Siglo, Diario Crítica Libre, Kaosenlared.net, FRENADESO, ASOPROF, vagama.com.

Panamá Cronología del Conflicto Social Abril 2009

Miércoles 1

Miembros del Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida, que aglutina a pacientes y familiares de las víctimas del envenenamiento masivo con dietilene glycol –caso que data de 2006 y que se ha cobrado la vida de más de 100 personas–, se apostan a las puertas de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público para reclamar a las autoridades de esas instituciones celeridad en la resolución del caso y respeto a su condición. El expediente original del caso está en la Sala Penal desde hace nueve meses.

Jueves 2

Con antorchas encendidas, un grupo de bomberos voluntarios realiza una marcha para exigir al Gobierno mayores equipos de protección personal y vehículos rodantes. La medida de protesta se inicia las 6:00 p.m. en la Estación 1 Ricardo Arango, en Avenida Cuba, y se dirigirá hacia la Asamblea Nacional. El miércoles, el ministro de Gobierno y Justicia, Dilio Arcia, sostuvo una reunión con representantes de la comisión de Bomberos Voluntarios. Arcia manifestó que se está gestionando una partida de emergencia de por lo menos 3 millones de dólares para satisfacer las urgencias de los camisas rojas, como la compra de las piezas de repuestos para los carros bomba que están fuera de servicio. Los oficiales voluntarios anuncian además que se mantiene el paro general hasta tanto no cuenten con una nota de compromiso por parte del Gobierno.

Los productores de leche de las provincias centrales solicitan a las empresas lácteas un reajuste en el precio de la leche, porque, de lo contrario, se verán obligados a establecer miniplantas propias para procesar el producto. Durante una reunión de la Comisión Consultiva de Leche, realizada ayer en Chitré, el asesor de la Asociación de Productores de Leche de Provincias Centrales (APLEPC), Maximino Cedeño, explica que los productores aspiran a que en Panamá, igual que en otros países vecinos, la leche se pague por calidad con un precio tope, más los incentivos por las grasas. “En Colombia y otros países de América del Sur, los productores cobran hasta el 60% de la leche como materia prima”, dijo Cedeño.

La Defensoría del Pueblo denuncia la violación del debido proceso en el desalojo de alrededor de 17 familias en las comunidades naso de San San, San San Drui y San San Tigra, en la provincia de Bocas del Toro. En un informe, la Defensoría critica con dureza la acción de lanzamiento contra los indígenas naso ordenada por la corregidora de El Teribe, Aracelys Sánchez, y ejecutada el pasado martes 31 de marzo por unos 150 policías antimotines en la que, además, fueron tumbadas unas 30 casas y construcciones comunitarias. Tras investigar los hechos, la Defensoría considera que Sánchez no notificó a los afectados de la existencia de la orden, además de que “no tomó en consideración las consecuencias de tipo social que traía consigo llevar a cabo el lanzamiento”.

Viernes 3

El ministro de Educación, Salvador Rodríguez, se reúne con docentes que laboran en áreas de difícil acceso para escuchar los planteamientos de los educadores, y recibe, por parte de los docentes, un documento dirigido al presidente Martín Torrijos. El ministro Rodríguez explicó que hay situaciones que se tienen que evaluar y modificar, como el tema de las áreas delimitadas como de difícil acceso; pues hay regiones que no son de difícil acceso y se registran como tal, mientras que hay otras que no se reconocen y son realmente inaccesibles. Por su parte, Juvencio Rodríguez, coordinador de los educadores de difícil acceso, manifestó inconformidad, pues en realidad el ministro no dio respuestas claras a las peticiones. Comenta que se acordó crear una comisión de alto nivel, conformada por funcionarios del Ministerio de Educación y los docentes, para evaluar los problemas. Además, Henry Barrera, quien labora en Sambú, Darién, agregó que hay situaciones como el transporte que no han quedado claras.

Sábado 4

La falta de agua en la comunidad de la playa El Salado de Aguadulce, provincia de Coclé, se agrava desde el mes de enero. La queja llega hasta la Defensoría del Pueblo de Coclé, institución que realiza una inspección en la zona afectada. Durante el recorrido, los funcionarios de la institución pudieron percatarse de que en algunos lugares de La Caleta y Los Indios la presión del agua es baja. Sin embargo, en la comunidad de pescadores artesanales de El Rompío, esta no llega, por lo que sus residentes dependen del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para que les suministre agua. Aníbal Rodríguez, presidente del Comité de la playa El Salado, dijo que la comunidad se siente preocupada, ya que faltan pocos días para iniciar el año escolar y aún el problema de escasez de agua no se ha solucionado, a pesar de las múltiples peticiones que han hecho.

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), notificará a la empresa Petaquilla Gold sobre los resultados de los informes de fiscalización realizados por la entidad en los que se han encontrado irregularidades, así lo detalla la encargada de la entidad, Ligia Castro. Según Castro, la ANAM ha estado haciendo las fiscalizaciones a la empresa minera desde el año 2005 y en un primer proceso administrativo se les condenó a pagar una multa de 1.8 millón de dólares, pero a través de un recurso en la Corte se paralizó la gestión de cobro. En un reciente comunicado, la empresa Petaquilla Gold señala que no es responsable de la supuesta contaminación de los ríos Molejón y San Juan de Turbe.

Domingo 5

El Banquillo y la quebrada El Cuay, en Coclé, lugares donde murieron cuatro jóvenes hace 50 años en medio del levantamiento armado del Cerro Tute, son visitados por unas 200 personas. Campesinos, estudiantes, obreros, compañeros y combatientes de esa época llegan hasta estas apartadas comunidades, donde en 1959 un grupo de jóvenes se adentró para luchar por la justicia social. Víctor Jordán, sociólogo veragüense, explica que este legado se mantiene en la actualidad porque “se buscaba mejorar la vida del común de los panameños, pidiendo ese cambio que tanta falta hacía”. Asegura que la libertad de la que se goza en el país y la soberanía “que tenemos se debe a movimientos como estos, que representaban una guía para todo el país”. Javier Jaramillo, dirigente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), manifestó que el movimiento de estos jóvenes fue el comienzo de las luchas sociales, mismas que no han culminado y que tienen que continuar. A su vez, Saturnino Rodríguez, del movimiento campesino, sostuvo que las desigualdades que se vivían en esa época están vigentes en la actualidad. Expresa que ese ideal de mejores días para el país que mantenían los jóvenes de ese momento, igual está ahora, pensando en igualdad y oportunidades para todos. En medio de esta conmemoración se realizaron actos protocolares en los lugares donde murieron los jóvenes y se llevaron ofrendas florales.

Lunes 6

La situación en el área de San San sigue siendo de tensión después de la violenta intervención policial en la que al menos ocho menores de edad tuvieron que ser trasladados

a un centro médico, afectados por gases lacrimógenos. El desalojo responde a un conflicto sobre estas tierras que reclama Ganadera Bocas, empresa de Mario Guardia, implicada desde hace años en choques violentos con comunidades indígenas de Bocas del Toro. Eliseo Vargas, líder de la Fundación Naso, describe la situación como crítica y considera que este conflicto no se habría dado si el Gobierno hubiera accedido al reclamo de demarcación de la comarca que los nasos reclaman. En el área de San San vive, además, el rey Valentín Santana, máxima autoridad naso no reconocida por el Gobierno central. Allí se acababa de concluir la construcción del Centro Cultural Naso, que fue completamente destruido en la acción policial. Según la Defensoría, al menos 150 adultos y 65 menores de edad permanecen a la intemperie, acampados cerca del río. Los líderes naso han anunciado que no van a dejar el área y que van a defender su derecho. Uno de los líderes comunitarios, que pidió reserva del nombre, manifiesta que “nosotros hemos aprendido a defendernos y también sabemos que las personas valemos más que los búfalos. Ganadera quiere nuestra comunidad para hacer potreros, nosotros para desarrollarnos como pueblo”. La Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), organización que acompaña a los nasos, considera que además de haberse violado el debido proceso, en la acción se han violado derechos humanos fundamentales y se dio un “uso excesivo de la fuerza”. Tanto la comunidad como ACD han interpuesto acciones legales y han activado mecanismos internacionales de protección para evitar nuevas agresiones contra la población civil.

Martes 7

El pleno de la Asamblea Nacional inyecta velocidad y aprueba en segundo debate y por urgencia notoria, el proyecto de ley N°500 por el cual se autoriza un aumento de 25 dólares mensuales, con cargo al Tesoro Nacional, a 164 mil pensionados y jubilados del país, cuyas pensiones o jubilaciones no sobrepasen la suma de 700 dólares y estén vigentes en la segunda quincena de marzo de 2009. El texto del proyecto de ley contempla que el aumento se concederá en dos etapas. Quince dólares a partir del mes de abril de 2009 y los 10 dólares restantes, en enero de 2010. Un informe de la Comisión de Trabajo de la Asamblea, detectó que más del 60% de la población jubilada y pensionada, no cobra más de 500 dólares mensuales. Rafael Mezquita, ministro de la Presidencia, explica que los fondos requeridos para este ajuste --el cual se eleva a más de 22 millones de dólares en 2009-- se obtuvieron de ahorros derivados del presupuesto de funcionamiento del gobierno nacional.

El paro de 24 horas realizado por el servicio de transporte en unas 13 rutas en la capital panameña finaliza luego que los líderes transportistas consideraran que la acción fue efectiva porque obligó a las autoridades a escuchar sus peticiones. El paro se convocó como una medida de presión para exigir a las autoridades que definan el estatus del proyecto Transmóvil, impulsado por el Gobierno y que elimina el actual sistema de transporte colectivo, pero que fue suspendido por un fallo judicial. El dirigente transportista, Dionel Broce, anuncia la conclusión del paro tras una reunión de más de tres horas con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) de Panamá, a cuyo director, Heraclio Batista, entregaron un pliego de peticiones. Broce, señaló igualmente, que los transportistas decidieron no paralizar labores el lunes próximo, como tenían previsto, lo que coincidía con el inicio de clases en las escuelas públicas. El líder transportista indicó que exigieron a la ATTT la suspensión "definitiva" del proyecto Transmóvil, entre otras peticiones. También

dijo respaldar la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspender provisionalmente el pago de las indemnizaciones de 25 mil dólares a los dueños de los viejos autobuses por la creación de nuevo sistema.

Miércoles 8

Eladio Fernández, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, y quien encabezó las protestas en las que solicitaban el aumento a los jubilados y pensionados, llega al pleno de la Asamblea para agradecer la solidaridad de los diputados al aprobar la iniciativa del aumento, pero a su llegada a la 1:00 p.m., ya los legisladores se habían retirado a gozar del largo asueto de Semana Santa.

La comunidad Naso Teribe de la provincia de Bocas del Toro envía un documento a las Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que 14 familias fueron desalojadas violentamente de unos terrenos. El informe presenta una denuncia contra la corregidora de Teribe, Aracellys Sánchez, por el agravante de extra limitación de funciones, abuso de autoridad, hostigamiento y represión en contra de los moradores. Según el informe, los moradores de la comunidad de San San Druy en este momento carecen de alimentos, agua, ropa y atención médica, ya que todos los moradores fueron severamente afectados por el humo de las bombas lacrimógenas.

Jueves 9

Indígenas nasos de la comunidad San San y San San Druy, en el distrito de Changuinola de Bocas del Toro, llegan a la ciudad capital para denunciar lo que consideran un “atropello” por parte de la empresa Ganadera Bocas y de las autoridades gubernamentales. Al mismo tiempo que los nasos hablan en conferencia de prensa, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, y el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, visitan la zona. Dioselina Tobar y Tony Vargas, moradores de San San y San San Druy respectivamente, describieron la “difícil” situación que enfrentan, luego que el pasado 31 de marzo sus casas fueron derrumbadas y, en algunos casos, enterradas. Las viviendas fueron derrumbadas con un tractor que, además, excavaba para enterrar los materiales, denunciaron Tobar y Vargas. Algunas familias han colocado toldas para pasar la noche, y otras simplemente deben dormir en el piso sin que nada las proteja, dijo Tobar. Mario Guardia, propietario de Ganadera Bocas, dijo que no iba a emitir opinión y posteriormente presentará la documentación que lo acredita como dueño de esas tierras. En un comunicado pagado en un medio impreso, la Asociación de Ganaderos de Panamá, y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá respaldan las acciones de Ganadera Bocas, y califican a los nasos de invasores de tierras privadas. Según el comunicado, la empresa es dueña de las tierras en disputa, ya que forman parte de una finca que fue inscrita por la empresa en 1963. Eliseo Vargas, líder de la Fundación Naso, dijo que los indígenas no pueden ser invasores de sus propias tierras, ya que tienen más de 38 años de estar reclamando esas propiedades.

El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) presenta una denuncia ante la fiscalía delegada de Chiriquí, por supuesto delito ecológico contra la empresa Cilsa, que desarrolla los proyectos hidroeléctricos Bajo de Mina y

Baitum en la zona occidental de la provincia. Según Jaime Caballero, de FRENADESO, este proyecto está contaminando al río Chiriquí Viejo, el mismo que abastece a la potabilizadora de Paso Canoa, en el distrito del Barú.

Sábado 11

Debido al “agotamiento” del caudal del río Estivaná en un 77%, los balnearios Los Leales, El Guásimo y El Charco Redondo, en la provincia de Los Santos desaparecieron. Basilio Pérez, miembro del grupo ecológico El Colmón de Macaracas, realiza la medición del flujo hídrico de la cuenca del río, registrando tan solo 20 centímetros de profundidad y cuatro metros de ancho, de los 30 que se registraban en el Estivaná. El ambientalista señala que es preocupante esta situación que registra el río, donde ya tres balnearios populares han desaparecido. A los sitios de recreación antes mencionados y ya desaparecidos, se suma El charco redondo, ubicado en el cauce en mención a orillas del camino hacia la comunidad de San Antonio, en el corregimiento de Llano de Piedra. En este último balneario el río se desvió dejando a un lado El charco redondo con agua estancada y el remolino que era la atracción de los bañistas desapareció. Este lugar, al igual que los dos primeros, fue considerado el mejor sitio para bañarse, pero en la actualidad no goza de las profundas aguas que antes tenía. Pérez atribuye el crítico agotamiento del río Estivaná a la tala y quema a orillas de las riberas y en la zona donde nace el río.

Domingo 12

Docentes del Colegio José Daniel Crespo de Chitré en la provincia de Herrera, advierten que las actuales condiciones físicas de este plantel y la falta de sillas no permitirán el inicio del año escolar. En un comunicado, los profesores plantean su preocupación por la falta de condiciones para los estudiantes, el desmantelamiento de nueve aulas de clases y de algunos baños. El dirigente magisterial Orlando Pittí, dijo que el Ministerio de Educación les comunicó que no será hasta el 16 de abril cuando llegarán al colegio unas 778 sillas.

Lunes 13

Paul Bouche, jefe de la oficina regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé, denuncia las pésimas condiciones en que está la escuela primaria de la comunidad de El Guayabo, corregimiento de Toabré. Luego de una inspección, se constató que la escuela carece de las condiciones necesarias para poder albergar a la población estudiantil, destacó Bouche. Delfina Bernal, directora regional de Educación, dijo que no tiene informes de daños en esa escuela, pero que harían una inspección.

Martes 14

Las más de 50 personas que habitan cerca de la quebrada La Negra, ubicada en la comunidad de Gariché, en la provincia de Chiriquí, cierran por una hora los dos paños de la vía Interamericana, en protesta por el pésimo estado en que se encuentra el único puente de acceso hacia su comunidad. El puente sobre la quebrada La Negra fue arrasado por este afluente en las pasadas inundaciones del mes de octubre, sin que hasta el momento el Ministerio de Obras Públicas (MOP) lo haya reconstruido, tal como lo prometió. Javier

Miranda, residente en el lugar, dijo que en varias ocasiones han acudido al MOP para que repare la infraestructura, pero que ha sido imposible, “todo lo que hemos dicho ha caído en oídos sordos, por eso es que ahora hemos cerrado la vía, para que hagan caso”, dice. Expresa que la misma comunidad de Gariché procedió a colocar unos tablones, para poder pasar de un lado a otro, pero que ahora que va a llegar el invierno, temen que la quebrada arrase con los tablones y alguna persona sufra un percance. Al lugar se presentó el subdirector del MOP, José Rincón, quien se compromete a arreglar el puente, por tanto, a partir de mañana va a llegar personal para iniciar los trabajos.

Más de 130 familias indígenas invaden terrenos privados en la comunidad de Quebrada de Oro en Las Palmas de Veraguas. Gumercindo Pimentel, invasor, explica que las tierras eran de sus antepasados, por lo que la ley no puede desalojarlos. Rolando Morales, propietario de la finca, comenta que le han invadido cinco hectáreas a pesar de que tiene título de propiedad, pero que lo peor es que ya han sido devastadas. Ovidio Barría, alcalde de Las Palmas, indica que la orden de lanzamiento está por ejecutarse.

Miércoles 15

El Canal de Panamá aplicará el 1 de mayo próximo un nuevo incremento en la tarifa de los barcos que transitan por la vía acuática, para financiar los costos de su proyecto de ensanche, informa una fuente de la empresa marítima. El vicepresidente de Investigación y Análisis de Mercado de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Rodolfo Sabonge, dice que el aumento de peajes se implementará en dos tramos, en mayo y octubre, y es la última parte de una estructura de precios establecida en 2006 y vigente desde 2007. Sabonge aclara que, aunque algunas navieras han solicitado bajar los costos de tránsito por el Canal, una reducción de precios por parte de la ACP "no es lo que va a atraer más carga por esa ruta o a incentivar a un naviero para que utilice más el Canal".

Ezequiel Miranda, presidente de la Asociación para la Conservación de la Biósfera, señala que la deforestación, el uso inadecuado de los químicos, la excesiva concentración de minerales en el subsuelo, son factores contaminantes del ambiente que están acabando con las fuentes naturales de agua en Chiriquí. Miranda, dijo que es necesario que la población chiricana contribuya con la protección de las cuencas hidrográficas y la reforestación para preservar este recurso. Añade que el agua es un elemento esencial en la salud humana y su calidad de vida, por lo que es importante el brindar de este líquido y dotar de acueductos rurales a las poblaciones más necesitadas, pero con un adecuado manejo de estos sistemas.

Jueves 16

El Gobierno de Panamá aprueba 670 mil dólares para cubrir los sueldos de 2 mil 500 obreros de una cooperativa bananera subsidiada por el Estado, mientras sigue paralizada la producción de la fruta en el Pacífico panameño. El ministro de Desarrollo Agropecuario, Olmedo Espino, manifiesta que dicha partida extraordinaria cubrirá los costos de planilla de abril, apoyo que asciende a más de 2 millones de dólares en lo que va de 2009. "Todos los meses hay que hacer un ejercicio similar a éste para cubrir los costos de planilla, aunque en

esta ocasión aumentó debido a que también se cubrirá el primer pago de la partida del decimotercer mes" de salario de que gozan los panameños, añade. Además señala que se realizan los esfuerzos para reactivar la actividad bananera en Puerto Armuelles, distrito de Barú, provincia de Chiriquí, aunque la situación es muy difícil y actualmente sólo se realizan trabajos de mantenimiento de las infraestructuras. La Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles, dedicada al cultivo de la fruta desde 2003, entró en problemas porque "el costo de producción de la caja de banano era superior al precio que pagaban por ella, lo que significa que mientras más se producía, más se perdía", agrega. El Gobierno analizó en enero pasado propuestas de varias empresas para reactivar la producción bananera paralizada por los problemas financieros de la cooperativa y las plagas, pero al final no se llegó a acuerdos con ninguna de ellas.

Viernes 17

Vecinos de La Villa de Los Santos cierran el puente del río La Villa para exigir a las autoridades que solucionen de una vez la mala disposición de las aguas servidas. Al lugar de la protesta llegó un grupo de policías que se mantuvo en el lugar. Desde el pasado martes en horas de la tarde, los afectados iniciaron la jornada de protestas bloqueando el paso vehicular a la altura del puente sobre el río La Villa. Y ayer bajo la amenaza de que no permitirían el desarrollo de la Feria Internacional de Azuero, las autoridades provinciales del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Ministerio de Salud, Fondo de Inversión Social, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Obras Públicas, el alcalde de Los Santos Camilo Sáez, y el gobernador de Los Santos Mario Medina, accedieron a escuchar el clamor del pueblo de Los Santos. Justo Bernal, vocero de los afectados, dice que a pesar de las múltiples denuncias, el viejo alcantarillado sigue botando aguas negras por los drenajes pluviales. Javier Castillo, director regional del IDAAN en Herrera, dijo que la institución ha estado limpiando las aguas estancadas, dispersas por el pueblo.

La Policía Nacional vuelve a derrumbar las casas de los indígenas nasos de la comunidad San San en la provincia de Bocas del Toro, denuncia Francisco Medina, residente de San San. Medina manifiesta que alrededor de las 3:30 de la tarde las maquinarias, escoltadas por cinco policías, entraron a la comunidad y derrumbaron las viviendas. Esto se da mientras un grupo de ellos se encontraban en la ciudad realizando una serie de protestas. Las manifestaciones la iniciaron en Casa de las Naciones Unidas, en Clayton, en donde fueron atendidos por Jorge Araya, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Luego se trasladaron a la Plaza Catedral, donde tienen un campamento. Eliseo Vargas, de la Fundación Naso, señala que ayer fueron atendidos por un asesor de la Presidencia, cuyo nombre no recordaba. Dice que se pactó una reunión para el próximo lunes con el Ejecutivo y dependiendo de la respuesta que les dé el Gobierno se levantarán o se mantendrán en el lugar.

Sábado 18

Los docentes del Instituto Bolívar se mantienen en paro militante, a pesar del desarrollo de una reunión con la directora regional de Educación de Panamá Centro, Petra Serracín, y una representante de Asesoría Legal del MEDUCA. Ébulo Bárcenas, vocero de los 48 educadores, explica que ellos se retiraron del encuentro ante la falta de respuestas e insistencia por parte de los representantes del Ministerio de Educación que los docentes

deben acogerse al plan de reasignación o trasladados a otros colegios por la baja matrícula que se registra en el Instituto Bolívar con una matrícula de 411 estudiantes.

Lunes 20

Como caótico e irregular, califica la dirigencia de la Asociación de Profesores (ASOPROF) capítulo de Chiriquí, el inicio del año escolar en la provincia, al cumplirse la primera semana de clases. Luego de una evaluación preliminar de la situación, la dirigente magisterial Dalia Morales, manifiesta que la falta de mobiliario en algunos centros educativos y el retraso en la entrega de los trabajos de remodelación en varios planteles han ocasionado que el proceso enseñanza aprendizaje no se lleve de la mejor manera. Indica que los miembros de esta organización, realizan un balance general para conocer a ciencia cierta la condición de los planteles de la provincia de Chiriquí. Morales señala, que se han recabado informes de que en el área comarcal algunos educadores que laboran en la escuela de Boca Remedios; no tienen un lugar donde hospedarse por lo que tienen que alojarse en las mismas aulas de clases. Las inclemencias del tiempo que se registraron durante el pasado mes de febrero afectó la infraestructura donde se alojaban los maestros.

Martes 21

La cerca construida por Richard Crucet en la playa de Sea Cliff en Las Guías Occidente de Río Hato, en la provincia de Coclé, se ubica dentro de áreas inadjudicables y de uso público, ese es el tenor del informe emitido por la Dirección Nacional de Catastro, luego de la medición solicitada por la Defensoría del Pueblo en el litigio que mantienen residentes del sector con el citado empresario. El informe, dirigido a Paul Bouche, encargado de la oficina regional de la Defensoría del Pueblo y firmado por el director de Catastro Mariano Quintero, indica que luego de demarcada la línea de alta marea y realizarse el análisis del caso, se determina que la cerca está en áreas de uso público y propiedad del Estado. También se indica que la línea de alta marea de 18.6 pies sobrepasa con creces la cerca, por lo tanto la ribera de mar y la servidumbre costanera se ubican mucho más allá de los estacones de la cerca de púas construida por Crucet y por lo cual se generó un enfrentamiento armado en días pasados. Se conoció que el Municipio de Antón evalúa el informe en conjunto con su departamento de asesoría legal para ver cómo se actúa en este caso.

Los miembros de las juntas de selección de personal docente de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas responsabilizan al ministro de Educación, Salvador Rodríguez, por el atraso en el nombramiento de unos 2 mil docentes en las escuelas públicas del país. En la denuncia pública, los representantes de dos de las cinco comisiones de selección denuncian que a través del proceso de confección de ternas para llenar las vacantes existentes dentro del sistema educativo, el titular del MEDUCA pretende “politizar los nombramientos” del personal docente de los colegios públicos. Mientras, una fuente de la Dirección Regional del MEDUCA en Veraguas, informó que en el nivel central del ministerio se trabaja en la confección de las ternas para nombrar cuanto antes a los educadores que hacen falta, aunque no se hicieron comentarios sobre la denuncia de politización del proceso.

Miércoles 22

Valentín Domínguez, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo de la provincia de Los Santos, denuncia que el Gobierno les adeuda más de 2 millones de dólares en concepto de la compra del grano. Domínguez explica que hasta el 15 de abril se le vendió al Instituto de Mercadeo Agropecuario 130 mil 188 quintales con 58 libras, valorados en 2 millones 213 mil 205 dólares con 86 centavos y no se les ha pagado. Manifiesta que si el Gobierno no les da una respuesta positiva antes del domingo 3 de mayo van a cerrar la carretera de acceso a los silos de La Honda, en dicha provincia, pues los dejan sin otra salida. El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Gonzalo Cambefort, dice que están en proceso de recibir un préstamo para cumplir con este pago.

Con la participación de mas de 300 personas delegadas, provenientes de todos los países mesoamericanos, así como de Colombia, España y Estados Unidos, dio inicio este 22 de abril, en el marco del Día Mundial de la Tierra, el V Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR) en la comunidad de Boquete, provincia de Chiriquí. Este evento, donde participan delegados y delegadas pertenecientes a movimientos campesinos, indígenas, ambientalistas, de mujeres, de jóvenes y de otras organizaciones populares, tiene como fin dar continuidad al esfuerzo de articulación de iniciativas y resistencias que, frente al embate de los grandes capitales interesados en el control lucrativo del agua y en su conversión en mercancía, iniciaron desde el año 1997 diversos movimientos afectados por el avance incontrolado de los proyectos hidroeléctricos en toda la región. Estos proyectos desplazan de sus territorios a decenas de comunidades indígenas y campesinas y tienen un enorme impacto ambiental cuyos daños son negados, ridiculizados y/o ocultados por empresarios y gobiernos.

Jueves 23

Un caos, ha generado en el Municipio de Antón, el litigio por la servidumbre en la playa de Sea Cliff. Mientras el alcalde titular, Roger Ríos, sigue inhabilitado por el gobernador, el vicealcalde Héctor Tuñón, le ordena al jefe de Ingeniería abstenerse de actuar en contra de Richard Crucet. “Todo esto sucede por la falta de organización, sistematización y asesoría legal dentro de este municipio, en el que cada funcionario hace lo que le da la gana”, señala Leyla Vergara, residente de Las Guías Occidente. Dice que hay un informe de Catastro que manifiesta que la cerca es ilegal y que la Alcaldía o la corregiduría deben actuar. Adrián Gamboa, presidente del Concejo, señala que ya están cansados de que el vicealcalde con ayuda de otros funcionarios intente pasar por encima de ellos. Los representantes solicitaron al alcalde Ríos destituir al vicealcalde de las funciones que tiene dentro del Municipio, mientras estudian la posibilidad de solicitar a la Gobernación de Coclé revocar el mandato de Tuñón, escogido en elección popular. El alcalde de Antón, señala que se constató que el vicealcalde sobrepasó sus funciones, por lo que será destituido. Ingeniería y la Alcaldía estudian el informe de Catastro.

Daños en las tuberías de la potabilizadora de Los Algarrobos, que abastece al distrito de David, provoca la falta de agua, por lo que se suspendieron las clases en escuelas y colegios del distrito de David. El director provincial del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales de Chiriquí, Guillermo Ardila, explica que desde el pasado miércoles tienen

problemas y que hoy van a arreglar los daños en las tuberías. La directora regional de Educación, Elizabeth Juárez, dice que hoy tampoco habrá clases.

Viernes 24

Los residentes de la comunidad de Las Lajas y estudiantes de Premedia cierran la vía Interamericana, a la altura del cruce de San Félix, en la provincia de Chiriquí, porque no tienen agua y viven como gorgojos. Alegan que la capacidad de suministro de agua de la planta potabilizadora no alcanza para abastecer a esta comunidad, y los estudiantes temen enfrentarse a una epidemia por la falta del vital líquido en el plantel educativo. Luis Aparicio, miembro del Club de Padres de Familia, explica que en el colegio están sin agua desde hace mucho tiempo y los profesores se han visto en la necesidad de recortar el horario de clases para evitar riesgos en la población estudiantil. También, emplazaron al director regional del IDAAN, Guillermo Ardilas, tras asegurar que les había prometido exonerar el cobro de seis meses de agua por la escasez existente y nunca se cumplió. Además, no se colocó el tanque de agua que se adquirió para que la comunidad del Centro de Las Lajas cuente con el vital líquido. Al lugar no llegó ninguna autoridad y amenazaron con volver a cerrar la vía de forma indefinida.

Trabajadores de la Dirección Municipal De Aseo Urbano y Domiciliario (DIMAUD) bloquean con sus camiones, por espacio de 30 minutos, la vía frente al Ministerio de Economía y Finanzas, en reclamo del pago de un bono de B/40.00. La DIMAUD sufre una severa crisis debido al no pago de una deuda de \$28 millones que mantiene el Gobierno central con el Municipio de Panamá por los servicios de recolección de basura y de desechos hospitalarios. Los trabajadores solicitan la intervención del presidente Martín Torrijos para que el Ministerio de Economía y Finanzas haga efectivo el pago.

Sábado 25

Los delgados de los grupos de Chile, Argentina, Colombia, México, El Salvador y Costa Rica, presentes en el “V Foro Mesoamericano por los Ríos, el Agua y la Vida”, quedan sorprendidos luego de un recorrido por Chiriquí donde visualizaron seis proyectos hidroeléctricos en vía de construcción o ya instalados, lo que califican de exagerado para una provincia tan pequeña. Osvaldo Jordán, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, indica que es necesario que los actuales gobernantes al igual que los que aspiran a ser presidente de Panamá se comprometan desde ya a suspender lo que calificó como una fiebre por implementar hidroeléctricas, lo cual trae consigo la expulsión de los integrantes de las comunidades en que se desarrollan, al igual que deterioran la calidad de las aguas de los ríos.

El rey nasso teribe, Valentín Santana, exige que se respete al pueblo nasso, expulsado hace unas semanas de lo que ellos consideran sus tierras en Bocas del Toro. El pasado 30 de marzo, un grupo de indígenas nassos, fue desalojado de unas tierras en Bocas del Toro, sobre las cuales Ganadera Bocas asegura tener derechos legales. Santana expresa que va a defender a su gente, así como a sus tierras, porque una empresa grande ha desmantelado y “echado de sus terrenos” a toda la comunidad de San San Drui, dejándola a la intemperie.

Lamenta que ninguna autoridad se ha presentado, ni el presidente de la República, Martín Torrijos, los ha tomado en cuenta para conversar sobre este hecho.

Domingo 26

Residentes de Santa Teresa, del corregimiento de El Roble de Aguadulce, denuncian que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Coclé no ha entregado los materiales para la construcción de aceras en la barriada. Samuel Marcial, vocero del lugar, dice que si no cumplen van a cerrar la calle, pues el camino de acceso de la barriada también es la vía que conduce a las áreas de producción de caña y camaróneras, por lo que a diario transitan vehículos. En una reunión del Consejo Municipal de Aguadulce, celebrada en agosto de 2008, el Ministerio se comprometió en hacer entrega de piedra, arena y carriolas para la obra y nunca han llegado. Luis De León, administrador del MOP, explica que tienen los materiales, pero hace falta una retroexcavadora para subirlos a los camiones que los trasladarían hacia ese lugar.

Lunes 27

Los dirigentes de las distintas etnias indígenas del país se reúnen para analizar el caso de los nasos que mantienen un conflicto de tierras en Bocas del Toro y el futuro de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (CONAPIP). Eliseo Vargas, dirigente de los nasos, dijo que la idea del encuentro, realizado en la comunidad de Cativá, en la cuenca del río Chagres, es allanar el camino para una posible reestructuración de CONAPIP o crear otro organismo. Según Vargas, la medida surge porque CONAPIP no está atendiendo los intereses de los indígenas, sino los del Gobierno.

Desde el pasado miércoles 15 de abril, unos 30 indígenas nasos mantienen un campamento en la plaza Catedral en protesta por los desalojos y destrucción de sus casas en San San y San San Druy de Bocas del Toro. Los indígenas que protestan buscan un entendimiento con el Gobierno sobre el conflicto. Representantes de los nasos aseguran que dependiendo de los resultados, los indígenas decidirán si levantan el campamento en Catedral.

Martes 28

Iván García, pediatra en La Palma, Darién, anuncia que a partir de hoy los médicos iniciarán un paro porque tienen cuatro meses que no cobran sus turnos. “A las 7:00 p.m. iniciaremos el paro y solo se atenderán las urgencias, porque ya estamos cansados de que se nos den excusas y el pago por nuestros turnos extra no llegue”. Por su parte, Jorge del Rosario, director de Salud, dice que la mora se debe a un problema con los pagos en la Contraloría.

Docentes del colegio Salomón Ponce Aguilera de Antón en Coclé, declaran un paro militante de 24 horas, hasta tanto el Ministerio de Educación (MEDUCA) de respuesta a las denuncias presentadas por supuestas faltas administrativas de la subdirectora de este plantel. Yeisi Navarro, secretaria general de la Asociación de Profesores capítulo del Salomón Ponce, manifiesta que los problemas administrativos con la subdirectora Yaneth Cáceres tienen mucho tiempo y han agotado todas las vías; con el director del plantel, la

dirección regional y el Viceministerio de Educación y hasta la fecha no ha habido respuestas. En una resolución firmada por más de la mitad de los docentes de este plantel, se declara el paro de 24 horas prorrogable, además se exige la destitución de la subdirectora y se solicita la presencia de altos funcionarios del MEDUCA para resolver el conflicto.

Miércoles 29

Desde las 6:30 a.m. residentes de las comunidades de Santa Fe, Puerto Lara, Tamarindo, Zapallal, Punta Rosero, Quebrada Honda, La Relojera, Quebrada Tanque, San Miguel-Chucunaque, entre otras, en la provincia de Darién, cierran por más de siete horas la carretera Panamericana en la entrada de Santa Fe, en protesta por falta de agua, esto trajo como consecuencia que la provincia quedara incomunicada con el resto del país. La protesta se suspendió en horas de la tarde cuando representantes del Gobierno conversaron con los manifestantes y se comprometieron a agilizar el término de los mismos. Rosa Santo, residente en el corregimiento de Santa Fe, vocera del grupo integrado por alrededor de mil personas, dice que tienen meses de no contar con agua. Agrega que las promesas que hizo el Gobierno el año pasado, precisamente durante una acción similar, todavía no se han cumplido. Los manifestantes hicieron especial énfasis en el proyecto de construcción de la potabilizadora para las comunidades establecidas en las márgenes de la carretera Panamericana, al cual le han dado tres prórrogas y aún está atrasado. Además cuestionaron la falta de mantenimiento a las escuelas “y no vemos que dan respuesta sobre estas empresas irresponsables”.

Carlos Barahora, ginecólogo de Darién, dice que el paro de médicos queda suspendido, pues les anunciaron que les pagaran un mes y el jueves les cancelarán febrero y marzo, por lo que se acordó dar un voto de confianza y suspender la medida. Dice que con estas acciones se busca que se hagan correctivos, porque la norma es acumular hasta seis meses de turnos y cuando los médicos presionan es cuando les pagan uno o dos meses, a diferencia de las otras provincias.

El paro declarado por los docentes del colegio Salomón Ponce de Antón en demanda de la destitución de la subdirectora del plantel, se extiende por otras 48 horas, debido al fracaso de las conversaciones con los representantes del Ministerio de Educación (MEDUCA). Yeimi Navarro, secretaria general de la Asociación de Profesores del Salomón Ponce Aguilera de Antón, manifiesta que han visto que el MEDUCA no tiene intención de dialogar con ellos, por lo que se mantienen en su decisión de paro. Aclara que no se trata de un grupo reducido de docentes como han querido hacer ver las autoridades del MEDUCA, pues son más de la mitad de los docentes del plantel los que no están dando clases. Indica que ante la negativa de la Dirección Regional de Educación de conversar con ellos, están viendo la posibilidad de lograr una reunión con el ministro de Educación para que escuche las quejas, que han expuesto a las autoridades educativas desde hace seis meses.

Jueves 30

La Dirección Regional de Educación de Coclé decide separar del cargo a la subdirectora del colegio Salomón Ponce Aguilera, Yaneth Cáceres, a quien se le sigue un proceso de investigación por varias denuncias de irregularidades administrativas presentadas por los

docentes de este plantel. Los docentes del Salomón Ponce, que se mantienen en paro desde el pasado lunes, se reunieron en el colegio con el secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, Andrés Rodríguez, y los abogados del gremio para analizar la situación. Posteriormente, se dirigieron a la dirección regional, ubicada en Penonomé, en donde realizaron un mitin exigiendo la salida de la subdirectora del plantel a quien acusan de malos manejos de documentos, intimidaciones, amenazas y actos de exorcismo con los estudiantes. Andrés Rodríguez, manifiesta que el paro de los docentes continuará hasta tanto el Ministerio de Educación notifique formalmente a la subdirectora de su separación del cargo y la misma salga del plantel. Instó a los padres de familia a no enviar a sus hijos al colegio.

Transportistas de carga de Costa Rica amenazan con cerrar las fronteras de su país, si en Panamá la dirección general de Aduanas no baja los precios por el cobro de estacionamientos, que según ellos atenta con los tratados centroamericanos, informa Juan Carlos Segura, vocero del grupo. Segura indica que a ellos se les informó que a partir del 4 de mayo, los precios para entrar en un recinto para registrar mercadería tendrán un aumento. Por su parte, Ricardo Silvera, director regional de la Autoridad Nacional de Aduanas, explica que la entidad no tiene que ver con el aumento de precios a los servicios de almacenamiento en los bond aduaneros que hay en Paso Canoa, porque se trata de una empresa privada. “Hay dos empresas privadas en la frontera de Paso Canoa conocidas como bonds, ellas están incrementando el costo de almacenaje; los servicios aduaneros no se cobran, si hay que hacer algún tipo de traslado o se debe comprar un sello, hay algunos costos para ello”, dice.

Los tomateros industriales de la región de Azuero (Los Santos y Herrera) solicitan mantener el apoyo al sector para estabilizar el precio del quintal de tomate a ocho dólares con 25 centavos, debido al alto costo de producción en este cultivo. Así lo anuncia Pedro Castillo, presidente de la Asociación de Tomate Industrial en Azuero, tras culminada la temporada tomatera de 2008-2009, donde 168 productores cosecharon 16 mil 500 toneladas métricas de tomate.

Glosario De Siglas

ACD	Alianza para la Conservación y el Desarrollo
ACP	Autoridad del Canal de Panamá
ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente
APLEPC	Asociación de Productores de Leche de Provincias Centrales
ASOPROF	Asociación de Profesores
ATTT	Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
CONAPIP	Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá
CSJ	Corte Suprema de Justicia.
DIMAUD	Dirección Municipal De Aseo Urbano y Domiciliario
FRENADESO	Frente Nacional por la Defensa de los Derechos

	Económicos y Sociales
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
MEDUCA	Ministerio de Educación
MOP	Ministerio de Obras Públicas
ONU	Organización de las Naciones
REDLAR	Red Latinoamericana contra Represas
SUNTRACS	Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares.

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.

Dirigido por Marco A. Gandásegui, coordinado por Jennifer Delgado Urueta, con la asistencia de Marina Ábrego.

Fuente: Diario La Prensa, Diario Panamá América, Radio Mía, Diario la Estrella de Panamá, Diario El Siglo, Diario Crítica Libre, Kaosenlared.net, FRENADESO, ASOPROF, Radio Temblor.

Panamá

Cronología del Conflicto Social

Mayo 2009

Mayo

Viernes 1

Los trabajadores marchan para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, en el marco de las elecciones para escoger al próximo presidente de la República el próximo domingo, 3 de mayo. Los sindicatos y organizaciones afiliadas a ULIP y los gremios que forman el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) caminan hasta la Plaza 5 de Mayo, donde dirigentes, incluyendo líderes estudiantiles piden el voto en blanco para las elecciones del día domingo. En la marcha también participa el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO). Al acto se unen los indígenas nasos, que desde hace 16 días protestan en la Plaza Catedral en defensa de sus tierras, y también organizaciones campesinas que se oponen a los proyectos mineros.

La dirigencia del Comité de Productores de Arroz de Veraguas (COPRAVE) advierte, que a partir de la próxima semana, realizarán protestas en las calles para obligar al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a que pague una deuda que supera el millón de dólares por concepto de 47 mil quintales cosechados del grano que estos agricultores vendieron al Gobierno para la comercialización del arroz Compita. Fabio Juárez, presidente de COPRAVE, informa que en aquel momento el Gobierno a través del IMA acordó comprar toda la cosecha nacional de los productores de arroz para apoyarlos y de paso comercializarlo a través de la marca Compita.

La construcción de una hidroeléctrica en el río Chico, en la provincia de Chiriquí, inquieta a los más de 200 productores agropecuarios que se benefician con el sistema de riego

Remigio Rojas, debido a que este sistema es abastecido por el afluente. El presidente de la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego Remigio Rojas, Santiago Espinoza, denuncia lo que se está abriendo en este río indomable. “Nosotros tememos, porque con esta anchura, el afluente va a correr sin que nadie lo pare y nosotros estamos ubicados aguas abajo”, dice. Agrega que el río Piedra o río Chico es uno de los ocho ríos más veloces del mundo “y con este afluente no se juega”.

Gremios sindicales de jubilados y pensionados en la provincia de Bocas del Toro denuncian el atraso de la construcción del Hospital de Changuinola. Magda Elena Gutiérrez, presidenta de la asociación de jubilados y pensionados independientes en la región, dice que a pesar de la prórroga otorgada a la empresa constructora, no se ha cumplido con la terminación de la obra que fue extendida hasta el 24 de mayo. Gutiérrez también denuncia la falta de nombramiento de médicos especialistas en cardiología, neumología, oftalmología entre otros.

Tras 16 días de protesta en la Plaza de la Independencia, en el populoso barrio de San Felipe y en donde está ubicada la Presidencia de la República, los indígenas nasos que exigen se les deje vivir en las tierras ancestrales que Ganadera Bocas reclama como suyas, están a la espera de que el Ejecutivo les muestre los terrenos donde supuestamente los reubicarían. Tony Vargas, vocero del grupo, explica que el ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita, les ofreció mudarlos a un sitio igual al que ahora está en conflicto, pero Vargas explica que “en el territorio naso no hay un terreno igual; lo demás es pura montaña. No hay otro sector donde tengamos el río y tierras para sembrar”.

Sábado 2

Nuevamente, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) rechazan el intento del economista Juan Jované de postularse para la Presidencia de la República. Jované pide –a dos días de las elecciones– a los magistrados del TE que lo habiliten para correr en las elecciones del domingo. Ello, luego de que la Corte Suprema anunciara a través de un comunicado que ha declarado inconstitucional un artículo del Código Electoral que le impedía a los independientes correr para Presidente.

El magistrado del TE Gerardo Solís, quien es partidario de las candidaturas independientes para Presidente, dicen que aún no tiene el fallo de la Corte, pero que en todo caso no tendría efecto para la elección del domingo. Jované plantea que los magistrados Eduardo Valdés y Erasmo Pinilla, quienes defendieron la legalidad del artículo 233, deben renunciar por “bloquear la participación democrática”.

Las clases en el colegio Salomón Ponce Aguilera de Coclé, se reiniciarán el miércoles, luego de que los docentes, que declararon un paro desde el pasado lunes 27, exigiendo la destitución de la subdirectora del plantel, llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Educación (MEDUCA). El MEDUCA separó del cargo a la subdirectora mientras se terminaba el proceso de investigación; sin embargo, esta medida no se pudo ejecutar debido a que la profesora presentó un documento que le concede un fuero electoral.

Lunes 4

Los transportistas de carga de Costa Rica suspenden el paro que habían anunciado, luego de lograr un acuerdo con los administradores de los recintos de servicios aduaneros que están ubicados en la frontera de Paso Canoa, al occidente panameño, confirma Juan Carlos Segura, vocero del grupo. Para la madrugada del domingo, cientos de transportistas de carga de Costa Rica pretendían cerrar las fronteras de esa nación, tanto en el límite con Nicaragua como en el límite con Panamá, a fin de evitar el aumento de precio anunciado por los administradores de esos recintos privados.

Miércoles 6

Después de una semana de paro en demanda de la separación del cargo de la subdirectora del plantel, unos 60 docentes del colegio Salomón Ponce Aguilera de Antón reanudan las clases en este centro educativo. Delfina Bernal, directora regional de Educación, señala que en vista de que la Profesora Yaneth Cáceres, subdirectora del Salomón Ponce Aguilera, goza de un fuero electoral por haber participado como miembros del equipo del Tribunal Electoral, no podrá ser separada del cargo ni sancionada durante los próximos tres meses.

Trabajadores de las bananeras de Barú en la provincia de Chiriquí, cierran la vía Interamericana en la frontera con Costa Rica, para exigir al Gobierno ser parte de las negociaciones que se realizan con la transnacional Del Monte, empresa frutera que presentó una propuesta para el manejo de la producción de banano en la zona. Además denuncian los malos manejos de la empresa por parte de los gerentes interventores de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR).

Alrededor de 400 camiones de carga están apostados a un lado de la vía Interamericana, tanto en Costa Rica como en Panamá. Los conductores están a la espera de que se levante el paro. Juan Carlos Segura, del transporte de carga de Costa Rica, dice que dentro de los contenedores hay productos perecederos, resina para las fábricas, alimentos, y que no han podido entregar a sus destinos finales.

Jueves 7

Después de tres semanas de protesta, indígenas de la etnia naso, acantonados en el Parque Catedral localizado en un área contigua al Palacio Presidencial, recurren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en demanda de derechos territoriales y culturales. Eliseo Vargas, dirigente de los manifestantes, dice que una treintena de personas mantiene una vigilia para reclamar justicia y repudiar los atropellos de la Empresa Ganadera Bocas, que presentó títulos de propiedad sobre territorios ancestrales de los naso.

Viernes 8

Hoy se reanudan las clases en el Instituto Profesional y Técnico de La Pintada luego de que las autoridades del Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas se comprometieran a solucionar los problemas que aquejan a la comunidad. Los docentes, estudiantes y padres de familia del IPT de La Pintada declararon un paro de labores debido al pésimo estado de la carretera que conduce al plantel, a las condiciones de insalubridad del internado y los derrames de aguas negras dentro del colegio, además de falta de material didáctico.

Sábado 9

Tras 80 horas de cierre de la vía Interamericana, los trabajadores bananeros permiten el paso de los camiones de carga hacia Centroamérica. Esto, luego de que alcanzaran un acuerdo con el Gobierno, al que pedían participar en las negociaciones con la trasnacional frutera Del Monte. Asimismo, los bananeros solicitan la destitución de Nidia Medina, interventora de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles, quien posteriormente renunció a este cargo. Simón Lezcano, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Chiriquí Land Company y Empresas Afines (SITRACHILCO) pidió disculpas a las personas afectadas por la medida que tomaron desde el miércoles, pero a su vez pidió comprensión para con ellos, que atraviesan una crisis social y económica en la región bananera de Barú.

Domingo 10

Estudiantes y profesores de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena (ENJDA) en Santiago, provincia de Veraguas, encaran al titular del Ministerio de Educación (MEDUCA), Salvador Rodríguez, para que garantice en lo que resta de gobierno el estatus del instituto pedagógico superior y se sienten las bases para convertir este plantel en la única universidad formadora de docentes en Panamá. Durante la reunión, tanto profesores como cerca de 1,500 estudiantes normalistas, cuestionaron el contenido del acuerdo firmado entre el ministro Rodríguez y el Consejo de Rectores, que permite que el Instituto Pedagógico Superior de la Normal brinde educación superior, pero otorgando los títulos de licenciatura sólo con el aval de las universidades.

Lunes 11

Por cuarta vez, campesinos e indígenas de unas 24 comunidades del área de influencia de la mina Petaquilla cierran la vía que conduce al proyecto minero, esta vez la protesta se concentra cerca del río Molejón, en la comunidad de San Lorenzo (provincia de Chiriquí). María Muñoz, miembro del Grupo Pro Cierre de la Mina Petaquilla, señala que la protesta se centra en la enorme contaminación ambiental que sufren los ríos, de los cuales dependen las 24 comunidades que no pueden utilizar sus aguas para consumo y como medio de transporte. Indica que esta nueva protesta se da ante la falta de respuesta de las autoridades a quienes han solicitado la derogatoria del contrato minero y que se investiguen las

denuncias de irregularidades y daños ambientales en el área.

Los estudiantes del nivel superior de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena de Santiago evalúan las acciones de presión que ejecutarán frente a la iniciativa de eliminar el grado de licenciatura del plantel. Domingo Montezuma, vocero, señala que el próximo viernes saldrán nuevamente a las calles en una marcha masiva de estudiantes.

Miércoles 13

Estudiantes, docentes y padres de familia del centro educativo de Zapallal, en la provincia de Darién, paralizan las clases hasta que el Ministerio de Educación nombre los docentes que aún faltan. Este colegio, con una matrícula de 800 estudiantes, tiene tres años de haber iniciado la media superior, pero desde entonces le hacen falta los docentes del área científica. Además, piden que se equipe los laboratorios y se firme el compromiso de iniciar la construcción del edificio que les falta. Por su parte el padre de familia y tesorero del colegio, José Araúz, dice que en verano cuando salieron los nombramientos se les comunicó que todo el personal estaba asignado, sin embargo, a Darién nunca llegaron los docentes.

Jueves 14

Cerca de mil estudiantes de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena (ENJDA) de Santiago, realizan la primera de una serie de protestas pacíficas anunciadas para defender el Instituto Pedagógico Superior, cuyo funcionamiento ha provocado conflictos con las universidades panameñas. En esta primera manifestación, los normalistas formaron una cadena humana alrededor de las instalaciones de este plantel y se dedicaron a distribuir volantes en las que informaban por qué protestaban.

La carretera por donde transitan los camiones y demás equipo pesado de la cuestionada empresa Minera Petaquilla, continúa cerrada. La protesta se ha fortalecido con la participación de otras comunidades que sufren las consecuencias de la masacre natural que ha ejecutado la minera. Los afectados han denunciado que la Autoridad Nacional del Medio Ambiente (ANAM) es responsable del daño cometido contra la vida humana y por ende de la naturaleza.

Viernes 15

Luzmi Ramos, vocera de los estudiantes de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena (ENJDA) de Santiago en Veraguas, advierte que las protestas de ahora en adelante no cesarán y por ello tienen programada una marcha multitudinaria que partirá desde las instalaciones del plantel y recorrerá las calles de Santiago. Ramos indica que el deseo de los normalistas es que el Gobierno no avale cualquier atentado que pretendan hacer las universidades en contra del Instituto Pedagógico Superior.

Docentes y padres de familia del centro educativo de Bajo Cedro, en el corregimiento de

Punta Róbalo en el distrito de Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, cierran la carretera de Punta Peña Almirante por la falta de respuesta de las autoridades. Domingo Flores, director de la escuela, dice que desde hace un año están solicitando la construcción de las aulas y que aún no tienen respuesta.

Al cumplirse el 106 aniversario del asesinato del General Victoriano Lorenzo, el Cholo Guerrillero, el Frente Campesino Contra los Embalses (FCCE), participa de una marcha contra el proyecto minero a cielo abierto de Cerro Petaquilla. Además, realizan un acto en el que hacen uso de la palabra moradores de comunidades cercanas al proyecto. Saúl Méndez, de la Dirección Nacional de FRENADESO, intervino en el acto, mientras sobrevolaba un helicóptero de la empresa minera.

Sábado 16

Los padres de familia y los docentes de la Escuela Cerro Colorado del Potrero de La Pintada, en la provincia de Coclé, amenazan con irse a paro. Manifiestan que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no ha reparado la carretera que conduce al plantel, lo que limita a los estudiantes que enfrentan dificultades para llegar al centro educativo.

Lunes 18

El cambio que propone el gobierno electo a partir del 1 de julio no sólo será político, sino también en la forma de manifestarse de los panameños, ya que el ministro de Gobierno y Justicia designado, José Mulino, advierte que no permitirá cierre de calles. "No quiero que se produzca una violación de la ley y que yo tenga que impartir una orden para arrestar a quien interrumpa el tránsito y se diga que el violador de los derechos humanos soy yo", sentenció Mulino. Considera que hay que poner "orden" en el país.

Saúl Méndez del SUNTRACS vaticina que habrá confrontaciones porque no se dejarán intimidar por las "amenazas". "Saldremos a las calles las veces que sea necesario para que se escuchen nuestras reclamaciones", agrega. Asimismo, coincide el dirigente magisterial, de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), Andrés Rodríguez, quien indica que no aguantarán "presiones ni amenazas". Mientras tanto, Julio García Valarini, de la COMENENAL, indica que el cierre de calles demuestra que hay insatisfacción en la población, que debe ser resuelta por las autoridades.

Martes 19

Alberto Castillo, padre de familia de la escuela Emilia Baldelamar, en El Real de Santa María, en Darién, dice que la carencia de docentes en el centro básico ha llevado a los padres de familia a abocarse a un paro, porque no se puede permitir se continúe con el descuido de dejar a las escuelas de la provincia sin educadores. Igualmente, se da plazo a las autoridades del departamento de Ingeniería del Ministerio hasta el miércoles para que

evalúen los trabajos atrasados por parte de la empresa, para coordinar la culminación de estos.

Por su parte la señora Rosa Santos, madre de familia del centro educativo de Zapallal, dice que la comisión de estudiantes que viajó al Ministerio de Educación regresó muy decepcionada, porque no los atendió ninguna autoridad que les diera respuesta al problema.

Los padres de familia y docentes de la escuela Joaquina H. de Torrijos, ubicada en el distrito de Soloy, en Chiriquí, dan un plazo de ocho días a las autoridades del Ministerio de Educación para que resuelvan el problema de la falta de agua en la escuela. A la escuela de Soloy acuden más de 800 estudiantes, en su mayoría de escasos recursos e indígenas. La directora regional de Educación, Elizabeth Juárez, manifiesta que la escuela pertenece a la comarca Ngöbe Buglé, pero hará lo posible por buscar una solución.

Alrededor de 1,300 productores de plátano realizan una asamblea en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, para solicitar al Ejecutivo que les condonen la deuda que mantienen con el Banco de Desarrollo Agropecuario. Esta deuda asciende a ocho millones de dólares, los cuales no han podido pagar ante los problemas que han confrontado por las inundaciones que se han registrado en la provincia. Enrique Cordero, presidente de la asociación de productores de plátanos fronteriza, manifiesta que no están conformes con la actitud del ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Olmedo Espino, quien tiene el compromiso de presentar el anteproyecto de ley de condonación de deuda, por medio del Ejecutivo.

Vecinos de la comunidad de Las Guabas, en la provincia de Coclé, se reúnen en las oficinas de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en Penonomé, para manifestar su preocupación sobre el deterioro que sufre el río Coclé del Sur debido a la extracción de arena y a la colocación de cuatro bombas para sacar agua que es usada para regar cultivos de caña de azúcar. Elia Valdés, vocera del grupo de manifestantes, dice que les preocupa ver cómo el río pierde su estado natural. La vocera manifiesta que la empresa Calesa S.A. es la que cultiva la caña de azúcar en el área y es con la que ellos están molestos. La represa sobre el río ha afectado a los miembros del asentamiento 11 de octubre de la comunidad de Las Guabas que cultivan arroz.

Miércoles 20

Productores de cebolla de Natá, en Coclé, están dispuestos a realizar protestas en las calles para exigir al Gobierno la construcción de una planta secadora para el producto.

Abad Barrios, presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ariel Chanis, R.L., dice que cuando Laurentino Cortizo ocupó el cargo de ministro de Desarrollo Agropecuario asignó una partida de 300 mil dólares para la construcción del edificio, ya que ellos tienen el terreno.

Funcionarios de la guardia permanente de los bomberos de provincias centrales se manifiestan en las calles como medida de presión para que el proyecto que busca reformar la ley orgánica de la institución se agilice. En la protesta, que se realiza a orillas de la vía

Interamericana en Divisa, participan los camisas rojas de las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas.

Viernes 22

El cierre de la vía que conduce a la mina Petaquilla por parte de 24 comunidades del distrito de Donoso, en la provincia de Colón, comienza a generar preocupación de todas las partes. Tomás Garay, del grupo de indígenas gnöbe, señala que están en esta lucha en defensa de la tierra que es de donde ellos obtienen sus alimentos y porque la empresa minera está contaminando los ríos. Carmencita Tedman, en representación de la Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas y del Comité Pro Cierre de Mina Petaquilla, aclara que el movimiento apela a la no violencia y que han sido víctimas de amenazas con varillas de hierro por parte de Felipe Camargo y otros miembros de seguridad de la empresa minera.

Edmundo Sterling, vocero de la guardia permanente del Cuerpo de Bomberos de Colón, anuncia piqueteos públicos, caminatas, y protestas, de continuar dilatándose el anteproyecto de ley 432, que busca hacer modificaciones a la institución bomberil del país. De acuerdo con Sterling, este anteproyecto de ley que es ‘positivo’, está estancando en segundo debate, por lo que dice que se mantendrán las acciones de protesta.

Sábado 23

Padres de familia, estudiantes y docentes del Centro de Educación Básica General de Boró en La Mesa, en la provincia de Veraguas, cierran la vía Interamericana en protesta por el atraso en los trabajos de rehabilitación del plantel. Además acuerdan iniciar un paro de labores de 48 horas, y se espera que el lunes en asamblea decidan si continúan la acción de suspensión de clases, dependiendo de la respuesta de las autoridades.

Los campesinos e indígenas que desde hace días mantienen cerrada la vía a la mina de Petaquilla anuncian que no pueden llegar a acuerdos con las autoridades de la provincia de Colón hasta que el Gobierno envíe una resolución que ordene el cierre de las actividades mineras en la mina del cerro Petaquilla. Además, hay que hacer una evaluación de daños ambientales. Darío Fernández, gobernador de Coclé, señala que continuará pendiente de este caso y se reunirá con las autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad Nacional del Ambiente para ver qué alternativas buscan para solucionar este problema.

Domingo 24

En ‘estado de alerta’ se encuentran los grupos de campesinos, indígenas y ambientalistas que desde hace 14 días mantienen cerrada la vía a la mina Petaquilla. Ante su negativa de abandonar el área, las autoridades han ordenado desalojarlos. Según los campesinos, desde tempranas horas, grupos de antimotines de la policía se mantienen en el área. Anabell

Herrera, de la Coordinadora Nacional para la Defensa de las Tierras y Aguas, manifiesta que pudieron confirmar que el gobernador de Colón Julio Kennion ordenó el arribo de los antimotines, poniendo como justificación evitar enfrentamientos.

Martes 26

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional reprimieron violentamente a decenas de campesinos, indígenas y miembros de organizaciones ambientales que mantenían más de dos semanas un campamento de protesta sobre la vía de acceso a la empresa minera Petaquilla Gold y Minera Panamá. La acción se desata a primeras horas de la mañana, en la comunidad de El Nazareno, a 45 minutos de la ciudad de Penonomé (provincia de Coclé).

En Penonomé unos 400 empleados de la mina Petaquilla Gold y Petaquilla Hidro cierran la carretera Interamericana, provocando un enfrentamiento con las unidades antimotines, quienes lanzaron bombas lacrimógenas para que despejaran la vía. Los empleados de la minera indicaron que continuarán con esta acción cada vez que los campesinos que van en contra de la mina cierran la vía y su fuente de trabajo. Hace 15 días un grupo de campesinos cerró el acceso a la mina en Coclecito. Ahora, la empresa anunció el despido de unas 400 personas.

Estudiantes y personal docente del colegio Francisco Castellero de Guararé, en la provincia de Los Santos, inician un paro de 48 horas, en protesta porque el tercer pabellón de ese plantel permanece inundado de aguas negras. Además, realizan una marcha hasta las instalaciones del Municipio de Guararé, donde se reúnen con el alcalde, Luis Carlos Sánchez, para exponer la situación. Luis Moreno, docente de ese colegio, dice que el problema data de muchos años. Dice que temen poner en riesgo la salud y bienestar de los 750 estudiantes y 60 docentes que asisten al plantel.

La medida adoptada por la Compañía Azucarera La Estrella S.A. (CALESA), de ampliar sus cultivos de caña, lleva a un grupo de residentes de la comunidad de El Limón de Capellanía de Natá, en la provincia de Coclé, a cerrar la vía Interamericana. Los residentes se quejan de que la empresa adoptó la medida sin consultar a la comunidad. Gladis Fernández, moradora, dice que la compañía inició sus cultivos hace cinco meses, sin importar que la vivienda más cercana se encuentra localizada a 30 metros de distancia. Dice que después de los cultivos vendrá la fumigación, la cual la comunidad no estará dispuesta a aceptar.

Miércoles 27

La represión de la Policía Nacional de los campesinos e indígenas que protestan contra la mina Petaquilla deja cerca de 30 detenidos. El profesor Alfonso Córdoba, vocero de FRENADESO, denuncia que miembros del Comité Pro Cierre de la Mina de Cerro Petaquilla, del Frente Campesino Contra los Embalses (FCCE), ambientalistas, activistas de derechos humanos y otras agrupaciones, fueron brutalmente reprimidos durante la protesta.

Indígenas de las comunidades Arimae y Emberá Puru, de Agua Fría en Darién, han programado el cierre de la vía principal hacia esa provincia, en protesta por la tala ilegal de 20 hectáreas de bosques y por la invasión de “colonos”. El presidente de la Asociación Agroforestal de esas comunidades, Elivardo Membache, dice que la medida será indefinida hasta que las autoridades les garanticen por escrito la salida de los invasores que están dentro de las tierras donde habitan.

Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá realiza un piqueteo en los predios de la Asamblea Nacional, para manifestarse en contra de la discusión de un proyecto de ley que regule el ejercicio de la abogacía en Panamá. El nuevo texto le otorga al Consejo Técnico de la Abogacía la expedición de la idoneidad profesional y la aplicación del examen de suficiencia profesional. Asimismo, introduce normas para regular el ejercicio de la abogacía en el país por profesionales extranjeros como consultores en derecho internacional y establece las condiciones y requisitos que deberán tener.

Un grupo de trabajadores recolectores de basura urbana bloquea los cuatros paños de la Vía España, frente al Ministerio de Economía y Finanzas, colocando alrededor de 15 camiones recolectores. Los trabajadores están solicitando al Gobierno el pago de una deuda de 28 millones de dólares a la Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario. Ellos han expresado que este dinero lo necesitan para la compra de los uniformes de trabajo y la reparación de los camiones recolectores.

Jueves 28

La Orden de Frailes Menores de Panamá, a través de un comunicado pide que se derogue el Decreto Ley 9 de febrero de 1997, que otorga concesiones mineras. Solicita, además, que se revise y transforme el Código Minero. También pide que se cumpla con el artículo 119 de la Constitución Política sobre la prevención de la contaminación ambiental y se escuche la voz de las comunidades que luchan contra la minería.

Julio Yao, del Comité Pro Cierre de la Mina Petaquilla, manifiesta que la lucha de los campesinos continuará en las próximas semanas cuando realicen una asamblea general entre comunidades para decidir las acciones a tomar. Mientras que el defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, deploró los enfrentamientos ocurridos entre el grupo de indígenas y campesinos que se oponen al proyecto minero de Petaquilla y unidades de la Policía Nacional. También hizo un llamado a que las empresas que se dedican a la exploración y explotación minera atiendan las normas legales y ambientales.

Miembros de la Guardia Permanente del Cuerpo de Bomberos de Colón protestan por espacio de dos horas en la ciudad de Colón, para exigir la aprobación del proyecto de ley 432, el cual se encuentra en segundo debate en la Asamblea Nacional. Edmundo Sterling, manifiesta que la Guardia Permanente a nivel nacional tomará medidas drásticas para que sea aprobado el proyecto de ley.

Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares

(SUNTRACS), en Colón, cierran los cuatro paños de la vía Transístmica, a la altura de la comunidad de Puerto Escondido, por espacio de 30 minutos, para exigir mayor seguridad y respeto a las leyes laborales. Eustaquio Méndez, dirigente de los obreros de la construcción en la costa atlántica, dice que “el SUNTRACS tiene un compromiso de presionar en materia de seguridad a las empresas que violan el Código de Trabajo. Este año han muerto ya 11 obreros de la construcción por homicidio culposo en empresas que ponen a los obreros a trabajar en lugares y circunstancias inseguras”.

Viernes 29

Al ritmo de tamboritos (baile folklórico), cantos, bailes, consignas y pancartas protestan alrededor de 500 estudiantes del bachillerato de la Escuela Normal de Santiago en Veraguas. Los estudiantes cierran la calle sexta de Santiago por dos horas, en medio de una serie de manifestaciones que cumple su quinto día esta semana. Johana Silvera, vocera estudiantil, explica que están pidiendo que se le brinde el reconocimiento a la licenciatura en educación primaria que se brinda en el plantel.

Un grupo de taxistas del distrito de Arraiján bloquea la vía Panamericana, provocando un congestionamiento vehicular. Los conductores manifiestan su interés de llegar a un acercamiento con la directora designada de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Sandra Escorcia. “Queremos denunciarle a la directora las anomalías que existen en el negociado de los cupos en detrimento de la clase obrera”, expresó uno de los quejosos.

Los moradores de las Guías Occidente y pescadores de la playa de Sea Cliff, ambas en Coclé, continúan esperando que las autoridades municipales decidan demoler la cerca construida por Richard Crucet, que impide el libre acceso a la playa. El Municipio de Antón, suspendió la demolición que tenía programada para esta semana, luego de haber agotado todos los trámites legales con la contraparte. Según Roger Ríos, alcalde de Antón, no se pudo realizar la demolición debido a que el oficio con la orden al corregidor de Río Hato no se envió en horas de la mañana y las oficinas municipales cerraron al medio día.

Sábado 30

La Coordinadora Nacional de Aspiraciones de la Guardia Permanente de los Bomberos del país culmina un encuentro en Santiago de Veraguas, en el que acuerda continuar con las protestas en las calles. Además, se presentaron denuncias de supuesta presión hasta con despidos laborales, si continúan participando de las manifestaciones. El subteniente Temístocles González, de los bomberos de Chiriquí, dice que los funcionarios de David han sido amenazados, pero que esto no impedirá que sigan en las protestas.

Una denuncia penal contra la policía antidisturbios de la Zona de Policía de Coclé y la corregidora de San José del General, es presentada ante la Dirección de Investigación Judicial, por el presidente del Servicio Paz y Justicia y miembro del Comité Pro Cierre de la Mina Petaquilla, Julio Yao. Según Yao, la denuncia se basa en los atropellos que fueron víctimas los campesinos durante el desalojo del campamento de Nazareno, donde los

agentes policiales quemaron la bandera nacional junto con otras banderas y posesiones de los indígenas y campesinos.

Los estudiantes de la Escuela Normal de Veraguas, completan cinco días de protestas, en defensa de la licenciatura en educación primaria que se imparte en el plantel. Nuevamente salen a las calles y cierran las avenidas adyacentes al plantel, donde en medio de consignas y pancartas, piden a las autoridades que se les respete la licenciatura. Johana Silvera, vocera, hizo un llamado al ministro de Educación, Salvador Rodríguez, para que le preste atención a las protestas.

Domingo 31

El subteniente Temístocles González, de los bomberos de Bugaba, Chiriquí, asegura que los funcionarios de David han recibido amenazas de ser destituidos. Indica que se les ha dicho que si participan de las protestas en Bugaba podrían ser sancionados. Manifiesta que pese a estas amenazas continuarán en las calles luchando, “porque si botan a uno, tendrán que hacerlo con todos”.

Glosario De Siglas

ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente
ANSA	Azucarera Nacional S.A.
ASOPROF	Asociación de Profesores
ATTT	Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
CALESA	Compañía Azucarera La Estrella, S.A.
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
COPRAVE	Comité de Productores de Arroz de Veraguas
COOSEMUPAR	Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles
COMENENAL	Comisión Médica Negociadora Nacional
CONATO	Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados
ENJDA	Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
IMA	Instituto de Mercadeo Agropecuario
IPTIA	Instituto Profesional Técnico e Industrial
FCCE	Frente Campesino Contra los Embalses
MEDUCA	Ministerio de Educación
MIDA	Ministerio de Desarrollo Agropecuario
MICI	Ministerio de Comercio e Industrias
MOP	Ministerio de Obras Públicas
SITRACHILCO	Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company y Empresas Afines.
SUNTRACS	Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares.
TE	Tribunal Electoral

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.

Dirigido por Marco A. Gandásegui, coordinado por Jennifer Delgado Urueta, con la asistencia de Marina Ábrego.

Fuente: Diario La Prensa, Diario Panamá América, Radio Mía, Diario la Estrella de Panamá, Diario El Siglo, Diario Crítica Libre, Kaosenlared.net, FRENADESO, ASOPROF, vagama.com.

Panamá Cronología del Conflicto Social Junio 2009

Junio

Lunes 1

Trabajadores de las universidades estatales de unos 16 países de América Latina y Caribe se reúnen en Panamá para tratar diversos temas relativos al sindicalismo universitario en la región. Se espera que allí se aprueben los estatutos, plan de acción y la declaración de los principios de la nueva organización de trabajadores de estas unidades. El evento es organizado por la Asociación de Empleados Universitarios de Panamá (ASEUPA), y según su dirigente Damián Espino, allí se revisarán los avances que existen en el desarrollo del sindicalismo universitario en la región, además se expondrán a través de especialistas los principales impactos de la crisis estructural del sistema capitalista. Aclaró que este acto servirá también para fundar la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA), la que tendrá como sede la república de Panamá.

Martes 2

Funcionarios de Aduanas cierran por una hora la carretera central (Panamericana) a la altura de Divisa, de Aguadulce en Coclé, David en Chiriquí y en la entrada de la Zona Libre de Colón, exigiendo una ley que les garantice estabilidad laboral. Rosario Rodríguez, vocera del grupo, le hace un llamado al ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita, para que le de trámite y se apruebe la carrera de servicio aduanero. En Colón, no se permitió la salida de los camiones y otros vehículos por la principal garita de inspección de aduanas en el área de France Field.

En la provincia de Chiriquí, 50 educadores cierran por más de una hora la carretera central (Panamericana), exigiendo al ministro de Educación, Salvador Rodríguez, las partidas para nombrar los educadores en los colegios y escuelas de la región, incluyendo la comarca Ngöbe Buglé. El vocero del grupo, Cristian Gómez, expresó que se le han pedido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que apruebe una partida para nombrar a 120 educadores.

El pésimo estado en que se encuentra la vía de acceso a la comunidad de El Barrero del corregimiento de El Roble, de Aguadulce, en la provincia de Coclé, lleva a los moradores del sector a cerrar la carretera central (Panamericana). Se trata de mil 700 metros de vía que serán rehabilitadas por la empresa Consestruc, S.A., trabajos que se iniciaron en enero de 2009. Betzy Guardia, jefa de inspección del Ministerio de Obras Públicas (MPO), aclara que la empresa no tiene retrasos en el proyecto. Se han comprometido a terminar para la fecha programada, de acuerdo con el contrato del proyecto.

Miércoles 3

Los estudiantes del Instituto Superior de Desarrollo Tecnológico y Comunitario (ISDETEC) cierran por dos horas y media la carretera central (Panamericana) para exigir a la Contraloría General de la República que autorice los dineros para que sea terminada la construcción del centro educativo en la comunidad de El Barrero del corregimiento de El Roble, en Aguadulce. Delfina Bernal de Sandoval, directora regional de Educación en Coclé, explica que la empresa requiere de un pago por haber terminado la primera parte de la obra.

Manuelito Ortega, vocero de la comunidad indígena de Unión Chocó, en la provincia de Darién, manifiesta que están protestando porque llevan cuatro meses sin tener teléfono y aunque se ha hecho el reporte, no han sido reparados. Señala que otras comunidades que están presentando problemas con la comunicación son Boca de Cupe, Vista Alegre, Lajas Blancas, Tupisa y en todo el río Chico sólo hay un teléfono que funciona.

Jueves 4

Un grupo de obreros que labora en la empresa Concord, cierra la vía Transistmica (entre las ciudades de Panamá y Colón), a la altura de la comunidad de río Gatún. Según Eustaquio Méndez, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) de la provincia de Colón, la protesta se da porque se les adeuda dinero de salarios, horas extra, vacaciones, y otros beneficios, lo que asciende a un total de 38 mil dólares. Los manifestantes son respaldados por moradores de la comunidad, que se quejan que la empresa no culminó las paradas y los desagües, que los afectan en la época lluviosa.

Un grupo de agentes de la Guardia Permanente de las Compañías de Bomberos de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas protestan, por más de dos horas, a orillas de la vía Panamericana, a la altura de Divisa, para exigir la aprobación del proyecto de ley 432. Octavio Ángulo, vocero de la guardia permanente de la Compañía de Bomberos de Santiago, indica que el mensaje no es solo para exigir la aprobación de la ley orgánica de la institución, sino también pedirle al nuevo gobierno que destine recursos para comprar equipos.

Docentes de la escuela República de Bolivia, ubicada en la calle 12 Meléndez de la ciudad de Colón, deciden suspender las clases por tres días para exigir mejoras estructurales en el plantel. La medida se mantendrá hasta tanto la Dirección Regional de Educación en Colón

les dé respuesta positiva a sus demandas. El director del plantel, José Obregón, aclara que los problemas que pudieran tener algunas estructuras de la escuela no justifican la pérdida de clases.

Viernes 5

Cuarenta trabajadores bananeros han sido cesados de sus labores por no haber fruta que cortar y procesar, reveló José Manuel Morales, gerente de la Cooperativa de Servicios Múltiples de la Puerto Armuelles Fruit Company (COOSEMUPAR). Morales señala que esa decisión se debió tomar desde el momento en que se dejó de producir, cortar y cosechar banano, porque la realidad económica de COOSEMUPAR no permite pagar por servicios que no se están brindando. Por su parte, Simón Lezcano, secretario general del Sindicato Industrial de los Trabajadores de la Chiriquí Land Company y Empresas Afines (SITRACHILCO), dice que la medida obedece a que no hay proceso de producción en las fincas.

Ha transcurrido una semana desde que los moradores de El Limón de Capellanía de Natá realizaron una protesta para exigir a la Compañía Azucarera La Estrella, S.A. (CALESA) retirar parte de sus cultivos de caña, evitar la quema y la fumigación aérea. La situación se mantiene y las partes no han logrado un acuerdo. Alirio Prado, vocero de los afectados y miembro de Comité de Vigilancia Ambiental, dice que en dos reuniones que han tenido, los representantes de la empresa no han dado respuesta.

Sábado 6

En la ciudad de Santiago, Veraguas, dirigentes de la Guardia Permanente del Cuerpo de Bomberos del país acuerdan suspender las acciones de presión en las calles para dar paso al diálogo. No obstante, anuncian que estarán alerta porque de no haber una respuesta, nuevamente protestarán en las calles el próximo 2 de julio, luego que asuma el nuevo gobierno encabezado por el presidente electo, Ricardo Martinelli.

Un campamento indígena y campesino lleva 33 horas instalado debajo del puente vehicular de la vía Panamericana, en la ciudad de Santiago de Veraguas. El movimiento se opone a los proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos y turísticos en las regiones apartadas. Pablo Miranda, presidente de la Unión Indígena y Campesina, comenta que en horas de la noche están llegando muchas personas que se solidarizan con las luchas campesinas e indígenas para apreciar videos sobre los daños de esos proyectos en las comunidades. El campamento estará instalado hasta el martes, 9 de junio, cuando salga una marcha por Santiago en memoria del desaparecido sacerdote colombiano Héctor Gallego.

Tras completarse una semana de espera, y luego de cumplirse todos los requisitos para ordenar el derribo de la cerca en la servidumbre de Sea Cliff, que impide el libre acceso a la playa, el corregidor de Río Hato, Vasco Núñez, se niega a ejecutar la resolución de ingeniería municipal. Según explica el alcalde Roger Ríos, luego de cumplidos todos los requisitos legales, el departamento de ingeniería envió la resolución de demolición a la corregiduría. Añade que el corregidor le manifestó que debido a que el caso estaba en los

tribunales de justicia, era mejor esperar a que se terminara el período de gobierno y que fuera la nueva administración la que se encargara de resolver ese problema.

Por espacio de una hora, moradores de El Limón de Capellanía de Natá, cierran la vía Interamericana para exigir a la Compañía Azucarera La Estrella, S.A. (CALESA) retirar parte de sus cultivos, evitar la fumigación del área y la quema de caña. Alirio Prado, del Comité de Vigilancia Ambiental, se quejó de que la empresa no quiere aceptar las peticiones de los afectados, las cuales exigen sean plasmadas en un documento. Por su parte, Omar De León, vicepresidente de Servicios Corporativos de CALESA, explica que la firma de un documento limitaría a la empresa a realizar las actividades que legalmente se le permiten. Explica que CALESA nunca podrá garantizar que no se queme la caña, porque hay personas que lo hacen intencionalmente.

Domingo 7

Los indígenas y campesinos llegan a su cuarto día de campamento, a espera de que las autoridades acojan el mensaje de oposición a los proyectos hidroeléctricos, mineros, eólicos y turísticos. Pablo Miranda, presidente de la Unión Indígena y Campesina de Veraguas y la comarca Ngobe Buglé, aseguró que estas luchas continuarán en las comunidades, porque no permitirán que se instalen los mal llamados proyectos de desarrollo. Agrega que espera que las autoridades entrantes escuchen a las comunidades y velen por su bienestar.

Lunes 8

Habitantes de la comunidad de Cuesta de Piedra, donde actualmente se realizan trabajos de la carretera Ruta Sur, en Chiriquí, denuncian que las maquinarias están afectando las casas del área. Tomás Gallardo, un lugareño, explica que a su casa le eliminaron el piso frontal. Agrega, que en una reunión con los pobladores, la empresa encargada de los trabajos se comprometió a informarles cuándo comenzarían los trabajos y fueron sorprendidos. Por su parte, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, informan que a las propiedades que están fuera de la línea de construcción no se les indemnizará y que cada dueño tiene dos meses para reacondicionar sus respectivas propiedades.

Martes 9

Unos treinta jubilados de la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes de Penonomé se manifiestan, debido a la decisión de la agencia de la Caja de Seguro Social (CSS) de pagarles en un local contaminado con fibra de vidrio. Manuel María Soler, presidente de los jubilados y pensionados independientes de Penonomé, señala que desde hace tiempo vienen quejándose por las condiciones de insalubridad del gimnasio municipal, que es donde la CSS hace el pago a los jubilados, porque allí hay fibra de vidrio y los sanitarios están en malas condiciones.

Los profesores del Instituto David, en la provincia de Chiriquí, se declaren en paro militante hasta que arreglen los baños, se aclare el desvío de una partida de 70 mil dólares y la intención de trasladar a un grupo de docentes a otros colegios. Blanca Miranda, vocera de los profesores, dice que no es posible que una partida ya obtenida para el colegio, vaya a ser desviada por el Ministerio, dejando en apuros a este centro de estudios.

Jueves 11

Un grupo de pacientes de insuficiencia renal, cierra dos paños de la vía Transístmica, frente al Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social en la ciudad de Panamá. La protesta se da como medida de rechazo ante la falta de respuestas por sus tratamientos de hemodiálisis. La situación provocó un congestionamiento vehicular.

Viernes 12

Padres de familia cierran por espacio de cinco horas la carretera central protestando por el mal de la escuela Guillermo Andreve de Arraiján. A la protesta se unieron las escuelas Stella Sierra y Cristóbal Adán Urriola. Por su parte, el contralor Carlos Vallarino, anuncia que no refrendará el contrato para la reparación de 18 escuelas —incluyendo la Guillermo Andreve— porque encontró sobrecostos por el orden de 40 por ciento. El contralor también cuestiona que una sola empresa —Constructora Rodeira— ganara sin licitación la reparación de 18 escuelas.

Según informa Liborio Montezuma, dos mil viviendas de los trabajadores de las bananeras de la Cooperativa de Servicios Múltiples de la Puerto Armuelles Fruit Company (COOSEMUPAR) quedan sin energía eléctrica. COOSEMUPAR atraviesa una crisis económica, agravada por la suspensión de producción de banano en noviembre de 2008, por lo que los directivos no han podido pagar la deuda del servicio de luz.

Sábado 13

Decenas de indígenas panameños realizan una protesta ante la sede de la Embajada del Perú en esta capital, en solidaridad con los indígenas de la Amazonía peruana y en rechazo al Gobierno del presidente Alan García. La protesta fue liderada por el Movimiento de la Juventud Kuna (MJK) y contó con el apoyo del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS), de la Pastoral Indígena de Panamá y del Partido Alternativa Popular (PAP), en formación.

Después de casi dos semanas de espera, finalmente el alcalde de Antón, Roger Ríos, ordena el derribo de la cerca construida en la servidumbre de acceso a la playa de Sea Cliff, en las Guías Occidente de Río Hato. Por su parte, Jorge Lezcano, abogado de Richard Crucet, dueño de la propiedad en donde se colocó la cerca, señala vía telefónica que procedería a interponer las demandas penales.

La construcción de un supuesto proyecto turístico provoca que un grupo de moradores de El Rompío de la playa El Salado, de Aguadulce, cierren la vía de acceso a la comunidad, por espacio de media hora. Al lugar de la protesta se acercó el corregidor de Los Barrios Unidos, Humberto López, acompañado por policías, quien informa que el caso está en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Domingo 14

No habían transcurrido ocho horas luego de que el alcalde de Antón, Roger Ríos, procediera a derribar la cerca de ciclón en la servidumbre hacia la playa de Sea Cliff, cuando ya el empresario Richard Crucet había ordenado a sus empleados construir otra, con alambre de púas y estacones de madera, para impedir el libre acceso a la playa. La situación provocó la molestia de la comunidad, que informó al alcalde Ríos, quien procedió a girar una orden de conducción y una sanción pecuniaria de 250 dólares, por irrespeto a la autoridad y construir una cerca sin los debidos permisos.

Un grupo de 27 obreros que labora en la construcción del primer ciclo del distrito de Atalaya en Veraguas, declara un paro indefinido en protesta por el incumplimiento en el pago de prestaciones laborales y medidas de seguridad. Quintín Torres, vocero de los trabajadores, señala que hace 15 días entregaron un pliego de peticiones a la empresa Alquileres y Construcciones de Panamá,.

Lunes 15

Falta de medicamentos, personal y malas condiciones fueron algunas de las irregularidades constatadas por la Defensoría del Pueblo en el Centro de Salud de Río Hato en Coclé. Paul Bouche, jefe de la Defensoría en Coclé, manifestó que es alta la población en Río Hato y requiere de una mejor calidad de atención, a ese centro acuden unas 60 personas diariamente. Por su parte, Francisco Navarro, director regional de Salud, dice que al centro se le van a hacer algunas mejoras de infraestructura.

Martes 16

Miembros del Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Salud y a la Vida, realizan una protesta en el parque Catedral, de la capital, de despedida al presidente de la República saliente, Martín Torrijos. En el lugar los manifestantes portan velas, cruces de madera y han colocado dos ataúdes para protestar ante la falta de respuestas, por parte de Torrijos,.

Los docentes del colegio Abel Bravo, de Colón, declaran un paro de 24 horas, en protesta porque no se han terminado una serie de reparaciones en el plantel. El dirigente magisterial, Andrés Rodríguez, señala que tienen tres años esperando la respuesta de las autoridades del Ministerio de Educación. Rodríguez explica que los estudiantes no pueden usar el gimnasio del colegio. Además, recordó que no solo el Abel Bravo tiene problemas, sino también la escuela primaria Guillermo Andreve, de Arraiján, y el Primer Ciclo Panamá.

Miércoles 17

El cacique general de la comarca Ngobe Buglé, Máximo Saldaña, denuncia la ilegalidad de la reciente convocatoria a elección de las autoridades tradicionales de esa etnia, hecha por Pedro Rodríguez, quien laboró hasta marzo pasado en la organización del congreso general de la comarca. Por su parte, Ignacio Rodríguez, director de Política Indígena, dice que la ley señala que la elección se hace en la primera quincena de enero, de cada seis años. Si lo hacen ahora, estarían fuera del término y no serían autoridades legítimas, subrayó. Durante estos comicios se escoge al cacique general, caciques regionales y caciques locales, así como las autoridades administrativas.

El profesor Romualdo Góndola, dirigente de los educadores del Colegio Abel Bravo, dice que se paralizaron las clases durante 15 días, como medida de presión para que el gobierno dé una respuesta. Según funcionarios gubernamentales, el problema radica en que la empresa Demport S.A., la cual ganó la licitación para las mejoras del gimnasio Claudia Lowe, del Abel Bravo, por un monto aproximado de 400 mil dólares, incumplió con el contrato.

Médicos, técnicos en rayos X, laboratoristas y farmacéuticos del hospital Cecilio Castellero en la provincia de Herrera, suspenden los turnos en rechazo al cobro del impuesto sobre la renta (ISR), por considerarlo injusto. La Ley 29 de 2 de junio de 2008, que reformó artículos del Código Fiscal y de la Ley 3 de 1985, que estableció medidas de apoyo al consumidor, estableció el cobro del impuesto sobre la renta a las jornadas por turnos.

Jueves 18

Un grupo de integrantes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, cierra parcialmente la avenida Perú, frente del Ministerio Público, para exigir a las autoridades que investiguen las actuaciones del ministro de Educación, Salvador Rodríguez. El profesor Mario Almanza, vocero de los manifestantes, indica que Rodríguez ha provocado un caos en el sistema educativo panameño. Almanza recuerda que hay una gran cantidad de estudiantes que no reciben clases. Mientras tanto, la Asociación de Educadores Veraguenses denuncia a Rodríguez por supuestos delitos de “fraude en la contratación pública, falsedad ideológico o delito contra la fe pública y abuso de autoridad”.

Un grupo de docentes del colegio José Daniel Crespo, de Chitré, realizan un piqueteo frente a las oficinas regionales del Ministerio de Educación. Exigen a las autoridades educativas que se investiguen los desfalcos del Fondo de Equidad y Calidad Educativa y las contrataciones directas con sobre costos. Orlando Pittí, vocero de los docentes, señala que para el colegio José Daniel Crespo no solamente se contrató directamente a la empresa Plometec para reparar siete aulas, por un monto de 243 mil dólares, sino que ahora se sabe de la existencia de otro proyecto de reparación, que ni siquiera la dirección de la escuela tenía conocimiento.

Tras una reunión, los maestros y padres de familia del centro educativo Guillermo Andreve de Arraiján, acuerdan un amplio plan de trabajo que incluye recurrir a todas las escuelas del distrito para que se solidaricen con su lucha. Hoy se cumplen 11 días de los reclamos de los docentes en demanda de la reparación del plantel. Ángel M. Herrera, vocero de los maestros, anuncia que cerrarán las calles hasta que el contrato con alguna empresa sea refrendado por la Contraloría General de la República. A su vez, solicita que el ministro de Educación, Salvador Rodríguez, dé la cara a los maestros y a los padres de los estudiantes que han visto afectados sus clases.

Al menos 20 personas, protestan en la calle principal de la barriada 24 de Diciembre, en el extremo oriente de la ciudad capital, en rechazo al excesivo cobro de la tarifa del transporte público. Los usuarios decidieron realizar esta manifestación luego de que fueran bajados de un autobús, por no acceder a pagar un dólar de pasaje, en lugar de los 75 centavos establecidos por el uso de los autobuses de la ruta Corredor - 24 de Diciembre.

Viernes 19

Más de 200 arrendatarios del Mercado Público de David, provincia de Chiriquí, se oponen a su cierre, porque han estado toda una vida vendiendo sus productos en este lugar y consideran que debe ser remodelado. Mediante decreto alcaldicio No. 14 del 15 de junio de 2009, se ordena el cierre del Mercado Público de David. Según el documento, el mercado público es una instalación que ha estado operando por más de 50 años, pero cuyas infraestructuras tienen un deterioro considerable, lo que representa un peligro para la salud pública, la seguridad de los ocupantes, sus funcionarios y la población en general que diariamente visita la instalación para hacer sus compras.

Indígenas de la comarca Kuna Yala mantienen la invasión de tierras privadas en Coco Ye y Casa Blanca, distrito de Santa Isabel, denunció Yira Molina, alcaldesa de este municipio de la costa arriba de Colón. Ignacio Rodríguez, director de Política Indígena, dice que se programa una nueva reunión para hallar una solución al conflicto. Los kunas insisten en que son los dueños y presentan títulos de propiedad de 1923.

Miembros de la etnia Emberá protestan por la invasión de 300 hectáreas de tierras colectivas de Arimae, patrimonio de la etnia Emberá Wounaan, por siete familias integradas por darienitas y colombianos que aducen carecer de un lugar dónde vivir y tierras que cultivar. Benigno Ibargüen, alcalde de Chepigana, informa que los invasores apelaron a la resolución de Reforma Agraria y ahora habrá que esperar a que esta institución dicte una nueva resolución.

Una pancarta, solicitando el encarcelamiento del ministro de Educación Salvador Rodríguez, es colocada por la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), capítulo de Coclé, frente a las instalaciones del Ministerio de Educación. Ítalo Quezada, de la ASOPROF, señala que la medida refuerza la denuncia penal presentada en contra de Rodríguez por todas las irregularidades encontradas en la adjudicación de unos 390 proyectos durante su administración que culmina el 30 de junio.

Sábado 20

Una multa por 10 mil dólares, impone la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), al ganadero Miguel Samaniego, por contaminar el ambiente al realizar fumigaciones aéreas sin regulación en el corregimiento de El Tijera, distrito de Ocú. Camilo Caballero, administrador regional de ANAM, en Herrera, explica que Samaniego pretendía convertir en pasto unas 150 hectáreas de rastrojo. Al fumigarlas por vía aérea, contaminó las fuentes de agua, el suelo, y causó daños a la flora, fauna y micro fauna del lugar.

Domingo 21

Siete salones en reparación, baños inconclusos y abundante caliche es la razón que mantiene preocupados a los directivos y estudiantes del colegio José Daniel Crespo, de Chitré, en la provincia de Herrera. Ana María de Marciana, subdirectora del plantel, informa que hace un mes la empresa Plomelec S.A. se retiró y dejó las reparaciones sin concluir. Por su parte, Luis Calderón, jefe de Ingeniería del Ministerio de Educación, aclara que la orden de proceder data del 18 de mayo y culmina en septiembre, por lo que estima que esperan el pago de la Contraloría para continuar.

Martes 23

Los funcionarios aduaneros de Panamá declaran huelga nacional de brazos caídos en demanda de aumentos salariales, según informó la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA). Los huelguistas exigen la aprobación inmediata de la reglamentación de la Carrera de Servicio Aduanero. Entre las demandas de los aduaneros panameños se encuentra una petición a la Asamblea Nacional para que ratifique un presupuesto de 1.5 millones de dólares para mejorar los salarios en este sector.

Los docentes del Instituto de Artes Mecánicas de Divisa, en Herrera, convocaron a un paro de labores, luego que el ministro de Educación, Salvador Rodríguez, se llevara las computadoras del plantel. Azael Madrid, vocero de los educadores, señala que Rodríguez arbitrariamente sacó las computadoras del colegio, que eran parte de un proyecto que se comenzaría en el centro educativo.

Los docentes de por lo menos 10 planteles en el distrito de Arraiján exigen que se reparen sus centros educativos y se atiendan los diferentes problemas que tienen. Luego de cerrar por más de seis horas cuatro paños de la vía Panamericana, los educadores de diferentes centros educativos de Arraiján, no lograron una respuesta de las autoridades del Ministerio de Educación.

Docentes, padres de familia y estudiantes del colegio Abel Bravo, de la ciudad de Colón, protestan en la vía pública después que se desplomara un pedazo de losa de aproximadamente dos metros, lo que obligó a la suspensión de las clases.

Padres de familia, maestros y alumnos de la Escuela Carlos A. Mendoza, en San Miguelito, cierran la calle que conduce a este centro educativo en protesta por el manejo que hace la dirección del plantel educativo. Esta escuela está ubicada en el sector de Nuevo Veranillo.

Miércoles 24

El paro iniciado por más de mil funcionarios aduaneros en Panamá con el propósito de exigir ajustes salariales y la aprobación de un reglamento laboral, se prorrogará por espacio de 24 horas más, según informan los trabajadores. El secretario general del gremio de trabajadores aduaneros, Edgar Goytier, afirma que el paro fue un "éxito", pues "todas las aduanas, sin excepción alguna, pararon en el país". Por su parte, el director de la Autoridad Nacional de Aduanas encargado, Luis Antonio Castillo, dice que aunque todavía no se ha hecho un cálculo del impacto económico causado por el paro, las pérdidas ocasionadas pueden ser cuantiosas.

Representantes de la escuela Guillermo Andreve, en el distrito de Arraiján, conversan con el viceministro de la Presidencia, Carlos García, para plantearles sus quejas. El viceministro les informó que el tema será llevado al Consejo de Gabinete, donde la solicitud tendrá carácter de urgencia. Agrega que ya existe una empresa interesada en terminar las reparaciones de los salones de clases. Aunque los maestros mostraron su satisfacción por este anuncio, dijeron que se mantendrán en alerta hasta que el centro educativo sea reparado.

Profesores, padres de familia y estudiantes del colegio Abel Bravo, de la ciudad de Colón, protestan por segundo día consecutivo en la vía que conduce a esta provincia. Los manifestantes buscan respuestas del Ministerio de Educación debido a los daños en las estructuras de los salones de clases y el gimnasio. Los quejosos anuncian además que las protestas continuarán durante la semana hasta tanto no lleguen a un acuerdo con las autoridades.

Jueves 25

Los aduaneros panameños levantan el paro que mantenían desde el miércoles, tras lograr un acuerdo con el gobierno sobre ajustes salariales y la aprobación de un reglamento laboral. El director de la Autoridad Nacional de Aduanas encargado (ANA), Luis Antonio Castillo, dice que la huelga fue levantada tras la firma de un acuerdo entre la dirección de la entidad y el secretario general del gremio de trabajadores aduaneros, Edgardo Goytier. El acuerdo para levantar la huelga se alcanzó luego de que reglamentara la carrera de servicio aduanero. Además, los huelguistas consiguieron que 197 funcionarios de aduanas entraran a la plantilla permanente, así como el compromiso del gobierno para el desembolso de 1.5 millón de dólares para incrementos de salario.

Viernes 26

Por cuarto día consecutivo, los estudiantes, docentes y padres de familia del colegio Abel Bravo protestan en Colón, para exigir la solución inmediata a los problemas de infraestructura del centro educativo. Romualdo Góndola, secretario general de la asociación de profesores del colegio Abel Bravo, manifiesta que la medida se dio para llamar la atención de las autoridades y se busque la solución a la mala condición estructural de varios edificios del colegio.

Sábado 27

Estudiantes, moradores y personal del hospital de Almirante, marchan demandando agua, hasta las oficinas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). Luis Sánchez, vocero de la comunidad, no entiende cómo es posible que este corregimiento, con 10 mil habitantes, carezca de algo tan elemental como es el agua. Por su parte, Armando Díaz, funcionario del IDAAN, señala que una bomba se quemó y ha afectado el suministro.

Domingo 28

Las playas en la costa sur de Veraguas siguen siendo duramente afectadas por la extracción excesiva de arena y cascajo, pero las autoridades dicen no tener conocimiento. En sectores como Hicaco y Bahía Honda, en Soná; Reina, Cocal Tupido y Malena, en Mariato y Pixvae, en Las Palmas, en Veraguas se han dado pronunciamientos y hasta manifestaciones populares en contra de la extracción.

Lunes 29

Los nasos de Druy, en la provincia de Boscas del Toro, reclaman su derecho a sus tierras aduciendo razones de “ancestralidad”. Rogelio Cansarí, representante del Ministerio de la Presidencia; la gobernadora de Bocas del Toro, Esther Mena de Chui; los directores regionales del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda, en conjunto con Raymundo González, funcionario de la Defensoría del Pueblo, y miembros de la Policía Nacional sostuvieron un diálogo con un grupo de nasos para ver la posibilidad de una reubicación. Pero, según los nasos de Druy, los alrededores son áreas pantanosas e insalubres para el asentamiento humano, por lo que insistirán en mantenerse en el lugar.

Martes 30

El fiscal segundo superior, Franklin Amaya, solicita el llamamiento a juicio y la condena del empresario Juan Gabriel Araúz Anguizola, por el supuesto delito ecológico, al construir un canal que conecta el área del proyecto hotelero de playa Las Olas con el estero El Jobo, que es parte del área protegida Refugio de Vida Silvestre de Playa La Barqueta, en la costa pacífica de la provincia de Chiriquí. La fiscalía presentó una serie de pruebas que demuestran que con la construcción del canal se dañaron varios manglares, por el dragado que se llevó a cabo.

Indígenas de la comunidad de San San Druy, del corregimiento del Teribe en el distrito de Changuinola, cierran la carretera cerca de finca 41 Guabito en Bocas del Toro, durante más de siete horas, en rechazo a la orden de arresto y desalojo que existe contra los dirigentes de la comunidad. La orden la giró la alcaldesa de Changuinola, Virginia Ábrego Salina. La alcaldesa también destituyó al corregidor del Teribe, Jorge Gamarra.

Glosario De Siglas

ANA	Autoridad Nacional de Aduanas
ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente
ASEUPA	Asociación de Empleados Universitarios de Panamá
ASOPROF	Asociación de Profesores de la República de Panamá
CONTUA	Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas
COOSEMUPAR	Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
ISDETEC	Instituto Superior de Desarrollo Tecnológico y Comunitario
ISR	Impuesto Sobre la Renta
MEDUCA	Ministerio de Educación
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MJK	Movimiento de la juventud Kuna
MOP	Ministerio de Obras Públicas
PAP	Partido Alternativa Popular
SITRACHILCO	Cooperativa de Servicios Múltiples de la Puerto Armuelles Fruit Company
SUNTRACS	Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares.
UNACHI	Universidad Autónoma de Chiriquí

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.

Dirigido por Marco A. Gandásegui, coordinado por Jennifer Delgado Urueta, con la asistencia de Marina Ábrego.

Fuente: Diario La Prensa, Diario Panamá América, Radio Mía, Diario la Estrella de Panamá, Diario El Siglo, Diario Crítica Libre, Kaosenlared.net, FRENADESO, ASOPROF, Radio Temblor.

Julio 2009

Miércoles 1

El Estado no podrá continuar pagando los salarios a los 2 mil 800 obreros de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR). El presidente Ricardo Martinelli señala que este problema se tiene que resolver lo más pronto posible y que la única solución sería encontrar una empresa viable, que pueda solventar la actividad. “El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company (SITRACHILCO), Simón Lezcano, manifiesta que en varias ocasiones ha conversado con los emisarios del presidente Ricardo Martinelli. Añade que al nuevo gobierno se le otorgó el voto de confianza en beneficio de los obreros, pero “si vienen con medidas secas, se tomarán acciones en contra del Gobierno”.

Médicos del Ministerio de Salud (MINSA), que prestan sus servicios en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro en un programa de giras médicas, paralizan simultáneamente sus labores en protesta por la falta de pago de quincenas atrasadas. Los profesionales, a quienes se les adeuda hasta seis quincenas, reciben sus salarios del programa de salud financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, instituciones que entregaron 40 millones de dólares al MINSA para sufragar giras asistenciales a comunidades rurales alejadas, con población vulnerable. En David, Federico Ávila, director del MINSA, revela que la demora en el pago se debe a que la Contraloría no ha dado el refrendo necesario, por lo que les pidió paciencia. Otro tanto indicaron los funcionarios del MINSA en Veraguas.

Jueves 2

Los docentes de Veraguas piden en las calles que en el Ministerio de Educación se continúe con las investigaciones de corrupción, que se oficialice la restitución del dirigente magisterial Andrés Rodríguez y que se derogue la ley de descentralización municipal. Los educadores realizaron una marcha por la ciudad de Santiago hasta la gobernación de Veraguas, donde entregaron la resolución con sus peticiones. Segundo Vásquez, vocero magisterial, están mandando un mensaje claro “de no permitir abusos ni atropellos en contra de los dirigentes del país”. Además, señala que están rechazando todo acto de corrupción y exigiendo que se investigue hasta las últimas consecuencias.

El presidente de la república, Ricardo Martinelli, en medio del traspaso de mando de la Policía Nacional, anuncia que los comisionados tendrían un incremento en su salario de mil dólares, 650 dólares para los subcomisionados, 450 para los mayores, 350 para capitanes y 100 dólares de tenientes hasta agentes. Para Ebrahim Asvat, ex director de la Policía Nacional, este anuncio es de justicia para los uniformados y lo otro que se debe hacer es una depuración y profesionalizar al policía. Martinelli destacó la labor del director saliente, Francisco Troya, y públicamente dijo que le haría un ofrecimiento y que estaba seguro de que no lo rechazaría. Además, pidió a la procuradora Ana Matilde Gómez hacer las leyes que permitan castigar a los infractores. Gómez dijo que ella tiene iniciativas legislativas para códigos. Por otro lado, el jefe de la Policía entrante, Gustavo Pérez, en su intervención advirtió que no permitirá malos uniformados y que tendrán una lucha frontal contra el crimen.

Viernes 3

Un grupo de palancas (conductores) de taxis cierra por más de 20 minutos la vía Interamericana, en protesta al conocer que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) otorgó 80 cupos el pasado miércoles en la provincia de Chiriquí, mientras tomaba posesión el nuevo presidente, Ricardo Martinelli. En varias ocasiones, los conductores han estado denunciando la entrega de cupos a personas que, según ellos, no se lo merecen y a ellos (los palancas) que llevan más de 30 años no se los han otorgado. El dirigente de los palancas, Pedro Rojas, dijo que las autoridades tienen que explicar qué pasó con los cupos

que iban a recibir y que ahora observan que se los están dando a concesionarias de la región.

Empleados de la empresa Coca Cola de Panamá, en la provincia de Coclé, realizan un piqueteo frente a sus instalaciones. Alirio Prado, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Coca Cola, explicó que luego que la franquicia pasó a manos de una transnacional, los empleados no reciben a tiempo el pago de sus salarios, al igual que hay tardanza con la entrega de los sobres con el dinero. Una vez terminada la protesta, se intentó conseguir la posición del jefe de zona de la Coca Cola, en provincias centrales, Benjamín Ledezma, sin embargo, este, con un agente de seguridad, envió un mensaje de que no estaba autorizado para dar declaraciones sobre el problema.

Sábado 4

La marcha convocada por la Asociación de Profesores de la República de Panamá, a realizarse en Santiago de Veraguas, se suspendió luego de conocerse la formalización de la restitución del dirigente magisterial Andrés Rodríguez. Juan Ramón Herrera, secretario de la Asociación de Educadores Veraguenses, dijo que se había logrado lo que se buscaba.

Domingo 5

Los indígenas han abierto el debate sobre la ausencia de supervisión, por parte del Estado, del impacto en los bienes arqueológicos que pueden tener los proyectos hidroeléctricos que se construyen en Bocas del Toro y Chiriquí. Solicitan a la nueva administración de la Autoridad Nacional del Ambiente que revise los estudios de impacto ambiental (EIA) de esos proyectos. Jaime Caballero, miembro del Frente Nacional para la Defensa de la Seguridad Social (FRENADESO), dice que hay dudas sobre los EIA de los proyectos hidroeléctricos Baytún y Bajo de Mina, en el distrito de Renacimiento. “Son idénticos. Además, quien aparece como responsable del estudio de impacto arqueológico, presenta en el EIA idoneidad de técnico de ingeniería sanitaria con especialización en saneamiento y medio ambiente y no de arqueología”, dijo Caballero. Sin embargo, el Instituto Nacional de Cultura (INAC) certificó que la persona a la que alude Caballero sí es arqueólogo y está autorizado oficialmente para ejercer como experto. La antropóloga Luz Graciela Jolly señaló que lo ideal es que las empresas hidroeléctricas contraten arqueólogos para recuperar parte de las guacas o tumbas indígenas.

Lunes 6

Han pasado más de cinco años desde que la Asociación de Afectados por Químicos de Barú interpusiera una demanda en contra de empresas transnacionales, por el uso indiscriminado de químicos como el Fumazone y otros, y aún no reciben respuesta por parte de las autoridades judiciales. Sin embargo, continúan en su lucha para que los responsables resarzan por los daños a la salud, indica Mélida Cubilla, presidenta del gremio. Los afectados piden al nuevo gobierno que dé seguimiento a su lucha. Cubilla, afirma que hay

muchas personas enfermas con dermatitis, esterilidad, insuficiencia renal, faringitis, por contacto con productos químicos. Las personas afectadas también solicitan la construcción de viviendas para los trabajadores de las zonas bananeras, a fin de que no se expongan más a los químicos. Destacó que de acuerdo a un censo realizado por la organización, hay 542 personas afectadas en la provincia de Chiriquí, con un diagnóstico médico y que hasta el momento han fallecido 17 personas.

Miércoles 8

Al tomar el mando de la Gobernación de Chiriquí, Enrique Fernández, advierte a los trabajadores de COOSEMUPAR que no pueden ser sindicalistas de su propia empresa, y por lo tanto deben tomar una actitud de dueños y negociadores en cualquier reunión que se registre para recuperar la actividad bananera de Barú. Fernández, anuncia que se avecina un proceso de negociación entre COOSEMUPAR, el gobierno y la compañía que adquirirá la actividad, pero debe garantizarse la seguridad jurídica. “Los trabajadores son socios, dueños de la cooperativa, pero no pueden continuar siendo sindicalistas de su propia empresa, si persiste esa actitud, las bananeras de Barú se cerrarán”, advirtió Fernández.

Jueves 9

Dirigentes de la comunidad de Charco La Pava, del corregimiento de Valle Risco, en el distrito de Changuinola, deciden no enviar a sus hijos a la escuela como medida de protesta por la construcción de la hidroeléctrica Chan 75. Los indígenas no enviarán a sus hijos a dar clases en los planteles educativos Valle Libre y Charco La Pava, hasta que se detenga la construcción del proyecto hidroeléctrico. Las comunidades indígenas rechazan el proyecto porque las represas serán construidas cerca de las viviendas. Héctor López, dirigente de la comunidad, dice que los moradores están siendo afectados con la construcción de este proyecto por lo que exigen al gobierno que cumpla con la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de suspender esta obra.

Viernes 10

Los ambientalistas de Boquete y Dolega, exigen al nuevo gobierno que proceda a paralizar los más de 60 proyectos hidroeléctricos que se tienen en la provincia de Chiriquí y que realice una inspección de todos aquellos que no cumplen la protección del medio ambiente. Raquel Coba de Boyd, miembro de Colibrí, Asociación Ecologista de Panamá, manifiesta que han visitado los diferentes proyectos en Chiriquí, y algunos de ellos no cumplen con el estudio de impacto ambiental (EIA). Otros han pasado de mano en mano, o de empresario a empresario, lo que consideran como un abuso a la población. Por su parte, la Autoridad de los Servicios Públicos, encargada de entregar las concesiones hidroeléctricas, dijo a través de su vocero Luis Chamorro, que la entidad es respetuosa de las inversiones que se realizan, pero con justicia social.

Un grupo de campesinos del Comité Ambiental de la Sub Cuenca del Río Bulabá, en la provincia de Veraguas, presenta ante la Defensoría del Pueblo y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en Veraguas, una denuncia en contra de un proceso de adjudicación irregular de tierras ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Santa Fe y que se pretenden explotar por inversionistas extranjeros. Luz De Gracia, jefa de la oficina regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas, informó que los miembros del comité ambientalista presentaron la denuncia sustentada en que dentro de la zona de amortiguamiento del parque hay fuentes de agua, bosques primarios y secundarios que tienen que conservarse para el sostenimiento del ecosistema. Mientras tanto, Verónica Vernaza, asesora legal de ANAM en Veraguas, confirma que a este despacho también llegó la denuncia sobre la adjudicación de estas tierras y ordenó una inspección por delitos ecológicos.

Domingo 12

Asociados de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR), solicitan al Gobierno que llame a una asamblea general de socios para entablar conversaciones que puedan llevar a salvar la cooperativa, sin la intervención del Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company (SITRACHILCO). “Es ilegal que el sindicato continúe tomando decisiones (de la cooperativa), porque este no puede negociar nada, además, la personería del sindicato está suspendida desde el mes de febrero, por tanto, somos los socios en su mayoría los que mandamos, por eso queremos que el presidente Ricardo Martinelli y sus ministros, llamen a una asamblea general para explicarles cómo pueden salvar a COOSEMUPAR”, afirma un obrero que prefirió omitir su nombre. Por su parte, el secretario general del SITRACHILCO, Simón Lezcano, dice que una reunión que tendrá lugar hoy en las oficinas del sindicato es para coordinar un plan de seguridad para las bananeras.

Lunes 13

Padres de familia, docentes y estudiantes del colegio Abel Bravo de la ciudad de Colón, se toman las instalaciones del municipio, para solicitar al alcalde del distrito su intervención en la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales que enfrenta el plantel. El colegio Abel Bravo lleva ya tres semanas de paro decretado por los padres, quienes exigen al Ministerio de Educación una evaluación de las condiciones de la estructura del colegio, pues temen por la seguridad de sus hijos. Romualdo Góndola, dirigente de los docentes del Abel Bravo, indica que la semana pasada, recibieron la visita del personal del Sistema Nacional de Protección Civil, y están a la espera de un informe de parte del ministerio y los estamentos de seguridad que les certifiquen si las instalaciones del colegio se pueden usar o no.

Martes 14

Los transportistas de carga de Costa Rica manifiestan que paralizarán el transporte de carga internacional por la frontera de Paso Canoa, a partir de mañana; ello en protesta por el cobro “indebido” en los recintos aduaneros privados que hay en la zona, confirma Juan Carlos Segura, vocero de los camioneros. Los camioneros señalan que ellos deben pagar esos costos de sus viáticos porque no se detalla en un corretaje de aduanas previo, por lo que las ganancias del transportista han mermado. Señalan que en otros países de Centroamérica, hay recintos aduaneros del Gobierno donde no hay que pagar por los servicios de revisión.

Miércoles 15

Los ambientalistas de Colibrí, Asociación Ecologista de Panamá, cierran por una hora la vía que conduce hacia el distrito de Boquete a la altura del proyecto hidroeléctrico Planeta I, Salto de Francolí, para exigir a las autoridades que saquen la maquinaria de este proyecto que está afectando el río David y que ha procedido a derrumbar árboles que ellos habían sembrado a lo largo de este afluente. Raquel Coba de Boyd, miembro de Colibrí, dice que el problema es que las autoridades no dan una respuesta definitiva con respecto a las hidroeléctricas, pues en la reunión pasada, el gobernador de Chiriquí, Enrique Fernández, les comunicó que este proyecto de Salto de Francolí estaba suspendido, sin embargo, ya entró maquinaria para cortar el río, lo que indica que el proyecto sigue adelante.

Jueves 16

Tras una reunión sostenida con las autoridades regionales de la Dirección de Aduanas, los transportistas de carga de Centroamérica logran la suspensión de los cobros por los servicios aduaneros en los recintos privados que hay en la frontera de Paso Canoa, limítrofe con Costa Rica, confirma Juan Carlos Segura, presidente de los transportistas costarricenses. Segura, indica que la medida de paralizar el transporte de carga internacional, fue suspendida inmediatamente después de que se llegó a un acuerdo con las empresas que aplicaban el cobro a los camioneros por el ingreso de mercancía a Panamá.

Viernes 17

Un grupo de alcaldes y representantes de corregimiento de Veraguas realiza una marcha de protesta por las calles de la ciudad de Santiago, para exigir que se mantenga la vigencia de la Ley 37 de descentralización de la administración pública, aprobada en los últimos días del presidente Martín Torrijos. Las autoridades municipales, con pancartas en mano, empezaron la protesta pacífica luego de culminar la primera reunión mensual del consejo provincial de alcaldes y representantes de Veraguas, en donde también hicieron planteamientos públicos en apoyo a esta legislación. Julio Vivies, presidente del Consejo Provincial de Veraguas, advierte que las protestas de los alcaldes y representantes podrían seguir o suspenderse en la medida en que el nuevo gobierno implemente la nueva ley.

Sábado 18

Más de 50 ‘palancas’ (conductores) de taxis cierran por una hora la vía Interamericana, para exigir a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) la nulidad y revisión de los nuevos certificados de operación que se entregaron el pasado primero de junio en la provincia de Chiriquí, por considerar que son ilegales. El nuevo director de la ATTT en la provincia, Felipe Batista, dice que ya se reunió con las concesionarias para hablar del problema y que los cupos fueron entregados en regla.

Domingo 19

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, interviene para lograr el reintegro de los funcionarios del Municipio de Colón y la suspensión de las destituciones de parte del alcalde Dámaso García. En momentos en que un vocero del equipo de trabajo de García anunciaba la orden de desalojo en contra de los dirigentes de la Asociación de Funcionarios de esta institución (Analida Wilkins, David Pérez y otros); el gobernador Pedro Ríos, llegó a reintegrar a todos los destituidos. Ríos, informa al grupo de funcionarios que se encontraban reunidos en el salón Pedro Prestán que como “autoridad máxima de la provincia y designado por el presidente Martinelli para solucionar este problema”, ordenaba el reintegro de todos. A raíz de esa intervención los empleados suspendieron el paro de más de 24 horas que habían iniciado y recibieron sus cheques correspondientes a la quincena del 15 de julio. El jueves en la mañana unos 40 empleados habían sido destituidos de sus puestos. Algunos tenían hasta 30 años de servicio.

Lunes 20

Más de mil adultos mayores de 70 años esperan en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), pues esta semana inicia el proceso de captación de datos del Proyecto “100 para los 70”, que permitirá a adultos con 70 años y más edad, que no tienen pensión ni jubilación, recibir un subsidio estatal de 100 dólares mensuales. Dilia Cornejo, directora del MIDES en Penonomé, señala que ya tienen todo preparado para comenzar a recibir a los adultos mayores a partir de las siete de la mañana, quienes solo tienen que llevar su cédula de identidad personal, además de una copia. La directora fue enfática en señalar que la única entidad encargada de hacer la captación de datos es el MIDES; ya que los diputados, alcaldes y representantes no están autorizados para ello, ni para hacer encuestas en las casas.

Martes 21

Un cierre de la vía Interamericana protagonizaron en Río Hato los obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), para exigir justicia a los obreros que han muerto en varias situaciones aún no esclarecidas. Samuel Echanmartín, dirigente sindical, dice que decidieron realizar una jornada de protestas para exigir a las autoridades se haga justicia en caso de los asesinatos y muertes de trabajadores como Iromi Smith, Osvaldo Lorenzo y Luigi Argüelles.

Miércoles 22

Empresarios bananeros independientes de Changuinola, Bocas del Toro, pedirán equiparación con relación al subsidio que recibe de parte del Gobierno la Cooperativa de Servicios Múltiples y Similares de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR). Luis Alberto Núñez, productor independiente de banano en la provincia de Bocas del Toro, dice que esta semana procederá a cerrar 123 hectáreas, frente a la crisis que viven los bananeros en la provincia. Daniel Guerra, dirigente sindical, dice que existe preocupación en los trabajadores bananeros independientes, ante el cierre de una empresa bananera, por la ola de despidos que trae consigo en las diferentes empresas. Los trabajadores llevarán a cabo, en los próximos días, una asamblea general, para exigir al Gobierno que aplique la misma medida de subsidiar los salarios, así como se ha hecho con los trabajadores de COOSEMUPAR.

Jueves 23

El dirigente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Máximo Gómez, anuncia que su organización podría decretar un paro nacional de labores si se aprueban las reformas a la ley de Carrera Administrativa que se discute en la Asamblea Nacional. Gómez advierte que este fin de semana la FENASEP “trancará el país de frontera a frontera... y evitaremos que ese documento sea aprobado”. El dirigente le dice que la FENASEP rechaza el proyecto de ley que reforma la Carrera Administrativa porque tiene la intención de "dejar sin trabajo a 45 mil jefes de hogar panameños".

Viernes 24

Los usuarios del mercado de Penonomé, en la provincia de Coclé, señalan que su vocero, Luis Samaniego, negocia el incremento del impuesto que pagan mensualmente los vendedores, sin consultarles. Los vendedores de verduras, frutas y legumbres están en contra de la propuesta de incrementar el impuesto de 10 dólares por mes a 16 dólares. Los usuarios aducen que el impuesto está demasiado alto y no lo pueden pagar.

Sábado 25

Los trabajadores de Finca Higuito, en la zona bananera del distrito de Barú, han solicitado al presidente de la República Ricardo Martinelli la realización de una asamblea general de asociados de la Cooperativa de Servicios Múltiples de la Puerto Armuelles Fruit Company (COOSEMUPAR) a fin de tomar acciones que salven la actividad bananera en esa región. Los trabajadores piden al Gobierno que aplique de forma inmediata la fertilización de las plantaciones con urea y que se reanude el riego aéreo.

Domingo 26

El Gobierno Nacional anuncia que aportará 1.5 millón de dólares para mantener a flote la producción bananera. El anuncio se dio durante una reunión en la que participaron trabajadores bananeros del distrito del Barú, quienes expusieron a las autoridades la difícil situación económica y social por la que atraviesan debido al declive de la actividad. Víctor Manuel Pérez, ministro de Desarrollo Agropecuario, precisó que la propuesta que tiene el Gobierno para salvar la producción, comercialización y exportación de banano, es que el Estado aporte el 50% del capital y alguna empresa invierta el otro 50%. La partida aprobada de un millón y medio de dólares es para el pago del servicio de energía eléctrica y salarios, explicó. En tanto, Jaime Guerra e Isaías Bonilla, trabajadores de finca Higuito, coincidieron en que la situación en las fincas bananeras de Barú es crítica y se necesita una inyección económica urgente.

Martes 28

Miembros de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) realizan una marcha, que parte del Plaza Porras hacia la Presidencia de la República, para manifestarse en contra de las reformas a la Ley de Carrera Administrativa, recién aprobadas en tercer debate en la Asamblea Nacional, con 44 votos a favor y 23 en contra. Una vez en la Presidencia, representantes de la federación fueron atendidos por una comitiva gubernamental encabezada por la viceministra de la Presidencia, María Fábrega, a quien le entregaron un pliego de peticiones. Ésta constituyó la primera marcha en contra del gobierno del presidente de la República, Ricardo Martinelli. Y es que la FENASEP ha pedido a Martinelli que vete la Ley aprobada este lunes en la Asamblea, ya que según ha manifestado el gremio, la medida afectará los puestos de trabajos de 30 mil servidores públicos. Los servidores públicos coreaban consignas y desplegaban pancartas en contra de la polémica reforma. Además, una delegación de los manifestantes quemó un muñeco con la imagen de la directora de la Carrera Administrativa, Mariela Jiménez. La marcha se desarrolló con normalidad. Sin embargo, durante su paso por la Asamblea Nacional, varios de los manifestantes intentaron derribar una muralla que habían colocado como medida de seguridad.

Jueves 30

Los ambientalistas de Boquete califican como descabellada la nueva propuesta del Gobierno de un canal seco que uniría Chiriquí con Bocas del Toro. El Gobierno analiza la construcción de una nueva carretera, para unir las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. El canal seco pasaría por el Parque Internacional La Amistad (PILA) y el Parque Nacional Volcán Barú, el cual es parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Amistad y Patrimonio Mundial de la Humanidad. El ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, dijo que “en todo el mundo se tienen estas zonas protegidas y se pueden hacer infraestructuras cumpliendo con los lineamientos ecológicos”. Para los ambientalistas, “esta gran idea del siglo no es más que una descabellada ignorancia y total desconocimiento del tema ambiental y de la magnitud de especies de valor universal que atesoran en este importante

parque binacional que compartimos con Costa Rica”, aseguró el presidente de la Asociación para la Conservación de la Biosfera, Ezequiel Miranda.

Viernes 31

Estudiantes, padres de familia y docentes del Centro de Educación Básica General Manuel Patiño de Antón, en la provincia de Penonomé, cierran los cuatro paños de la vía Interamericana, en demanda de mejoras a las condiciones de esta escuela. Cerca de 700 estudiantes participan en la protesta. Jorge Rodríguez, padre de familia, señala que en esta escuela hay cerca de mil estudiantes y solo funciona un baño para niños y uno para niñas, no hay aula máxima, no hay sillas, los tableros y los pupitres están dañados y aunque han hecho solicitudes al Ministerio de Educación, a la fecha no tienen respuestas. Ligia Guardia, docente, señala que lo que menos quiere la comunidad educativa de este plantel es afectar a terceros con protestas en las calles, sin embargo ya están desesperados porque no hay respuesta.

Glosario De Siglas

ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente
ATTT	Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
COOSEMUPAR	Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles
FENASEP	Federación Nacional de Servidores Públicos
FRENADESO	Frente Nacional para la Defensa de la Seguridad Social
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
INAC	Instituto Nacional de Cultura
MEDUCA	Ministerio de Educación
MIDES	Ministerio de Desarrollo Social
MINSA	Ministerio de Salud
PILA	Parque Internacional La Amistad
SITRACHILCO	Cooperativa de Servicios Múltiples de la Puerto Armuelles Fruit Company
SUNTRACS	Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares.

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.

Dirigido por Marco A. Gandásegui, coordinado por Jennifer Delgado Urueta, con la asistencia de Marina Ábrego.

Fuente: Diario La Prensa, Diario Panamá América, Radio Mía, Diario la Estrella de Panamá, Diario El Siglo, Diario Crítica Libre, Kaosenlared.net, FRENADESO, ASOPROF, Radio Temblor.

Agosto 2008

Viernes 1

Empleados del Ministerio de Salud, agrupados en la Asociación de Funcionarios de Salud (AFUSA), se encuentran alertas y a la espera de la respuesta de la ministra de Salud, Rosario Turner, para que las promesas de aumento de salario sean acordes con sus

aspiraciones. Jorge Luis Morales, presidente de la AFUSA, dice que de no obtener una respuesta satisfactoria, en asamblea general decidirán si se acogen a un paro de labores a nivel nacional

Sábado 2

En Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, ciudad asociada con la exportación de banano desde la primera mitad del siglo pasado, se denuncia el desalojo por parte de autoridades del Ministerio de Salud de los asistentes a una actividad de docencia ambiental que se realizaba en el Policentro de salud. Entre los asistentes a la actividad educativa se encontraban dirigentes comunitarios, ambientalistas, obreros del SUNTRACS y otros miembros de la Coordinadora Provincial de Lucha de la provincia de Chiriquí.

Lunes 4

Los moradores de las comunidades de El Salto, Altos del Mamóní, La Zaina, San José de Madroño, Real del Gato, Corpo Cristo Arriba, Corpo Cristo Abajo, Gaspar Sabana, Charraré, El Valle, La Loma del Paragüito, Bonete y Las Margaritas en la Provincia de Panamá dirigen una carta al alcalde del distrito donde manifiestan la honda preocupación, luego de enterarse del proyecto de hidroeléctrica que viene tramitando la compañía Elektra Noreste S. A. y piden un decreto alcaldicio que declare al Río Mamóní como patrimonio cultural e hídrico, a fin de que cesen los proyectos que atentan contra este patrimonio natural

Martes 5

Los jubilados de la provincia de Chiriquí, realizan una caminata desde el Parque de Cervantes a la Policlínica Gustavo A. Ross, en David. La misma se realiza como protesta por la falta de medicamentos, la mala atención, las largas filas que desde tempranas horas hacen los asegurados quienes muchas veces no logran obtener cupos.

El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) piden, por separado, a la Autoridad Nacional del Ambiente que se multe con 10 millones de balboas a la empresa Minera Petaquilla. El CIAM pide, además, la suspensión definitiva del proyecto minero. El CIAM sustenta su solicitud en el hecho de que el proyecto minero ha afectado bosques, suelos y cuencas hidrográficas importantes así como el Corredor Biológico Mesoamericano.

Miércoles 6

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura rechaza la intención del Gobierno de “obligar” al sector privado a dar regalías a sus trabajadores, tal como se hizo con los funcionarios. Reunidos en una asamblea extraordinaria, el gremio recalca su preocupación

por el emplazamiento de 15 días que les hizo el presidente, Martín Torrijos, a los empresarios para que tomen acciones de apoyo a los trabajadores ante el aumento de la inflación, plazo que vence el próximo martes. En la reunión, en la que se da cortesía de sala al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), el gremio pide “flexibilidad y medidas voluntarias dentro de la capacidad de cada empresa” y plantea la conveniencia de empezar conversaciones para discutir un nuevo Código de Trabajo.

Lunes 11

Los ambientalistas anuncian que la ACP, con la venia de la ANAM, ha dado contratos de reforestación a dos empresas consultoras, para reforestar en compensación por el Impacto Ambiental de la Ampliación del Canal, que afecta más de 1800 hectáreas en la Cuenca. Estos primeros contratos representan el plantío de más de 300 mil arbolitos de especies nativas. Pero no en el área del impacto ambiental, sino en Campana y en Chiriquí.

Martes 12

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) se suma a las voces que llaman a una huelga para exigir un aumento salarial general y el congelamiento de los precios de la canasta básica. Por otro lado, el FRENADESO anuncia que ultima los detalles de la Gran Marcha que tiene programada llevar a cabo este jueves.

Jueves 14

El Código de Trabajo paralelo que impulsan algunos sectores empresariales del país, busca modificar las obligaciones que tienen las empresas al momento de pagar indemnizaciones por despidos. Además pretenden que las empresas puedan hacer despidos cuando existan fluctuaciones en el mercado internacional que afecten las operaciones locales de una compañía. Los sectores obreros sostienen que la propuesta de los empresarios es de la época del “esclavismo”. Samuel Rivera, de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), rechaza la propuesta y señala que “si hoy con el Código como está, pocas empresas cumplen que será cuando lo tengan por ley”.

Docentes, trabajadores, estudiantes y médicos recorren la Avenida Central y la Avenida B en la ciudad capital. En una marcha multitudinaria hacia la Presidencia de la República, los gremios vuelven a entregar un pliego de peticiones—de 15 puntos—en el que piden un alza general de salarios y el congelamiento de los precios de los alimentos. La Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP) también participa en la marcha convocada por FRENADESO. Miles de panameños de todos los oficios marchan por las calles en contra de la política neoliberal y en defensa de los derechos sociales del pueblo. Dentro de las filas de ULIP, destacaron las delegaciones de ASEUPA (Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá), el Sindicato de la Coca Cola, el Movimiento de la Juventud Popular Revolucionaria MJP, la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social AECSS, la Federación Auténtica de Trabajadores FAT, Asociación de Educadores Veraguenses

AEVE, Unidad Estudiantil Revolucionaria UER, Pensamiento y Acción Transformadora PAT y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Educación, entre otros sectores populares. También participaron las formaciones partidarias de la izquierda: Partido Alternativa Popular, Partido de los Trabajadores Panameños PTP y el Partido del Pueblo.

Viernes 15

La mitad de las plantaciones de banano en el sector de Barú en la provincia de Chiriquí tienen sigatoka negra. Se han perdido B/ 6 millones en dos días por falta de electricidad en las fincas y solo se vende el 50% de la fruta en los mercados internacionales. Los obreros salen a las calles a protestar porque ven en peligro sus empleos ante la crisis que enfrenta la región. El asesor legal de COOSEMUPAR, Basilio Chong, declaró que “no se cobró lo que correspondía en su oportunidad, tampoco se hicieron efectivos los reclamos pertinentes. Las deudas de los comercializadores asciende a B/ 7 millones”.

Sábado 16

Los trabajadores de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR) regresan a laborar, luego de que el Gobierno otorgara un aporte de 1.8 millón de dólares para salvar la actividad bananera en Barú.

La actividad estaba suspendida desde el miércoles por falta de energía en las empacadoras y los obreros se tomaron la vía Paso Canoa-Puerto Armuelles desde el jueves. Nidia Medina, gerente interventora de COOSEMUPAR, informó que el Gobierno otorgó un aporte de millón y medio para que la cooperativa se mantenga mientras se cobran las deudas por la fruta vendida.

Domingo 17

El Comité de Defensa de los Barrios CODEBA, realiza una jornada de concienciación sobre la problemática del agua y sobre otras realidades sociales en el distrito de La Chorrera en la provincia de Panamá. El CODEBA, es una organización popular de solidaridad barrial que reúne a trabajadores, desempleados, jóvenes, amas de casa, jubilados, etc., cuyo norte es organizar y formar socio-políticamente al pueblo en la lucha contra el neoliberalismo.

Martes 19

El pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) es el detonante para que los grupos ambientalistas en la provincia de Chiriquí alcen su voz contra la proliferación de hidroeléctricas y las amenazas a las zonas protegidas en el occidente del país. “No hay monitoreo del respeto o violaciones a la naturaleza por las autoridades y el Gobierno le ha dejado las manos sueltas a las empresas

transnacionales promotoras de hidroeléctricas sin considerar los daños”, asegura Demetrio Miranda de la Asociación de Ambientalistas de Chiriquí.

Jueves 21

En una reunión en Coclesito, provincia de Coclé, el Comité pro Cierre de Petaquilla celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechaza el intento de Petaquilla Minerals de desconocer las leyes ambientales panameñas. El Comité reafirma su objetivo de exigir la aplicación de la máxima multa y el cierre de minera Petaquilla en todas sus manifestaciones. Propone llevar a cabo una evaluación ambiental integral para determinar la dimensión de los daños y perjuicios ocasionados por Petaquilla Minerals y exigir reparaciones e indemnizaciones tanto para las comunidades campesinas e indígenas afectadas, como para la Nación y el Estado panameño.

Viernes 22

Luego de un año del asesinato del obrero Osvaldo Lorenzo, los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) piden a las autoridades judiciales que se incluyan como acusados a los directivos de la empresa brasileña Odebrecht. Así lo indica el abogado del SUNTRACS, Antonio Vargas, quien destacó que están a la espera que el fiscal cuarto superior, Ramsés Barrera, emita la vista fiscal con el llamamiento a juicio de los implicados en este homicidio.

Sábado 23

Las organizaciones que integran la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo, reunidas en la Universidad de Panamá, fijan el 4 de septiembre como fecha para realizar una huelga de advertencia. “La huelga de advertencia se inserta dentro del plan de lucha escalonada de la Coordinadora de Lucha, para lograr que se inicie un diálogo serio y de verdad entre las autoridades (del gobierno) y los auténticos interlocutores populares sobre las 15 demandas presentadas en la Presidencia tras la marcha del pasado 14 de agosto”, plantea un comunicado de FRENADESO.

Lunes 25

La posibilidad de que se contrate mano de obra externa en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para manejar un trasbordador provoca el rechazo del sindicato de trabajadores del Canal de Panamá. El dirigente Felipe Joseph señala la preocupación de los trabajadores que la ACP licite la contratación de una empresa que maneje el trasbordador (ferry) en Colón sin tomar en consideración la existencia de personal capacitado en la ACP.

Martes 26

Como irresponsables califica el ministro de Educación, Salvador Rodríguez, a los docentes que participen en la huelga de advertencia de 24 horas pactada para el 4 de septiembre convocada por la Coordinadora Nacional de Lucha por el respeto a la vida y la dignidad del pueblo. Según Rodríguez, no se justifica la actitud de los educadores, porque a pesar de ser un año académico irregular, el gobierno ha dado respuestas a las solicitudes que han planteado. “Se aumentó el salario de movilización para aquellos que viven en áreas de difícil acceso, se otorgaron mil posiciones permanentes y se hizo un ajuste salarial de 160 balboas para los que forman parte de la planilla estatal”, detalla.

Miércoles 27

La Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional de Diputados aprueba, en una sesión extraordinaria en la que participan autoridades y grupos ambientalistas, presentar a primer debate, un proyecto de ley que restituye el artículo 11, eliminado de la Ley 44 de 2004, por la cual se creó el Parque Nacional de Coiba (PNC). La derogación de ese artículo –a través de la Ley 55 de comercio marítimo– fue calificada por el presidente Martín Torrijos, como un “descuido”. La legislación eliminó la prohibición de pescar atún con redes de cerco en el Pacífico panameño.

Jueves 28

Con la presencia de más de 30 agentes de la Policía Nacional se da la reconstrucción de la muerte del obrero del SUNTRACS All Iromi Smith. La reconstrucción comenzó cuando llegaron los agentes sindicados: Celso Madrid y Miguel Pérez, mientras que testigos y familiares de la víctima permanecen en un área alejada del perímetro permitido. Rosaura Rentería, madre del obrero, expresa su descontento por la presencia de tantos policías y encapuchados en el lugar.

Viernes 29

Se detuvo en David, Chiriquí, el obrero de la construcción, Carlos Villarreal, según informaron sus compañeros de trabajo. La denuncia fue recogida por el dirigente de SUNTRACS en esa región Jaime Caballero, quien agregó que se desconoce su paradero. Según la fuente, Villarreal se encontraba repartiendo volantes en la barriada San José cuando sorpresivamente unidades de la Policía Nacional procedieron a detenerlo. El trabajador fue introducido a la fuerza a un vehículo policial y no se supo más de su paradero.

Sábado 30

Los panameños podrán comprar sus productos en un supermercado que gestiona el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO). La Cooperativa de Consumo de CONATO (COCONATO), administradora de la iniciativa comercial, gestiona con el Instituto Panameño Cooperativo (IPACOO) su personería jurídica para luego construir el local. Según Alfredo Graell, coordinador de CONATO, el objetivo principal será comprarle directamente al productor para eliminar al intermediario.

Domingo 31

Virgilio Saldaña, presidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas de la provincia de Chiriquí, señala que los incrementos en el precio de los combustibles son trasladados a los consumidores, siendo los comercios los más beneficiados al final de la cadena. Los precios del petróleo continúan ejerciendo una influencia negativa en el costo final de los alimentos, a pesar de que el precio del llamado "oro negro" ha disminuido durante los últimos meses en el mercado internacional. Como consecuencia del alto costo del combustible, muchos productores han tenido que disminuir el número de hectáreas sembradas, alegando que los costos de producción se han elevado.

Glosario de Siglas

FRENADESO	Frente Nacional por la Defensa de los DD. Económicos y Sociales
AFUSA	Asociación de Funcionarios de Salud
CIAM	Centro de Incidencia Ambiental
SUNTRACS	Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción Similares
ANCON	Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza
CONATO	Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente
CGTP	Central General de Trabajadores de Panamá
COOSEMUPAR	Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura
ACP	Autoridad del Canal de Panamá
PNC	Parque Nacional de Coiba
AGROGALPA	Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá.
COCONATO	La Cooperativa de Consumo de CONATO
IPACOO	Instituto Panameño Cooperativo
ULIP	Unidad de Lucha Integral del Pueblo
ASEUPA	Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá
MJP	Movimiento de la Juventud Popular
AECSS	Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social
FAT	Federación Auténtica de Trabajadores
AEVE	Asociación de Educadores Veraguenses

UER	Unidad Estudiantil Revolucionaria
PAT	Pensamiento y Acción Transformadora
PTP	Partido de los Trabajadores Panameños
CODEBA	Comité de Defensa de los Barrios

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.

Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Marina Ábrego.

Fuente: La Prensa, Panamá América, Radio Mía, La Estrella de Panamá, El Siglo, Kaosenlared.net, suntracs.com, FRENADESO, ASOPROF, vagama.com y MJP Informa.

Septiembre 2009

Martes 1

Giovanni Ferrari, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, evita dar mayores detalles de las acciones que emprenderán mañana y pide al Gobierno que reflexione sobre la medida de cobrar impuestos, pues la misma contribuirá a aumentar el desempleo. Ferrari informa que la Zona Libre aporta a la nación millones de balboas a la tributación indirecta en hoteles y los puertos manejan contenedores. Sostiene que no llegan a ningún acuerdo con el Gobierno cuando se refieren a que han aceptado, ya que es “el Ejecutivo que a través de la Junta Directiva impone un alza de B/ 44 millones en impuestos a partir del 1 de septiembre”. En tanto, George Ng, presidente de la Cámara de Comercio de Colón, señala que apoyan las medidas de los empresarios, porque también se verán afectados.

Miércoles 2

Dos comisiones serán creadas por parte de la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA) para analizar el problema del transporte, tanto de la ciudad capital como del interior del país. Esta es la decisión de la reunión sostenida entre dirigentes de la CANATRA y representantes de la Comisión de Transporte del Gobierno, que dirige Jimmy Papadimitriu, en la que se acepta la utilización general del “GPS” para los 1,500 buses que operan en Panamá. Dionisio Ortega, presidente de CANATRA, señala que ahora cada presidente de piquera deberá ser más responsable con la nueva utilización de los “GPS”, así como de su mantenimiento. Por su parte, Sandra Escorcía, directora de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), señala que los transportistas interesados en participar del nuevo sistema, deben tomar un curso de capacitación que inicia este mes a un costo de B/ 10.00.

Jueves 3

Trabajadores de las bananeras independientes de la Bocas Fruit Company, de las empresas Corrugado Panamá, S.A. y Huancavilca se unen para cerrar la vía que comunica a Changuinola y Almirante en Bocas del Toro. Abel Becker, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines, dice que existen más de 800 trabajadores que son afiliados a este sindicato y que hace aproximadamente dos años se acogieron a la ley de la edad de jubilación calculada y, hasta el momento, la Caja de Seguro Social no les ha brindado una respuesta. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de Corrugado Panamá hace un llamado al Gobierno para que obligue a la empresa a negociar. Los obreros están dispuestos, pero es la empresa la que no quiere porque el objetivo es cerrarla para luego reabrir y así abaratar costo de mano de obra, y también eliminar el sindicato, manifiestan los trabajadores.

Diecisiete (17) estudiantes detenidos y varios vehículos con ventanas rotas, es el resultado de un enfrentamiento entre las unidades del Control de Multitudes de la Policía Nacional y los estudiantes del Instituto Profesional y Técnico de Colón. El enfrentamiento se registra cuando cierran la vía por espacio de media hora. Esta manifestación se da por la falta de respuesta a la solicitud de seis docentes, personal psicopedagógico, celadores, la finalización de la construcción de 14 aulas, entre otros. La Dirección Regional de Educación de Colón, a través de su director regional, Carlos Baltazar, manifiesta que lamenta que se esté utilizando a los estudiantes para salir a reclamar, con cierres, asuntos administrativos.

Viernes 4

Decenas de residentes de Garicín, en la provincia de Coclé, cierran la vía que lleva a esta comunidad, para exigir que las empresas agrícolas del área, Grupo Palacios, de Veraguas, y Azucarera La Estrella, ayuden a reparar la carretera, ya que el peso de sus camiones la ha dañado. Tanto el representante, Hilgan Alvarado, como Vilma Buitrago, presidenta de la junta local de Garicín, afirman haberse reunido ocho veces con estas empresas y no han cumplido. No obstante, en la tarde, las empresas empeñan su palabra de iniciar las reparaciones el 16 de septiembre.

Sábado 5

126 familias precaristas establecidas en terrenos privados en el sector No. 3 de Las Margaritas, distrito de Chepo, son forzadas por agentes policiales a desalojar, lo que provoca un enfrentamiento. El lanzamiento es ordenado por la corregidora del área, Patricia Falconett, quien indica que en julio pasado, cuando las familias llegaron al lugar, se les advirtió que no podían instalarse, pues eran tierras privadas hipotecadas por el Banco de Desarrollo Agropecuario. Durante el enfrentamiento, varios precaristas se resisten, siendo forzados por la Policía a abandonar el área y dismantelar las viviendas de zinc y madera que habían levantado. Mujeres y niños lloran por el forcejeo. Una joven embarazada se desmaya y es auxiliada por el personal del Sistema Nacional de Protección Civil. Varias personas son detenidas por negarse a desalojar el área.

Lunes 7

El Patronato del Hospital Integrado San Miguel Arcángel (HISMA) manifiesta su "repudio" a la intervención practicada por el Ministerio de Salud (MINSA) contra ese nosocomio. A través de una nota de prensa, el patronato rechaza la "forma arbitraria" como se produjo la intervención del MINSA, por el "caos que crea" y por las "transgresiones al Estado de Derecho". Señala además, que la decisión del MINSA se produce "sorpresivamente", a pesar de que el pasado viernes, en una reunión entre el Patronato, la dirección ejecutiva del hospital y CONSALUD, se acuerda cooperar ampliamente en el proceso de transición del modelo público-privado que rige en el hospital a uno publico-público. La reacción del patronato se produce horas después de que las autoridades del MINSA intervinieran al HISMA, aduciendo que la falta de recursos impide a sus administradores brindar la atención que requiere la población de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre; en la ciudad capital.

Lunes 8

Estudiantes y padres de familia del Instituto Politécnico Agropecuario (IPTA) Joaquina H. de Torrijos de Besikó, en la Comarca Ngnobe Buglé, convocan a un paro de labores educativas, hasta tanto el Ministerio de Educación (MEDUCA) separe a Pedro Batista de la dirección de este plantel. Felipe Bejerano, presidente de la Asociación de Padres de Familia, expresa que Batista no ha desarrollado la administración de la escuela de la mejor manera, y que incluso sigue sin dar a conocer en qué se han gastado los fondos económicos que ha generado la venta de ganado porcino y principalmente vacuno. Según cálculos de los padres de familias, estas actividades han generado ventas de alrededor de 15 mil dólares. Batista negó todos los señalamientos vertidos en su contra y dice que posee todos los documentos de las ventas y manejos que se han dado durante los últimos tres años de estar al frente de la administración de este plantel que acoge a más de 900 estudiantes.

Miércoles 9

El intenso calor producto de la falta de aire acondicionado, escasez de iluminación en los salones, baños dañados y enjambres de avispa, son suficientes para que los estudiantes del Colegio José Daniel Crespo (JDC) de Chitré, en la provincia de Herrera, suspendan las clases. Según denuncian, la empresa Plomelet, S. A., encargada de mejorar las aulas de clases, ha dejado los trabajos a medias. La directora del JDC, Rosemary de Donoso, señala que Plomelet, S.A. se ganó la licitación por el orden de los 243 mil. "La empresa inicia los trabajos en enero pero suspende labores. Ahora ha dejado todo abandonado sin dar una respuesta de si va a continuar o no con la obra", precisa.

Jueves 10

La directora regional del Ministerio de Educación (MEDUCA) de Chiriquí, Nelly Baumgardner, llega a un acuerdo para que los padres de familia y estudiantes del Instituto

Poli Técnico Agropecuario (IPTA) Joaquina H. de Torrijos de Soloy, levanten el paro. Alejandro Bejerano García, estudiante de cuarto año del IPTA, confirma que las clases se restablecen, y que Baumgardner les indicó que el director del plantel, Pedro Batista, será separado de su puesto. Batista señaló que son falsas las acusaciones en su contra. “Estoy tranquilo porque tengo todos mis papeles en orden, incluso de las ventas de animales del programa de ganado vacuno y porcino que funciona aquí” subraya.

Viernes 11

Zuleika Pinzón, presidenta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), resalta la necesidad de buscar fórmulas que logren una dinámica para enfrentar los efectos del cambio climático. Pinzón se reúne con los integrantes de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, para evaluar las repercusiones y alternativas que tiene la población por el cambio climático. Por su parte, Dalia Bernal -diputada presidenta de esta comisión legislativa- informa que retomará la discusión para crear las fiscalías ambientales. Estas fiscalías perseguirán los delitos que ocurran en el medio ambiente a lo largo y ancho del territorio nacional, así como los problemas de contaminación, expresa Bernal.

Sábado 12

La Asociación de Profesores de Panamá (ASOPROF), a cargo de Andrés Rodríguez, informa que los docentes pedirán un ajuste entre el 42% y 47% de sus salarios. Según Rodríguez, con la propuesta de Transformación Curricular se les impone tareas adicionales a los educadores. "Las horas de clases serán de 50 minutos, cuando antes eran de 40 minutos, por lo que el docente tendrá que trabajar más", indica Rodríguez. Por otro lado, unos 500 docentes aún no han podido cobrar sus quincenas, a pesar de que el MEDUCA anunció esta semana que existe la partida para el pago de sus emolumentos. Para Juan Ramón Herrera, dirigente de la Asociación de Educadores Veraguenses (AEVE), esta situación ha obligado a algunos docentes a pedir dinero prestado. Herrera explica que dentro de este grupo aún faltan 200 docentes de áreas de difícil acceso que no han cobrado, agravando su situación.

Lunes 14

Alrededor de 100 trabajadores bananeros de la finca San Antonio, ubicada en el corregimiento de Nuevo México, distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, inician una huelga por el incumplimiento del pago de la cuota obrero-patronal a la Caja de Seguro Social (CSS). Marquito Montezuma, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de las Bananeras Independientes de Chiriquí (SITRABICH), señala que debido a la difícil situación económica que atraviesan los empresarios "se ha dejado de pagar la deuda a la CSS y es por ello que los trabajadores y sus familiares no pueden recibir atención médica". La Finca San Antonio es una de las tres empresas que subsisten en la zona, luego de que

unas 11 fincas cerraran por la falta de liquidez y que fueran rematadas por los bancos y entidades financieras. La huelga se hace efectiva a partir de esta mañana.

Martes 15

Los miembros del Movimiento de Desempleados de Colón (MODESCO) se encuentran frente a la Presidencia de la República gritando consignas al gobierno de Ricardo Martinelli para que atienda sus peticiones. Los manifestantes, con pancartas en mano, llegan al lugar tras realizar una marcha que partió esta mañana en la basílica menor Don Bosco, en Calidonia. MODESCO pide que se construya un nuevo hospital para la ciudad de Colón y barriadas de interés social.

Miércoles 16

El sector obrero sustenta ante la Comisión de Salario Mínimo, la necesidad de establecer un salario base de B/ 650.00, y advierte que se mantendrá alerta ante la posibilidad de que se les otorgue un sueldo mucho menor. Edgardo Voitier, representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), ante la mesa de Salario Mínimo precisa que la cifra “no es negociable” y que según estudios realizados, el costo de la vida se ha incrementado de manera importante. “En Panamá no se puede vivir con B/ 400.00 ni con B/ 500.00 al mes”, dice el dirigente.

Jueves 17

Integrantes de diversas agrupaciones de la comarca Ngobe Buglé inician una marcha de 500 kilómetros, desde Quebrada de Guabo hasta la ciudad de Panamá. Los indígenas manifiestan que la protesta busca exigir “respeto para los miembros de la etnia Ngobe Buglé y que los proyectos hidroeléctricos y mineros sean consultados con ellos”. El destino final de los indígenas es la Asamblea Nacional de Diputados, donde anuncian que expondrán “las arbitrariedades cometidas en la adjudicación de los proyectos hidroeléctricos y mineros”.

Viernes 18

La quema de llantas que forman trabajadores de la Gran Terminal de Transporte Centenario, S.A., en Colón, causa un tranque en la hora "pico" del tránsito vehicular. Los manifestantes se quejan de que los presidentes de las 13 rutas de buses que usan a diario esta terminal se niegan a pagar el zarpe. Mariana Janet, funcionaria de la terminal, acusa directamente al gobernador de la provincia de Colón, Pedro Ríos, de “atentar” contra sus salarios al autorizar a los presidentes de las rutas de buses la suspensión del pago del zarpe. El administrador judicial de la terminal de buses, Rogelio Aguirre, indica que “en una reunión en la Gobernación, donde no fui invitado, se decidió el no pago del zarpe por un problema de derechos con los antiguos administradores”. Al respecto, Ricardo Brenes,

presidente de la ruta Colón-Margarita y el único de las 13 rutas que se presenta al lugar de los hechos, manifiesta que los transportistas están defendiendo sus derechos negándose al pago del zarpe.

Sábado 19

La dirigencia de la Asociación de Educadores Veraguenses (AEVE) le da un ultimátum a la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien no soluciona los problemas que enfrentan los docentes que tienen que ir a trabajar a lugares de difícil acceso. Tras el encuentro, la AEVE informa que si antes del próximo 25 de septiembre la ministra Molinar no firma el resuelto que crea la comisión para la “Optimización del Proceso Educativo en Áreas de Dificil Acceso”, se convocará un nuevo paro de labores en las zonas apartadas. Las zonas que apoyarían el paro son Darién, Bocas del Toro, Veraguas y las comarcas Ngobé-Buglé y Kuna Yala.

Domingo 20

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reconoce que los docentes están “mal pagados” ya que se le está pidiendo que construyan una mejor sociedad. Sin embargo, Molinar reconoce que no es el momento para pedir un aumento de salario. En el programa Debate Abierto Dominical, Molinar dice que antes de un alza de salario es necesario “ofrecerles (a los docentes) una mejor oferta” de lo que el Gobierno va a hacer, pero sobre todo, “cumplir para que la sociedad nos crea”. Solo en ese momento estaremos listos para hablar de una mejora salarial, agregó Molinar. Los integrantes de la Asociación de Profesores de la república de Panamá (ASOPROF) han manifestado recientemente que quieren un aumento salarial.

Lunes 21

Un grupo de usuarios de los taxis “pirata” (no están legalizados para ofrecer este servicio) realiza una protesta en la calle 25 de Calidonia, en la ciudad capital, para mostrar su descontento por los operativos que realizan las autoridades para sacar de circulación a estos vehículos. Varios de los manifestantes aseguran que los “taxis pirata son la mejor alternativa que tienen para llegar de regreso a sus hogares”. Al lugar llegaron policías para tratar de convencer a los manifestantes de que abrieran el paso vehicular. En tanto, el Sindicato de Conductores y Automotores de La Chorrera había anunciado que destinaría parte de su flota a ofrecer el servicio de transporte desde la Plaza 5 de Mayo para contrarrestar el servicio de los taxis ‘piratas’.

Martes 22

Juan Carlos Salas, dirigente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) en provincias centrales, pide a la ministra de Trabajo, Alma Cortés, que resuelva el problema de los trabajadores del proyecto del Mercado de Marisco

de Antón (MMS), a la cual la empresa encargada de la obra les adeuda dinero. Salas dice que la Constructora MMS les debe a unos 30 trabajadores quincenas atrasadas, liquidaciones y los pagos del décimo tercer mes. El proyecto debió construirse en un periodo de 90 días, sin embargo, ese periodo venció y solo tiene un 40% de avance, afirma el dirigente sindical.

Miércoles 23

La corregidora (autoridad de Policía municipal) de San Felipe tiene la orden de desalojo de los miembros del pueblo indígena naso que tiene tres semanas de haber levantado un campamento de la Plaza Catedral de la ciudad de Panamá. El presidente Ricardo Martinelli, ha resultado ser intolerante contra la protesta pacífica del pueblo indígena Naso, que reivindica el derecho sobre sus territorios secuestrados por un empresario ganadero en la provincia de Bocas del Toro. Los nasos han denunciado que el gobierno panameño no ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza los derechos de los pueblos indígenas.

Jueves 24

La Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) denuncia que el actual gobierno ha destituido a unos 3 mil funcionarios. La FENASEP se queja, además, de la gestión de Mariela Jiménez, directora de la Carrera Administrativa. Recientemente, Horacio Rodríguez, secretario de defensa de FENASEP, argumenta que tienen registros de 500 funcionarios que han sido despedidos en los últimos días. La mayoría argumenta despido por motivos políticos.

Viernes 25

El Comité Pro Rescate de la isla de Bocas del Toro lleva a cabo una reunión con la organización conocida como Fuerzas Vivas. En un comunicado dan un plazo de 48 horas hábiles al gobernador de la provincia, Simón Becker, para que se les dé una respuesta a los diferentes problemas de la comunidad. Eustorgio Fuente, miembro del Comité Pro Rescate de la isla de Bocas del Toro, dice que se redujeron las calles a más de un metro y nunca se informó. Además, han demorado la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y el tanque de reserva de agua de Mimitimbi.

Sábado 26

La Cámara Nacional de Transporte (CANATRA) rechaza el proyecto de ley que fusiona la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en una sola institución. En una reunión que se realiza en Coclé, todas las organizaciones inscritas en la CANATRA deciden solicitar una revisión al proyecto. Dionisio Ortega, presidente de la CANATRA, expresa que no están en contra de la fusión del ministerio. Se oponen a los artículos que perjudican a los transportistas.

Domingo 27

El Comité de los Familiares de Víctimas del Envenenamiento con Dietilenglicol solicita al actual Gobierno una reunión para exponer sus peticiones, en vista del posible aumento de personas afectadas por consumir el jarabe envenenado. Gabriel Pascual, coordinador del Comité, expresa que tienen conocimiento de que el Gobierno instaló una nueva comisión para discutir el tema, encabezada por los ministros de Salud, Franklin Vergara, de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu y el director designado de la Caja de Seguro Social, Guillermo Sáez-Llorens.

Lunes 28

Los ambientalistas de la provincia de Chiriquí denuncian que el río David está siendo destruido por la construcción de una hidroeléctrica en este afluente y hacen un llamado de atención al presidente Ricardo Martinelli. Raquel Coba de Boyd, miembro de la agrupación Colibrí, Asociación Ecologista de Panamá, afirma que el río David está siendo “destruido por la empresa Saltos del Francolí, que se ha valido de muchas artimañas para implantar el proyecto hidroeléctrico Los Planetas 1”. Indica que desde que se inició, el proyecto está destruyendo el río.

Martes 29

Docentes del colegio José Daniel Crespo, de Chitré, provincia de Herrera, continúan con el paro de labores que alcanza su quinto día, sin obtener respuesta por parte de las autoridades educativas. Los docentes paralizan labores para que se concluya y se revise si la remodelación de siete aulas y sanitarios se ajusta a los pliegos de cargos. A través de un comunicado, la directora regional de Educación de Herrera, Omayra de Moreno, señala que la empresa Plometec, encargada de estas obras, tenía fecha hasta el 14 de septiembre, pero no cumplió. “El contratista no cumplió y automáticamente la empresa será multada con el 10 por ciento que no concluyó”, puntualizó.

Miércoles 30

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite una demanda en contra del Estado panameño por violaciones a los derechos humanos del pueblo indígena ngobe que se opone a la construcción del proyecto hidroeléctrico CHAN 75 en Bocas del Toro. La demanda es presentada por los organismos no gubernamentales Cultural Survival, de EEUU y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo de Panamá, en representación de las comunidades indígenas. Según la demanda, el Estado panameño viola la Convención Americana de los Derechos Humanos, la cual argumenta que las comunidades indígenas han sido desalojados de sus comunidades de manera forzosa y sin su consentimiento.

Glosario de Siglas

AEVE	Asociación de Educadores Veraguenses
ASOPROF	Asociación de Profesores de la República de Panamá
ATTT	Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
CANATRA	Cámara Nacional de Transporte
CONATO	Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
CONSALUD	Coordinadora Nacional de la Salud
CSS	Caja de Seguro Social
FENASEP	Federación Nacional de Servidores Públicos
GPS	Global Position System
HISMA	Hospital Integrado San Miguel Arcángel
IPTA	Instituto Poli Técnico Agropecuario
IPT	Instituto Politécnico
JDC	José Daniel Crespo
MEDUCA	Ministerio de Educación
MINSA	Ministerio de Salud
MODESCO	Movimiento de Desempleados de Colón
MOP	Ministerio de Obras Públicas
OIT	Organización Internacional del Trabajo
SITRABISH	Sindicato de los Trabajadores de las Bananeras Independientes de Chiriquí
SUNTRACS	Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares.
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.

Dirigido por Marco A. Gandásegui, coordinado por Jennifer Delgado Urueta, con la asistencia de Marina Ábrego.

Fuente: La Prensa, La Estrella de Panamá, El Siglo, Crítica Libre, Panamá América.

Fuentes Alternas: Kaosenlared.net, FRENADESO, ASOPROF, vamaga.com., AEVE noticias, Oilwatch Info Panamá.

Octubre 2009

Jueves 1

Para el dirigente del Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, Gabriel Pascual, la administración del ex director de la Caja de Seguro Social (CSS), René Luciani, es mediocre. “En la administración de Luciani no hubo ni la voluntad ni la capacidad para resolver los problemas relacionados a mejorar las infraestructuras y las atenciones” a los asegurados, explica Pascual. Las declaraciones de Pascual se originan luego de la controversia surgida al entregarle el ministro de Salud, Franklin Vergara, una placa de reconocimiento a Luciani.

Viernes 2

Alrededor de 80 mujeres, acompañadas de sus hijos e hijas, marchan hacia Puerto Armuelles en la provincia de Chiriquí, para pedir al Gobierno que pague las quincenas adeudadas a los trabajadores bananeros. Además, piden que se resuelva el problema del manejo de las fincas productoras de la fruta. “La situación en Barú es crítica, porque no hay dinero para comprar los alimentos en las casas de dos mil 800 trabajadores”, aseguran las manifestantes, quienes llevan pailas y pancartas durante la protesta.

Sábado 3

Un total de 10 personas que participaban en la protesta pacífica contra la destrucción de comunidades del pueblo Naso en la provincia de Bocas del Toro, son detenidas. Los arrestos se producen en la Plaza Catedral de la ciudad de Panamá, lugar donde los manifestantes han permanecido desde hace seis meses, cuando los protestantes trataban de descansar encadenados a los bancos del gacebo. Entre los detenidos hay 8 indígenas Naso y dos indígenas Ngobe, quienes son acusados de desacato. Los dos últimos se habían incorporado en solidaridad desde la caminata de la Movilización Nacional Indígena, Campesina y Popular. Entre los detenidos se destacan los dirigentes Naso, Eliseo Vargas y Lucho Gamarra.

Domingo 4

Los 8 indígenas Naso y los 2 Ngobe arrestados en la madrugada del sábado salen libres a altas horas de la noche, luego de estar arrestados ilegalmente, sin respeto a los derechos fundamentales ni justificación de derecho posible. “Comienza el segundo round”, augura uno de los liberados, consciente de que la lucha por el territorio Naso y, en general, por la dignidad de indígenas y campesinos panameños no ha hecho sino comenzar. Con la convicción intacta, tres de los liberados se incorporaron inmediatamente a la huelga de hambre. Se trata de Johny Lorenzo, Elvin Quintero y Damién Jiménez. La medida de protesta tiene un doble objetivo: la liberación de los detenidos ilegalmente y conseguir el compromiso del presidente de la República para que reciba a los participantes en la marcha de la Movilización Nacional Indígena, Campesina y Popular que el martes llega a la ciudad capital.

El Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, mediante un comunicado, plantea lo que realmente sucedió el martes 26 de mayo de 2009 cuando la Policía de Penonomé destruyó el campamento que el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla y la Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas (CONADETIAGUAS) habían erigido en la comunidad de Nazareno, a escasos quince minutos de Coclesito, en la provincia de Coclé, para cortar el acceso de Petaquilla Gold y Minera Panamá (canadiense) a los proyectos mineros de oro y cobre. La Policía de Penonomé llega, según el comunicado, en tres vehículos llenos de unidades antimotines y, sin dar preaviso ni entablar algún contacto con las comunidades que mantenían cerrado el paso por 16 días, arrojan bombas lacrimógenas, desmantelan todo cuanto pudieron, atropellan y arrestan a 19 campesinos, indígenas y ambientalistas, a quienes arrastraron, empujaron y golpearon para encarcelarlos en Coclesito.

Lunes 5

Un grupo de estudiantes del Instituto Nacional, cierra la Avenida de los Mártires, en la ciudad capital en protesta por el nombramiento de la vicerrectora Enelda Guerra como rectora encargada. De acuerdo con los informes, los estudiantes se enfrentan a las unidades de control de multitudes. Se informa que el rector Abel Ceballos renuncia, por lo que se nombra a Guerra en su puesto. Pero un grupo de estudiantes no está de acuerdo con esa decisión.

Martes 6

Estudiantes y docentes del Colegio José Daniel Crespo (JDC) en Chitré, en la provincia de Herrera, deciden levantar el paro que desde hace nueve días llevaban adelante para exigir a las autoridades la entrega de las reparaciones de siete aulas y los baños del plantel. Los manifestantes acuerdan suspender el paro bajo varias condiciones. La directora regional, Omaira Moreno, dice que, entre otras cosas, acuerdan el cumplimiento de la reparación total de la obra por parte de la empresa Plomelec S.A. Además van a evaluar los trabajos en la tubería de aguas negras, harán pruebas de suministro de agua potable y no recibirán la obra hasta tanto se haya cumplido cabalmente con el pliego de cargos.

Miércoles 7

La Movilización Nacional Indígena, Campesina y Popular entra a Panamá por el Puente de las Américas y es recibida por ciudadanos y organizaciones solidarias. Cientos de personas se fusionaron en aplausos y vítores a los hombres y mujeres que caminaron durante 19 días bajo el sol y la lluvia. Sobre las 6 de la tarde unos mil manifestantes llegan a las puertas de la Asamblea Nacional donde los esperan varios diputados y el ministro de Desarrollo Social de Panamá, Guillermo Ferrufino. El pleno de la Asamblea, con quorum, recibe a los activistas, con el rey Naso, Valentín Santana, al frente. Durante 45 minutos, los miembros de la Movilización leen su pliego de peticiones, exigen la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas, el final de la explotación indiscriminada de los recursos naturales en sus territorios y el respeto a la autonomía territorial y cultural de los pueblos.

Jueves 8

La Asociación de Educadores Veraguenses (AEVE), mediante un comunicado, manifiesta que “la gestión del sagrado Derecho a la Educación no es cosa de locos, sino de ciencia y filosofía, de gestionar las decisiones en políticas educativas desde abajo hacia arriba, no al revés”. Esto lo declaran pues, según ellos, la Ministra Molinar parece no entrar en razón ya que ha procedido igual a sus anteriores colegas, al proponer nuevamente la misma “Reforma Curricular” que el PRD quería imponer. Según AEVE, siguiendo la agenda de transformaciones neoliberales bajo los lineamientos del Banco Mundial, con su brazo

intelectual del Programa de Reforma Educativa para América Latina y el Caribe (PREALC), el Gobierno de “la patria nueva” aprobó el “decreto ejecutivo 351 el 7 de noviembre de 2007 por el cual se crean modificaciones del Plan de Estudio del Primer Nivel de Enseñanza y se dictan otras disposiciones”, sin consultar a gremios educativos del país, ni a estudiantes ni a la sociedad.

Viernes 9

Un grupo de docentes realizan una marcha desde la escuela República de Venezuela, en Calidonia, hasta la Presidencia de la República, en San Felipe. Los docentes esperan entregar una serie de peticiones a la Presidencia, entre ellas, una mejora salarial, informan sus dirigentes. La marcha se realiza como parte de las actividades del aniversario número 30 de la reforma educativa que se impulsó en Panamá en el año 1979. En ella participan docentes que pertenecen a la Asociación de Profesores de la República de Panamá y a la Asociación de Maestros Independientes Auténticos.

Sábado 10

La idea de privatizar la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR) no está en la mente de los delegados de la cooperativa bananera, quienes esperan reunirse este lunes con el Presidente Ricardo Martinelli y una Comisión de Alto Nivel del Gobierno, para solicitar más fondos económicos para la reactivación de las plantaciones. Los obreros afirman que el sindicato desapareció de COOSEMUPAR y que ellos esperan reflotar con el cooperativismo. Los obreros se han tomado las estructuras de la Cooperativa y el Sindicato y amenazan con acciones en las calles. COOSEMUPAR está en su punto más rojo de quiebra, tiene una planilla de 2 mil 437 trabajadores y un préstamo moroso por 44 millones de dólares con el Banco Nacional, Caja de Seguro Social, cuota de seguro social y deuda a proveedores.

Domingo 11

Los agro exportadores de la región de Azuero (Las provincias de Herrera y Los Santos) y los productores de las tierras altas chiricanas, se quejan por la eliminación de los Certificados de abono tributario. El grupo también se manifiesta, en el “Día del productor nacional”, por las políticas de importación de algunos rubros que establece el gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Ana Raquel Castro, vocera de los productores de tierras altas chiricanas, dice que ellos están afectados porque con las leyes de la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria se está permitiendo la entrada fácil desde Costa Rica, Estados Unidos y España de los mismos rubros que ellos producen. Castro expone que actualmente la producción en Panamá representa el sustento económico de unos 900 productores y de unas 10 mil personas que dependen de ellos.

Lunes 12

Un grupo de indígenas quema la bandera de España en el Casco Antiguo, como parte de las actividades que realizan para conmemorar el Día de la Hispanidad. Los indígenas llegan al Casco Antiguo luego de emprender una marcha desde la Universidad de Panamá, en la vía Transístmica. Además, los manifestantes ondean una bandera nacional en las protestas que buscan hacer un llamado al respeto para las comunidades indígenas. En horas previas, los indígenas habían realizado un piquete frente a la Embajada de España en Panamá.

Martes 13

Docentes de la escuela Nicanor Villalaz, en La Villa de Los Santos, decretan un paro militante de 24 horas para solicitar a las autoridades educativas la agilización de las investigaciones y demás trámites pertinentes que culminen con el reintegro inmediato de su colega Javier Martínez. El docente fue separado del cargo el pasado viernes, luego de la difusión de una información televisiva, que daba cuenta de un supuesto maltrato en contra de los alumnos. Los padres de familia de los estudiantes de Martínez bloquean la carretera Nacional frente al plantel, por espacio de media hora, para exigir el reintegro del docente, al tiempo que anuncian que no aceptarán que ningún otro docente imparta clases a sus hijos.

Miércoles 14

El presidente de la Asociación de Padres de Familia del Instituto Nacional (IN), Leopoldo Lester, denuncia ante la Ministra de Educación, Lucy Molinar, durante la realización de una reunión, la presencia de algunos profesores que instan a los estudiantes a protestar en las calles. Lester señala que la Asociación quiere saber quiénes ocasionaron los daños en el plantel. El dirigente de los padres reitera que la Asociación ya logró sacar del Instituto Nacional al Frente Estudiantil Revolucionario (FER-29). Las declaraciones de Lester surgen luego que se informa que el Instituto Nacional reanudará sus clases mañana, luego de estar cerrado desde la semana pasada por unas manifestaciones de los alumnos.

Jueves 15

Moradores de la comunidad de Bambú, en el distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, cierran la entrada a la corregiduría de El Empalme, en rechazo a la orden de desalojo que existe contra 500 personas que tienen más de 40 años de residir en estos terrenos. Así lo indica el vocero de los afectados, Rogelio Ábrego, quien agrega que “ellos tienen familias y han cultivado las tierras, por lo que no saldrán de ahí”. El vocero expresa que “ahora que las tierras están trabajadas y tienen un valor es que aparecen de la noche de la mañana personas con títulos de propiedad desde la ciudad capital”. En tanto, el corregidor Pedro Ábrego, confirma la existencia de una orden de desalojo contra los moradores, pero indica que las autoridades están tratando de que ambas partes se sienten a conversar y lleguen a un acuerdo satisfactorio.

Viernes 16

Gabriel Pascual, del Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, revela que mediante visitas realizadas han podido detectar en todo el país a más de mil 800 personas afectadas por el dietilene glicol, entre familiares ya fallecidos y sobrevivientes. Pascual detalla que gracias al trabajo del Comité han podido detectar esos casos. “Tenemos un registro de más de 60 casos de niños afectados, no los 20 que han salido publicados” con el veneno. Además indica que las cifras que ellos manejan son totalmente diferentes a las del Ministerio Público. Agrega que las autoridades solo reconocen 189 casos.

Jueves 17

El director de Prestaciones Médicas y Hospitalarias de la Caja de Seguro Social (CSS), Josué Morales, asegura que el instituto para la atención de las víctimas del envenenamiento masivo con dietilene glycol estará listo en diciembre próximo. Las declaraciones de Morales se dan durante una actividad organizada por el Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, en el marco del tercer aniversario del envenenamiento masivo con medicamentos de la CSS. De acuerdo con Mitzila de Ciniglio, una de las dirigentes del comité, Morales les recordó a los presentes que el nuevo director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, ha tomado como uno de sus compromisos la creación del citado instituto antes de que finalice el año. Actualmente, el Ministerio Público investiga los casos de mil 155 posibles intoxicados con dietilene glycol que no se habían incluido en el expediente de este caso.

Viernes 18

Estudiantes y docentes del Colegio Ángel María Herrera de Penonomé, en la provincia de Coclé, bloquean durante media hora la vía que conduce a El Coco, frente al plantel, debido a la falta de agua y la acumulación de basura dentro de este centro educativo. Los manifestantes también solicitan al Ministerio de Educación que se nombre de manera urgente un director y un subdirector titular, ya que la actual tiene más de un año de estar encargada y no cumple con los requisitos. Kira Herrera, estudiante, manifiesta que se han suspendido las clases en varias ocasiones por la insalubridad en los sanitarios.

Lunes 19

La dirigencia de la AEEVE deplora las acciones de la Ministra de Educación, Lucy Molinar, en el reciente concurso de Direcciones y subdirecciones regionales, de 13 regiones educativas del país, en el que no incluyeron a las dos comarcas Ngobe-Bugle y Kuna, donde permanecen directores regionales de "a dedo". El profesor Alexander Hernández, de la dirigencia de la AEEVE, denuncia que en los puestos de subdirecciones regionales, pese a existir docentes con suficiente calidad claramente evidenciada en los puntajes logrados,

lamentablemente la ministra Molinar escogió de "a dedo" a personajes conocidos por su politiquería y evaluados con "F", a pesar de que ella misma había señalado que no aceptaría este tipo de acciones en el MEDUCA.

Martes 20

En Panamá, un millón 90 mil personas se hallan en situación de pobreza, de las que 481 mil están en pobreza extrema, representando 32.7% y 14.4% de la población total, respectivamente, informa el Ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, al comentar los resultados de la Encuesta de Niveles de Vida. Según la encuesta, la pobreza en el país es diferencial por área. Mientras que en el área urbana la incidencia de pobreza es de 17.7%, en el área rural es de 59.7% y en las áreas indígenas, es de 96.3%, indica el informe. “Evidentemente la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado. El crecimiento económico no ha llegado a todos los panameños”, enfatiza.

Miércoles 21

Por segundo día consecutivo, los miembros del Movimiento de Desempleados Colonenses (MODESCO), se toman las instalaciones del Fondo de Inversión Social (FIS) en Colón. Desde las 9:00 a.m., los desempleados se apostan en calle 8 y 9 y la avenida Amador Guerrero, donde incendian llantas y gritan consignas exigiendo plazas de empleos. Los manifestantes exigen 200 plazas para agentes de seguridad en los centros educativos y piden la presencia del presidente de la Junta Asesora del Presidente para Asuntos de Colón (JAPAC), Giacomo Tamburelli, para que atienda estas solicitudes.

Jueves 22

Integrantes del Movimiento 23 de octubre realizan una manifestación pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). A un día de conmemorarse el tercer aniversario del accidente (incendio) del bus 8B-06 en La Cresta, David Ramírez, quien pertenece al movimiento, denuncia la lentitud de las investigaciones sobre los responsables de este hecho. El dirigente de los usuarios del transporte público enfatiza que a pesar de que la muerte de 18 personas calcinadas dentro un bus es considerado de “alto perfil” cuestiona que hasta la fecha no se ha hecho justicia.

Productores hortícolas de Boquete, Cerro Punta y Renacimiento llegan hasta la gobernación de Chiriquí, protestando por la rebaja de aranceles a productos sensitivos y por la saturación de productos importados. Durante la manifestación, los productores cargan legumbres que reparten entre los ciudadanos que se encuentran a su paso. Joaquín Castillo, alcalde del distrito de Bugaba, acompaña al grupo de manifestantes, señalando que la situación de la rebaja arancelaria está afectando en gran medida a los pequeños productores.

Viernes 23

Un transporte cómodo, seguro y digno promete el presidente de la República, Ricardo Martinelli, a los familiares de las víctimas del accidente del 23 de octubre de 2006. Martinelli se reúne con el Movimiento 23 de octubre al conmemorarse el tercer aniversario del accidente en el que murieron calcinadas 18 personas en la vía Martín Sosa en la ciudad capital. El Presidente explica a las víctimas, que “su gobierno ha puesto en marcha el plan que cambiará definitivamente el sistema de transporte urbano en la ciudad de Panamá”. Según una nota de prensa de la Secretaría de Comunicación del Estado, este nuevo sistema estará en funcionamiento antes de un año y contempla la renovación de toda la flota que hay en la actualidad.

Sábado 24

Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), asegura que están listos para demandar al Estado panameño en instancias internacionales en cuanto se agoten las vías legales nacionales. Se trata de las reclamaciones a causa de más de 6,000 despidos injustificados que ya se contabilizan en la gestión de Ricardo Martinelli, y que violan figuras fundamentales de derecho laboral, como el respeto al derecho de trabajo del funcionario público, respeto al fuero de longevidad y de maternidad, y el respeto a los derechos de protección especial por padecimiento de enfermedades. Berrocal denuncia que la Ley 43 recientemente aprobada, propone que autoridades, al margen de la ley y de criterios técnicos o científicos, contraten personal en base a la “discreción”, lo que es inaceptable.

Domingo 25

Miembros de la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA), advierten que aumentaran el pasaje de llegar a aprobarse el proyecto de ley de doble inspección vehicular. Esteban Rodríguez, dirigente de CANATRA, señala que rechazan completamente este proyecto de ley, el cual el diputado Marcos González, unilateralmente tomó la decisión de apoyar. Rodríguez indica que el sector transporte no está en capacidad de pagar por dos revisados al año, por lo cual los diferentes gremios transportistas a nivel nacional se manifestarán. Según Rodríguez, el diputado González quien forma parte de la CANATRA, en ningún momento los invitó al primer debate, lo cual los hace pensar que todo estaba premeditado.

Lunes 26

Quienes devengan salario mínimo, destinan aproximadamente B/ 8.20 de cada B/ 10.00 para satisfacer sus necesidades alimenticias, sin la posibilidad de que este panorama varíe, porque el Ministerio de Economía y Finanzas no puede controlar la especulación en los precios. Según información en la página digital del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la canasta básica familiar (CBFA) tuvo en agosto de 2009 un costo de B/ 268.58; mientras que el salario mínimo se mantiene en B/ 325.00, para quienes laboran en las grandes empresas, y B/ 315.00 para quienes lo hacen en las pequeñas. Esto significa que los

trabajadores en este rango de salario invierten el 82% de sus ingresos en la alimentación de sus familias.

Martes 27

Integrantes del Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida protestan frente a la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), ubicado en Calidonia, para hacer un llamado a las autoridades para que presten mayor atención al aumento de las personas perjudicadas por el veneno encontrado en los medicamentos de la Caja de Seguro Social en el año 2006. Los manifestantes, con pancartas en manos, también solicitan que se haga justicia en este caso.

Miércoles 28

Ex trabajadores portuarios del puerto de Cristóbal, en la ciudad de Colón, se dirigen hacia la ciudad de Panamá para marchar hacia la Presidencia de la República. Los ex portuarios reclaman al mandatario Ricardo Martinelli que cumpla su promesa de campaña, en cuanto a hacer efectivo el pago de al menos 100 millones de dólares en concepto de prestaciones salariales. René Prospet, voceros de los ex funcionarios, manifiesta que se reunirán con otros compañeros del puerto de Balboa en los predios de la Asamblea Nacional, de donde saldrá la marcha hacia la presidencia. Prospet indica que, si es necesario, a partir de hoy empezarán una nueva jornada de lucha para que se cumpla con el pago a más de 2 mil ex trabajadores.

Cerca de 2 mil bonos de compras en supermercados entrega Giacomo Tamburrelli, director general del Fondo de Inversión Social (FIS), a los trabajadores de las bananeras de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR). La entrega se hace para aliviar la difícil situación social que viven las familias de los 2 mil 477 trabajadores bananeros que no reciben salarios desde hace dos meses, informa el departamento de relaciones públicas de la institución. En tanto, se da a conocer que los 12 delegados de la COOSEMUPAR están sosteniendo reuniones con posibles inversionistas interesados en reactivar la actividad bananera en esta región.

Jueves 29

Los Secretariados Nacionales del Servicio Paz y Justicia - Mesoamérica y Colombia - deciden en su última reunión en Panamá, hacer entrega de una carta homologada a las embajadas de Estados Unidos en nuestros países el día 30 de octubre a las 10:00 a.m., en la cual se hace constar el rechazo a toda posibilidad de instalar o disponer de bases militares en la región, en Colombia y en Panamá en particular.

Viernes 30

"Las tierras son para los que la necesitan", es la frase que repiten las familias del sector Colinas de Chapala en Arraiján y que piden al presidente de la República, Ricardo Martinelli, cumpla. Unas 55 familias proceden a cerrar la vía hacia Chapala con el objetivo de impedir el cumplimiento de una orden de desalojo. Se conoce que los abogados de los precaristas presentan algunos recursos legales para posponer el desalojo; movimiento, que según los propietarios de los terrenos solo dilatará el proceso.

Sábado 31

"El germen de la politiquería está destruyendo la estructura administrativa de la educación especial en Panamá", denuncian los docentes del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE). El secretario general de la Asociación de Educadores de Veraguas, Juan Herrera, denuncia que durante esta gestión gubernamental han sido nombrados al frente de la entidad los asesores: Efraín de León y Roberto Valencia, quienes desconocen en su totalidad cómo se maneja el proceso de la educación especial. De acuerdo a Herrera, pertenecer al partido Panameñista ha sido el único mérito que acreditan a estos 2 funcionarios, para ostentar estos cargos que tienen salarios jugosos. Aunque han remitido cartas a la titular del MEDUCA, Lucy Molinar, la funcionaria ha hecho caso omiso, porque a juicio de los docentes que aglutinan esta agrupación "a ella no le interesa la comunidad estudiantil de discapacitados".

Glosario de Siglas

AEVE	Asociación de Educadores Veraguenses
ATTT	Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
CBFA	Canasta Básica Familiar
CANATRA	Cámara Nacional de Transporte
CONADETIAGUAS	Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas
COSEMUPAR	Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles
CSJ	Corte Suprema de Justicia
CSS	Caja de Seguro Social
FENASEP	Federación Nacional de Servidores Públicos
FER-29	Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre.
FIS	Fondo de Inversión Social
IMLCF	Medicina Legal y Ciencias Forenses
IN	Instituto Nacional
IPHE	Instituto Panameño de Habilitación Especial
JDC	José Daniel Crespo
JAPAC	Junta Asesora del Presidente para Asuntos de Colón
MEDUCA	Ministerio de Educación
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MINSA	Ministerio de Salud

MODESCO
OIT
PREALC

PRD
SERPAJ

Movimiento de Desempleados de Colón
Organización Internacional del Trabajo
Programa de Reforma Educativa para América Latina
y el Caribe
Partido Revolucionario Democrático
Servicio Paz y Justicia

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.

Dirigido por Marco A. Gandásegui, coordinado por Jennifer Delgado Urueta, con la asistencia de Marina Ábrego.

Fuentes: Diario La Prensa, Diario la Estrella de Panamá, Diario Panamá América.

Fuentes Alternas: Kaosenlared.net, FRENADESO, ASOPROF, Oilwatch Info Panamá, aevenaccion.tripod.com

Panamá

Cronología del Conflicto Social

Octubre 2009

Jueves 1

Para el dirigente del Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, Gabriel Pascual, la administración del ex director de la Caja de Seguro Social (CSS), René Luciani, es mediocre. “En la administración de Luciani no hubo ni la voluntad ni la capacidad para resolver los problemas relacionados a mejorar las infraestructuras y las atenciones” a los asegurados, explica Pascual. Las declaraciones de Pascual se originan luego de la controversia surgida al entregarle el ministro de Salud, Franklin Vergara, una placa de reconocimiento a Luciani.

Viernes 2

Alrededor de 80 mujeres, acompañadas de sus hijos e hijas, marchan hacia Puerto Armuelles en la provincia de Chiriquí, para pedir al Gobierno que pague las quincenas adeudadas a los trabajadores bananeros. Además, piden que se resuelva el problema del manejo de las fincas productoras de la fruta. “La situación en Barú es crítica, porque no hay dinero para comprar los alimentos en las casas de dos mil 800 trabajadores”, aseguran las manifestantes, quienes llevan pailas y pancartas durante la protesta.

Sábado 3

Un total de 10 personas que participaban en la protesta pacífica contra la destrucción de comunidades del pueblo Naso en la provincia de Bocas del Toro, son detenidas. Los arrestos se producen en la Plaza Catedral de la ciudad de Panamá, lugar donde los

manifestantes han permanecido desde hace seis meses, cuando los protestantes trataban de descansar encadenados a los bancos del gacebo. Entre los detenidos hay 8 indígenas Naso y dos indígenas Ngobe, quienes son acusados de desacato. Los dos últimos se habían incorporado en solidaridad desde la caminata de la Movilización Nacional Indígena, Campesina y Popular. Entre los detenidos se destacan los dirigentes Naso, Eliseo Vargas y Lucho Gamarra.

Domingo 4

Los 8 indígenas Naso y los 2 Ngobe arrestados en la madrugada del sábado salen libres a altas horas de la noche, luego de estar arrestados ilegalmente, sin respeto a los derechos fundamentales ni justificación de derecho posible. “Comienza el segundo round”, augura uno de los liberados, consciente de que la lucha por el territorio Naso y, en general, por la dignidad de indígenas y campesinos panameños no ha hecho sino comenzar. Con la convicción intacta, tres de los liberados se incorporaron inmediatamente a la huelga de hambre. Se trata de Johny Lorenzo, Elvin Quintero y Damién Jiménez. La medida de protesta tiene un doble objetivo: la liberación de los detenidos ilegalmente y conseguir el compromiso del presidente de la República para que reciba a los participantes en la marcha de la Movilización Nacional Indígena, Campesina y Popular que el martes llega a la ciudad capital.

El Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, mediante un comunicado, plantea lo que realmente sucedió el martes 26 de mayo de 2009 cuando la Policía de Penonomé destruyó el campamento que el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla y la Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas (CONADETIAGUAS) habían erigido en la comunidad de Nazareno, a escasos quince minutos de Coclesito, en la provincia de Coclé, para cortar el acceso de Petaquilla Gold y Minera Panamá (canadiense) a los proyectos mineros de oro y cobre. La Policía de Penonomé llega, según el comunicado, en tres vehículos llenos de unidades antimotines y, sin dar preaviso ni entablar algún contacto con las comunidades que mantenían cerrado el paso por 16 días, arrojan bombas lacrimógenas, desmantelan todo cuanto pudieron, atropellan y arrestan a 19 campesinos, indígenas y ambientalistas, a quienes arrastraron, empujaron y golpearon para encarcelarlos en Coclesito.

Lunes 5

Un grupo de estudiantes del Instituto Nacional, cierra la Avenida de los Mártires, en la ciudad capital en protesta por el nombramiento de la vicerrectora Enelda Guerra como rectora encargada. De acuerdo con los informes, los estudiantes se enfrentan a las unidades de control de multitudes. Se informa que el rector Abel Ceballos renuncia, por lo que se nombra a Guerra en su puesto. Pero un grupo de estudiantes no está de acuerdo con esa decisión.

Martes 6

Estudiantes y docentes del Colegio José Daniel Crespo (JDC) en Chitré, en la provincia de Herrera, deciden levantar el paro que desde hace nueve días llevaban adelante para exigir a las autoridades la entrega de las reparaciones de siete aulas y los baños del plantel. Los manifestantes acuerdan suspender el paro bajo varias condiciones. La directora regional, Omaira Moreno, dice que, entre otras cosas, acuerdan el cumplimiento de la reparación total de la obra por parte de la empresa Plomelec S.A. Además van a evaluar los trabajos en la tubería de aguas negras, harán pruebas de suministro de agua potable y no recibirán la obra hasta tanto se haya cumplido cabalmente con el pliego de cargos.

Miércoles 7

La Movilización Nacional Indígena, Campesina y Popular entra a Panamá por el Puente de las Américas y es recibida por ciudadanos y organizaciones solidarias. Cientos de personas se fusionaron en aplausos y vítores a los hombres y mujeres que caminaron durante 19 días bajo el sol y la lluvia. Sobre las 6 de la tarde unos mil manifestantes llegan a las puertas de la Asamblea Nacional donde los esperan varios diputados y el ministro de Desarrollo Social de Panamá, Guillermo Ferrufino. El pleno de la Asamblea, con quorum, recibe a los activistas, con el rey Naso, Valentín Santana, al frente. Durante 45 minutos, los miembros de la Movilización leen su pliego de peticiones, exigen la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas, el final de la explotación indiscriminada de los recursos naturales en sus territorios y el respeto a la autonomía territorial y cultural de los pueblos.

Jueves 8

La Asociación de Educadores Veraguenses (AEVE), mediante un comunicado, manifiesta que “la gestión del sagrado Derecho a la Educación no es cosa de locos, sino de ciencia y filosofía, de gestionar las decisiones en políticas educativas desde abajo hacia arriba, no al revés”. Esto lo declaran pues, según ellos, la Ministra Molinar parece no entrar en razón ya que ha procedido igual a sus anteriores colegas, al proponer nuevamente la misma “Reforma Curricular” que el PRD quería imponer. Según AEVE, siguiendo la agenda de transformaciones neoliberales bajo los lineamientos del Banco Mundial, con su brazo intelectual del Programa de Reforma Educativa para América Latina y el Caribe (PREALC), el Gobierno de “la patria nueva” aprobó el “decreto ejecutivo 351 el 7 de noviembre de 2007 por el cual se crean modificaciones del Plan de Estudio del Primer Nivel de Enseñanza y se dictan otras disposiciones”, sin consultar a gremios educativos del país, ni a estudiantes ni a la sociedad.

Viernes 9

Un grupo de docentes realizan una marcha desde la escuela República de Venezuela, en Calidonia, hasta la Presidencia de la República, en San Felipe. Los docentes esperan entregar una serie de peticiones a la Presidencia, entre ellas, una mejora salarial, informan sus dirigentes. La marcha se realiza como parte de las actividades del aniversario número

30 de la reforma educativa que se impulsó en Panamá en el año 1979. En ella participan docentes que pertenecen a la Asociación de Profesores de la República de Panamá y a la Asociación de Maestros Independientes Auténticos.

Sábado 10

La idea de privatizar la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR) no está en la mente de los delegados de la cooperativa bananera, quienes esperan reunirse este lunes con el Presidente Ricardo Martinelli y una Comisión de Alto Nivel del Gobierno, para solicitar más fondos económicos para la reactivación de las plantaciones. Los obreros afirman que el sindicato desapareció de COOSEMUPAR y que ellos esperan reflotar con el cooperativismo. Los obreros se han tomado las estructuras de la Cooperativa y el Sindicato y amenazan con acciones en las calles. COOSEMUPAR está en su punto más rojo de quiebra, tiene una planilla de 2 mil 437 trabajadores y un préstamo moroso por 44 millones de dólares con el Banco Nacional, Caja de Seguro Social, cuota de seguro social y deuda a proveedores.

Domingo 11

Los agro exportadores de la región de Azuero (Las provincias de Herrera y Los Santos) y los productores de las tierras altas chiricanas, se quejan por la eliminación de los Certificados de abono tributario. El grupo también se manifiesta, en el “Día del productor nacional”, por las políticas de importación de algunos rubros que establece el gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Ana Raquel Castro, vocera de los productores de tierras altas chiricanas, dice que ellos están afectados porque con las leyes de la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria se está permitiendo la entrada fácil desde Costa Rica, Estados Unidos y España de los mismos rubros que ellos producen. Castro expone que actualmente la producción en Panamá representa el sustento económico de unos 900 productores y de unas 10 mil personas que dependen de ellos.

Lunes 12

Un grupo de indígenas quema la bandera de España en el Casco Antiguo, como parte de las actividades que realizan para conmemorar el Día de la Hispanidad. Los indígenas llegan al Casco Antiguo luego de emprender una marcha desde la Universidad de Panamá, en la vía Transístmica. Además, los manifestantes ondean una bandera nacional en las protestas que buscan hacer un llamado al respeto para las comunidades indígenas. En horas previas, los indígenas habían realizado un piquete frente a la Embajada de España en Panamá.

Martes 13

Docentes de la escuela Nicanor Villalaz, en La Villa de Los Santos, decretan un paro militante de 24 horas para solicitar a las autoridades educativas la agilización de las

investigaciones y demás trámites pertinentes que culminen con el reintegro inmediato de su colega Javier Martínez. El docente fue separado del cargo el pasado viernes, luego de la difusión de una información televisiva, que daba cuenta de un supuesto maltrato en contra de los alumnos. Los padres de familia de los estudiantes de Martínez bloquean la carretera Nacional frente al plantel, por espacio de media hora, para exigir el reintegro del docente, al tiempo que anuncian que no aceptarán que ningún otro docente imparta clases a sus hijos.

Miércoles 14

El presidente de la Asociación de Padres de Familia del Instituto Nacional (IN), Leopoldo Lester, denuncia ante la Ministra de Educación, Lucy Molinar, durante la realización de una reunión, la presencia de algunos profesores que instan a los estudiantes a protestar en las calles. Lester señala que la Asociación quiere saber quiénes ocasionaron los daños en el plantel. El dirigente de los padres reitera que la Asociación ya logró sacar del Instituto Nacional al Frente Estudiantil Revolucionario (FER-29). Las declaraciones de Lester surgen luego que se informa que el Instituto Nacional reanudará sus clases mañana, luego de estar cerrado desde la semana pasada por unas manifestaciones de los alumnos.

Jueves 15

Moradores de la comunidad de Bambú, en el distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, cierran la entrada a la corregiduría de El Empalme, en rechazo a la orden de desalojo que existe contra 500 personas que tienen más de 40 años de residir en estos terrenos. Así lo indica el vocero de los afectados, Rogelio Ábrego, quien agrega que “ellos tienen familias y han cultivado las tierras, por lo que no saldrán de ahí”. El vocero expresa que “ahora que las tierras están trabajadas y tienen un valor es que aparecen de la noche de la mañana personas con títulos de propiedad desde la ciudad capital”. En tanto, el corregidor Pedro Ábrego, confirma la existencia de una orden de desalojo contra los moradores, pero indica que las autoridades están tratando de que ambas partes se sienten a conversar y lleguen a un acuerdo satisfactorio.

Viernes 16

Gabriel Pascual, del Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, revela que mediante visitas realizadas han podido detectar en todo el país a más de mil 800 personas afectadas por el dietilene glicol, entre familiares ya fallecidos y sobrevivientes. Pascual detalla que gracias al trabajo del Comité han podido detectar esos casos. “Tenemos un registro de más de 60 casos de niños afectados, no los 20 que han salido publicados” con el veneno. Además indica que las cifras que ellos manejan son totalmente diferentes a las del Ministerio Público. Agrega que las autoridades solo reconocen 189 casos.

Jueves 17

El director de Prestaciones Médicas y Hospitalarias de la Caja de Seguro Social (CSS), Josué Morales, asegura que el instituto para la atención de las víctimas del envenenamiento masivo con dietilene glycol estará listo en diciembre próximo. Las declaraciones de Morales se dan durante una actividad organizada por el Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, en el marco del tercer aniversario del envenenamiento masivo con medicamentos de la CSS. De acuerdo con Mitzila de Ciniglio, una de las dirigentes del comité, Morales les recordó a los presentes que el nuevo director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, ha tomado como uno de sus compromisos la creación del citado instituto antes de que finalice el año. Actualmente, el Ministerio Público investiga los casos de mil 155 posibles intoxicados con dietilene glycol que no se habían incluido en el expediente de este caso.

Viernes 18

Estudiantes y docentes del Colegio Ángel María Herrera de Penonomé, en la provincia de Coclé, bloquean durante media hora la vía que conduce a El Coco, frente al plantel, debido a la falta de agua y la acumulación de basura dentro de este centro educativo. Los manifestantes también solicitan al Ministerio de Educación que se nombre de manera urgente un director y un subdirector titular, ya que la actual tiene más de un año de estar encargada y no cumple con los requisitos. Kira Herrera, estudiante, manifiesta que se han suspendido las clases en varias ocasiones por la insalubridad en los sanitarios.

Lunes 19

La dirigencia de la AEEV deplora las acciones de la Ministra de Educación, Lucy Molinar, en el reciente concurso de Direcciones y subdirecciones regionales, de 13 regiones educativas del país, en el que no incluyeron a las dos comarcas Ngobe-Bugle y Kuna, donde permanecen directores regionales de "a dedo". El profesor Alexander Hernández, de la dirigencia de la AEEV, denuncia que en los puestos de subdirecciones regionales, pese a existir docentes con suficiente calidad claramente evidenciada en los puntajes logrados, lamentablemente la ministra Molinar escogió de "a dedo" a personajes conocidos por su politiquería y evaluados con "F", a pesar de que ella misma había señalado que no aceptaría este tipo de acciones en el MEDUCA.

Martes 20

En Panamá, un millón 90 mil personas se hallan en situación de pobreza, de las que 481 mil están en pobreza extrema, representando 32.7% y 14.4% de la población total, respectivamente, informa el Ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, al comentar los resultados de la Encuesta de Niveles de Vida. Según la encuesta, la pobreza en el país es diferencial por área. Mientras que en el área urbana la incidencia de pobreza es de 17.7%, en el área rural es de 59.7% y en las áreas indígenas, es de 96.3%, indica el

informe. “Evidentemente la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado. El crecimiento económico no ha llegado a todos los panameños”, enfatiza.

Miércoles 21

Por segundo día consecutivo, los miembros del Movimiento de Desempleados Colonenses (MODESCO), se toman las instalaciones del Fondo de Inversión Social (FIS) en Colón. Desde las 9:00 a.m., los desempleados se apostan en calle 8 y 9 y la avenida Amador Guerrero, donde incendian llantas y gritan consignas exigiendo plazas de empleos. Los manifestantes exigen 200 plazas para agentes de seguridad en los centros educativos y piden la presencia del presidente de la Junta Asesora del Presidente para Asuntos de Colón (JAPAC), Giacomo Tamburelli, para que atienda estas solicitudes.

Jueves 22

Integrantes del Movimiento 23 de octubre realizan una manifestación pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). A un día de conmemorarse el tercer aniversario del accidente (incendio) del bus 8B-06 en La Cresta, David Ramírez, quien pertenece al movimiento, denuncia la lentitud de las investigaciones sobre los responsables de este hecho. El dirigente de los usuarios del transporte público enfatiza que a pesar de que la muerte de 18 personas calcinadas dentro un bus es considerado de “alto perfil” cuestiona que hasta la fecha no se ha hecho justicia.

Productores hortícolas de Boquete, Cerro Punta y Renacimiento llegan hasta la gobernación de Chiriquí, protestando por la rebaja de aranceles a productos sensitivos y por la saturación de productos importados. Durante la manifestación, los productores cargan legumbres que reparten entre los ciudadanos que se encuentran a su paso. Joaquín Castillo, alcalde del distrito de Bugaba, acompaña al grupo de manifestantes, señalando que la situación de la rebaja arancelaria está afectando en gran medida a los pequeños productores.

Viernes 23

Un transporte cómodo, seguro y digno promete el presidente de la República, Ricardo Martinelli, a los familiares de las víctimas del accidente del 23 de octubre de 2006. Martinelli se reúne con el Movimiento 23 de octubre al conmemorarse el tercer aniversario del accidente en el que murieron calcinadas 18 personas en la vía Martín Sosa en la ciudad capital. El Presidente explica a las víctimas, que “su gobierno ha puesto en marcha el plan que cambiará definitivamente el sistema de transporte urbano en la ciudad de Panamá”. Según una nota de prensa de la Secretaría de Comunicación del Estado, este nuevo sistema estará en funcionamiento antes de un año y contempla la renovación de toda la flota que hay en la actualidad.

Sábado 24

Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), asegura que están listos para demandar al Estado panameño en instancias internacionales en cuanto se agoten las vías legales nacionales. Se trata de las reclamaciones a causa de más de 6,000 despidos injustificados que ya se contabilizan en la gestión de Ricardo Martinelli, y que violan figuras fundamentales de derecho laboral, como el respeto al derecho de trabajo del funcionario público, respeto al fuero de longevidad y de maternidad, y el respeto a los derechos de protección especial por padecimiento de enfermedades. Berrocal denuncia que la Ley 43 recientemente aprobada, propone que autoridades, al margen de la ley y de criterios técnicos o científicos, contraten personal en base a la “discreción”, lo que es inaceptable.

Domingo 25

Miembros de la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA), advierten que aumentaran el pasaje de llegar a aprobarse el proyecto de ley de doble inspección vehicular. Esteban Rodríguez, dirigente de CANATRA, señala que rechazan completamente este proyecto de ley, el cual el diputado Marcos González, unilateralmente tomó la decisión de apoyar. Rodríguez indica que el sector transporte no está en capacidad de pagar por dos revisados al año, por lo cual los diferentes gremios transportistas a nivel nacional se manifestarán. Según Rodríguez, el diputado González quien forma parte de la CANATRA, en ningún momento los invitó al primer debate, lo cual los hace pensar que todo estaba premeditado.

Lunes 26

Quienes devengan salario mínimo, destinan aproximadamente B/ 8.20 de cada B/ 10.00 para satisfacer sus necesidades alimenticias, sin la posibilidad de que este panorama varíe, porque el Ministerio de Economía y Finanzas no puede controlar la especulación en los precios. Según información en la página digital del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la canasta básica familiar (CBFA) tuvo en agosto de 2009 un costo de B/ 268.58; mientras que el salario mínimo se mantiene en B/ 325.00, para quienes laboran en las grandes empresas, y B/ 315.00 para quienes lo hacen en las pequeñas. Esto significa que los trabajadores en este rango de salario invierten el 82% de sus ingresos en la alimentación de sus familias.

Martes 27

Integrantes del Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida protestan frente a la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), ubicado en Calidonia, para hacer un llamado a las autoridades para que presten mayor atención al aumento de las personas perjudicadas por el veneno encontrado en los medicamentos de la Caja de Seguro Social en el año 2006. Los manifestantes, con pancartas en manos, también solicitan que se haga justicia en este caso.

Miércoles 28

Ex trabajadores portuarios del puerto de Cristóbal, en la ciudad de Colón, se dirigen hacia la ciudad de Panamá para marchar hacia la Presidencia de la República. Los ex portuarios reclaman al mandatario Ricardo Martinelli que cumpla su promesa de campaña, en cuanto a hacer efectivo el pago de al menos 100 millones de dólares en concepto de prestaciones salariales. René Prospet, voceros de los ex funcionarios, manifiesta que se reunirán con otros compañeros del puerto de Balboa en los predios de la Asamblea Nacional, de donde saldrá la marcha hacia la presidencia. Prospet indica que, si es necesario, a partir de hoy empezarán una nueva jornada de lucha para que se cumpla con el pago a más de 2 mil ex trabajadores.

Cerca de 2 mil bonos de compras en supermercados entrega Giacomo Tamburrelli, director general del Fondo de Inversión Social (FIS), a los trabajadores de las bananeras de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR). La entrega se hace para aliviar la difícil situación social que viven las familias de los 2 mil 477 trabajadores bananeros que no reciben salarios desde hace dos meses, informa el departamento de relaciones públicas de la institución. En tanto, se da a conocer que los 12 delegados de la COOSEMUPAR están sosteniendo reuniones con posibles inversionistas interesados en reactivar la actividad bananera en esta región.

Jueves 29

Los Secretariados Nacionales del Servicio Paz y Justicia - Mesoamérica y Colombia - deciden en su última reunión en Panamá, hacer entrega de una carta homologada a las embajadas de Estados Unidos en nuestros países el día 30 de octubre a las 10:00 a.m., en la cual se hace constar el rechazo a toda posibilidad de instalar o disponer de bases militares en la región, en Colombia y en Panamá en particular.

Viernes 30

"Las tierras son para los que la necesitan", es la frase que repiten las familias del sector Colinas de Chapala en Arraiján y que piden al presidente de la República, Ricardo Martinelli, cumpla. Unas 55 familias proceden a cerrar la vía hacia Chapala con el objetivo de impedir el cumplimiento de una orden de desalojo. Se conoce que los abogados de los precaristas presentan algunos recursos legales para posponer el desalojo; movimiento, que según los propietarios de los terrenos solo dilatará el proceso.

Sábado 31

"El germen de la politiquería está destruyendo la estructura administrativa de la educación especial en Panamá", denuncian los docentes del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE). El secretario general de la Asociación de Educadores de Veraguas, Juan

Herrera, denuncia que durante esta gestión gubernamental han sido nombrados al frente de la entidad los asesores: Efraín de León y Roberto Valencia, quienes desconocen en su totalidad cómo se maneja el proceso de la educación especial. De acuerdo a Herrera, pertenecer al partido Panameñista ha sido el único mérito que acreditan a estos 2 funcionarios, para ostentar estos cargos que tienen salarios jugosos. Aunque han remitido cartas a la titular del MEDUCA, Lucy Molinar, la funcionaria ha hecho caso omiso, porque a juicio de los docentes que aglutinan esta agrupación "a ella no le interesa la comunidad estudiantil de discapacitados".

Glosario de Siglas

AEVE	Asociación de Educadores Veraguenses
ATTT	Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
CBFA	Canasta Básica Familiar
CANATRA	Cámara Nacional de Transporte
CONADETIAGUAS	Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas
COSEMUPAR	Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles
CSJ	Corte Suprema de Justicia
CSS	Caja de Seguro Social
FENASEP	Federación Nacional de Servidores Públicos
FER-29	Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre.
FIS	Fondo de Inversión Social
IMLCF	Medicina Legal y Ciencias Forenses
IN	Instituto Nacional
IPHE	Instituto Panameño de Rehabilitación Especial
JDC	José Daniel Crespo
JAPAC	Junta Asesora del Presidente para Asuntos de Colón
MEDUCA	Ministerio de Educación
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MINSA	Ministerio de Salud
MODESCO	Movimiento de Desempleados de Colón
OIT	Organización Internacional del Trabajo
PREALC	Programa de Reforma Educativa para América Latina y el Caribe
PRD	Partido Revolucionario Democrático
SERPAAJ	Servicio Paz y Justicia

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena".

Dirigido por Marco A. Gandásegui, coordinado por Jennifer Delgado Urueta, con la asistencia de Marina Ábrego.

Fuentes: La Prensa, La Estrella de Panamá, Panamá América.

Fuentes alternas: Kaosenlared.net, FRENADESO, ASOPROF, Oilwatch Info Panamá, aevenaccion.tripod.com

Noviembre 2009

Domingo 1

El vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, afirma que es un defensor de la prevención del delito, pero está de acuerdo con el aumento de las condenas. Varela ofrece las anteriores declaraciones cuando le preguntan cuál es su opinión sobre las reformas al Código Penal que plantea un aumento en las penas de cárcel en el país. La Asamblea

Nacional aprueba en tercer debate un proyecto de ley que establece que en el país la pena máxima será de 50 años. El Código Penal establece actualmente que la pena máxima es de 35 años.

Lunes 2

El presidente Ricardo Martinelli sanciona la Ley No.68 de 2009 que reforma el Código Penal y Judicial, con la que sube de 35 a 50 años la pena máxima en caso de concurso de delitos, informa la Presidencia panameña. "Aquí la inseguridad no nos va a ganar, las mafias no nos van a ganar, el narcotráfico no nos va a ganar, las pandillas no nos van a ganar y vamos a poner mano dura contra esos delincuentes (...) que están acabando con la vida de inocentes panameños", manifiesta el presidente. Organizaciones sociales se han opuesto al aumento de penas porque creen que no va a resolver el aumento de la criminalidad ni otros problemas como el hacinamiento en las cárceles.

Martes 3

Con gritos de consignas como "un solo territorio, una sola bandera" la delegación del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) pasa frente a la Presidencia de la República durante el desfile del 3 de noviembre. Los obreros, quienes también ondean los banderines de este sindicato, manifiestan su rechazo a la instalación de bases aeronavales y de policía para combatir el tráfico de drogas, de armas y de seres humanos en Panamá.

Miércoles 4

El canciller de Panamá, Juan Carlos Varela dice que su país prepara su alejamiento del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), "en forma unilateral", si el organismo no responde de manera afirmativa a su solicitud de retiro. "Nosotros hemos sido claros, al momento en que cualquier país del PARLACEN decida por escrito, como lo tienen que hacer, de que no está de acuerdo con la salida, Panamá actuará unilateralmente a través de su Asamblea Legislativa", dice Varela. "El retiro del PARLACEN es una promesa de campaña del presidente Martinelli, por considerar que este foro legislativo se ha convertido en "un centro de impunidades" debido a que algunos de sus miembros se encuentran involucrados en actos ilegales".

Jueves 5

Integrantes del Movimiento de Desempleados de Colón (MODESCO) realizan una protesta durante los desfiles patrios que se llevan a cabo en la costa atlántica. Coreando consignas, los miembros de MODESCO exigen plazas de trabajos al presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien se encuentra en un palco para apreciar los desfiles. "MODESCO está en las calles... buscando la unidad" y "Un pueblo unido, jamás será vencido" son algunas de las frases que corean los manifestantes.

Viernes 6

La ministra de Educación, Lucy Molinar, aclara que en ningún momento las clases de hoy, hayan sido suspendidas con motivo de las fiestas patrias. De esta forma, la funcionaria reacciona al notado ausentismo que se ve en las escuelas oficiales del país y que según dice se debe a las “interpretaciones” que hacen tanto los estudiantes como los padres de familia. Molinar agrega que los docentes asisten en su mayoría y que en el caso de los estudiantes la asistencia es irregular.

Sábado 7

El Ministerio de Educación (MEDUCA) reitera el llamado a los estudiantes para que asistan a clases el próximo lunes 9 de noviembre. Mediante un comunicado de prensa, la jefa de la cartera educativa, Lucy Molinar, indica que los estudiantes deben ir a clases el lunes 9 de noviembre. “Debemos trabajar para justificar nuestros salarios”, señala la ministra. En cuanto al tema del ausentismo en distintas escuelas, Molinar dice que hay que hacerle un llamado de atención a los padres de familia del porque no envían a sus hijos a los centros educativos.

Domingo 8

La Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social (AECSS), denuncia que la nueva Administración de la institución pretende modificar el Reglamento Interno, a fin de dejarlos sin estabilidad laboral y que además pretenden “asfixiarlos” económicamente. Según Priscila Vásquez, dirigente de la AECSS, hay acciones claras de la nueva administración que “apuntan” a modificar el Reglamento, lo que les permite destituir a los funcionarios actuales y nombrar otros, sin cumplir con los mínimos establecidos.

Lunes 9

El director del Fondo de Inversión Social (FIS), Giacomo Tamburelli, dice que no negociará bajo presión con el Movimiento de Desempleados de Colón (MODESCO). Tamburelli expresa que los integrantes de MODESCO están acostumbrados a tratar de manipular y medir fuerzas con las autoridades. Agrega que él como director del FIS no trabaja con ese sistema de presión, “esas prácticas son de 20 años atrás” manifiesta.

Martes 10

Un alza de la tarifa única a 40 centésimos o un subsidio al precio del diesel solicitan los transportistas al Órgano Ejecutivo. El anuncio lo hace el presidente de la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA), Dionisio Ortega, quien detalla que la petición se fundamenta en un estudio realizado por el Ejecutivo hace varios años. El Gobierno, a través del director encargado de la Autoridad del Tránsito, Jorge Ricardo Fábrega, asegura que es “imposible”

un alza del pasaje. Por su parte, la vicepresidenta de la Fundación para la Protección de los Usuarios del Transporte Público, Esperanza Mena, llama al diálogo entre las partes y recuerda que cualquier alza en las tarifas debe pasar por una consulta ciudadana, tal como lo establece la Ley 6 del 2002.

Miércoles 11

Estudiantes de la Universidad de Panamá y del Colegio Artes y Oficios se enfrentan con la Policía Nacional (PN) durante una protesta por la instalación de bases aeronavales en el país para combatir el narcotráfico con la supuesta ayuda de Estados Unidos. Los estudiantes, entre estos miembros del Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre (FER-29) y Bloque Popular Universitario, bloquean por más de una hora la Vía Transístmica frente a esta Universidad, en la capital. Queman botes de basura y gritan consignas contra el Gobierno, pero son dispersados por la PN con chorros de agua y gases lacrimógenos. "Durante los hechos fueron detenidos 16 estudiantes, de estos 14 menores de edad y uno de mayor edad del Artes y Oficios, así como uno de la Universidad de Panamá", dice una fuente de la PN.

Jueves 12

Cientos de colonenses se han visto afectados por el cierre de la vía Transístmica, a la altura de la policlínica Hugo Spadafora Franco. La avenida es cerrada por un grupo del Movimiento de Desempleados de Colón (MODESCO). La protesta, que comenzó a las 7:15 a.m., es para exigir plazas de empleo y la reintegración a los puestos que ocupaban en el Gobierno.

Viernes 13

Luego de siete horas de estar detenido, el dirigente de los nasos, Marcial Gamarra, es liberado por las autoridades. Gamarra fue detenido por, supuestamente, disparar contra una maquinaria de la empresa Ganadera Bocas, S. A. Agentes policiales trasladan a Gamarra de una estación de Guabito a otra localizada en Changuinola, en Bocas del Toro, para que rinda una declaración por este caso. Durante esta semana, los moradores de la comunidad de San San y San San Druy han protestado, debido a que se niegan a ser desalojados de sus tierras, las cuales están en litigio con la compañía Ganadera Bocas, S. A.

Sábado 14

El costo de la canasta básica de familia (CBF) desciende 9 centésimos en octubre del presente año comparado con el mismo periodo 2008, alcanzando los 266 dólares con 78 centésimos, según la Autoridad de Protección al Consumidor. El informe señala que el

arroz de primera se incrementa 5 centésimos en la presentación de 5 libras, el tomate perita sube 4 centésimos, la corvina 5 centésimos y el la libra de ñame 8 centésimos. En tanto, el pan de molde baja 4 centésimos, la libra de lechuga 11 centésimos, la libra de pollo entero disminuye 2 centésimos y el paquete de salchicha de carne de res descendió 8 centésimos.

Domingo 15

El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, da a conocer detalles sobre el nuevo sistema de transporte para la ciudad de Panamá, el cual se denomina "Metro Bus". Se trata de un sistema "cómodo" y "confiable", según el ministro, quien añade que por su uso se cobrará un pasaje único. Papadimitriu, presidente de la Comisión de Transporte de la Presidencia, señala que para implementar el nuevo modelo se necesita hacer un cambio, el cual "no será fácil, pero lo vamos a lograr".

Lunes 16

El ministro panameño de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, informa que la reforma tributaria ha de discutirse antes de fin de año en sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional y se busca eliminar el Cálculo Adelantado del Impuesto de Renta (CAIR), reducir las cargas del Impuesto de Renta para dejar más dinero en el bolsillo de la clase media y trabajadora.

Martes 17

Integrantes del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS) protestan en la vía hacia el Puente Centenario en la ciudad capital. Los manifestantes, con sus banderines, gritan consignas para exigir justicia por las muertes de obreros y cuyos culpables aún se encuentran en libertad. El dirigente Marcos Guzmán manifiesta además, que los obreros se oponen a las intenciones del gobierno de eliminar a los beneficiarios de la Caja de Seguro Social.

Miércoles 18

Se dan las primeras protestas del movimiento estudiantil contra la implementación de las bases navales en territorio panameño. Luego de la recuperación de la soberanía en el año 2000, Panamá da un retroceso en materia de integridad y autodeterminación, cuando el actual gobierno sin argumento responsable se vale del combate al narcotráfico cuando las experiencias y la historia de los pueblos avasallados por las políticas exteriores de E.U han sido evidente en la utilización de los estados para la guerra. Lo más contundente en la lucha contra el narcotráfico es que debe iniciar por el mayor consumidor que es los Estados Unidos. A raíz de esta manifestación, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP) suspende indefinidamente las clases en el campus central por los disturbios provocados por universitarios en los predios de esa institución educativa.

Jueves 19

Sin ninguna orden judicial y por la vía de hecho, unos 200 agentes de policía desalojan a las comunidades Naso de San San y San San Drui, en la provincia de Bocas del Toro. A las 12 del medio día comienzan a llegar los efectivos que se han encontrado con la resistencia pacífica de la comunidad. Después de dos horas de resistencia, unas 150 unidades de la policía, entre ellos decenas de antimotines, entran a la comunidad de San San Drui escoltando a la maquinaria de la empresa privada Ganadera Bocas para arrasar con la comunidad reconstruida. Los agentes de policía dispararon gases lacrimógenos y destruyen las endeble edificaciones que las comunidades Naso levantaron tras el anterior desalojo violento del 30 de marzo.

Viernes 20

Los niños panameños, al igual que los del resto de América Latina, sufren las consecuencias de las disparidades sociales que existen en este país, afirma el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Panamá, Mark Connolly. "Las poblaciones excluidas, áreas indígenas y ciertas poblaciones afro-descendientes, son las más afectadas por estas disparidades", indica en una entrevista el alto funcionario que trabaja por el bienestar de la niñez. Connolly considera que uno de los mayores retos que debe asumir el gobierno panameño es eliminar las desigualdades entre las zonas metropolitanas y las áreas rurales e indígenas de este país para sacar de esta postración social a los niños pobres.

Indígenas naso, que habitan tierras que reclama la empresa Ganadera Bocas, propiedad del empresario Mario Guardia, disparan contra los trabajadores de esa compañía. La información la confirma el subcomisionado de la Policía Nacional (PN), Didier de Gracia, quien añade que su personal se mantendrá en el área para tratar de controlar a los indígenas. La reacción de los manifestantes surge luego de que antimotines desalojan por la fuerza en el día de ayer a los indígenas naso que habitan en las tierras en disputa.

Sábado 21

El Gobierno Nacional no expropiará tierras para satisfacer precarismo, ni para dárselas a los indígenas nasos, quienes poseen una comarca con una extensión bastante grande de 160 mil hectáreas, afirma el ministro de Gobierno, José Raúl Mulino. A juicio de Mulino, no se trata de la falta de tierras, porque ellos (nasos) tienen dónde estar, lo que se trata es de un "capricho manipulado". Por su parte, el comisionado de Derechos Humanos de las Comunidades Indígenas, Bernardo Jiménez, informa que presentarán una propuesta al Gobierno para comprar parte de las tierras y que las otras sean exoneradas, o lograr una negociación con Ganadera Bocas S.A. Eliseo Vargas, vocero de la comunidad Naso, advierte que seguirán con sus luchas hasta las últimas consecuencias y aclara que no cuentan con marco jurídico ni comarca, tal como señala el ministro Mulino.

Domingo 22

La canasta básica familiar seguirá aumentando, así lo advierte el presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA), Iván Ríos, quien dice que si los productores, el Gobierno y los comerciantes no se ponen de acuerdo la situación se agudizará. “Hay que lograr activar la cadena agroalimentaria. El alto costo de la canasta no es nuevo y, hoy se agrava por la crisis económica a nivel mundial y por otros factores como es el alto costo de los fertilizantes y agroquímicos”, asegura.

Lunes 23

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, informa que la primera casa de estudios reanudará clases a partir de mañana, de forma paulatina. Las facultades que retoman las clases a partir de las 7:00 a.m. son: Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática, agrega el rector. En tanto, se espera que en los próximos días, hagan lo propio el resto de las facultades de la universidad, tanto en la capital como en la provincia de Colón. Según el Consejo Académico, la suspensión de clases se aplica para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y administrativos de esa primera casa de estudios.

Indígenas del Teribe, de las comunidades de San San y San San Druy, territorio originario naso, lanzan al río, un tractor de la empresa Ganadera Bocas, S.A. informan los directivos de la empresa Ganadera Bocas. Además, informan que el conductor del tractor, Ima Santos, es golpeado con piedras por parte de los nasos que están molestos porque la semana pasada fueron desalojados de las tierras que reclama la empresa. Por otro lado, activistas de Solidaridad Naso afirman que después de que el tractor de la empresa Ganadera Bocas cayera al río Druy de manera, aparentemente accidental, los controles policiales en el acceso a Druy se han intensificado "Ahora, sin mediar resolución legal alguna, la Policía impide el acceso a la zona de forma arbitraria", destaca un boletín de prensa de Solidaridad Naso.

Martes 24

Miembros del Sindicato Único Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), en la costa atlántica, de la provincia de Colón, cierran la calle en el corredor, a la altura del centro comercial Plaza Milleniun, para exigir la colocación de un oficial de tránsito en esta vía. Los obreros argumentan que han solicitado desde hace varias semanas un guardia de tránsito que dirija el tráfico en el lugar. Eustaquio Méndez, del SUNTRACS, asegura que el paso constante de vehículos sobre todo de aquellos que se dirigen a la zona franca por la entrada del corredor, ponen en riesgo la vida de los trabajadores del proyecto, por lo que necesitan a alguien con autoridad que dirija el tráfico.

Miembros del Movimiento de Desempleados de Colón (MODESCO) cierran la calle 10 y Avenida Central, en Colón, donde han puesto barricadas con ramas y llantas para evitar el

paso de los vehículos. Carlos Best, dirigente de MODESCO, manifiesta que se mantendrán en el lugar hasta que el gobernador se presente y les de respuestas en cuanto a la solicitud de 200 plazas de empleo para agentes de seguridad en las escuelas. Además, los manifestantes solicitan el reintegro de 78 trabajadoras de este movimiento que, afirman son destituidas del gobierno.

Miembros del Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida -pacientes y afectados por el envenenamiento con dietilene glycol- cierran parcialmente la Avenida Perú, cerca de la sede del Ministerio Público. Gabriel Pascual, dirigente del comité, dice que realizarán una marcha pacífica hasta la Fiscalía Especial, que está ubicada a unos siete metros de distancia de la Procuraduría, en donde esperan reunirse con el fiscal Dimas Guevara que lleva este caso. El dirigente se queja porque aún no han sido aceptados como "positivos" los casos de pacientes que, según recientes pesquisas, también ingirieron dietilene glycol a través de medicamentos de la Caja de Seguro Social y no aparecen en el listado oficial.

Miércoles 25

Con pancartas en mano y gritando consignas, un grupo de mujeres salen en marcha desde la iglesia del Carmen, en Vía España, hacia la Corte Suprema de Justicia, en Ancón, en la ciudad capital, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entre el grupo se ven las figuras (hechas de cartón) de las 69 mujeres que, según el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG), han muerto este año de manera violenta, la mayoría de ellas por razones asociadas a su género. Marchan representantes del Espacio de Encuentro de Mujeres, la Central General de Trabajadores de Panamá, la Asociación de Educadores Democráticos de Panamá, el Equipo de la Mujer de la Pastoral Social, la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá, la Organización de Mujeres en los Barrios, y de la Unión de Estudiantes Revolucionarios.

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) manifiesta en conferencia de prensa, su rechazo a las propuestas de ajuste del salario mínimo que se han presentado hasta ahora. Según la dirigencia de los trabajadores, el nuevo salario mínimo se debe fijar en 650 dólares debido a los anuncios de aumento en la tarifa del servicio eléctrico, del combustible, entre otros. Los trabajadores “no tenemos poder de consumo” y “no entendemos a los empresarios” que cuestionan la propuesta que hemos hecho y que han calificado de irracional e irresponsable, sostuvo Rafael Chavarría, representantes del CONATO ante la Comisión Nacional de Salario Mínimo.

Miembros del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) protestan en los predios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los obreros exigen justicia por el asesinato del trabajador Osvaldo Lorenzo, ocurrido el 14 de agosto de 2007 en Chilibre. En las últimas semanas el SUNTRACS ha efectuado protestas al mediodía en distintos puntos de la ciudad capital como Tumba Muerto y la Avenida 12 de octubre para exigir respuesta a las autoridades tanto por la muerte de Lorenzo, como de otros cuatro obreros.

Jueves 26

Luego de que el Gobierno informara su intención de explotar Cerro Colorado, los ambientalistas e indígenas de la zona, advierten que no lo permitirán y de ser posible se armarán para defenderse. Para Ezequiel Miranda, las oposiciones van a ser más serias y contundentes porque para él ya no es cuestión de cerrar filas o calles en contra de este proyecto. “No nos va quedar más que agarrar un rifle, una escopeta y hasta una ametralladora si es necesario para salvar este pedacito de tierra y bosque que tiene Panamá”, afirma Miranda. Manifiesta también que el problema es que se tiene una legislación ambiental en todos los recursos naturales, pero en la práctica no es aplicada por las autoridades ni mucho menos por los funcionarios

Viernes 27

El director de Política Indígena del Ministerio de Gobierno y Justicia, José Isaac Acosta, da a conocer su preocupación tras conocer sobre un comunicado que emitirá el relator especial de las Naciones Unidas, James Anaya, sobre la actual situación que atraviesan los indígenas nasos debido a un conflicto de tierras en la provincia de Bocas del Toro. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pide esta semana sanciones para los responsables de la supuesta violación a los derechos humanos de los indígenas nasos. Además, el relator Anaya solicita al Gobierno panameño buscar vías de diálogo y entendimiento basadas en el respeto a los derechos humanos.

Un "acuerdo de principios" para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y fortalecer el desarrollo nacional firman el Gobierno Nacional, la empresa AES Changuinola, S.A. y las comunidades Ngobe de Charco La Pava, Valle del Rey, Chaguinola Arriba y Nance de Risco. La información se da a conocer a través de un boletín de prensa en el que se indica, además, que el vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, destaca que esta firma es "un paso muy importante para avanzar en el desarrollo económico y social" del país.

Sábado 28

Integrantes del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) efectúan una protesta pacífica durante los desfiles patrios que se llevan a cabo en La Chorrera. Durante su paso por el Parque Feuillet, los manifestantes corean consignas para exigir al Gobierno un aumento en los salarios y la congelación de la canasta básica familiar. Además, miembros del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares piden durante la actividad que se haga justicia por los compañeros asesinados Osvaldo Lorenzo y Luigi Argüelles. También participan de la protesta integrantes del movimiento estudiantil FER-29.

Domingo 29

El presidente de la Fundación Ocalagan, David Ocalagan, representante de los pacientes de Insuficiencia Renal Crónica, señala que Javier Díaz, director de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social (CSS), tiene intenciones de implementar una privatización para la Sala de Hemodiálisis. Ocalagan señala que lamenta mucho que un médico con la autoridad que tiene Díaz, no diga la realidad de sus intenciones y sigue engañando a la población. “Nosotros hemos hecho alerta sobre lo que ocurre y el quiere ocultar su plan de privatización, por lo que le advertimos al director de la CSS, Guillermo Sáez Llorens, se mantenga alerta” dice Ocalagan. Según Ocalagan, el viernes pasado hubo retraso en las horas de tratamiento de hemodiálisis, debido a que no se le había pagado a la empresa proveedora del kit, para la realización del procedimiento, con el deseo de que existan quejas y así tener excusas para llevar a cabo sus planes.

Lunes 30

El director de Política Indígena del Ministerio de Gobierno y Justicia, José Isaac Acosta, manifiesta que las autoridades tienen identificadas a varias organizaciones que están persuadiendo a los indígenas nasos de las comunidades San San y San San Drui, Bocas del Toro, para que salgan a protestar. Los grupos indígenas mantienen un conflicto de tierras con la empresa Ganadera Bocas. El funcionario, manifiesta que se trata de varias organizaciones no gubernamentales y de activistas solidarios que han “exagerado” los episodios ocurridos para darlos a conocer a la opinión pública internacional. Enfatiza que estos grupos han dicho que los agentes policiales actuaron con una “actitud brusca” durante el último desalojo de los indígenas. En este sentido, Acosta aclara que “no se capturó a nadie ni se golpeó a nadie”. Sin embargo los indígenas manifiestan lo contrario.

Glosario de Siglas

ACOVIPA	Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá
AECSS	Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social
CBF	Canasta Básica Familiar
CAIR	Cálculo Adelantado del Impuesto de Renta
CANATRA	Cámara Nacional de Transporte
CONATO	Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
CSJ	Corte Suprema de Justicia
CSS	Caja de Seguro Social
FER-29	Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre
FIS	Fondo de Inversión Social
FRENADESO	Frente Nacional por la Defensa de los DD Económicos y Sociales
MEDUCA	Ministerio de Educación
MODESCO	Movimiento de Desempleados de Colón
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OPVG	Observatorio Panameño contra la Violencia de Género
PARLACEN	Parlamento Centroamericano
PN	Policía Nacional
SUNTRACS	Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UP	Universidad de Panamá

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena".

Dirigido por Marco A. Gandásegui, coordinado por Jennifer Delgado Urueta, con la asistencia de Marina Ábrego.

Fuentes: La Prensa, La Estrella de Panamá, Panamá América.

Fuentes alternas: Kaosenlared.net, FRENADESO, ASOPROF, Oilwatch Info Panamá, aevenaccion.tripod.com

Diciembre 2009

Martes 1

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dirige al Gobierno de Panamá solicitándole la adopción de medidas cautelares a favor del pueblo indígena Naso, en Bocas del Toro. Santiago A. Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, confirma la notificación mediante una carta de dos páginas, en la que detalla las "medidas cautelares" referentes al pueblo indígena Naso de Panamá. La CIDH pide al Ejecutivo panameño que tome las medidas necesarias para evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados del pueblo nasó y solicita, además, que se brinde la atención de emergencia en salud y vivienda a los miembros de las comunidades afectadas por los desalojos.

Miércoles 2

El Ejecutivo debe fijar el nuevo tope del salario mínimo en Panamá antes del próximo 16 de diciembre, informa la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés. La ministra explica que es el Ejecutivo quien toma una decisión sobre este tema, ya que fracasaron las negociaciones llevadas a cabo por la comisión encargada de lograr un acuerdo sobre el ajuste salarial. La Comisión de Salario Mínimo, integrada por representantes de los trabajadores, empresarios y del gobierno, se instaló en agosto pasado y desde entonces ha sostenido reuniones. En la actualidad, el salario mínimo en Panamá es de 325 dólares.

Jueves 3

Expertos internacionales en materia de derechos de la niñez rechazan, en Panamá aumentar las penas a los adolescentes y reducir la edad de responsabilidad penal como solución al problema de la delincuencia en América Latina. El relator sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Sérgio Pinheiro, señala en rueda de prensa que "esa ola de aumentar las penas es absolutamente irresponsable en términos de la democracia, porque se aumentan las penas pero no se mejora la defensa de los acusados". Los expertos mantienen una reunión desde el martes en Panamá con el Capítulo Latinoamericano y del Caribe del Movimiento Mundial por la Infancia, integrado por distintas organizaciones que trabajan para la protección de la niñez y la adolescencia.

Un grupo de educadores de la Unión Magisterial Libre marcha hacia la Presidencia de la República. El dirigente magisterial, Andrés Góndola, anuncia que la actividad se inicia desde la Escuela República de Venezuela en la ciudad capital. Los educadores, según informa Góndola, entregan un pliego de peticiones en la Presidencia, entre las cuales se encuentran el pago de salarios caídos.

Viernes 4

Una propuesta de ley que establece beneficios a las personas con discapacidad comprobada, entre estos, una jubilación anticipada a los 40 años de edad, se discute en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional. El anteproyecto de ley es propuesto por los diputados Luis Eduardo Quirós y Diego Lombana, éste último diputado suplente que sufre de discapacidad auditiva. También pretende otorgar otra serie de beneficios para las personas con discapacidad como descuentos en la compra de medicinas y en el pago de tratamientos médicos. Establece un descuento de 40% para la compra de medicamentos, la atención hospitalaria, intervención quirúrgica y prótesis; 50% de descuento en matrículas y mensualidades en centros educativos.

Sábado 5

La Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACCS) no descarta realizar un paro parcial de labores, en solidaridad con un grupo de funcionarios destituidos por la actual administración. Enrique Ortega, dirigente de la ANFACCS en Colón, informa que aún se encuentran reunidos analizando la situación y las medidas que podrían tomar para respaldo a los destituidos. Según Ortega, tienen conocimiento oficial de 10 despidos, sin embargo ya se hablan de otras 35 más.

Domingo 6

La situación de los pacientes de hemodiálisis, en el sexto piso del Complejo Hospitalario Metropolitano, es crítica. “Nunca hay camas y en reiteradas ocasiones, cuando se acude a Nefrología, tienen que hospitalizarse en camillas en el cuarto de urgencias, durante una semana”, manifiestan los quejosos. Actualmente, la sala de hemodiálisis cuenta con dos cuartos y doce camas. Son las mismas instalaciones de hace 10 años, cuando se atendían 100 pacientes y ahora hay más de mil 500 para atención en esta sala, precisa David Ocalagan, vocero de los afectados. Destaca que la falta de presupuesto es una de las causas de este problema. Lo más preocupante, dice, es que para 2010, no existe un renglón de inversión para resolver este inconveniente.

Lunes 7

El vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, enfatiza que el Gobierno “va a hacer justicia social” cuando le corresponda fijar una nueva cifra del mínimo salarial. Esta

declaración se da, a su llegada al Palacio de las Garzas, para participar en el Consejo de Gabinete. De hecho, Varela informa, que el debate del salario mínimo está incluido en la agenda de trabajo de hoy. La Comisión Nacional de Salario Mínimo, integrada por representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores, concluyó el pasado miércoles 2 de diciembre su trabajo sin que se fijara la nueva cifra. Frente a esta situación, el Órgano Ejecutivo debe establecer la cifra final a más tardar el próximo 16 de diciembre.

Martes 8

Una propuesta de ley mediante la que se otorga a la Contraloría General de la República mayores atribuciones para perseguir los actos de corrupción en las instituciones del Estado, será tema de discusión en el mes de enero por los diputados de la Asamblea Nacional. El proyecto de ley es aprobado en primer debate en el pasado período de sesiones ordinarias y se espera que sea uno de los primeros temas a discutir en el período que se inicia en enero próximo. La propuesta dispone, que el servidor público al declarar su patrimonio ante notario público, deberá enviar copia autenticada de su declaración a la Contraloría General de la República.

Miércoles 9

El director de Política Indígena de Panamá, José Isaac Acosta, afirma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "exagera" la situación de la etnia naso con la solicitud de medidas cautelares para evitar desalojos. "Nos preocupan estas recomendaciones. Sin embargo, estamos preparando una respuesta formal con todas las documentaciones, porque creemos que se está exagerando episodios y hechos y nada contribuye al feliz entendimiento entre los nasos y las personas no indígenas de la zona", señaló Acosta. Los nasos tienen una controversia por unas tierras propiedad de la empresa panameña Ganadera Bocas S.A., que los indígenas reclaman como propias y la empresa no está dispuesta a ceder.

Jueves 10

Varios grupos de mujeres realizan una manifestación en las inmediaciones de la iglesia Don Bosco. Con esta actividad, las participantes buscan hacer un llamado para acabar con la violencia hacia las mujeres, dijo Nelva Reyes, quien integra el Espacio de Encuentro de Mujeres. Reyes solicita además mayor diligencia de las autoridades judiciales para atender las denuncias de violencia doméstica. Asimismo, la dirigente pide aumentar los recursos con que se cuenta actualmente para apoyar a la mujer maltratada.

Viernes 11

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechaza el recurso de hábeas corpus preventivo a favor del ex titular de Educación, Salvador Rodríguez. El ex funcionario es investigado por la

Fiscalía Tercera Anticorrupción, por el supuesto delito contra la administración pública. La CSJ, bajo la ponencia del magistrado Víctor Benavides, indica que para aprobar este recurso debe existir una orden de detención, llevada por alguna autoridad competente. Sin embargo, el fallo señala que hasta el momento esta orden no existe.

Sábado 12

El abogado Julio Berrío insiste en interponer una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y hoy vuelve a reiterarlo, luego de que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, sancionara la ley para el retiro de Panamá del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Berrío asegura que esta ley viola la superioridad de los tratados sobre el derecho interno que lo consagra el artículo No.26 y 27 de la Convención de Viena del 23 de mayo de 1969. La sanción de esta ley indica que Panamá desafía el artículo No. 4, que establece que Panamá acata las normas de las leyes internacionales y el artículo 159, numeral 3 de la Constitución Nacional, que establece que en las funciones de la Asamblea no está la de derogar tratados que por ley han sido ratificados por otras leyes. "Aceptar esta tesis es sembrar el caos en las relaciones internacionales, además generar conflictos", manifiesta el abogado.

Domingo 13

Alrededor de las 3:00 p.m. se da inicio a la marcha por la paz, la cual parte desde el Parque Urracá, en la Avenida Balboa, en la ciudad capital. Integrantes de clubes cívicos, de universidades oficiales y privadas y varias escuelas participan de esta actividad. La vicealcaldesa de la capital, Roxana Méndez, manifiesta que la marcha constituye un llamado de atención tanto para el Gobierno como para la población para preservar la paz en el país.

Lunes 14

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admite la “acción de amparo de garantías constitucionales” promovida por la firma forense Morgan & Morgan, en nombre y representación de Minera Panamá, S. A. (antes Minera Petaquilla). La ponencia del fallo estuvo a cargo del magistrado Víctor Benavides. La compañía interpuso el amparo, contra la orden de hacer contenida en la resolución AG-0975-2008 del 13 de noviembre de 2008, proferida por la Ministra de Asuntos Relacionados con la Conservación del Ambiente y Administradora General de la Autoridad Nacional del Ambiente. En el comunicado, se resalta que “la resolución impugnada consiste en sancionar a Petaquilla Gold, S. A., y de forma solidaria a las empresas Minera Petaquilla, S. A., Petaquilla Minerals, S. A., y Petaquilla Minerals LTD, al pago de un millón de dólares por el incumplimiento de la normativa ambiental vigente, descrita dentro del contenido de la presente resolución”.

Unos 100 marinos, operarios de los remolcadores que trabajan para la empresa Smit International Harbour Towage (SIHT), se declaran en huelga. Por tal razón, los marinos no

han prestado sus servicios a la empresa SIHT, que opera con ocho remolcadores en los puertos de Balboa y Cristóbal, terminales en el Pacífico y el Atlántico, respectivamente, y que también asiste al Canal en casos de urgencia. Luis Carlos Fruto, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Servicios Marítimos, Remolcadores, Barcazas y Afines de Panamá (SITRASERMAP), explica que los trabajadores alegan incumplimiento del convenio colectivo firmado el año pasado con SIHT. En este sentido, dice Fruto, los trabajadores pretenden manifestar su descontento por las condiciones laborales en las que se encuentran, por lo que esperan que el Ministerio de Trabajo se pronuncie en este caso.

Martes 15

El proyecto de decreto sobre la transformación curricular del Ministerio de Educación es presentado al presidente Ricardo Martinelli para su aprobación. Ante esta decisión, el sector educativo reitera que se mantiene en alerta, debido a que teme que por la disminución de horas de clases, sean sacados del sistema. La propuesta de transformación curricular de la educación media, establece 12 artículos, entre ellos, el 8, considerados "polémicos" por las autoridades y educadores. El artículo estipula que "los docentes con menos de 24 horas de carga horario mantendrán su estabilidad", pero deberán desarrollar actividades y tareas educativas de coordinación.

Miércoles 16

La entrega de las dos mil 500 bolsas de alimentos en las fincas bananeras de COOSEMUPAR causa malestar entre los obreros, quienes dicen sentirse burlados. "Nos están dando una miseria, dos libras de lentejas, dos pintitas de aceite, nosotros esperábamos más, la entrega del bono no se dio", dice José Manuel Ruiz, vocero de los trabajadores. Por su parte, Rene Caballero, director regional del Fondo de Inversión Social, dice que esta es una primera entrega de alimentos, la segunda es la próxima semana y habrá una tercera que no tiene fecha.

Los médicos que integran la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS) anuncian que se mantendrán en alerta por la posible privatización de la institución social. De hecho, mañana tienen una reunión extraordinaria donde se discutirán las acciones que tomarán para evitar que se privatice la institución, manifiesta el médico Fernando Castañeda, secretario general de la organización. El director de la CSS, Guillermo Saéz-Llorens, ha reiterado que no pretende privatizar la institución, ya que la ley no se lo permite.

El dirigente magisterial Luis López denuncia que existe un hermetismo por parte del Ministerio de Educación (MEDUCA), sobre el proyecto de transformación curricular de la educación media. Sostiene que a pesar de las reuniones con funcionarios de este ministerio, considera que hace falta una mejor comunicación entre ambas partes. López, manifiesta que es necesario que el docente sea tomado en cuenta y que se analicen si los colegios del país están preparados para los cambios incluidos en el proyecto.

Jueves 17

El educador Mario Almanza señala que la transformación curricular que impulsa el Ministerio de Educación (MEDUCA) se está desarrollando de manera "inconsulta", lo que causa un descontento en el gremio magisterial porque no se les ha tomado en cuenta. El dirigente magisterial se refiere así, al sentimiento de descalificación que sienten los docentes por el proceder de las autoridades de Educación en cuanto a este tema. Almanza, señala que con la transformación curricular no se resuelve el problema por el que atraviesa actualmente el sistema educativo panameño.

Panamá pretende llevar a cabo un censo de las víctimas mortales provocadas por la invasión de Estados Unidos a este país el 20 de diciembre de 1989, anuncia el presidente de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA), Conrado Sanjur. El activista explica que diversas organizaciones sociales participan en este esfuerzo de recopilación de datos para conocer la cantidad de panameños que murieron hace 20 años durante la acción militar conocida como "Operación Causa Justa".

Viernes 18

La Dirección nacional de política indigenista del Ministerio de Gobierno y Justicia, responde formalmente al relator especial de los derechos humanos de la ONU, James Anaya, sobre las inquietudes que tiene en cuanto a la situación de los indígenas nasa en la provincia de Bocas del Toro. José Acosta, director de política indigenista, dice que se le explica a Anaya que no existe una política de desalojo masivo de los indígenas nasa de sus comunidades. La respuesta brindada a Anaya aclara que no pelagra la vida de ninguna persona en las comunidades indígenas y que, por el contrario, existe un clima de respeto, añade el funcionario.

Sábado 19

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Francisco Sánchez Cárdenas, arremete contra el presidente Ricardo Martinelli. "Martinelli quiere controlar todos los poderes del Estado. Ahora resulta ser un tremendo lobo con colmillos largos", dice Sánchez Cárdenas, tras ser consultado por la detención del ex ministro de educación, Salvador Rodríguez, durante la administración de Martín Torrijos. Agrega que ya el presidente nombró a una de sus colaboradoras en la Contraloría General de la República, está presionando a la procuradora Ana Matilde Gómez y nombra a dos allegados como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Domingo 20

Un grupo de panameños protesta pacíficamente contra Estados Unidos, al conmemorarse el vigésimo aniversario de la invasión militar estadounidense a Panamá. La manifestación es

organizada por el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO). La organización, que aglutina a sectores magisteriales, de derechos humanos, trabajadores y universitarios, lamenta que a dos décadas de la acción militar aún se desconoce cuántos panameños murieron. Así mismo, repudia que Estados Unidos nunca indemnizara a los familiares de las víctimas.

En Panamá se seguirán instalando bases aeronavales en puntos estratégicos de la costa del Pacífico, indica el vicepresidente y canciller de la República, Juan Carlos Varela. Varela explica que esas bases se instalarán porque en ese sector operan redes de los carteles de la droga y el crimen organizado. Agrega que esa decisión de instalar las bases es “soberana” y del presidente de la República, Ricardo Martinelli. El vicepresidente destaca que el establecimiento de Fuerzas de Tareas Conjuntas panameñas con otros países, entre esos Estados Unidos, para combatir el narcotráfico en el territorio nacional es una medida que contribuye a reducir la distribución de drogas en las calles, motivo de enfrentamiento entre pandillas y delincuentes criollos en asociación con extranjeros.

Lunes 21

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reacciona al anuncio realizado por el Gobierno, sobre el nuevo salario mínimo que entra a regir a partir del año entrante. “Lo que el Gobierno nacional propone aumenta el nivel de informalidad en nuestra economía, destruye puestos de trabajo en el país”, indica un comunicado del sector privado. El CONEP considera además que el nuevo salario mínimo “reduce la competitividad de aquellas empresas que tienen que pelear contra productos importados o para abrirse mercado en el exterior”. Ante esta situación, Gaspar García de Paredes, quien preside el CONEP, manifiesta que ahora es el momento de concentrarse “en una estrategia que aumente la productividad y la competitividad para crear un mejor país”.

Martes 22

Un grupo de obreros del Sindicato de Trabajadores de Corrugado Panamá, S. A. deciden no ingerir alimentos como medida de protesta para que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral agilice el fallo, en donde ratifica que la citada empresa cuenta con la liquidez económica para seguir operando en Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Así lo expresa, Leroy Francis, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corrugado Panamá, S. A., quien dice que sus compañeros llevan cuatro meses de lucha por sus derechos.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, manifiesta que no puede prometer que los centros educativos del país estén listos el primer día de clases del año lectivo 2010. Sin embargo, el Ministerio de Educación hace los esfuerzos necesarios para alcanzar el cometido. Molinar indica que han conformado brigadas de trabajos para darles mantenimiento a los planteles escolares. En este sentido, la funcionaria informa que este tema es tratado dentro del ministerio para no hacer contrataciones, ya que de lo contrario eso se convierte en un negocio.

Miércoles 23

Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, expresa que el Estado panameño tiene recursos para aumentarle a los servidores públicos. Berrocal explica que al no incrementarse el salario mínimo en el sector público se afecta a más de 23 mil funcionarios. Agrega, que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, promete en campaña respetar la dignidad de los trabajadores públicos y la Carrera Administrativa. El dirigente sindical indica que los funcionarios se sienten excluidos y discriminados en relación a los trabajadores del sector privado.

Jueves 24

La Fiscalía Superior Especial inicia una gira a nivel nacional para ubicar a cerca de 200 niños que se presume bebieron medicamentos contaminados con dietilenglicol. El fiscal superior especial, Dimas Guevara, explica que la gira iniciará en el mes de enero en Coclé, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá, para lo cual se notifica a los fiscales superiores de estas provincias a fin de atender los casos. Revela, que en Panamá se giraron unas 80 boletas para citar a personas que se presume ingirieron jarabe envenenado, pero no han acudido a su despacho, a pesar de la publicación de la lista de 1,055 nuevos contaminados. No obstante, se informa que la gira no incluye las comarcas indígenas, ya que allí no se tiene mucha información sobre las personas posiblemente afectadas.

Viernes 25

Con el nuevo ajuste al salario mínimo no todos los trabajadores devengarán B/. 416.00, ya que el aumento mensual depende de la actividad, las horas semanales laboradas y de la región. En la Zona 1, comprendida entre Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, Chitré, Aguadulce, Penonomé, La Chorrera, Arraiján y el distrito de Bocas del Toro, el salario mínimo será entre 357 y 416 balboas, un incremento entre 33 y 95 balboas al mes. En la Zona 2, que incluye el resto del país, el salario mínimo será entre 349 y 416 balboas, que representa un incremento entre 31 y 95 balboas al mes.

Sábado 26

Al nombrar como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a personas de su entorno y no hacer los cambios que prometió en campaña, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, al final pagará un costo político. Así lo afirma, el ex magistrado de la CSJ Edgardo Molino Mola, quien señala que luego de estas decisiones Martinelli también perderá popularidad. “El Presidente se dará cuenta que mucha gente que lo apoyo ya no va a estar tan dispuesto apoyarlo como lo hacía antes”, explica el jurista. Para el abogado el actual método de selección de los magistrados está atentando contra la independencia judicial.

Domingo 27

El rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, manifiesta que el actual sistema educativo no funciona, al considerar que este no avanza y, por lo tanto, se ha quedado “caduco”. García de Paredes sostiene que el “error” del sistema de educación en el país se ve reflejado desde que el estudiante está en el nivel primario. García de Paredes añade que estos defectos se van intensificando a medida que el estudiante va avanzado en los niveles posteriores. Luego, cuando el alumno llega a la universidad, no tiene la base para profundizar las materias, expresa. Ante este panorama, el rector de la primera casa de estudios superiores del país rechazó que sea responsabilidad del profesor la falla del sistema educativo ya que los profesores tienen que competir con casi 15 colegas que dan asignaturas simultáneamente, lo que no permite que los planes de estudios reciban una adecuada profundización.

Lunes 28

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) da a conocer que el 89% de los usuarios no percibirá un incremento de la tarifa eléctrica, a pesar de la anunciada alza estipulada para enero próximo. Así lo indica el administrador de la ASEP, Dennis Moreno, quien dice que el Gobierno -con la intención de evitar un impacto negativo- ha mantenido un subsidio para el Fondo de Estabilización Tarifaria de 32.1 millón de dólares. Según explica Moreno, el subsidio beneficia a más de 711 mil hogares del país.

Martes 29

Los ambientalistas de la provincia de Chiriquí están en desacuerdo con la Resolución AG-0911-2009 que permite un cambio en la zonificación del Parque Nacional Volcán Barú. El grupo de ambientalistas pide a las autoridades una “reconsideración”, ya que se trata de un área protegida donde no se permiten construcciones. El presidente de la Asociación para la Conservación de la Biósfera, Ezequiel Miranda, dice que “se va a tener que actuar de manera estricta contra la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), porque se está abusando de un área protegida al cambiarle su zona para que una empresa inicie un proyecto turístico”. Por su parte, el director regional de la ANAM, Harmodio Cerrud, expresa que el pasado 30 de octubre mediante la Resolución AG-0911-2009 se realiza una pequeña modificación a la zonificación y los trabajos son llevados a cabo por el Departamento de Geomática de la Dirección de Sistemas de Información Ambiental.

Guillermina McDonalds, una de los abogados del ex presidente de la República Ernesto Pérez Balladares, revela que su cliente tomará la decisión de presentarse o no a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, que funciona en la vía España, en la ciudad capital, para rendir una indagatoria en el proceso de blanqueo de capitales que se adelanta en esa dependencia del Ministerio Público. Luego de estas declaraciones, Pérez Balladares, llega a la Fiscalía donde es indagado por aproximadamente por 20 minutos.

Miércoles 30

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, declara que se siente “profundamente frustrado y burlado”, al igual que la mayoría del pueblo panameño. Las declaraciones de Martinelli, surgen luego de que el ex presidente de la República Ernesto Pérez Balladares, acudiera a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado. “Fue un show ver como la Policía buscaba al ex presidente por varias horas y luego él llega en su carro al Ministerio Público, en donde sólo tarda 20 minutos”, enfatiza Martinelli. El mandatario también asegura que en Panamá hay separación de los poderes del Estado y que como presidente “reitero mi compromiso de respetar este mandato constitucional”.

Jueves 31

“Hoy es un día de una especial celebración porque diez años no se fuman en pipa, pero todavía faltan” muchos más. De esta manera el presidente de la República, Ricardo Martinelli, cierra su discurso en el acto de celebración del décimo aniversario de la reversión del Canal a manos panameñas. El 31 de diciembre de 1999 se realiza la reversión del Canal y desde entonces, la Autoridad del Canal de Panamá ha aportado 4 millones 753.5 millones de dólares al Estado, según las cifras oficiales. Martinelli, destaca que los panameños hemos demostrado capacidad para administrar la vía interoceánica de forma íntegra y alejada de los vaivenes de la política.

Glosario de Siglas

AMOACSS	Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social
ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente
ANFACCS	Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social
ASEP	Autoridad Nacional de los Servicios Públicos
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CONEP	Consejo Nacional de la Empresa Privada
COPODEHUPA	Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá
CSJ	Corte Suprema de Justicia
COOSEMUPAR	Cooperativa de Servicios Múltiples Puerto Armuelles
FRENADESO	Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales
MEDUCA	Ministerio de Educación
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PARLACEN	Parlamento Centroamericano
PRD	Partido Revolucionario Democrático
SIHT	Smit International Harbour Towage
SITRASERMAP	Sindicato de Trabajadores de Servicios Marítimos, Remolcadores, Barcasas y Afines de Panamá

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.

Dirigido por Marco A. Gandásegui, con la asistencia de Marina Ábrego y la coordinación de Jennifer Delgado Urueta.

Fuentes: La Prensa, Panamá América, Radio Mía, La Estrella de Panamá, El Siglo, Crítica Libre.

Fuentes alternas: FRENADESO, ASOPROF, MJP Informa, Radio Temblor.

Análisis de coyuntura

Primer cuatrimestre 2009

CAMPAÑA ELECTORAL Y CONFLICTOS SOCIALES OPACAN EFECTOS DE LA CRISIS ECONOMICA EN PANAMA

2009ⁱ

“La actividad económica de Panamá cayó un 2.65% en abril frente al mismo mes del año pasado, en su primer resultado negativo desde el 2003”, según el gobierno. La economía de Panamá sólo creció un 2.5% en el primer trimestre del año, mientras que cerró el 2008 con un crecimiento del 9.2%.

La recesión global ha golpeado con fuerza el tráfico comercial del Canal de Panamá. El sector de la construcción, otro de los motores importantes de la economía panameña en los últimos años, también está perdiendo fuerza, por lo que algunos analistas han recortado sus pronósticos de crecimiento para el año a sólo un 3%.

Los servicios financieros, de reexportación (la Zona Libre de Colón tuvo un crecimiento negativo del 11.1 por ciento) y marítimos (el movimiento en los puertos tuvo una caída del 7.2 por ciento en febrero) también fueron negativos. Las toneladas netas que transitaron por el Canal de Panamá disminuyeron en un 3.3 por ciento, aunque los peajes crecieron debido al plan anual de alzas decretado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). En el sector de bienes, las exportaciones de frutas (melones, sandías y banano) sufrió una baja del 50 por ciento.

Igualmente, las inversiones extranjeras en el sector de la construcción, la minería y la pesca durante el primer cuatrimestre de 2009 disminuyeron significativamente. Entre 2003 y 2008 estos sectores habían crecido aceleradamente producto de la fuerte presencia de especuladores norteamericanos, españoles y colombianos. El turismo también se expandió en forma significativa doblándose en ese período el número anual de turistas que ingresaron al país. El crecimiento de entradas de pasajeros en los primeros dos meses de 2009 al país creció en un 3.3 por ciento comparado con el 13 por ciento el año pasado.

Las ganancias del sistema bancario ascendieron a 280.2 millones de dólares al cierre del primer cuatrimestre de 2009. Representa un 30 por ciento (120.4 millones de dólares) menos de lo que ganaron en igual periodo de 2008, según información de la Superintendencia de Bancos. En febrero de 2009 la pérdida fue de un 67 por ciento comparado con el mismo mes del año anterior. En abril la baja fue de 16 por ciento.

El total de nuevos préstamos otorgados por la banca para el consumo disminuyó en un 15 por ciento en los primeros tres meses de 2009. El consumo de energía industrial sufrió una baja del 8.5 por ciento. A su vez, los permisos de construcción concedidos en febrero de 2009 se redujo en un 18 por ciento comparado al mismo período en 2008.

En las cuatro secciones que siguen, se hará el análisis del fin de una fase económica que creció a una tasa promedio de casi el 9 por ciento durante un período de cuatro años (2005-2008) que no contempló una estrategia de distribución o inclusión social. Enseguida se verán los efectos de esta falta de política sobre los movimientos sociales a principios del presente año. En la siguiente sección se pasará revista de los efectos de la crisis económica mundial sobre Panamá en el primer cuatrimestre del 2009. Por último, se verá la campaña política que culmina el 3 de mayo y las alternativas que se le presentó al pueblo panameño.

1. Crecimiento económico sin distribución de la riqueza

Entre 2005 y 2008, la economía panameña creció en un promedio anual del 8 por ciento. El motor detrás de esta expansión se ubicó principalmente en el sector servicios, especialmente los marítimos. El crecimiento económico redujo el desempleo pero no afectó el empleo informal que concentra casi el 50 por ciento de la población económicamente activa. En las áreas rurales y en las urbes del interior del país, el desempleo y el empleo informal son rampantes.

En los últimos lustros se ha agudizado la desigualdad en el ingreso de los panameños. Los salarios como parte del producto interno bruto están perdiendo importancia en comparación con las ganancias de los empresarios. En el primer trimestre de 2009 los salarios disminuyeron y, al mismo tiempo, subió el precio de la canasta básica. En este período se sintieron los primeros efectos de la contracción económica producto de la disminución. El crecimiento económico durante el primer trimestre de 2009 (enero – marzo) fue del 4 por ciento, comparado con el 9 por ciento de 2008. El gobierno plantea que el crecimiento del producto interno bruto de 2009 alcanzará el 3.5 por ciento. Agencias intergubernamentales como la CEPAL y el Banco Mundial colocan la tendencia de crecimiento de la economía panameña en un 3 por ciento para 2009.

El presidente Martín Torrijos y su equipo, han trabajado arduamente para convertir en ley un proyecto de “descentralización” de todos los servicios sociales. El proyecto se introdujo a la Asamblea de Diputados a principios de 2009 pero se encontró con obstáculos que impidieron su rápida aprobación. La descentralización permitiría al gobierno a privatizar los servicios de salud, la planta educativa, la distribución de agua potable e, incluso, las fuentes de agua. Como resultado, la población se volvería aún más vulnerable perjudicando su calidad de vida.

El proyecto consiste en traspasar la estructura de salud nacional a los municipios. En Panamá hay 71 municipios. Con la excepción del distrito capital, los demás municipios viven en una situación deficitaria permanente. Reciben regularmente subvenciones del gobierno nacional para satisfacer sus necesidades. Los municipios – incluso el distrito capital – no tienen capacidad para confeccionar planes integrales de salud. En última instancia, los “planes” de salud caerían en manos de las empresas trasnacionales y sus socios locales, especializados en vender medicamentos, equipos de salud y prestar servicios. El objetivo de estas empresas, que someterán a los municipios así como a sus funcionarios, sería garantizar ganancias a las empresas que prestan los servicios sociales.

Los gremios médicos y otros sectores han denunciado esta situación. Sin embargo, las empresas vinculadas a la salud han logrado silenciar a la opinión pública y a los medios de comunicación ante el atraco que tendrá costos muy elevados para el país. En la actualidad, la prestación de servicios de salud ha colapsado (**Ministerio de Salud y CSS**), la salud ambiental nunca ha estado peor (basura, dengue y otros problemas) y los indicadores cada día son más alarmantes (han regresado las enfermedades contagiosas, las respiratorias y las tasas altas de morbilidad). El gobierno señala que el presupuesto de salud **se** incrementa anualmente. Es verdad, sin embargo, es para aumentarle las transferencias a los “inversionistas” que se han adueñado de la salud panameña.

2. Los movimientos sociales

La monopolización de los partidos políticos por parte de los sectores empresariales en los últimos 20 años ha obligado a los movimientos sociales a expresar sus reivindicaciones en las calles y campos. Los trabajadores han rechazado – sin éxito - la imposición de la flexibilización de las relaciones obrero patronales protestando en las calles de las ciudades del país. Los gobiernos han respondido con más legislación y represión. Durante la campaña que culmina en mayo de 2009, los candidatos a la Presidencia no se refirieron al problema del costo de la vida, del empleo informal y del empobrecimiento de los trabajadores. Sólo Juan Jované, cuya aspiración a ser incluido en el proceso electoral fue rechazado por el Tribunal Electoral, denunció la política laboral represiva del gobierno.

En los primeros meses de 2009 se multiplicaron las protestas y manifestaciones de múltiples sectores que reivindican acceso a mejores servicios gubernamentales, a sus derechos constitucionales y al desarrollo sostenible. En los centros urbanos hubo un incremento de la criminalidad, producto de la escasez de oportunidades para los jóvenes y de la corrupción que se origina en el tráfico ilegal de drogas, armas y trata de blancas combinados con el control de los juegos de azar.

La seguridad ciudadana se ha convertido en la reivindicación urbana más importante en 2009, desplazando el desempleo y la pobreza. Es seguida de cerca por el transporte público y servicios como el agua potable y la basura. Además, son cotidianas las protestas de educadores y jubilados. Los medios de comunicación impresos y electrónicos se han convertido en especialistas en “crónica roja” reportando sobre los asesinatos y asaltos, productos de enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que se disputan el control territorial. La corrupción se ha adueñado de los estamentos encargados de la seguridad haciendo peligrar la estabilidad de ciudades como Panamá y Colón.

El proyecto “trasmóvil” que fue promovido por el gobierno nacional como solución para el caos del transporte urbano, fue oficialmente abandonado en febrero de 2009. La ciudad de Panamá cuenta con un servicio de transporte urbano improvisado, controlado por un directorio de medianos empresarios. Estos son dueños de aproximadamente una flota de 300 buses escolares (**desechos** de origen norteamericano) que son reciclados localmente para prestar servicios a una población que rebasa el millón de habitantes en el área metropolitana. El **cierre** de avenidas y calles por comunidades que protestan por la falta de agua, de pasos a nivel, por la acumulación de basura o por las malas condiciones de los planteles escolares es cotidiano.

En las áreas rurales la situación es aún más difícil. Las políticas gubernamentales han convertido a las comunidades del interior en pasto para los proyectos especulativos concebidos por inversionistas tanto nacionales como extranjeros. En Bocas del Toro, el pueblo indígena nasó fue literalmente barrido de sus comunidades por una empresa que contó con el apoyo de la Policía Nacional. Las comunidades campesinas en Azuero y Veraguas han sido desplazadas por proyectos mineros que contaminan sus aguas o proyectos hidráulicos en Chiriquí que inutilizan sus tierras. La especulación turística también ha desplazado a comunidades pesqueras en Coclé que han perdido su acceso a las playas.

En el primer cuatrimestre de 2009 dominaron las protestas de los trabajadores del sector público, especialmente los empleados de la salud y de la educación. También se desató un largo conflicto entre el gobierno y los jubilados que culminó con el reconocimiento de una mejor remuneración para éstos. Las protestas fueron el resultado de un empobrecimiento continuo de los empleados públicos cuyos salarios pierden terreno ante el alza del costo de la vida.

También se agudizaron los enfrentamientos entre las autoridades y las comunidades que son víctimas de proyectos que no respetan las reglas ambientales del país. En primer lugar se destacan los proyectos mineros que en diferentes puntos del país se desarrollan prácticamente sin supervisión alguna del gobierno. Igualmente, se colocan por encima de la legislación vigente los proyectos de represas generadoras de energía que destruyen comunidades productivas en todo el país.

La promoción del turismo del gobierno también ha colocado a las autoridades en un camino de colisión con las comunidades. En las áreas del litoral donde abundan las playas, comunidades dedicadas a la pesca han sido desplazadas por la fuerza con mucho conflicto. En el período, un total de 8 comunidades se han enfrentado a una empresa de comunicación que negoció con las autoridades la colocación de antenas en toda la geografía del país. Las antenas han aparecido en centros escolares y en parque públicos.

Los conflictos comunitarios tradicionales como los servicios de salud, el agua y el transporte también generan conflictos en centros poblados tanto urbanos como rurales. El abandono de sus deberes legales por parte las autoridades encargadas de la distribución de agua potable es objeto de protestas, cortes de vías y manifestaciones públicas casi a diario. Igualmente, la falta de mantenimiento a caminos rurales y calles urbanas genera protestas cotidianas. Las estadísticas oficiales señalan que el 90 por ciento de los panameños cuentan con agua potable. Sin embargo, la mitad de los panameños se surten de agua potable mediante llaves comunitarias o camiones-cisternas.

Los conflictos laborales también se sintieron en el período. La huelga declarada por los trabajadores de la industria láctea Estrella Azul se extendió debido al intento de la empresa por desconocer los derechos de los obreros. Finalmente se llegó a un acuerdo cuando la patronal negoció un incremento mínimo del salario base. En el sector construcción fueron múltiples los paros de los trabajadores quienes protestaban, entre otros motivos, por las condiciones de inseguridad en que muchos empresarios desarrollan sus actividades.

Entre marzo y abril, y en medio de la campaña electoral, el gobierno de Martín Torrijos procedió a desalojar a las comunidades del pueblo indígena naso de sus tierras en la provincia de Bocas del Toro. Entre los siete pueblos indígenas de Panamá, los naso son los de menor población. Los tres pueblos más grandes – Ngobe, Kuna y Emberá – tienen sus propias comarcas reconocidas por la legislación panameña.

Una nutrida delegación de nasos se instalaron en el Parque de la Independencia, a una cuadra de la Presidencia de la República, donde fue ignorada por las autoridades durante todo el mes de abril. El pueblo naso y sus dirigentes han recibido muestras de solidaridad tanto dentro del país como desde el exterior.

3. Crisis económica y sus efectos sobre Panamá

Después de varios meses de silencio frente a la crisis financiera internacional, a principios de 2009 el gobierno del presidente Martín Torrijos abrió una pequeña ventana para que el país se informara sobre las medidas de contingencia. Un diario de la localidad informó que “desde mediados de noviembre, el Gobierno planteó la posibilidad de crear un programa de apoyo a los bancos, como una contingencia en caso de que necesitaran fondos”. El vicepresidente, Samuel Lewis Navarro, quien encabeza el equipo político quiere crear un “fondo para apoyar el crédito bancario, no por falta de liquidez, sino porque los bancos corresponsales han restringido sus líneas de créditos o han impuesto limitaciones”.

El gobierno panameño anunció que endeudó al país en 1,110 millones de dólares al suscribir un préstamo con varias agencias internacionales, incluyendo el BID y el Fondo Andino. El préstamo tendría como propósito apoyar a la banca panameña ante los recortes de créditos provenientes de los entes financieros internacionales tradicionales. El presidente Torrijos no informó cual es el marco legal de este nuevo empréstito. Poco antes, Torrijos también anunció que el país suscribía un préstamo que superaba los 2 mil millones de dólares para financiar parcialmente la ampliación del Canal de Panamá.

Frente a la crisis mundial, el economista y profesor universitario, Juan Jované, planteó la necesidad de comenzar inmediatamente a ejecutar un plan de emergencia que contemple impulsar la producción en los sectores estratégicos del agro y de la manufactura. Además, planteó la necesidad de invertir en obras públicas, especialmente en la construcción de planteles de educación e instalaciones de salud. Este plan de emergencia tiene que estar amarrado a un Plan de Desarrollo Nacional que contemple estrategias a largo plazo (30 años) y mediano plazo (15-20 años) que le permita al país y su gente "navegar" con éxito en las aguas turbulentas de un capitalismo mundial que sufre una crisis profunda.

Disminución del crecimiento económico

La primera década del siglo fue dominada por la incorporación del Canal de Panamá a la economía del país. La ampliación del Canal, aprobada en un referéndum en 2006, sin embargo, se enfrenta a la peor crisis del comercio marítimo mundial desde la década de 1930. En el primer trimestre de 2009 el Canal de Panamá vio disminuir el transporte de contenedores en un 4 por ciento comparado al mismo período del año anterior. Igual merma sufrieron otros rubros que cruzan el Canal.

La empresa *Lloyd's List* informó en enero de 2009 que cinco empresas de transporte marítimo de contenedores han reducido sus rutas debido a la recesión económica que golpea el comercio mundial. Son las navieras APL, Haburg Sud, Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant marine y Evergreen. Los recortes afectan especialmente los puertos de Oriente. Igualmente, la línea marítima Mitsui OSK de Japón abandonó sus planes de establecer un nuevo servicio entre los puertos principales de Asia y EEUU.

Más preocupante es la noticia de la misma fuente anunciando el “colapso” de los puertos de Long Beach y Los Angeles en las últimas semanas como consecuencia de la recesión económica (*meltdown*) mundial. El puerto de Long Beach reportó una disminución del 11 por ciento del movimiento de contenedores. Es la disminución más fuerte experimentada en los últimos 20 años. Sólo en el mes de diciembre, el puerto de Long Beach disminuyó su movimiento en un 25 por ciento. En el caso de Los Angeles la disminución del movimiento de contenedores en 2008 fue del 6 por ciento y en el mes de diciembre fue del 15 por ciento.

Lo que experimentan los puertos de Long Beach y Los Angeles es importante tenerlo en cuenta debido a la similitud que tienen con los servicios que presta el Canal de Panamá. En el caso de Long Beach, el cambio ha sido muy rápido. En 2007, este puerto experimentó su año más ocupado con un tráfico de 7.3 millones de TEU (medida de contenedor). Al igual que el Canal de Panamá, en 2008 el tráfico disminuyó, aunque de una manera más fuerte. El tráfico total bajó a 6.4 millones de TEU.

HSBC Global Research, sección de investigaciones del banco sino-británico, hace proyecciones muy pesimistas, señalando que las tarifas del comercio marítimo sufrirán bajas significativas, poniendo en peligro la existencia de las navieras. HSBC predice que el comercio marítimo en contenedores se estancará en 2009 y que en 2010 puede recuperarse un poco. Casi todas las navieras anuncian pérdidas para 2009.

Navieras presionan a Panamá por los peajes del Canal

Sobre el horizonte se posa la posibilidad de una guerra de precios entre navieras y puertos que compiten por las ganancias que generan las grandes rutas marítimas del mundo. La existencia de muchas navieras peligrará como consecuencia de la disminución del comercio marítimo mundial. Las navieras que tienen cada vez menos cargas están buscando puertos que les ofrezcan precios más bajos. Al mismo tiempo, los puertos quieren atraer más barcos para balancear sus pérdidas.

Los grandes capitales que controlan ambos – puertos y navieras - se encuentran en una guerra competitiva de precios y servicios. El Canal de Panamá se encuentra en el medio de las batallas comerciales. A pesar de que el Canal de Panamá no es un puerto, forma parte de los cálculos de los grandes transportistas marítimos ya que es una vía que corta la distancia entre los puertos ahorrándole a los navieros muchos millones de dólares.

Según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), “el Canal de Panamá alcanzó en el año fiscal 2008 un récord de ingresos al superar por primera vez los 2,000 millones de dólares. (Sin embargo,) los tránsitos y toneladas se mantuvieron constantes con un ligero descenso”.

Los tránsitos de barcos de alto calado disminuyeron entre 2008 y 2009. Así mismo, la carga también bajó en uno por ciento entre 2007 y 2009.

4. La campaña políticaⁱⁱ

La candidata oficialista del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, inició 2009 perdiendo terreno en las encuestas frente al candidato de oposición, Ricardo Martinelli. Balbina Herrera fue ministra de Vivienda del presidente Torrijos y ganó unas primarias del PRD muy reñidas para convertirse en candidata. Martinelli, a su vez, levantó una imagen renovadora desde el Partido Cambio Democrático que logró desplazar al Partido Panameñista de la cabeza de la oposición. El candidato del panameñismo, Juan C. Varela, se sumó como vice-presidente en la fórmula de Martinelli, uniéndolo a la oposición en contra del gobernante PRD.

Las propuestas de los candidatos burgueses

Durante la campaña electoral de 2009, Ricardo Martinelli (candidato de la opositora Alianza por el Cambio) enfatizó su compromiso con el tratado de libre comercio con EEUU e insistió que su política exterior se subordinaría a los dictados de Washington. Además, prometió una disminución de la tasa de impuestos para los más ricos. Al mismo tiempo, propuso “cambiar” el sistema educativo público, los servicios de salud y la seguridad social. En torno al Canal de Panamá no tiene propuesta que altere el actual panorama. En materia de ambiente, cultura, género y ciencia no compartió con el electorado sus preocupaciones.

En el caso de Balbina Herrera también dio garantías que impulsaría el tratado comercial con EEUU. Además, se distanció de los gobiernos independientes de la región subrayando su lealtad hacia Washington. Se comprometió a respetar el CAIR, modelo impositivo introducido por el actual gobierno. La candidata del PRD apoyó los planes para “descentralizar” los servicios públicos que privatizarían la educación, la salud y la seguridad social. Con relación al Canal de Panamá así como ambiente y género no presentó novedades.

Ambos candidatos enfrentarán un descontento social permanente en torno a problemas como el agua, los caminos de acceso, la destrucción causada por la construcción de represas, la operación de minas y el desarrollo turístico. Comunidades de todo el país están siendo destruidas junto con ríos, playas y bosques. Tanto Balbina como Martinelli también tendrán que enfrentar el descontento popular por la inexistencia de un sistema de transporte público, el abuso de los promotores urbanos (urbanizaciones, corredores y “tranques”), la violencia producto de la corrupción y de las guerras “territoriales” por el control del tráfico de drogas, de la prostitución, la explotación del trabajo infantil, entre otros problemas.

Los candidatos han querido enfrentar el incremento de la violencia y de la criminalidad con lemas como “calles seguras” o “mano dura” que están diseñados para reprimir a la juventud y aumentar la población carcelaria. En el primer cuatrimestre de 2009 las cifras de criminalidad siguieron aumentando. En 2008 el número de homicidios se duplicó comparado al año anterior.

Según la Contraloría General de la República, “las fuerzas políticas de Panamá gastaron en el primer trimestre de 2009, un total de 110,1 millones de dólares en propaganda para los comicios del 3 de mayo”. Del total, “las televisoras fueron las más beneficiadas con ingresos por 62,4 millones de dólares, seguidas de los diarios con 19,9 millones, mientras que las radiodifusoras y revistas captaron el resto”.

La propuesta de Juan Jované

En la presente coyuntura, la izquierda política panameña se encuentra atomizada, sin poder presentar alternativas electorales al pueblo. En la coyuntura electoral de 2009, una alianza de fuerzas de izquierda levantó la candidatura de Juan Jované, profesor de Economía de la Universidad de Panamá, quien pretendió presentarse mediante la libre postulación. El Tribunal Electoral rechazó la solicitud de Jované señalando que sólo los partidos políticos estaban legalmente autorizados para presentar candidaturas a la Presidencia de la República. Jované llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia alegando que el artículo que interpretaban los magistrados del Tribunal Electoral era inconstitucional. Faltando apenas tres días para las elecciones, la Corte Suprema dio a conocer, mediante un comunicado, su fallo contra el Tribunal Electoral y a favor del recurso de Jované. Sin embargo, ya era muy tarde para introducir el nombre de Jované en la papeleta electoral.

Jované representa una fracción de la izquierda organizada políticamente. Otro sector de la izquierda, organizado en torno a FRENADESO, rechazó la convocatoria electoral calificándola de un “circo” de las clases dominantes. Hizo un llamado a la abstención o al voto en blanco. Entre las organizaciones pertenecientes a FRENADESO se destaca el poderoso sindicato de los obreros de la construcción, las asociaciones de profesores y maestros, asociaciones estudiantiles y otros sindicatos.

La campaña de Jované contó con el apoyo del Partido del Pueblo (comunistas) y del Partido Alternativa Popular. También recibió el respaldo de poderosos sindicatos de los trabajadores de la industria de las bebidas, con asociaciones de empleados, docentes, grupos estudiantiles y otras organizaciones. Jované trabajó hasta el último día permitido (30 de abril) movilizándolo el voto “protesta”. A su vez, anunció que inmediatamente después de las elecciones seguiría su campaña política de educación y movilización populares a lo largo del país.

ⁱ Preparado por el equipo de OSAL del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), “Justo Arosemena”, bajo la dirección de Marco A. Gandásegui, hijo (profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA) y la coordinación de Azael Carrera (en licencia) y Jennifer Delgado. Integran el equipo Samuel Pinto, Marina Abrego, Ricardo Martínez y Daniel Pineda. Además, forman parte del grupo, Olmedo Carrasquilla, Iris de Burke y Deilys Avilés. Como expertos invitados participan en el trabajo del equipo, Robinson Salazar y Janio Castillo.

ⁱⁱ En el próximo análisis de coyuntura correspondiente a Panamá en el marco del proyecto de OSAL se incluirán los resultados de las elecciones del 3 de mayo de 2009 y su relación con los movimientos sociales del país.

Análisis de coyuntura

Segundo cuatrimestre 2009

Nueva derecha en el poder

Análisis de coyuntura de Panamá del segundo cuatrimestre (mayo-agosto) de 2009ⁱⁱ

El 1º de julio, el presidente Ricardo Martinelli al entrar al palacio de Las Garzas (Presidencia) se encontró con un país cuyos últimos gobiernos perdieron su rumbo en materia de desarrollo social y económico. Durante varios lustros se ha hecho énfasis en políticas neoliberales que han debilitado la capacidad productiva del país y ha empobrecido a la mayoría de los panameños. A esta situación se le agrega, actualmente, la recesión norteamericana que ha paralizado las inversiones e intercambios comerciales a escala mundial.

Los indicadores presentan fuertes deterioros en áreas estratégicas como la educación, la salud, el desarrollo urbano y otros aspectos sociales claves. En materia económica, después de un crecimiento del producto interno bruto promedio del 8 por ciento entre 2005 y 2008, en el presente año se proyecta un incremento de apenas el 2 por ciento.

La estrategia neoliberal, que dominó aquel período, también agudizó los problemas asociados con el crimen organizado. Un relajamiento de las leyes abrieron las puertas a la corrupción y al abuso en negocios turbios como los juegos al azar, el lavado de dinero y el tráfico de drogas y seres humanos. La violencia, pareja íntima de la corrupción, ha saltado a la palestra multiplicándose los delitos y los crímenes. De la corrupción no se escapan los grandes proyectos públicos, negocios particulares y la vida cotidiana del panameño.

En materia política Martinelli pretende no sólo ser el gran ganador de la contienda electoral del pasado 3 de mayo. Ha enviado mensajes en el sentido de querer desplazar al Partido Revolucionario Democrático (PRD) – derrotado en las elecciones de mayo - del centro de gravedad de la vida política panameña. Es la posición que ha ocupado desde su creación por el general Omar Torrijos en 1978.

El presidente Martinelli hizo su campaña electoral pregonando el “cambio”. Su fracaso le dará paso expedito a una nueva generación para asumir los desafíos. Más aún, surgirá una generación de panameños de una clase diferente de hombres y mujeres llamada a enrumbar el país en otra dirección que beneficie a todos. La extrema derecha está condenada a pasar a la historia como un desliz producto de las malas políticas neoliberales aplicadas en los últimos 20 años.

Martinelli y el giro a la derecha en Panamá

Muchos se preguntan si Ricardo Martinelli representa un giro hacia la derecha con relación al gobierno saliente. La misma pregunta se la hacen planteando si el triunfo de Martinelli representó el triunfo de una corriente de derecha que deja atrás la propuesta de más neoliberalismo de Balbina Herrera, abanderada del PRD. Durante la campaña, Martinelli enfatizó su compromiso con el tratado de libre comercio con EEUU e insistió que su política exterior se subordinaría a los dictados de Washington. Además, prometió una disminución de la tasa de impuestos para los más ricos. Al mismo tiempo, propuso “cambiar” el sistema educativo público, los servicios de salud y la seguridad social.

El círculo que rodea a Martinelli está compuesto por empresarios que se declaran ideológicamente de derecha. Hay algunos representantes de partidos políticos y de los medios. Entre los empresarios se destacan los que tienen intereses en el mercado nacional. El equipo aparentemente no cuenta con tecnócratas salidos de las escuelas “neoliberales”. Lo que no quiere decir que los despachos del sector económico del gobierno no se encuentren bien equipados con especialistas del trasnochado “Consenso de Washington”. La victoria de Martinelli redefinió la derecha en Panamá. Desde 1994, con el triunfo de Pérez Balladares, se perfilaron dos tendencias en la derecha política. Por un lado, los neoliberales que encontraban su nicho de poder en las filas del PRD. Por el otro, una derecha más tradicional vinculada al mercado nacional, ligada al Partido Panameñista. Desde la invasión norteamericana (1989) cada uno gobernó en forma alternada dos períodos de cinco años cada uno. Sus gobiernos no se destacaron mucho por sus logros. Más bien queda el recuerdo del desgüeño administrativo y la corrupción. La nueva administración de Martinelli se encuadra ideológicamente con la llamada derecha tradicional. Sin embargo, el presidente electo no es panameñista. Creó el Partido Cambio Democrático en 1998 para apoyar a Mireya Moscoso (líder panameñista) en su campaña que la llevó a la presidencia en 1999. En 2004 lanzó su propia candidatura y fue derrotado en forma contundente. El triunfo electoral de Martinelli en 2009 puede deberse, por un lado, a la crisis interna del Partido Panameñista que se agudizó como consecuencia de los cambios estructurales generados por las políticas neoliberales (énfasis en la economía de servicios, desaparición del mercado interno). El divisionismo terminó subordinando al panameñismo a Martinelli. Por el otro, el gobierno del PRD fue víctima del voto castigo por la falta de políticas coherentes.

Mayoría del 60 por ciento

Martinelli sorprendió al país cosechando el 60 por ciento de los votos emitidos el domingo, 3 de mayo. La candidata del PRD, Balbina Herrera, sólo alcanzó obtener el 37 por ciento. Según el Tribunal Electoral, la participación alcanzó un 73 por ciento de la población con derecho a sufragar.

La mayoría obtenida por Martinelli reflejan tres tendencias muy marcadas. Por un lado, el voto castigo contra el PRD. Por el otro, el aporte del Partido Panameñista. Además, una juventud que votó por una alternativa diferente y que sólo encontró a Martinelli. Fue precisamente en el estrato joven donde Martinelli logró el mayor apoyo a su imagen que proclamaba el “cambio”.

La barrida de Martinelli le brindará al futuro Presidente una cómoda mayoría de 41 diputados (de un total de 71). Casi la mitad – un total de 20 - son del Partido Panameñista. El PRD - en la oposición - tendrá una tercera parte (26) de las curules de la Asamblea. Desde la invasión militar norteamericana de 1989 la Asamblea dejó de ser un cuerpo político dinámico. Sus iniciativas dependen casi en su totalidad del Ejecutivo. Martinelli tendrá que demostrar una cualidad que aún se le desconoce: capacidad de dirección política para impulsar su programa de gobierno.

Política exterior

Los resultados de las elecciones panameñas aparentan marcar una tendencia contraria a la del resto de América latina que se mueve hacia la izquierda del espectro político. En

política exterior no hay indicios de que las relaciones de Panamá con el mundo se mueva hacia posiciones que favorezcan al país. La política exterior seguirá en manos de los sectores más subordinados a EEUU, sin posibilidad alguna de proyectar políticas que promuevan el desarrollo de un mercado interno o alianzas con propuestas como ALBA. Los aliados más próximos de Panamá, además de EEUU, serían los gobiernos de Colombia y México (declarados “estados fallidos” por Obama). Le seguiría en importancia estratégica Chile, después de un hipotético triunfo electoral de la derecha este año en ese país. Lo más peligroso en materia de política exterior es la insistencia de EEUU de querer instalar nuevamente una base militar en Panamá. Panamá podría convertirse en un segundo Haití, amarrada por acuerdos militares con EEUU y ocupada por tropas de otros países latinoamericanos. Este escenario daría pie para responder de manera contundente a la pregunta si la elección de Martinelli representa un giro a la derecha.

Economía

Martinelli refleja una política que pone los intereses de los empresarios panameños por encima de todo lo demás. En primera instancia, está trabajando para reducir en forma significativa los impuestos. Además, que les daría otros privilegios como subsidios, mayor flexibilización de las relaciones con los trabajadores y acceso rápido a los corredores del poder. Martinelli, sin embargo, no cuenta con un plan de contingencia para enfrentar los efectos de la crisis económica mundial.

Las promesas de Martinelli se enfrentarán a varios obstáculos. El principal será los intereses de los sectores financieros que controlan la mayor parte de la economía. Los empresarios de la banca y de la Zona Libre de Colón, quienes no pagan impuestos, requieren de un aparato estatal que funcione para lo cual necesita recaudar fondos. Desde principios de la década la recaudación tributaria ha crecido gracias al incremento de los peajes del Canal de Panamá. Otra fuente es el impuesto a la renta que incluye el CAIR y el ITBM. Además, en forma indirecta las cuotas de la Caja del Seguro Social.

Si Martinelli elimina el CAIR tendrá un problema muy serio para reemplazar esa fuente de ingresos. Tendría que afectar a los sectores vinculados a la economía de servicios que se exportan o tendría que incrementar los impuestos de los trabajadores. Algunos de los sectores cercanos a Martinelli plantea el “flat tax”, subir el ITBM y otros impuestos (como la gasolina). La otra manera sería reducir los servicios de educación, salud, seguridad ciudadana y seguridad social que presta el gobierno a la población, en general.

Todo indica que Martinelli preferiría enfrentarse a los sectores populares. Los diferentes sectores organizados ya se preparan para asumir la defensa de sus intereses. La falta de un instrumento político que los represente en las distintas instancias institucionales del país los dejará con un flanco débil. Hay indicios, sin embargo, que los trabajadores organizados en torno a la candidatura de Jované y de FRENADESO buscarán formas de unir fuerzas. Otro problema lo constituye una izquierda “torrijista” cautiva dentro del PRD sin probabilidades de separarse de sus “aliados” que encabezan la fracción financiera del capital panameño.

Toma de posesión de Martinelli

El presidente Martinelli tomó posesión el 1° de julio e inmediatamente puso en práctica una política neoliberal mezclada con un fuerte compromiso con los capitales nacionales. El programa de Martinelli reconoce los intereses de EEUU y la prioridad que debe darle a las

políticas de las instituciones financieras internacionales. En ese sentido le dará seguimiento a los compromisos adquiridos por el gobierno saliente.

En forma abierta, Martinelli y sus colaboradores han manifestado que no tolerarán protestas sociales de los trabajadores, educadores o comunidades. Los sectores empresariales, que apoyan a Martinelli, se sorprendieron por los nombramientos realizados para ocupar posiciones en su consejo de gabinete. La mayoría de las figuras escogidas no tienen experiencia pública y sus especialidades se encuentran muy lejos de las responsabilidades que van a asumir. Hay un número plural de ministros-designados que vienen del mundo mediático, un indicio que el presidente está impactado por su propio éxito en la manipulación de los medios de comunicación que lo llevaron al triunfo electoral.

El consejo de gabinete tiene 13 ministros de Estado (sin incluir los nombrados por decreto presidencial). Un total de seis ministros son del Partido Cambio Democrático (CD) y cercanos colaboradores. El vicepresidente del CD, Roberto Henríquez, fue designado ministro de Comercio e Industrias, cartera ligada a las inversiones extranjeras. Martinelli designó a su abogada, Dora Cortés, para encargarse de la cartera de Trabajo.

Los nombramientos que más llamaron la atención fueron los de Salud, donde designó a su médico de cabecera. En Educación nombró a la periodista Lucy Molinar y en Desarrollo Social, quedó el popular presentador de televisión, Guillermo Ferrufino. Como ministro de la Presidencia, Martinelli tiene a su jefe de campañas electorales (2004 y 2009), Demetrio “Jimmy” Papademetriou.

El Partido Panameñista (PP), que es la organización política más grande de la Alianza por el Cambio, sólo cuenta con tres ministros. El vicepresidente de la República, Juan C. Varela es el canciller. Alberto Vallarino C. quedó a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Vallarino y Varela se perfilan como precandidatos a la Presidencia para 2014. Al PP le tocó también el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). El tercer partido de la Alianza, Unión Patriótica, sólo tiene el Ministerio de Gobierno y Justicia con Raúl Mulino al mando. Este despacho quedó menguado al nombrarse a un director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, cercano a EEUU y sin vínculos con los partidos de la Alianza. Los ministerios de Vivienda, Obras Públicas y de Asuntos del Canal quedaron en manos de empresarios de la construcción que velarán por sus intereses.

Los movimientos sociales

La monopolización de los partidos políticos por parte de los sectores empresariales en los últimos 20 años ha obligado a los movimientos sociales a expresar sus reivindicaciones en las calles y campos. Los trabajadores han rechazado – sin éxito – la imposición de la flexibilización de las relaciones obrero patronales protestando en las calles de las ciudades del país. Los gobiernos han respondido con más legislación y represión. Durante la campaña que culminó en mayo de 2009, los candidatos a la Presidencia no se refirieron al problema del costo de la vida, del empleo informal y del empobrecimiento de los trabajadores. Sólo Juan Jované, cuya aspiración a ser incluido en el proceso electoral fue rechazado por el Tribunal Electoral, denunció la política laboral represiva del gobierno. Las organizaciones comunales, tanto urbanas como rurales, tampoco encuentran expresión en las instancias políticas. Sus protestas se verifican mediante cierres de vías y manifestaciones públicas cotidianas. Martinelli enfrentará un descontento social permanente en torno a problemas como el agua, los caminos de acceso, la destrucción

causada por la construcción de represas, la operación de minas y el desarrollo turístico. Comunidades de todo el país están siendo destruidas junto con ríos, playas y bosques. Martinelli enfrenta las protestas populares por la inexistencia de un sistema de transporte público, el abuso de los promotores urbanos (urbanizaciones, corredores y “tranques”), la violencia producto de la corrupción y de las guerras “territoriales” por el control del tráfico de drogas, de la prostitución, la explotación del trabajo infantil, entre otros problemas. **El incremento de la violencia y de la criminalidad se ha querido enfrentar con lemas como “calles seguras” o “mano dura” que están diseñados para reprimir a la juventud y aumentar la población carcelaria. El equipo que se encargó de las posiciones de mando de la administración gubernamental, que seguirá asesorada por EEUU, no asocia el problema de la criminalidad con la cuestión social.**

La izquierda política

En la presente coyuntura, la izquierda política panameña se encuentra atomizada, sin poder presentar alternativas electorales al pueblo. En la coyuntura electoral de 2009, una alianza de fuerzas de izquierda levantó la candidatura de Juan Jované, profesor de Economía de la Universidad de Panamá, quien pretendió presentarse mediante la libre postulación. El Tribunal Electoral rechazó la solicitud de Jované señalando que sólo los partidos políticos estaban legalmente autorizados para presentar candidaturas a la Presidencia de la República. Jované llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia alegando que el artículo que interpretaban los magistrados del Tribunal Electoral era inconstitucional. Faltando apenas tres días para las elecciones, la Corte Suprema dio a conocer, mediante un comunicado, su fallo contra el Tribunal Electoral y a favor del recurso de Jované. Sin embargo, ya era muy tarde para introducir el nombre de Jované en la papeleta electoral.

Jované representa una fracción de la izquierda organizada políticamente. Otro sector de la izquierda, organizado en torno a FRENADESSO, rechazó la convocatoria electoral calificándola de un “circo” de las clases dominantes. Hizo un llamado a la abstención o al voto en blanco. Entre las organizaciones pertenecientes a FRENADESSO se destaca el poderoso sindicato de los obreros de la construcción, asociaciones de profesores y maestros, asociaciones estudiantiles y otros sindicatos.

La campaña de Jované contó con el apoyo del Partido Alternativa Popular y del Partido del Pueblo. También recibió el respaldo de poderosos sindicatos de los trabajadores de la industria de las bebidas, con asociaciones de empleados, docentes, grupos estudiantiles y otras organizaciones. Jované siguió después de las elecciones su campaña política de educación y movilización populares a lo largo del país.

En Panamá, la izquierda ideológica hace las críticas más coherentes a las políticas neoliberales y presenta las denuncias más severas contra la corrupción. Sin embargo, no presenta propuestas coherentes en las contiendas electorales.

Todo indica que esta perspectiva electoral comenzará a cambiar a partir de 2009 mirando hacia 2014, cuando se realizarán las próximas elecciones generales. Juan Jované cuestionó las intenciones del gobierno electo de Ricardo Martinelli de promover reformas tributarias que favorecerían a los ricos y generará más corrupción. Según Jované, Martinelli quiere reducir los impuestos a los ricos (CAIR), igualándolos a los de los pobres con un impuesto denominado “flat tax”.

El dirigente de SUNTRACS, Genaro López, no descarta a Jované como candidato a la presidencia en 2014 pero no se compromete ya que “buscarán el candidato más potable”.

Una de tantas posibles lecturas de este planteamiento es que Frenadeso se estaría sintiendo como la única alternativa viable frente al Partido Revolucionario Democrático (PRD) derrotado en mayo y a una derecha que se gastará rápidamente en el poder.

FRENADESO explora futuro electoral

“FRENADESO explorará, de manera amplia, abierta, sin precondiciones de ningún tipo, la posibilidad de construir, junto a otras fuerzas populares, gremiales y personalidades democráticas y progresistas, un instrumento político para irrumpir con fuerza en el torneo electoral y disputarle el control que sobre el Gobierno han ejercido hasta el presente los partidos corruptos de la burguesía, caracterizados por el robo y su desprecio a los intereses de las masas populares”. De esta manera, Saúl Méndez, dirigente de los obreros de la construcción de Panamá y actual coordinador de FRENADESO, anunciara la intención que tiene el frente popular de buscar una alternativa electoral.

Los sectores populares no han tenido éxito en las contiendas electorales panameñas. Aún cuando ha logrado grandes triunfos mediante la movilización popular, su experiencia en el terreno electoral ha sido infructuosa.

Méndez aclaró “que no se trata de convertir a FRENADESO en partido político”. La estrategia que anunciara el dirigente del Sindicato de los Trabajadores de Construcción (SUNTRACS), Saúl Méndez, consiste en “dialogar, reflexionar y debatir con otras fuerzas populares, democráticas y progresistas (sobre) la conveniencia de construir un instrumento político sin dueños”. FRENADESO nació hace seis años con la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS) que generó protestas masivas de la población y, especialmente, los trabajadores del país.

Méndez fue el orador de fondo en el II Congreso Nacional de FRENADESO a mediados de agosto de 2009. Enfatizó que quieren “darle salida real al descontento popular y a las ansias y voluntad de cambio del pueblo e impedir que éste siga canalizado por los embaucadores y los falsos profetas de los partidos tradicionales”. Según Méndez los oligarcas panameños “trafican con las luchas populares y engañan al pueblo en base a una calculada campaña mediática de los principales centros de desinformación del país y de una multimillonaria campaña publicitaria”.

Otro dirigente de FRENADESO, el profesor Andrés Rodríguez, presidente de la Asociación de Profesores, señaló que el frente popular “ha logrado desplegarse a nivel nacional, acumular fuerza social, fortalecer su capacidad de movilización y junto a otros sectores libra a diario las luchas contra las políticas neoliberales”. Según el educador colonense, hay condiciones para iniciar una organización política basada en la “unidad de los sectores campesinos, indígenas y ambientalistas que se oponen a los proyectos depredadores”. Rodríguez denunció la “partidocracia” e, igualmente, “a los partidos corruptos de la clase dominante”. Señaló la necesidad de “construir un instrumento político electoral como alternativa”.

El II Congreso de FRENADESO (Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales) reiteró su llamado a una constituyente originaria que le permita al pueblo panameño introducir reformas profundas a la actual estructura política panameña. También eligió una nueva directiva formada por trabajadores, educadores, campesinos, indígenas y estudiantes. En su declaración final reivindicó la memoria de los obreros asesinados por agentes de la Policía Nacional y se solidarizó con las luchas campesinas e indígenas por sus tierras.

El Partido Alternativa Popular (PAP) saludó de manera positiva el pronunciamiento de FRENADESO y se ofreció a dialogar en torno a un esfuerzo conjunto para construir el “instrumento político” anunciado por el frente popular. Según Olmedo Beluche, dirigente del PAP, “un acuerdo es posible y necesario” entre todos los sectores del movimiento popular.

Los primeros 60 días del presidente Martinelli

Durante su campaña mediática presidencial adoptó como lema la palabra “cambio” que fue acogida por la población electoral de manera muy positiva. Los panameños están agotados por la violencia, corrupción y desorden producto de las políticas públicas equivocadas de los gobiernos que lo antecedieron. Durante los primeros 60 días como gobernante, sin embargo, Martinelli apretó el acelerador provocando más violencia, corrupción y desorden a nivel de la cosa pública.

Las cifras que arrojan las estadísticas sobre violencia siguen aumentando. La política pública de control del tráfico de ilícitos, de las pandillas y del juego del azar no se han alterado. Al contrario, el Ministerio de Gobierno y Justicia anunció una inversión de 100 millones de dólares para construir nuevas instalaciones penitenciarias donde detendrá la creciente población delictiva. Se siguen aplicando las mismas políticas (“mano dura”, “calles seguras” y otras) que no tienen relación alguna con la violencia y el crimen organizado.

Martinelli prometió poner fin a la corrupción y lo que ha hecho es seguir trabajando en la misma dirección. La “cinta costera” (a un costo absurdo de 190 millones de dólares), que fue denunciada por el candidato Martinelli, ahora es celebrada por el presidente Martinelli quien pidió otros 54 millones de dólares para extender la cinta hacia el “Casco Viejo” de la ciudad capital. Antes de cumplir los 60 días en Palacio, Martinelli aprobó gastos por 50 millones de dólares mediante “compras directas” sin pasar por las licitaciones que exige la ley. En el plano del nepotismo, nombró a familiares suyos y de sus colaboradores más allegados en embajadas y consulados, siguiendo las tradiciones más nefastas de los gobernantes panameños.

Empleo y economía

Sus promesas en torno a la solución de los problemas básicos como el empleo informal y la crisis de la familia panameña han quedado en letra muerta. En el Ministerio de Trabajo no hay preocupación alguna por enfrentar la situación creada por las políticas de los gobiernos anteriores. Martinelli insinuó ante los empresarios que se flexibilizará aún más la relación obrero patronal (creando más inestabilidad y reduciendo el salario de los trabajadores). Además, prometió reducir los impuestos de quienes más ganan y de distribuir los ingresos del Fisco (Canal de Panamá, Zona Libre de Colón, los puertos y otros) entre los inversionistas más ricos. Por cierto, los ingresos del Canal, de la zona franca y de los puertos están estancados desde 2008 producto de la recesión mundial.

El equipo económico de Martinelli no reconoce la crisis económica que afecta al mundo y ha insistido que la estructura financiera de Panamá saldrá sin ser afectada. Sin embargo, no quiere ver los efectos que está teniendo la crisis sobre los ingresos de los panameños, sobre la producción manufacturera y sobre los agricultores del país. El panameño está consumiendo menos, las industrias han reducido en un 20 por ciento su producción y los agricultores han pedido el 50 por ciento de su capacidad.

El sector financiero panameño ha sido golpeado reduciéndose los movimientos bancarios y las inversiones en actividades especulativas como los bienes raíces y seguros. Incluso, los casinos, que son áreas privilegiadas para la corrupción al más alto nivel, han sufrido una pequeña disminución en sus ganancias. El sector inmobiliario – que crecía a una tasa anual superior al 20 por ciento entre 2004 y 2007 - se redujo a su mínima expresión con la retirada de los especuladores norteamericanos, españoles y los intermediarios de los colombianos.

En materia de política social ha suspendido los programas del gobierno anterior relacionados con la “Red de oportunidades” que repartía dádivas a las poblaciones más empobrecidas. No ha planteado alternativa alguna. En los sectores de Educación y Salud, así como Seguridad Social, impulsa programas de privatización y de reducción de gastos que perjudicará a los sectores más vulnerables. Incluso, coquetea con la fusión de las entidades encargadas de Cultura y Turismo, señalando que la cultura es una mercancía que pueden comprar los turistas que llegan a nuestras costas.

Martinelli cumple 60 días en la Presidencia sin sentar las bases de una política que le permita cumplir con sus promesas de campaña. Más bien, ha sacado a relucir las mismas políticas públicas que han promovido la violencia, la corrupción y la desigualdad social en Panamá durante los últimos veinte años. En esta ocasión sin máscaras o coberturas populistas (panameñistas) o social demócratas (PRD).

La oligarquía panameña se ha tomado el poder y actuará en consecuencia durante los próximos años a nada menos que se logre detener ese tren expreso que no respeta al pueblo panameño, a sus etnias indígenas, a sus trabajadores, amas de casa ni a sus estudiantes. El estilo de la oligarquía está marcada por el envío de sus fuerzas represivas a realizar arrestos en la Catedral en horas de la madrugada.

La resistencia heroica del pueblo naso

Mientras que Panamá se encontraba inmersa en las elecciones, que eligió como nuevo mandatario al empresario Ricardo Martinelli, en lo más profundo del país se está dando una batalla por la sobrevivencia de un pueblo indígena. Los poblados indígenas naso-teribe de San San y San San Druy – en Bocas del Toro - fueron destruidos el 30 de marzo de 2009 por maquinaria de la empresa Ganadera Bocas, S.A. que en compañía de agentes de la Policía Nacional nivelaron la escuela, la iglesia y el centro de la Cultura Naso, así como 30 viviendas tradicionales.

A partir de mayo, después de las elecciones, la población en las comunidades indígenas naso vivieron nuevamente momentos tensos cuando personal de la empresa Ganadera Bocas amenazó a los pobladores con arma de fuego y la maquinaria de la empresa continuó su labor de destrucción en los alrededores de las comunidades.

El capataz de la empresa ganadera, Roberto Audibeth, quien supervisa la labor de la maquinaria pesada de la Ganadera Bocas en el área, desenfundó su arma y profirió amenazas frente a varios de los pobladores de las comunidades indígenas, las cuales fueron destruidas en su totalidad a fines de marzo. Personal de la empresa bloqueó la carretera que conduce a más de 8 comunidades indígenas de la región al abrir una profunda zanja en la carretera.

Luis Gamarra, representante de la comunidad naso en el grupo que acampa en Plaza Catedral en la Ciudad de Panamá en mayo y agosto de 2009, declaró que "la comunidad exige una respuesta inmediata de las autoridades ante las constantes amenazas con armas de

fuego que hacen los administradores de la finca de Ganadera Bocas, así como la obstrucción de la servidumbre pública que conduce a varias comunidades".

Representantes del pueblo naso, que incluye al rey naso, Valentín Santana, se apostaron en las inmediaciones de la Plaza de Independencia en el Casco Viejo de la ciudad de Panamá. Han mantenido a los periodistas permanentemente informados. Subrayan que su ucha es por la defensa de una cultura que el gobierno panameño está dispuesto a exterminar.

Activistas panameños y del mundo se solidarizan con ellos, mientras el Gobierno Nacional sigue bloqueando toda solución justa que les devuelva la tranquilidad a las familias para volver a sus tierras y comenzar a reconstruir sus vidas.

Ejemplo de solidaridad fue el Festival y campamento “Todos somos Naso”, realizado en el Parque Catedral con la presencia de cientos de personas y una treintena de artistas que presentaron su música en medio de actos culturales. Las acciones de protesta y solidaridad se intensificaron a lo largo de los meses entre mayo y agosto de 2009 a pesar de la indiferencia del Gobierno.

Ricardo Martinelli Berrocal tiene 53 años de edad y es oriundo de Soná, provincia de Veraguas. Es presidente fundador del Partido Cambio Democrático. Ocupó importantes cargos públicos en gobiernos pasados del PRD y del Partido Panameñista. La familia tiene importantes propiedades agrícolas y el presidente electo es socio principal del Ingenio La Victoria. Además, es propietario de la cadena de supermercados más grande del país. Estudio milicia en una Academia de EEUU.

Juan Carlos Varela, vicepresidente, tiene 56 años de edad, fue designado por Martinelli como futuro canciller de la República. Es presidente del Partido Panameñista que lanzó su candidatura a la Presidencia en 2008. Declinó posteriormente y se unió a la nómina de Martinelli. Su familia es propietaria de Varela Hermanos, S.A., donde se fabrican el seco (aguardiente) Herrenano y el ron Abuelo. Hizo estudios universitarios en EEUU. Es un militante de Opus Dei.

Análisis de coyuntura Tercer cuatrimestre 2009

Panamá: situación de los derechos humanos (Tomado de Centro de Capacitación Social)

El presente análisis fue presentado por el Centro de Capacitación Social de Panamá en el marco del Congreso de la FIDH que se llevará a cabo Armenia. Hemos decidido enmarcarlo dentro del último semestre de 2009, puesto que en este lapso se marca una nueva coyuntura en la realidad panameña, iniciada por el ascenso al poder del Ricardo Martinelli, cuyo mandato presidencial culminará en 2014.

En este análisis existen condiciones estructurales y coyunturales que marcan la realidad panameña para los próximos años. Una opción política ultra conservadora lleva al país al afianzamiento del neoliberalismo y expone la seguridad del Canal de Panamá con una política internacional agresiva que ha provocado conflictos internacionales fuera de

cualquier interés nacional en alianza con fuerzas muy conservadoras en el contexto internacional.

El estilo presidencialista asume el control de todos los órganos del Estado y vulnera los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de la población panameña.

1. Inseguridad ciudadana. La población es víctima de la violencia.

La inseguridad ciudadana se ha convertido en el problema principal que preocupa a la población panameña. Los altos índices de delincuencia ocurridos en el país durante 2009 y que se mantienen en el inicio del presente año, presentan un panorama desolador.

Los ajustes de cuentas producto del narcotráfico, los altos índices de homicidios, los asaltos y la creciente presencia de extranjeros vinculados con nacionales en actividades violentas tienen a la población en un estado de indefensión. Las autoridades no ofrecen respuestas frente a estos hechos y la impunidad se convierte en el día a día para el ciudadano común y corriente.

La crisis en el sistema de justicia, la obligada renuncia a la Procuradora de la Nación Ana Matilde Gómez en una sui generis interpretación por parte del Ejecutivo de la Constitución Nacional, la conformación de una Corte Suprema de Justicia afín al gobierno de turno, una mayoría legislativa dependiente del ejecutivo configuran un panorama de pocas esperanzas para el respeto del estado de derecho a nivel de la república, donde la concentración de los tres poderes del Estado se fundamentan en un sistema presidencialista y falta de independencia del sistema judicial y legislativo.

Por otro lado, la deserción escolar, la exclusión social de los jóvenes y la falta de participación en la política, la falta de una política de Estado hacia la juventud, sin propuestas de trabajo, han alimentado el crecimiento de las pandillas a nivel nacional. La política del Estado Panameño frente a este fenómeno ha sido aumentar el castigo hacia la población juvenil a partir de los doce años, desconociendo con ello, los derechos de los jóvenes y juzgando a los niños y adolescentes como adultos. El gobierno responde con represión hacia la población y manifiesta su incapacidad de resolver este grave problema.

Hace pocos días el administrador del Programa de Seguridad Integral (PROSI) Manuel Zamorano informó que el número de pandillas en Panamá aumentó en los dos últimos años y, además, se ha extendido por todo el territorio nacional. Según esta fuente, en Panamá existía hace dos años, 216 pandillas, y para este año ya las autoridades estiman que hay 240 en todo el país, que están integradas, en su mayoría por jóvenes de entre 13 y 21 años.

De acuerdo con Zambrano, las pandillas no solo operan en las Ciudades de Panamá y Colón; ya se han extendido a todas las provincias y, particularmente, hacia Arraiján y La Chorrera, al oeste de la Provincia de Panamá.

La mayor cantidad de pandillas se ubica en la capital y en San Miguelito. En total operan unas sesenta en estos sectores, de acuerdo con los informes. Las autoridades no descartan

los vínculos de las pandillas que operan en Panamá con grupos de narcotraficantes, y las maras de Honduras y El Salvador.

2. Situación de los indígenas

En la República de Panamá contamos con una población de doscientos setenta mil indígenas aproximadamente, distribuida en ocho grupos étnicos en todo el país, que aunque poseen diferencias entre sí, también tienen muchos elementos en común. El más evidente de los elementos comunes entre los grupos étnicos es la extrema pobreza, el analfabetismo, la discriminación racial, laboral y social, la desprotección jurídica y el desentendimiento de las autoridades para con sus deberes básicos hacia esta población vulnerable. Los mismos se encuentran marginados de sus derechos constitucionales, civiles, políticos, en fin, son considerados como ciudadanos de segunda clase, producto de la discriminación económica, política y social de los gobernantes de turno.

El abandono por parte de las autoridades y de las instituciones del Estado hacia las zonas indígenas es el reflejo del alto contraste en la distribución de la riqueza que impera en el país. Cuando en la metrópoli se habla de un desarrollo económico que compite con las más desarrolladas capitales del mundo, a la par se mantiene este tipo de poblaciones desprovistas de sus más elementales derechos. Al modernismo que permea las ciudades, le contrastan el estado casi salvaje, primitivo y abandonado de las regiones indígenas.

En lo social, el indígena panameño es víctima de la explotación y esclavitud de los terratenientes agrícolas de las zonas aledañas. Esta situación obliga a varios de estos sectores a desplazarse continuamente de acuerdo a la condición estacional de las cosechas de sus monocultivos y lo relegan a una pobreza de supervivencia que lleva a poblaciones enteras a depender de la caza de animales salvajes y del consumo de raíces silvestres para paliar las hambrunas y la desnutrición a las que se ven sometidos, siendo víctimas fáciles de las enfermedades y epidemias ya extinguidas en el resto de la república, la falta de programas de vacunación, programas de nutrición, la escasez casi absoluta de escuelas y de centros médicos, la falta total de agua potable, medidas higiénicas inexistentes en sus hogares y sistemas de tratamiento de desechos hacen que la mortalidad de esta población en todos sus niveles ocupe cifras desproporcionadas y muchas veces incontrolables por parte de las autoridades.

El desempleo es crónico, los ingresos son escasísimos, la indefensión frente a las catástrofes naturales y la inmisericorde explotación laboral hacen que la edad de vida promedio sea más baja en esta población.

Lo anterior va aunado al mínimo respeto por sus costumbres y valores culturales. El aparato educativo persigue la absorción del indígena y provoca su desaparición paulatina como ente que forma parte de una diversidad cultural y que ha resistido por más de quinientos años su completa aniquilación, pero en donde las crisis económicas, la ampliación de las áreas de cultivo, la necesidad de nuevas áreas de comercio presionan a los indígenas como fuentes de mano de obra barata y de tierra casi gratuitas para terratenientes, ganaderos y recientemente para empresas hidroeléctricas y mineras en sus comarcas.

La falta de una política indígena, el irrespeto a sus derechos conlleva a la desaparición gradual de su cultura, de su idioma y de sus tradiciones. Y esto es visto como parte de los objetivos de la modernización del país. O sea, la homogenización de la población y la implementación de una cultura cosmopolita estándar. Las tierras comunales de los sectores indígenas fueron creadas en su momento expulsando a los indígenas de las tierras de alto valor agrícola y comercial hacia regiones agrestes, de difícil acceso de bajo valor comercial y productivo, en regiones montañosas aisladas. Tierras éstas que en la actualidad han cobrado valor cuando dentro de ellas las transnacionales mineras han encontrado ricos yacimientos de cobre, oro y otros metales de gran valor comercial y hoy presionan por expropiarlas y explotarlas sin consulta ni reparación a sus legítimos dueños, amén del gran daño ecológico que causan por la utilización de materiales tóxicos, contaminantes, deforestación y aniquilación de la fauna y sus áreas de vida natural, así mismo la presión por nuevas fuentes energéticas para abastecer a las concentraciones urbanas y los nuevos polos de desarrollo industrial, comercial y residencial a nivel nacional e internacional han creado la urgencia nacional por explotar los recursos hidráulicos de las montañas por medio de centenares de represas hidroeléctricas de distintas magnitudes que consumen enormes recursos hídricos, abarcan extensas áreas de los territorios dentro de estas reservas, desplazan indiscriminadamente a las comunidades autóctonas y que no reportan ningún beneficio a las comunidades afectadas ni circundantes, ya que esas zonas son las que menos disposición tienen de agua, electricidad o recursos financieros ni laborales, todo sin contemplar los extensos daños y crímenes ecológicos.

La ausencia de leyes apropiadas para la protección del subsuelo de las comarcas indígenas y sus tierras anexas, amenaza gravemente con su destrucción. La escasez de la presencia gubernamental en estas áreas en el ámbito judicial, sanitario, educativo, laboral provocan un alto grado de anarquía e indefensión de las poblaciones frente a las amenazas de la globalización y de la modernidad como lo son la delincuencia y el narcotráfico.

La falta de controles y de ayuda frente a las catástrofes naturales, que llevan a las poblaciones indígenas a grados extremos de desesperación y violación sistemática de sus derechos humanos, políticos, económicos, laborales, culturales y sociales. Últimamente los terratenientes provocan el desplazamiento de los indígenas y la expropiación de sus tierras, métodos de terror y coerción para conseguir su desplazamiento de las áreas deseadas.

La manipulación por parte de los partidos políticos en el poder de las incipientes y débiles estructuras organizativas de los indígenas para la imposición de individuos dóciles y afectos a los gobernantes de turno provocan la desintegración de la autoestima, y credibilidad por parte de las comunidades en sus instituciones y dirigentes aumentando la incapacidad en la toma de decisiones, la desconfianza y la desmoralización de la población en la búsqueda de solución a los ya de por sí graves problemas.

3. Mujeres sin Poder Político y el Aumento de la Violencia de Género

De 833 mujeres que aspiraron a cargos de elección, solo 81 fueron elegidas y la mayoría como representantes de corregimientos. Lo anterior, evidencia un retroceso desde el punto de vista político para la situación de las mujeres en su acceso al poder. Aunado a lo

anterior, la tendencia se confirma con la existencia de solo tres ministras de Estado de un total de catorce ministerios en el actual gobierno de Ricardo Martinelli

Lo anterior contrasta con el establecimiento de la Ley de Igualdad de Género que fijó en un 30% la participación femenina en las candidaturas a puestos de elección, realidad que por evidencia no se ha cumplido.

Mujeres Postuladas y Electas en las Elecciones de 2009

Cargo de Elección	Mujeres Postuladas	Mujeres Electas	%
Presidente	1	0	0
Alcalde	83	7	8
Diputado	53	7	13
Representante	696	67	10
TOTAL	833	81	10

Hay que decir, que la falta de acceso al poder político por parte de las mujeres panameñas, contrasta con su nivel de educación y capacitación a nivel formal. Las mujeres panameñas tienen un alto nivel de participación en la educación primaria, media y universitaria. El porcentaje de mujeres con niveles académicos con relación a los hombres tiene una tendencia actual de sesenta por ciento con relación a un cuarenta por ciento de hombres que asisten a la educación formal y culminan sus estudios. Sin embargo, el desempleo se mantiene mayormente en las mujeres y los niveles salariales de los hombres son mayores a los de las mujeres panameñas. En cuanto a la realidad salarial, datos del Observatorio de Género y Economía de la Universidad de Panamá revelan que el índice de desempleo de las mujeres es mayor con un 8.9% versus el de los hombres que es 5.1% que la de los hombres, pese a que las mujeres representan la mayor cantidad de población graduada de nivel superior con un 75%.

Por otro lado, es importante señalar que las privadas de libertad sólo pueden participar en los comicios electorales para elegir Presidente/a de la República más no el resto de los candidatos a puestos de elección popular.

La situación de las mujeres, además de su poco poder político dentro de la estructura de poder en Panamá, se caracteriza por el aumento de la violencia de género y escasez de instrumentos jurídicos y medidas concretas para combatirla

En los últimos años se ha aumentado el cien por ciento de la violencia hacia las mujeres y la existencia de elementos que han comprobado ser ineficientes en la protección de las víctimas de la violencia intrafamiliar. Respecto a esto se puede decir que el ochenta por ciento de las mujeres asesinadas tenían una boleta de protección y alejamiento, la cual no

ha resultado ser más que un requisito para una protección en teoría, pues las autoridades manifiestan que no hay recursos, lo cual no es cierto porque se han aumentado los recursos para el reclutamiento de personal, compra de técnica policial y el establecimiento de bases militares con tropas extranjeras para el combate a un terrorismo inexistente y a un narcotráfico creciente.

Se hace necesaria la coordinación entre las distintas organizaciones gubernamentales y privadas de educación, policiales, judiciales y civiles para la prevención y combate de la violencia de género, la cual sigue siendo tolerada por las autoridades en nuestro país. A todo esto, hay que agregar que en Panamá no existe el femicidio como delito, lo que a su vez conlleva que no se cuente con una política de prevención, que pudiese comenzar en las diversas escuelas del país, a través de cursos y seminarios a la niñez y juventud, entre otras iniciativas.

Además se precisa de la creación de más locales donde se oriente y se brinde asesoría legal para las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Así como también la difusión masiva de éstos, a través de los medios de comunicación. Igualmente se deben aumentar los programas de asistencia psicológica, tanto a las víctimas y familiares de la afectada. Por otro lado, se necesita la construcción de más albergues en el país, para hospedar a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. El que existe actualmente es insuficiente.

Según estadísticas del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG), adscrito a la Defensoría, ya la cifra de asesinadas de forma violenta en lo que va del año 2010 son de 19 mujeres, lo cual consideramos que debe motivar al Estado regular, adecuar y promover reformas o leyes para minimizar los estragos de la violencia doméstica, las muertes violentas de mujeres y los femicidios, atendiéndolo como una problemática de Estado. Las muertes violentas de mujeres van en aumento cada año, si contrastamos las estadísticas del 2008, donde 42 mujeres perdieron la vida de forma violenta; mientras que en el 2009 se registró un total de 80 muertes violentas de mujeres (54 de ellas tipificadas como femicidio), lo que demuestra que en un año las cifras se han duplicado, situación que es alarmante,

4. Establecimiento de Bases Militares Extranjeras, so pretexto de la Lucha contra el Narcotráfico y el Terrorismo.

El desmantelamiento de la zona colonial por parte de Estados Unidos también conllevó el desmantelamiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional que bajo el pretexto de defensa del Canal proporcionaron una base de agresión y hegemonía sobre otros pueblos de América Latina y fueron apoyo directo para el establecimiento de sangrientas dictaduras en América Latina. Sin embargo, este tema que se consideraba superado y una de las bases para la búsqueda de una neutralidad activa y una política pacifista en la región, fue un tema que durante los anteriores gobiernos se intentó reanimar. Sin embargo, la administración Torrijos y la de Martinelli han creado los fundamentos legales y el sustento político para la creación de un conjunto de bases militares extendidas

por todo el país, con presencia militar norteamericana y sin consulta a la ciudadanía de ningún tipo, bajo el pretexto de la lucha antidrogas y el combate al terrorismo.

La tradicional política de los gobiernos panameños, de neutralidad frente al conflicto civil interno de Colombia es rota hoy, mediante compromisos secretos entre los gobiernos de Panamá y Colombia para el uso de la fuerza contra sectores irregulares de forma indiscriminada, dentro de un plan conjunto llamado “Plan Colombia”. Situación que ha provocado enfrentamientos entre las novatas fuerzas policiales panameñas e irregulares, que han llevado zozobra a la población y situaciones de emergencia que han llegado al grado de restringir por días enteros la circulación de personas, mercancías y vehículos, con las consabidas consecuencias de desabastecimiento alimenticio, paralización de transporte, la producción y férreo control policial y militar sobre la población lo que ha aumentado el sentimiento de inseguridad e indefensión por parte de amplios sectores de la población fronteriza y restricción de derechos civiles.

Observamos que en la actualidad la implementación de las bases militares se encuentra en la etapa de construcción de pistas de aterrizaje y bases aeronavales y violentan las disposiciones constitucionales y jurídicas al ser inconsultas con la población por tratarse de presencia extranjera que debe ser aprobada mediante discusión y plebiscito y no obstante, se realiza de manera ejecutiva, solapada e inconsulta. Ante los reclamos de la ciudadanía, el actual gobierno niega cualquier tipo de injerencia extranjera, pero cada vez es más obvia la influencia directa del gobierno de Álvaro Uribe en las actividades que realiza la policía de frontera en la zona del Darién. Actualmente son muchos los policías de fronteras que con capacitados por el gobierno colombiano en su labor de contrainsurgencia y combate al narcotráfico.

Sirvan estas líneas para expresar nuestra profunda preocupación por el cambio de rumbo que ha asumido el nuevo gobierno del Presidente Ricardo Martinelli. Todo el mundo conoce la alta popularidad con la cual el actual gobierno ganó las elecciones del pasado mayo de 2009. La aplastante derrota que sufrió la propuesta del PRD en la pasada contienda electoral tiene sus causas en la profunda corrupción con que gobernó el pasado gobierno de Martín Torrijos. La poca organización y la baja formación política en la cual quedó sumido nuestro pueblo permitieron el avance de la extrema derecha en la República de Panamá.

La actual fuerza política que hoy nos gobierna tiene una alianza orgánica y estratégica con el partido republicano de los Estados Unidos y en nuestra opinión busca y apoya alianzas con todos los partidos de derecha de América Latina y el concierto internacional para afianzar una lucha ideológica contra gobiernos progresistas y de izquierda en el contexto latinoamericano.

Sus más firmes aliados lo conforma el gobierno colombiano a través de Álvaro Uribe y el actual gobierno mexicano. Panamá que en otrora fue promotora de diálogos internacionales promoviendo la concertación y la neutralidad por la existencia del Canal, es hoy promotora de conflictos internacionales exponiendo nuestro Estado ante el bochorno internacional por una política errática, incoherente y aliada a causas fascistas en el mundo actual.

El ridículo del Presidente Panameño en su reciente visita a Israel, ubicándolo como guardián de Jerusalén y el enfrentamiento de policías panameños con irregulares colombianos, no hacen más que ubicar en una posición vulnerable al Estado y a su principal recurso natural: su posición geográfica y el Canal de Panamá. Lejos está el Presidente de la República de actuar con visión de estadista.

5. Aumento de la pobreza y falta de políticas nacionales para combatirlas

La carencia de una política gubernamental coherente contra la pobreza, acompañada de políticas fiscales inmediatas, han creado situaciones que agravan aún más la ya existente desigual distribución de la riqueza, que provoca a una mayor concentración de ésta en muchas menos manos y aumenta la presión sobre la cada vez menor clase media. El desempleo oculto bajo la forma del empleo y comercio informal, y la consultoría privada, que son mas que formas de evadir los pagos de las prestaciones laborales y la seguridad social, qua al final no son más que maneras elegantes de rebajar el salario real de los trabajadores, contribuyen al aumento del desempleo y de la justa retribución del trabajo.

Se continúa con la represión abierta y la oculta del derecho de organización de los trabajadores en sindicatos o gremios, como una forma tradicional de mantener bajos costos de la fuerza de trabajo, y la impunidad en los despidos de los trabajadores, con lo que se garantiza un elevado mercado de fuerza de trabajo potencial para que su bajo costo garantice tasas elevadas de ganancia. Es sintomático que muchas de las más modernas y grandes empresas de propiedad transnacional y de altos funcionarios gubernamentales, carecen en absoluto de convenciones colectivas y de organizaciones laborales y sindicales, las cuales son combatidas desde dentro con el despido inmediato de los que pretendan organizarlas.

El propio gobierno combate la organización sindical en su seno y dentro de las empresas que se encargan de la realización de obras estatales de magnitud. En el mejor de los casos, las empresas privadas desarrollan la política de crear previamente sindicatos controlados férreamente por empleados expresamente pagados para dicho oficio, con la consiguiente violación de los derechos sindicales, laborales y humanos ya consignados en las reglamentaciones internacionales. Por otro lado las instituciones encargadas por ley a regular las relaciones obrero patronales, se muestran convenientemente lentas y poco dispuestas a la aplicación de medidas y disposiciones que promuevas la protección y defensa de los derechos laborales, con lo que se desincentiva la organización sindical por demostrarse ineficiente para jugar su papel ante la patronal y el gobierno.

En otro orden, observamos que hace dos años, la canasta básica familiar de alimentos se situaba en 273.85 dólares, cuando en 2004 terminó en 197.93 dólares. A pesar de que las cifras oficiales muestran que el costo de la canasta básica descendió en los últimos meses de 2009, la principal preocupación que tienen los consumidores panameños es el posible aumento en el precio de los alimentos.

De enero a septiembre de 2009, el comportamiento de la canasta básica siempre fue al alza. Si se compara noviembre de 2009 con el mismo mes de 2004, el incremento fue de 35%.

Los alimentos han subido de forma indiscriminada. Las medidas tomadas, como baja de aranceles y la cadena de frío en proceso, no consiguieron bajar los precios. Hay que regular los precios para limitar la especulación.

Pedro Acosta, Presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, considera que el costo de la canasta básica en términos generales sigue estando alta, pero que los consumidores no están siendo conscientes de su situación económica y financiera. Por su parte, Vicente Aguirre, presidente del Instituto de Estudios y Defensa del Consumidor, apuntó que los productos suben de precios por el alza en el combustible, pero cuando éste baja, la subida en los alimentos se mantiene.

El salario mínimo en la República de Panamá fue ajustado mediante Decreto Ejecutivo 263 de 21 de diciembre de 2009, publicado en la Gaceta Oficial No. 26431-B del lunes 21 de diciembre de 2009. Tales ajustes fueron divididos por zonas. En la Zona 1, comprendida por Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, Chitré, Aguadulce, Penonomé, La Chorrera, Arraiján y el Distrito de Bocas del Toro, el salario mínimo será entre 357 y 416 balboas. En la Zona 2, que incluye el resto del país, el salario mínimo será entre 349 y 416 balboas.

Esto ha provocado un alza generalizada de precios al consumidor, y no existe poder coercitivo dentro del Estado que haga cumplir estos niveles salarios en la República de Panamá. Los ajustes se hacen válidos, si existe una fuerza sindical que respalde el reclamo de los trabajadores.

6. La Tendencia de la Migración Ilegal en Panamá

La tendencia de la migración ilegal en Panamá se profundiza de acuerdo a lo presentado en el último informe que presentara el CCS en septiembre de 2008 a la FIDH. Un elemento nuevo es la presencia de población africana que ingresa ilegalmente al país. Desde julio de 2009 hasta febrero de 2010 ha aumentado notablemente en Panamá la entrada de indocumentados procedentes de África. Según cifras oficiales, entre julio y diciembre de 2009, se detuvieron ciento veintisiete indocumentados africanos, sin embargo en sólo los dos primeros meses del año 2010 se registran más de ciento ocho casos. El problema es que las autoridades de Migración no cuentan con un método certero para ubicarlos y saber si aún están en el país o han seguido migrando en la mayoría de los casos. Estos africanos proceden de países como Eritrea, Somalia y Etiopía. Según las autoridades panameñas estos migrantes ingresan a través de la Provincia del Darién procedente de Colombia. Actualmente solo doce africanos se encuentran legalizados según las leyes vigentes en el país. Las autoridades policiales retienen a ciudadanos africanos indocumentados que llegan a Panamá por vía acuática, pero su principal fin es los Estados Unidos y Canadá. En medio de una larga travesía, los inmigrantes africanos piden refugio en Panamá y luego la gran mayoría escapa hacia Estados Unidos.

Según las autoridades se ha detectado un grupo ilegal que opera con personas procedentes de África. En Panamá estos ilegales son guiados por colombianos e indígenas darienitas. En noviembre del año 2008 se detectó el primer caso de este tipo de tráfico en el país y que,

desde entonces, se ha detenido a personas que se identificaron como bengalíes, somalíes, eritreos y etíopes.

Las máximas autoridades de gobierno han aclarado que no se harán cargo de la permanencia de estos indocumentados en el país. En el albergue del Servicio Nacional de Migración, no hay africanos detenidos. Sin embargo, existió un registro de doscientos inmigrantes africanos de los meses de julio y septiembre del año pasado, pero las autoridades de Migración no tienen conocimiento de su paradero. A inicios de este nuevo gobierno, en el mes de julio de 2009 se detectaron sesenta y un somalíes, etíopes y eritreos, pero nunca se les dio estatus migratorio, por lo que algunos pasaron la frontera a hacia Costa Rica y otros se están en Panamá, como “migrantes irregulares”.

Las autoridades panameñas han detenido indocumentados africanos captados por redes que usan Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela como países de tránsito. Algunos casos de los inmigrantes ya tenían procesos de petición de refugio en marcha en Colombia, según el director de la Oficina Nacional para la Atención a Refugiados (ONPAR), Juan Carlos Orillac. La presencia de población colombiana sin cumplir con sus trámites legales es constante en Panamá y va en aumento de manera vertiginosa. Le siguen la población china y la nicaragüense.

7. Ilegalidad de la Invasión a Panamá

Falta de esclarecimiento con respecto a los daños causados por la invasión a víctimas civiles, lisiados físicos y psicológicos, muertos, desaparecidos, destrucción de la propiedad privada, ausencia de reparaciones económicas y legales. Información sobre fosas comunes, torturas, ejecuciones sumarias.

La invasión a Panamá el 20 de diciembre de 1989 por parte de tropas norteamericanas bajo el pretexto de eliminar del poder la dictadura militar del Manuel Antonio Noriega, por sus vínculos con el narcotráfico, e instaurar una falsa democracia, trajo consecuencia pérdidas irreparables de miles de civiles inocentes, incluyendo niños, mujeres y ancianos. A parte de las cuantiosas pérdidas millonarias para la economía del país.

Esta acción conocida como la mal llamada “Operación Causa Justa”, su real objetivo fue experimentar con armamento bélico sumamente sofisticado, como lo fue el estreno del avión caza F-117, helicópteros apaches, entre otros. Los cuales serían utilizados posteriormente en la guerra del Golfo Pérsico en Kuwait. Además con esta intervención militar se eliminó toda estructura organizativa crítica y del ejército militar panameño, quedando de esta manera la defensa unilateral por parte de los Estados Unidos del Canal de Panamá.

Hasta este momento todavía se desconoce el total de muertos, heridos y desaparecidos. Se han ignorado las denuncias sobre torturas, ejecuciones sumarias y detenciones ilegales que se realizaron por parte de las tropas de ocupación. Hasta la fecha no se ha hecho una investigación exhaustiva que aclare la verdad de los hechos ocurridos durante la invasión, tampoco se han hecho las reparaciones de vidas a las demandas que han efectuado algunas

organizaciones de las víctimas, afectados y familiares de muertos y desaparecidos. Por otro lado ha faltado la voluntad política por parte de los gobiernos posteriores a la invasión para demandar el esclarecimiento y las reparaciones económicas necesarias a los responsables de todos los daños ocasionados por la invasión.

Aún no se han esclarecido todos los hechos y no se han hecho caso a las constantes denuncias sobre la apertura de más fosas comunes de las víctimas de la invasión.

19.03.2010

Bibliografía 2009

Libros y artículos de autores panameños

Olmedo Beluche, 2009, “Reseña histórica de las reformas neoliberales a la legislación laboral panameña (1971-2004) **Tareas**, N°133, septiembre-diciembre, (Panamá).

Juan Bosco Bernal, 2009, “La universidad latinoamericana: Situación, tendencias y perspectivas”, **Tareas**, No.131, enero-abril, (Panamá).

Adán Castillo Galástica, 2009, “Información, conocimiento y manipulación: Plataforma para el estudio mediático en tiempos electoreros”, **Revista Cultural Lotería**, N°482, enero-febrero (Panamá).

Damián Castillo B., 2009, “Oralidad, historia y cultura Bribri”, **Revista Cultural Lotería**, N°482, enero-febrero (Panamá).

Dídimo Castillo F., 2009, **Los nuevos trabajadores precarios**, Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México.

Janio Castillo C., 2009, **Ruta de tránsito y la formación social panameña, 1980-1999**, Guatemala: FLACSO.

Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (COFADEPA-HG), 2009, “Breve análisis de las causas del golpe militar en Panamá”, **Tareas**, No.131, enero-abril, (Panamá).

Elda Maud de León, 2009, “Educación: Diez mitos y una propuesta”, **Revista Cultural Lotería**, N°482, enero-febrero (Panamá).

Alfredo Figueroa Navarro, “Los estudios históricos sobre el siglo diecinueve panameño”, **Tareas**, No.132, mayo-agosto, (Panamá).

Marco A. Gandásegui, hijo, “Imperialismo norteamericano y la invasión a Panamá de 1989”, **Tareas**, No.133, agosto-diciembre, (Panamá).

Marco A. Gandásegui, hijo, “El militarismo en Panamá”, **Tareas**, No.131, enero-abril, (Panamá).

Ligia Herrera J., 2009, “Colón: La provincia olvidada”, **Tareas**, No.132, mayo-agosto, (Panamá).

Luis C. Herrera, 2009, **Políticas de control en la democracia panameña (1194-2004)**, Panamá: IDEN (Universidad de Panamá).

Raúl Leis, 2009, “Panamá: Caja negra electoral”, **Nueva Sociedad**, N°222, julio-agosto.

Clara Inés Luna y Salvador Sánchez, 2009, “Panamá: paraíso imperfecto”, **Revista de Ciencia Política** (Santiago de Chile), Vol 29, N°2, pp533-564.

Julio Manduley, 2009, **Panamá, estructura, coyuntura, conflicto, clases y política**, Panamá: Centro de Estudios Estratégicos.

Álvaro Menéndez Franco, 2009, “Sustentación del grito de Rufina Alfaro y la Independencia de Panamá de España”, **Revista Cultural Lotería**, N°482, enero-febrero (Panamá).

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 2009, **La arquitectura del cambio institucional del MIDES, 2004-2009**, Panamá: MIDES.

Carmen A. Miró G., 2009, “El adulto mayor en Panamá: evolución reciente y perspectivas al 2030-2035”, **Tareas**, No.132, mayo-agosto, (Panamá).

Carmen A. Miró G., 2009, **Antología. América latina, población y desarrollo**, Bogotá: CLACSO.

Eliécer Pérez, 2009, “La pena de prisión en el nuevo Código Penal panameño”, **Cuadernos Panameños de Criminología**, N°7.

Anayansi Turner, 2009, “El derecho de huelga en el Canal de Panamá”, **Tareas**, N°133, septiembre-diciembre, (Panamá).

Julio Yao, 2009, “Para entender la invasión de EEUU a Panamá” **Tareas**, No.133, agosto-diciembre, (Panamá).



AMERICA LATINA
en movimiento

Español
English
Portugués

Panamá: **Siguen las diabluras de los mineros y sus cómplices**
Por Héctor Endara Hill [2009-12-17]

EE.UU,Panamá: **Panamá conmemora XX aniversario de la invasión militar norteamericana**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-12-17]

EE.UU,Panamá: **20 aniversario de la invasión yanqui a Panamá**
Por Paco Azanza Telletxiki [2009-12-12]

Panamá: **Las protestas de la juventud panameña**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-12-11]

Panamá: **El mundo debe saber**
Por CONADESOPAZ [2009-11-30]

Panamá: **Perspectiva del ecofeminismo en Panamá**
Por Olmedo Carrasquilla II [2009-11-30]

Panamá: **El legado que construye Martinelli**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-11-26]

Panamá: **El discurso que irritó al gobierno panameño**
Por Julio Yao Villalaz [2009-11-19]

EE.UU,Panamá: **Panamá anuncia que EEUU quiere 4 bases “aeronavales”**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-11-04]

Panamá: **Discurso ante el Mausoleo de los Soldados de la Independencia**
Por Julio Yao [2009-11-02]

Panamá: **Otro rostro para la pobreza**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-10-23]

Panama: **Políticas indígenas y el Estado panameño**

Por Rodelick Valdes [2009-10-22]

Panama: **Martinelli rechazó a los pueblos indígenas**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-10-15]

Panama: **Gobierno Panameño y AES Panamá en el Caso Charco La Pava**

Por Bartolomé Clavero [2009-10-13]

Panama: **Instantáneas de una marcha indígena y campesina**

Por Jorge Ventocilla [2009-10-10]

Panama: **Los primeros cien días del presidente Martinelli**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-10-08]

Panama: **Lucha indígena y campesina**

Por Héctor Endara Hill [2009-10-08]

Panama: **Martinelli, autodenominado el 'Anti-Chávez' de América y la conexión imperial-golpista**

Por Chevige González Marcó [2009-10-06]

Panama: **La dirección política del gobierno de Martinelli**

Por Ángel T. Valdés M. [2009-10-06]

Panama: **Universidad y el proyecto de nación**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-10-01]

Panama: **Urge la delimitación de la Comarca Naso**

Por Héctor Endara Hill [2009-10-01]

EE.UU,Panama: **Bases No! Grita el pueblo panameño**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-09-28]

Panama: **Cómo erradicar la criminalidad!**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-09-24]

Panama: **Los primeros cien días del gobierno de Martinelli**

Por Manuel Castro Rodríguez [2009-09-22]

Panama: **Inicia la Movilización Nacional, Indígena, Campesina y popular**

Por Olmedo Carrasquilla II [2009-09-18]

EE.UU,Panama: **Regresará Noriega?**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-09-17]

AmericaLatina,Panama: **Un modelo regional de nueva derecha; el caso de Panamá**

Por Fernando Garza [2009-09-07]

Panama: **"Grupo Unidos por el Canal"**

Por Héctor Endara Hill [2009-09-03]

Panama: **El futuro del PRD**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-08-28]

Panama: **FRENADESO explora futuro electoral**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-08-20]

Panama: **Tiene proyecto viable la izquierda?**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-08-13]

EE.UU.,Panama: **Llegó el espionaje de alta tecnología a Panamá**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-07-17]

Panama: **Hay Genocidios Pequeños? El Caso Charco La Pava**

Por Bartolomé Clavero [2009-07-10]

Panama: **Nueva derecha en el poder juega política**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-07-09]

Panama: **No necesita un Tratado de Libre Comercio con EEUU**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-06-25]

Panama: **La izquierda panameña y las elecciones**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-06-18]

Panama: **Engaño y represión sufren en Petaquilla**

Por Julio Yao [2009-06-18]

Panama: **Los nuevos corsarios y conquistadores de Panamá**

Por Héctor Endara Hill [2009-06-18]

Panama: **Balance social del gobierno de Torrijos**

Por Olmedo Beluche [2009-06-17]

Panama: **Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75**

Por James Anaya [2009-06-04]

Panama: **Las propuestas económicas de Martinelli**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-06-04]

EE.UU.,Panama: **Martinelli nombra un gabinete empresarial**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-05-22]

Panama: **La resistencia heroica del pueblo naso**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-05-15]

Panama: **Una derrota catastrófica y una falsa salida política**
Por Buscando Camino [2009-05-10]

Panama: **Balance de las elecciones generales de 2009**
Por Partido Alternativa Popular [2009-05-07]

Panama: **Martinelli y el giro a la derecha en Panamá**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-05-07]

Panama: **Elecciones en Panamá, 3 de mayo de 2009**
Por Héctor Endara Hill [2009-05-07]

Panama: **Caso aislado o inicio de una tendencia?**
Por Alejo Vargas Velásquez [2009-05-06]

Panama: **Campaña llena de escándalos decepciona**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-05-01]

Panama: **Torrijos decidido a privatizar la salud**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-04-15]

Panama: **Seguridad ciudadana**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-04-09]

Panama: **Tienen los candidatos propuestas de política exterior?**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-04-02]

Panama: **Crisis y campaña política**
Por Ángel T. Valdés M. [2009-04-01]

Panama: **Campaña con la misma propuesta económica y social**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-03-28]

Panama: **Corrupción e inmunidad electoral**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-03-20]

Panama: **La mano visible del gobierno al rescate**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-03-12]

Panama: **2009: Candidatos a la Presidencia sin plan de gobierno**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-03-09]

Panama: **Una ecología sin brújula política**
Por Olmedo Carrasquilla II [2009-02-27]

Panama: **Corrupción con *clinker* a la panameña**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-02-26]

Panama: **Navieras presionan a Panamá por los peajes del Canal**
Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-02-04]

Panama: **La ampliación del Canal enfrenta “colapso”**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-01-29]

Panama: **Un breve análisis sobre la venta de islas y playas**

Por Olmedo Carrasquilla II [2009-01-28]

Panama: **La política electoral a tres bandas**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-01-22]

Panama: **El rancho arde**

Por Marco A. Gandásegui, h. [2009-01-15]

Panama: **Una justicia ambiental por conquistar**

Por Olmedo Carrasquilla II [2009-01-06]

COUNCIL ON HEMISPHERIC AFFAIRS - 2009

Archive for the ‘Panama’ Category

A Thoroughly Un-American Institution

On June 25, 2009, The House of representatives passed an amendment to the Defense Authorization Act which would require the School of the Americas/WHINSEC to release to the public the names, ranks, countries of origin, courses taken and dates of attendance of all the students and instructors.

Obama’s new tune on trade

June 14, 2009 By Howard LaFranchi The Christian Science Monitor Candidate Obama opposed new free-trade agreements and wanted to renegotiate NAFTA. A global slump has changed his mind.

FTA deal would hit Panama farmers

May 29, 2009 By La Estrella Staff The Panama Star A recent paper by a Washington DC think tank surveys how the pact will hurt local farmers and benefit the US agro-industry Panama Star PANAMA: A Free Trade Agreement (FTA) as it now stands between Panama and the US would erode protections.

Free Trade With Panama: Some Winners And Some Losers

-Will the pact work for the average Panamanian and what’s in it for the elite and U.S.

Agro-Industry. Last Thursday the Senate Finance Committee convened in order to address a number of controversial issues that have sprung up regarding the pending U.S. free trade agreement (FTA) with Panama.

Bosco Vallarino: U.S. Citizen Runs for Mayor of Panama City, Thereby Spotlighting the Country’s Flawed Electoral Process

Corruption and fraud are the focus of May 3 presidential and mayoral election in Panama

City Bosco Vallarino is under investigation for his dual citizenship which he tried to conceal Media attention and investigations, or lack of them, influence polling numbers.

The Expansion of the Panama Canal: An Opportunity for Triumph or a Perilous Blunder?

Canal expansion project well underway, however benefits remain questionable Skepticism coupled with environmental and social concerns cloud project. Accountability in social programs needed to ensure citizenry benefit from expansion.

Panama's Upcoming Elections Mired in Scandal and Corruption

- Disgraced financier admits giving funds to PRD presidential and mayoral campaigns, now carving the way for a Martinelli victory - A change in the ruling party away from the PRD may signal closer ties between Panama and Washington. - Will Panama City choose a reformer or a political hack? With the [...]

Panama Electoral Tribunal Stoops Low, Takes Measures to Strike Miguel Antonio Bernal from the Mayoral Ballot

- A top down scheme in Panama City to purge independent candidate from the race for Mayor - Harassment of Bernal is a clear reflection of the monopolization of Panama's politics under Torrijos' guided democracy - Is this part of a Torrijos plan to eliminate term and eligibility limits?

INDICE

Cronología	p 1
Análisis de coyuntura	p 138
Bibliografía	p164